**Dictámenes y Acuerdos correspondientes a la Décima Segunda Sesión del Segundo Período Ordinario de Sesiones, del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.**

**29 de noviembre del año 2019.**

Propuesta de Acuerdo de la Junta de Gobierno, sobre el desarrollo de las comparecencias de los Secretarios y las Secretarias del Gabinete Estatal, ante las Comisiones Dictaminadoras Permanentes del Congreso del Estado, para el análisis del Segundo Informe de Gobierno del Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de Dictámenes en cartera:

**A.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, con relación a la Iniciativa de decreto que reforma la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Denominado “Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila. Presentada por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**B.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**C.-** Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Trabajo y Previsión Social, con relación a una Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan los siguientes ordenamientos secundarios: Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los Municipios de Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominada “Dirección de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo”, Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominada “Dirección de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila”, Ley de Pensiones del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Presentada por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**D.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa de decreto mediante la cual se crea la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**E.-** Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y Hacienda, relativo a la iniciativa de decreto que reforma la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís.

**F.-** Dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda, relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan los siguientes ordenamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**G.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Municipal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos del Estado, suscrita por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración.

**H.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan los artículos 193 bis; 193 ter; y 193 quater todos de la Ley General de Salud, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática.

**I.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción IX al artículo 200, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila.

**J.-** Dictamen presentado por la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 313 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben.

**K.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado por el que se autorice a incorporar como Bien del Dominio Privado del Gobierno del Estado de Coahuila y se autorice al Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, para enajenar a título gratuito los lotes de terreno con una superficie total de 5,680 M2., que constituyen la manzanas 181 y 182 ubicadas en la colonia Teotihuacán parte Alta, en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con objeto de dar certidumbre jurídica a los particulares que actualmente poseen los lotes y con esto llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**L.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 163.00 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor de la C. Julia Ramírez Sosa, con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, lo anterior en virtud de que el Decreto número 639 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 05 de diciembre de 2014, en el que se autorizó esta operación anteriormente, quedo sin vigencia.

**M.-** Dictamen presentado por la Comisión de Finanzas, con relación al expediente formado con motivo de la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un bien inmueble identificado como área de cesión municipal de la manzana “R”, con una superficie total de 32,296.90 m2., ubicado en el “Fraccionamiento Industrial Pymes Torreón” de esa ciudad, con el fin de permutar por el Lote 1-3 con una superficie de 32,296.90 M2., ubicado en la primera etapa del Parque Industrial Global Park Laguna de esa ciudad, a la persona moral Global Park Laguna S.A. Promotora de Inversión de Capital Variable, con objeto de llevar a cabo el inicio de las operaciones e instalación de la empresa Techronic Industries Co. México S. de R.L. de C.V.

**N.-** Dictamen presentado por la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado José Benito Ramírez Sosas, de la Fracción Parlamentaria “Venustiano Carranza Garza”, por el que se adicionan y modifican diversas disposiciones de la Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y de la Ley Estatal de Salud, en razón de los daños a la salud que causa la exposición a emisiones de ruido mayores a los niveles legalmente establecidos.

**Ñ.-** Dictamen presentado por la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Emilio Alejando de Hoyos Montemayor, del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de la Ley Estatal de Educación, en cuanto al fomento de la educación ambiental en los planteles del sistema educativo estatal.

**O.-** Dictamen presentado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, relativo a la presentación dela Iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, presentada por la Presidenta Municipal Yolanda Cantú Moncada.

**P.-** Dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo Rural, con relación a una Iniciativa de Decreto por la que se adiciona la fracción XXXI al artículo 4 y se reforma la fracción XIII del artículo 12, así como la fracción XI del artículo13 de la Ley Forestal del Estado de Coahuila, en relación a promover la creación de corredores verdes, así como impulsar el desarrollo ecológico mediante una política ecológica transversal, planteada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional.

**PROPUESTA DE ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO SOBRE EL DESARROLLO DE LAS COMPARECENCIAS DE LAS SECRETARIAS Y LOS SECRETARIOS DEL GABINETE ESTATAL, ANTE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS PERMANENTES DEL CONGRESO DEL ESTADO, PARA EL ANÁLISIS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL C. ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.**

El 30 de noviembre del presente año, el C. Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 84, fracción IV, de la Constitución Política Local, asistirá al Congreso del Estado para rendir su segundo informe sobre la situación general que guarda la administración pública estatal.

Según lo dispuesto en el Artículo 256 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la Legislatura deberá realizar el análisis del Informe presentado por el Gobernador del Estado, mediante la comparecencia de las Secretarias y los Secretarios del ramo, ante las Comisiones correspondientes por materia, así como proponer el formato que deberá observarse para este efecto.

En virtud de lo anterior y conforme a lo dispuesto en los Artículos 67, 239 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, los integrantes de la Junta de Gobierno, estimamos procedente aprobar el siguiente:

**A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se aprueba que la Sexagésima Primera Legislatura realice el análisis del Segundo Informe de Gobierno del C. Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante la comparecencia de los Secretarios y las Secretarias del Gabinete Estatal, ante las Comisiones del Congreso correspondientes por materia y conforme a las siguientes:

**B A S E S:**

**1.-** Las comparecenciasse realizarán en el vestíbulo del Salón de Sesiones del Palacio del Congreso del Estado, ante las Comisiones Dictaminadoras Permanentes que correspondan.

**2.-** En el desarrollo de las comparecenciasparticiparán los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo que asistirán al Congreso del Estado para ese efecto, en la forma siguiente:

**Fecha: Miércoles 4 de diciembre de 2019:**

**Salón de Sesiones del Palacio del Congreso.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HORARIO**  17:00 horas | **FUNCIONARIO:**  Secretario de Gobierno. | **COMISIONES:**  Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Defensa de los Derechos Humanos, Igualdad y No Discriminación, Contra la Trata de Personas y Comisión Especial para la Garantía de los Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes. |

**Fecha: Jueves 5 de diciembre de 2019:**

**Salón de Sesiones del Palacio del Congreso.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HORARIO:**  10:00 horas  16:00 horas | **FUNCIONARIO:**  Secretario de Seguridad Pública.  Secretario de Desarrollo Rural | **COMISIONES:**  Seguridad Pública.  Desarrollo Rural. |

**Fecha: Viernes 6 de diciembre de 2019**

**Salón de Sesiones del Palacio del Congreso.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HORARIO:**  10:00 horas    12:00 horas    16:00 horas | **FUNCIONARIO:**  Secretario de Educación.  Secretaria de Turismo y  Desarrollo de Pueblos Mágicos  Secretario de Finanzas | **COMISIONES:**  Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas,  Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo,  Finanzas, Presupuesto y Hacienda |

**Fecha: Lunes 9 de diciembre de 2019**

**Salón de Sesiones del Palacio del Congreso**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HORARIO:**  10:00 horas  13:00 horas    16:00 horas | **FUNCIONARIO:**    Secretaria de Cultura.  Secretario del Trabajo  Secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial | **COMISIONES:**  Educación, Cultura, Familias y Actividades Cívicas.  Trabajo y Previsión Social.  Desarrollo Social, Finanzas y Asuntos Municipales. |

**Fecha: Martes 10 de diciembre de 2019**

**Salón de Sesiones del Palacio del Congreso.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HORARIO:**  10:00 horas  12:00 horas  17:00 horas | **FUNCIONARIO:**  Secretario de Inclusión y Desarrollo Social.  Secretaria de Medio Ambiente.  Secretario de Economía | **COMISIONES:**  Desarrollo Social y Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.  Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua.  Desarrollo Económico, Competitividad y Turismo, Asuntos Fronterizos y Energía, Minería e Hidrocarburos. |

**Fecha: Miércoles 11 de diciembre de 2019**

**Salón de Sesiones del Palacio del Congreso.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HORARIO:**  17:00 horas | **FUNCIONARIO:**  Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas. | **COMISIONES:**  Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Transparencia y Acceso a la Información e Instructora de Juicio Político. |

**Fecha: Jueves 12 de diciembre de 2019:**

**Salón de Sesiones del Palacio del Congreso.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HORARIO:**  10:00 horas  13:00 horas | **FUNCIONARIO:**  Secretario de Salud.  Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad | **COMISIONES:**  Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua.  Desarrollo Urbano, Infraestructura y Transporte y Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas |

**3.-** Las comparecencias serán presididas por las Coordinadoras y los Coordinadores de las Comisiones Legislativas ante las que se desarrollen las mismas, quienes también se encargarán de conducir los trabajos de la comparecencia cuando intervenga el titular de la dependencia cuyo ramo tenga relación con la competencia de la Comisión que les corresponde coordinar.

Cuando una comparecencia se realice ante varias Comisiones, será presidida por los Coordinadores de las mismas, quienes acordarán lo relativo a la intervención que les corresponderá para dirigir y conducir el desarrollo de dicha comparecencia.

A las comparecencias serán invitados el Presidente de la Junta de Gobierno y el Presidente de la Mesa Directiva.

**4.-** Para el desarrollo de las comparecencias, cada uno de los funcionarios comparecientes hará una exposición inicial sobre las actividades de la dependencia a su cargo, **con duración máxima de veinte minutos.**

**5.-** Después de la exposición de cada funcionario, **habrá dos rondas de preguntas y respuestas directas.**

Para la formulación de preguntas, en cada ronda podrá participar un Diputado o Diputada de cada uno de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado, así como por los Diputados sin partido o independientes, **los cuales dispondrán de un tiempo máximo de tres minutos para exponer su pregunta.**

Una vez que se formulen las preguntas directas de los Diputados y Diputadas que intervengan, el funcionario compareciente procederá a dar respuesta directa a cada una de ellas, **disponiendo del tiempo que considere necesario y prudente para este efecto.**

Una vez dada la respuesta por parte del Secretario compareciente, el Diputado o Diputada que así lo solicite, podrá formular una réplica.

El funcionario compareciente dará la contra réplica correspondiente, así sucesivamente hasta agotar las dos rondas de preguntas.

**6.-** Las Coordinadoras ylos Coordinadores de las Comisiones determinarán el orden en que se otorgará la palabra y, en caso necesario, cuándo deberá tenerse por suficientemente discutido un asunto para pasar a otro.

**7.-** Las comparecencias concluirán al momento en que se haya cumplido con las distintas fases establecidas para el desarrollo de las mismas, quedando a cargo del Coordinador o Coordinadora de la Comisión que corresponda o que se determine, hacer la declaratoria de clausura correspondiente.

**8.-** El programa de las comparecencias se comunicará a las Diputadas y Diputados, para que tengan conocimiento de cuándo les corresponde asistir, como integrantes de las Comisiones que deben recibir a los funcionarios llamados a comparecer.

**SEGUNDO.-** Se autoriza a la Junta de Gobierno de esta Legislatura, para que pueda realizar los cambios a las fechas y horarios programados para las comparecencias contenidas en el presente Acuerdo, para la efectividad y la materialización de las mismas.

**TERCERO.-** Comuníquese este Acuerdo al Gobernador del Estado para su debido conocimiento y la consideración de lo establecido en el mismo, así como para que, en su caso, disponga lo que estime procedente sobre la asistencia de los Secretarios y Secretarias del Gabinete Estatal, a las comparecencias antes referidas.

**A T E N T A M E N T E**

**SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA, A 29 DE NOVIEMBRE DE 2019.**

**POR LA JUNTA DE GOBIERNO.**

**DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**

**PRESIDENTE**

**DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE.**

**DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR**

**DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ.**

**DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS.**

**DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.**

**DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA.**

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de decreto que reforma la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Denominado “Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-**  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 30 del mes de octubre del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 31 de octubre del presente año se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa de decreto que reforma la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Denominado “Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que a la iniciativa de decreto que reforma la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Denominado “Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***EXPOSICION DE MOTIVOS***

*La construcción de una administración pública eficiente, eficaz, ordenada y moderna, es un objetivo primordial del Gobierno del Estado, en razón de ello se ha impulsado diversas adecuaciones a su marco jurídico, para reestructurar las funciones y atribuciones de las dependencias del Poder Ejecutivo.*

*Así, el 14 de diciembre de 2018, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante la cual se crea la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la cual, a raíz de ello, es la dependencia encargada de formular, ejecutar y evaluar, en el ámbito de su competencia, las políticas públicas en materia de vivienda, regularización de la tenencia de la tierra, ordenamiento territorial, así como de los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.*

*En ese contexto, a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, le corresponde, entre otros asuntos, coordinar a los organismos estatales que ofrezcan el servicio de agua potable y alcantarillado, y en su caso, convenir con uno o más municipios la prestación de servicios en áreas metropolitanas; promover políticas e implementar acciones de coordinación institucional que propicien el mejoramiento, operación y uso eficiente de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas y rurales; así como, favorecer las buenas prácticas en materia de cuidado del agua, ahorro y uso responsable de la misma y contribuir en la remediación de este líquido.*

*Bajo esa tesitura, es necesario llevar a cabo la armonización correspondiente de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila”, ya que conforme a las disposiciones vigentes de dicha ley, este organismo se encuentra sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente, por lo que debe modificarse a fin de quedar sectorizado a la Secretaria de Vivienda y Ordenamiento Territorial.*

*Además de lo anterior, de conformidad con las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, se propone actualizar la denominación de las dependencias que integran el Consejo Directivo de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila.*

*Cabe señalar que el contenido de la presente reforma no implicará modificación presupuestal alguna, puesto que, consiste únicamente en la armonización legislativa.*

**TERCERO.-** Quienes conformamos la presente comisión dictaminadora efectuamos el estudio y análisis de las consideraciones en las que se funda y motiva la iniciativa y el objeto, contenido y alcances del proyecto de decreto.

De lo anterior se desprende que, de acuerdo a los antecedentes de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, en fecha 14 de diciembre del año 2018, se publicó el Decreto número 154, mismo que contiene una modificación a la citada ley, la cual tuvo por objeto ajustar la estructura y organización de la Administración Pública, a efecto de hacerla más eficiente y acorde con las necesidades de la sociedad de nuestro estado.

En este contexto, se crearon nuevas dependencias con alto grado de especialización en sus funciones, una de ellas encargada de la garantía efectiva de los derechos humanos a una vivienda adecuada y el derecho al agua.

En atención a lo anterior, la referida reforma, planteó en primer término, la creación de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial, como la dependencia encargada de formular, ejecutar y evaluar, en el ámbito de su competencia, las políticas públicas en materia de vivienda, regularización de la tenencia de la tierra, ordenamiento territorial, así como los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento.

Abocándonos al tema que nos ocupa, en materia de aguas y saneamiento, la mencionada dependencia implementó acciones de coordinación institucional con el fin de propiciar el mejoramiento, operación y uso eficiente de los sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento en zonas rurales y urbanas, así como favorecer las prácticas en materia de ahorro, uso responsable y cuidado del agua, entre otras atribuciones.

En consecuencia, al corresponderle a la nueva dependencia los asuntos relacionados con agua potable y saneamiento, resulta indispensable armonizar la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Denominado “Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila”, misma que con anterioridad se encontraba sectorizada a la Secretaría de Medio Ambiente; quedando sectorizada de conformidad con la presente propuesta de reforma como responsable la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

Aunado a lo anterior, de la exposición de motivos también se desprende la propuesta de “*actualizar* *la denominación de las dependencias que integran el Consejo Directivo de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila”.*

Es por todo lo anteriormente planteado que quienes aquí dictaminamos, los integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos en la importancia de llevar a cabo las adecuaciones necesarias a efecto de armonizar a la Ley y eliminar lagunas y colisiones normativas.

En virtud de las consideraciones expuestas, es que tenemos a bien poner a consideración de ustedes para su estudio, análisis y en su caso, aprobación el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO:** Se modifica el primer párrafo del artículo primero; la fracción II y los incisos b) y c) de la fracción III del artículo sexto, de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila” para quedar como sigue:

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se crea el Organismo Público Descentralizado "Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila", con personalidad jurídica y patrimonio propios, que en lo sucesivo se denominará "El Organismo", con domicilio en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, sin perjuicio de que pueda establecer en otras poblaciones del Estado las delegaciones y oficinas que estime necesarias para la realización de sus actividades, y que estará sectorizado a la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial.

**…**

**ARTICULO SEXTO.- …**

I.-…

II.- Un Presidente que será la persona titular de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial;

III.-…

a)…

b) Secretaría de Economía;

c) Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad; y

d) …

**…**

**…**

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** El Reglamento Interior de laComisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila, deberá adecuarse en un plazo no mayor a noventa días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

**TERCERO.-** En lo que no se opongan al presente decreto, continuarán aplicándose las disposiciones del Reglamento Interior de laComisión Estatal de Aguas y Saneamiento de Coahuila vigente en la fecha de publicación del presente decreto, hasta en tanto se realice su adecuación.

**CUARTO.**- Se derogan las disposiciones que contravengan lo dispuesto en el presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, a 13 de noviembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, Planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 30 del mes de octubre del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 31 de octubre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, Planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XIII del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, Planteada por el Diputado Jaime Bueno Zertuche, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***EXPOSICION DE MOTIVOS***

*Mediante una reforma a la Constitución Política del Estado, publicada oficialmente el 14 de julio de 2017, se dispuso lo relativo a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.*

*En la reforma constitucional local antes citada, se determinó que el Tribunal de Justicia Administrativa, sería un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establecería lo relativo a su organización, funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.*

*Asimismo, en esta reforma constitucional local, se establecieron disposiciones generales, para normar lo relativo a su competencia, el número de magistrados que lo integrarían, el procedimiento para la designación de los mismos y las causas por las que podrían ser removidos.*

*Posteriormente, el 11 de agosto de 2017, se expidió la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, a la cual habremos de referirnos a continuación, particularmente con relación a algunas de las disposiciones que regulan la organización y funcionamiento del órgano jurisdiccional al que está dirigida su aplicación, ya que se considera conveniente hacer precisiones que permitan establecer claridad en cuanto al sentido, alcance e interpretación de lo que en ellas se establece.*

*El propósito de lo antes señalado es procurar la debida interpretación de las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal, con el fin de garantizar que la administración de justicia en materia administrativa sea pronta, completa e imparcial.*

*Por otra parte, en esta forma también se busca sustentar la formulación de una propuesta de reforma a la propia Ley Orgánica, que, en base a una mayor claridad sobre lo relacionado con la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa, permita que exista debida certeza sobre la forma y los fundamentos legales de su actuación, lo cual se considera de interés institucional, así como para los particulares y quienes los representan legalmente ante el mismo órgano jurisdiccional.*

*Para el efecto antes señalado, en principio se menciona que, en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, se establece que es de orden público e interés general y que tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del órgano jurisdiccional que debe normar.*

*También, se precisa que el Tribunal es un órgano jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena, así como que estará sujeto a lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, a su propia ley orgánica y demás disposiciones aplicables.*

*En las disposiciones contenidas en el apartado relativo a la integración y funcionamiento del Tribunal, se establece que existirá una Sala Superior integrada al menos por cinco magistrados.*

*Asimismo, está previsto que la Sala Superior funcionará en Pleno y en Salas, así como que el presidente del Pleno será quien desempeñe el cargo de presidente del Tribunal.*

*En cuanto al Pleno de la Sala Superior, se precisa que se conformará por el presidente del Tribunal y los magistrados de las Salas en materia Fiscal y Administrativa y de la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas.*

*En lo que se refiere a la celebración de las sesiones de la Sala Superior, se dispone que se requerirá la presencia de todos los magistrados que la integran, así como que, si algún magistrado se encuentra ausente, deberá llamarse de inmediato a quien corresponda, para que lo supla en la sesión en los términos de la propia ley.*

*Sobre los debates del Pleno de la Sala Superior, se contempla que serán dirigidos por el presidente y bastará la mayoría simple de los presentes para la validez de la votación, regulándose además el procedimiento que deberá observarse en caso de que hubiera empate en una votación, con la previsión de que el presidente del Pleno tendrá voto de calidad, para que finalmente se puedan resolver los asuntos.*

*En otro apartado de la Ley Orgánica del Tribunal, se establece que la Sala Superior contará, por lo menos, con tres Salas en materia Fiscal y Administrativa y una Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas, integradas por un magistrado; así como que tendrán competencia en asuntos relacionadas con las materias aludidas en su denominación.*

*Como conclusión se puede decir que lo señalado anteriormente se traduce en que el Tribunal de Justicia Administrativa, se compone únicamente de una Sala Superior, cuyo funcionamiento se realiza en Pleno o en Salas Unitarias, sin que éstas constituyan un órgano o una instancia jurisdiccional diferente.*

*Es decir, que conforme a lo que se establece en la Ley Orgánica, sobre su naturaleza, carácter, organización y funcionamiento, el Tribunal de Justicia Administrativa está concebido para funcionar y actuar como un órgano jurisdiccional uniinstancial.*

*Por otra parte, en el Artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal, se establecen las causas por las cuales los Magistrados están impedidos para conocer de asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional, entre las cuales se incluye la que considera como impedimento lo siguiente: “Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia”.*

*Con relación a lo señalado en el párrafo anterior, se ha hecho la consideración que, en base a lo antes expuesto sobre la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa, es necesario dar claridad y precisión a los términos en que está consignado el impedimento antes referido, con el fin de dar un correcto sentido y alcance a la prohibición que se impone a los magistrados mediante el mismo.*

*En base al análisis de la información disponible y a comentarios que se pudieron hacer al respecto, ha sido posible tener claridad sobre el sentido y el alcance que se considera debe tener dicho impedimento.*

*A partir del conocimiento sobre las normas que regulan la organización y el funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa, así como de otros aspectos relacionados con la impartición de la justicia administrativa en el Estado, se infiere y se puede concluir que el mencionado impedimento está referido a casos de asuntos sobre los cuales los magistrados hubieran conocido en otra instancia distinta al Tribunal de Justicia Administrativa, ya que en este órgano jurisdiccional no existen jueces y el cargo de magistrado estaba y está contemplado en la estructura de órganos jurisdiccionales anteriores y distintos, en los que se tramitaban los procesos contenciosos administrativos o asuntos que ahora son de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativa.*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, observamos que la iniciativa de reforma objeto del presente dictamen, tiene como finalidad reformar la fracción XIII del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro estado.

Como se manifiesta en la presente exposición de motivos, mediante Decreto número 903 se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 14 de julio de 2017, una reforma a la Constitución Política local, dentro de la que se creó el Tribunal de Justicia Administrativa, asimismo se expresa que, “*se establecieron disposiciones generales, para normar lo relativo a su competencia, el número de magistrados que lo integrarían, el procedimiento para la designación de los mismos y las causas por las que podrían ser removidos”.*

Posteriormente se emitió mediante Decreto número 911, la Ley Orgánica del Tribunal, la cual se establece como de orden público e interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila.

En base a ello, de conformidad con la integración del Tribunal de Justicia Administrativa, que se prevé en el artículo 6 de la citada Ley Orgánica, se dispone que la Sala Superior se integrará al menos por cinco Magistrados y funcionará en Pleno y en Salas, y el artículo 11 del mismo ordenamiento establece que la Sala Superior contará, por lo menos, con tres Salas en materia Fiscal, y Administrativa, integradas por un Magistrado.

Esto se refiere a que, el Tribunal de Justicia Administrativa se compone de la Sala Superior únicamente, cuyo funcionamiento se lleva a cabo en Pleno o en Salas Unitarias, sin que ello constituya un órgano jurisdiccional diferente a la mencionada Sala Superior, es decir, el Tribunal como único en su orden y en tanto que es un órgano constitucional de naturaleza jurisdiccional no integrado en el Poder Judicial, no ejerce sus funciones en instancias, sino que la jurisdicción la ejerce en única instancia, del análisis del texto normativo, como bien se señala en la exposición de motivos, sobresale entre las causas por las cuales los magistrados están *impedidos para conocer de asuntos que se tramiten en este órgano jurisdiccional la que de “haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia”.*

En este orden de ideas coincidimos con quien suscribe, en que a efecto de dar certeza y seguridad jurídicas a las resoluciones que emita el tribunal, es necesario primero precisar los alcances de este impedimento, para lo cual es indispensable tomar en consideración la integración del tribunal y el vocabulario utilizado en la normativa vigente.

Al respecto quienes dictaminamos consideramos que conforme a la integración del tribunal consignada en el artículo 6 de su ley orgánica, se compone únicamente de la Sala Superior, cuyo funcionamiento se realiza en pleno o en salas unitarias, sin que ello constituya un órgano jurisdiccional diferente, puesto que como se desprende del estudio, este Tribunal no ejerce sus funciones en instancias, sino que la jurisdicción se ejerce en única instancia.

Lo anteriormente referido cobra mayor congruencia si se analiza la institución de la figura del recurso de apelación consagrada en el Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica de este Tribunal y en el Capítulo XII Sección II de la Ley del Procedimiento Contenciosos Administrativo, puesto que como se observa en la apelación no se aportan nuevos elementos fácticos o jurídicos que determinen que la Sala Superior actuando en Pleno debe enjuiciar mediante una nueva valoración del fondo del asunto de tal manera que solo se limita a los razonamientos jurídicos que realice la parte apelante en sus agravios, es decir, solo se considera como un debate de lo resuelto en la Sala de origen por lo que no constituye una instancia nueva o distinta.

Ahora bien, en lo referente al término *“en otra instancia”* previsto en la fracción XIII del artículo 5 de la ley propuesta a reformar en la presente iniciativa, de la interpretación sistemática de los artículos 42, 43 y 98 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo y de lo consignado en los artículos 5, 8 , 10, 11, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica del propio Tribunal, quienes dictaminamos podemos concluir que toda vez que los Magistrados pueden excusarse del conocimiento de asuntos, pero no de conocer y resolver sobre el recurso de apelación, la interpretación correcta de la norma que pretende reformarse o desde otra perspectiva su alcance es que los magistrados de este órgano constitucional autónomo deberán excusarse para conocer de asuntos en los que en razón de un cargo anterior en órganos jurisdiccionales distintos a éste hayan conocido del asunto y que ahora sean competencia del Tribunal de Justicia Administrativa.

Lo mencionado resulta aún más evidente si observamos que la norma utiliza los vocablos “jueces”, figura que no existe en la justicia administrativa en nuestro estado.

En este orden de ideas quienes dictaminamos estimamos oportuno hacer la modificación legal propuesta a efecto de evitar una errónea interpretación de la norma dotando con ello de certeza jurídica a las resoluciones del tribunal.

En virtud de las consideraciones expuestas, es que tenemos a bien poner a consideración de ustedes para su estudio, análisis y en su caso, aprobación el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO ÚNICO.-** Se reforma la fracción XIII del Artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, para quedar como sigue:

**Artículo 5.- …**

**I. a XII. …**

**XIII.** Haber sido juez o magistrado en el mismo asunto, en otra instancia distinta al Tribunal, o

**XIV. …**

**T R A N S I T O R I O**

**ÚNICO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, a 13 de noviembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y del Trabajo y Previsión Social, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman los siguientes ordenamientos: el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los Municipios de Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominada “Dirección de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo”, Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominada “Dirección de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila”, Ley de Pensiones del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 de octubre del año 2019, se acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y del Trabajo y previsión Social, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 23 de octubre del año en curso, se turnó a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y del Trabajo y previsión Social, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 90, 105, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de Decreto por la que se reforman los siguientes ordenamientos: el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los Municipios de Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila, Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominada “Dirección de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo”, Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominada “Dirección de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila”, Ley de Pensiones del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“En el Estado el tema en materia de desaparición de personas, así como para la protección de las víctimas de esta situación, se ha trabajado de manera constante para lograr una legislación acorde a las necesidades actuales y establecer un marco legal protector de los derechos humanos, marcando las pautas a seguir para garantizar su cumplimiento.*

*Es así que tanto a nivel federal como local, se han creado diversas leyes con la finalidad de brindar la protección y garantías necesarias para las personas desaparecidas y sus familiares, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.*

*En fecha 14 de diciembre de 2018, se publicó la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, marcando el inicio de la armonización de la legislación estatal necesaria para un marco normativo completo en esta materia; asimismo, en fecha 28 de mayo de 2019, se publicó en el Periódico Oficial la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.*

*Como parte de los trabajos legislativos que corresponde esta obligación de protección, mediante el trabajo en conjunto con los colectivos de familias de personas desaparecidas del Estado, Alas de Esperanza de Allende, Coahuila, A.C., Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, A.C., Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), Asociación Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, A.C., Grupo V.I.D.A., Laguna A.C. (Víctimas por sus Derechos en Acción), Buscando Desaparecidos México, A.C. (BÚSCAME), así como también con el apoyo de la asociación civil Fray Juan de Larios y del Grupo Autónomo de Trabajo, es que estas acciones se armonizan los ordenamientos jurídicos que se requieren, para la debida aplicación de las disposiciones que garanticen la protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.*

*En esta segunda etapa de armonización de la legislación estatal, se trabajan aquellos instrumentos en que se establecen aquellos derechos de carácter laboral en el Estado, entre los que se incluye la vivienda y otras prestaciones, asegurando la protección al patrimonio de la persona desaparecida, así como la protección al derecho de la seguridad social de sus familiares, como lo son el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, el Estatuto Jurídico para Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los Municipios de Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, así como también aquellos que regulan las relaciones laborales en los municipios, como lo son el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza y las leyes de pensiones de aquellos municipios que cuentan con su propio ordenamiento como Saltillo, Torreón, Acuña, Cuatrociénegas, Múzquiz, Ramos Arizpe y Zaragoza.*

*El objetivo de la armonización es que se logre la aplicación y debido cumplimiento a los efectos y derechos que se contemplan en la declaración especial de ausencia, tanto para garantizar la protección de la persona desaparecida, así como de sus familiares, por lo que en concordancia con el criterio que se establece en la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza, en los estatutos jurídicos que regulan tanto la relación laboral de los trabajadores al servicio del estado y de la educación, así como en el Código Municipal, se establece la obligación del patrón para considerar al trabajador que cuente con esta resolución, en situación de permiso sin goce de sueldo hasta por cinco años, de conformidad con esta ley.*

*De igual manera, se entiende que los familiares de personas desaparecidas y aquellas legitimadas conforme a la ley, que son servidores públicos del Estado o de los municipios, también deben ser considerados en la protección a sus derechos laborales, al necesitar de manera especial, licencias para llevar a cabo las gestiones, trámites o procedimientos judiciales, mismas que se establece en los instrumentos que regulan la relación laboral de los servidores públicos estatales y municipales, deberán otorgarse con goce de sueldo, protegiendo así sus derechos laborales y evitando victimizarlos de manera constante en este sentido.*

*En materia de seguridad social, se garantiza la protección a los beneficiarios de la persona desaparecida desde el momento de la denuncia, queja, reporte o noticia, ya que aún y cuando esta protección se ve suspendida por un acto delincuencial a la víctima de desaparición, se debe buscar la continuidad de estos derechos para los que de manera indirecta son víctimas de dichos actos, protegiendo el derecho a recibir la asistencia médica y de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, estableciéndose esta obligación tanto a nivel estatal como municipal en los instrumentos correspondientes.*

*Para la protección de los derechos que nacen de los instrumentos que regulan las relaciones laborales de los servidores públicos estatales y municipales, se establece que la prescripción no podrá comenzar ni correr contra los trabajadores que cuenten con resolución de declaración especial de ausencia o esta se encuentre en trámite, así como tampoco contra aquellos que cuenten con denuncia, reporte o queja de desaparición, ya que al no poder ejercer las acciones para la protección de estos derechos de manera personal y directa, se estaría violentando los mismos si no se regula lo relativo a la prescripción, para que esta no pueda extinguir sus derechos con el transcurso de los plazos que manejan las leyes en este sentido.*

*En las leyes de pensiones que regulan a los trabajadores al servicio del Estado y a los trabajadores de la educación al servicio del Estado, se establecen diversos beneficios sociales, los cuales forman parte de los derechos laborales que se deben proteger, siendo los préstamos quirografarios y créditos para adquisición de casas y terrenos para uso habitacional, los cuales se establece en estas leyes el derecho a la obtención de estos beneficios, así como la obligación de pago de los mismos.*

*Sin embargo, esta carga de la persona desaparecida no debe ser cubierta por sus familiares, en el entendido de que es gravoso para ellos, ya que no se estará percibiendo el sueldo que correspondía a la persona desaparecida, es por ello que se modifican las disposiciones que establecen estos beneficios y sus procedimientos correspondientes, que los pagos serán suspendidos hasta la localización de la persona desaparecida o transcurra un plazo de 15 años a partir de que se emita la resolución de Declaración Especial de Ausencia del trabajador sin que este haya sido localizado.*

*Los trabajadores de la educación al servicio del Estado cuentan con derecho a la vivienda, el cual se regula a través de la Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, que establece diversos supuestos en relación a este derecho, entre ellos, la rescisión del contrato de hipoteca cuando se deje de cubrir el pago por parte de los deudores hipotecarios, sin embargo, para proteger al trabajador desaparecido, en esta iniciativa se establece que dicha circunstancia no será aplicable al deudor hipotecario cuando se emita la resolución de declaración especial de ausencia o esta se encuentre en trámite.*

*Asimismo, los trabajadores de la educación en el Estado, cuentan con el Seguro de los Trabajadores de la Educación, que es una institución con personalidad jurídica y patrimonio propio perteneciente al Sindicato de la Sección 38 del SNTE, que tiene por objeto asegurar en forma decorosa el bienestar de los familiares de los trabajadores de la Educación en casos de fallecimiento o en caso de inhabilitación absoluta en el servicio, lo cual se otorga a través de pólizas que se harán efectivas conforme a esta ley, del Seguro de los Trabajadores, del Fondo de Retiro y del Fondo de Defunción, mismas que solo se otorgan en caso de muerte, de invalidez o de incapacidad total y permanente según corresponda.*

*Sin embargo, como apoyo a los beneficiarios que haya señalado para tal efecto la persona desaparecida, se propone la modificación a la ley para incluir el supuesto para que estas sean efectivas, que se cuente con declaración especial de ausencia del trabajador o esta se encuentre en trámite, sin que se pueda considerar la desaparición del trabajador como motivo para que sus beneficiarios no gocen de los beneficios a que se hace referencia en esta ley, así como la suspensión de los cobros del crédito insoluto del trabajador, para que no pueda ser descontado de los beneficios ni sea aplicable al aval cuando así corresponda, además de que una vez habiendo transcurrido el plazo que establece la ley como licencia sin goce de sueldo al trabajador que cuente con declaración especial de ausencia, inicie el cómputo del plazo de quince años para que dichos créditos y préstamos queden sin efectos.*

*Con esta armonización, se brinda seguridad para dar continuidad a la personalidad jurídica de la persona desaparecida, así como la protección de los derechos humanos de sus familiares y se les proporciona certidumbre ante una situación que afecta en el ámbito laboral y de derechos derivados de esta.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y del Trabajo y Previsión Social, procedimos a efectuar el estudio y análisis de la iniciativa, que tiene por objeto la modificación de diversos ordenamientos *de carácter laboral en el Estado,* a efecto de *garantizar la aplicación y debido cumplimiento a los efectos y derechos que se contemplan en la declaración especial de ausencia, tanto para asegurar la protección de la persona desaparecida, así como de sus familiares.*

*En este sentido el promovente refiere que estas reformas forman parte de un paquete legislativo de armonización a las leyes locales que inició a partir de las reformas generales en torno al tema.*

*Así quienes dictaminamos revisamos el contenido de la iniciativa de lo cual se desprende lo siguiente:*

1. **Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila:**

Se establece quequeda prohibido a las dependencias dar de baja o terminar la relación laboral de los trabajadores de base o sindicalizados **que tengan la calidad de personas desaparecidas, siempre que exista denuncia, reporte o queja, en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y únicamente durante los cinco meses siguientes a aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia**, caso en el cual continuará la prohibición.

En el caso del párrafo anterior, se tendrá al trabajador con licencia sin goce de sueldo.

En sentido similar se prevé la misma prohibición para el caso de los trabajadores de confianza que tengan la calidad de personas desaparecidas, siempre que exista denuncia, reporte o queja, en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y únicamente **durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido el plazo se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia, caso en el cual continuará la prohibición.**

En el caso del párrafo anterior, se tendrá al trabajador con licencia sin goce de sueldo.

También se dispone entre las obligaciones de las dependencias, en lo concerniente a otorgar licencias con goce de sueldo, el deber de otorgar licencias sin goce de sueldo cuando el trabajador cuente con Declaración Especial de Ausencia, de conformidad con la ley especial en la materia; y con goce de sueldo cuando el trabajador sea familiar de una persona desaparecida y deba ausentarse de su centro de trabajo para la realización de trámites, gestiones o diligencias ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional, debidamente acreditados, así como organizaciones de derechos humanos o de protección a víctimas conocidas en el ámbito estatal, nacional o internacional.

Por lo que hace a la asistencia médica, el proyecto de decreto prevé que los beneficiarios del trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida de conformidad con la ley de la materia, conservarán el derecho a recibir la asistencia médica, de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, en términos de las disposiciones aplicables, durante los cinco meses siguientes a la fecha de presentación de la denuncia, reporte o queja de su desaparición y que en el caso de que se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, en los términos establecidos por la ley especial en la materia, continuarán conservando estos derechos hasta su conclusión.

En este mismo orden de ideas, se refiere que cuando a favor del trabajador, se decrete la declaración especial de ausencia, sus beneficiarios conservarán los derechos previstos en el primer párrafo de este artículo, en términos de la ley especial en la materia.

Con respecto a la suspensión de la prescripción de las acciones que nazcan de este Estatuto, el proyecto normativo propone la adición de tres supuestos a efecto de fijar que la prescripción no puede comenzar ni correr, en los casos siguientes:

* Contra los trabajadores que cuenten con Declaración Especial de Ausencia, de conformidad con la ley especial en la materia.
* Contra los trabajadores que tengan denuncia, reporte o queja de desaparición de conformidad con la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables, únicamente durante los cinco meses siguientes contados a partir de la fecha de su interposición.
* Si se promueve el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, en los términos establecidos por la ley especial en la materia.

Por último se dispone que una vez concluido el procedimiento en definitiva, sin que se decrete la declaración especial de ausencia solicitada, la prescripción comenzará o continuará corriendo en su caso.

1. **Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los Municipios de Coahuila de Zaragoza**.

Se establece entrelas obligaciones de la Secretaría de Educación, para con sus trabajadores las de Conceder licencia sin goce de sueldo cuando el trabajador cuente con Declaración Especial de Ausencia, de conformidad con la ley especial en la materia; y con goce de sueldo cuando el trabajador sea familiar de una persona desaparecida y deba ausentarse de su centro de trabajo para la realización de trámites, gestiones o diligencias ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional, debidamente acreditados, así como organizaciones de derechos humanos o de protección a víctimas conocidas en el ámbito estatal, nacional o internacional.

Para efectos de esta fracción, se entiende por familiar y persona desaparecida lo que establece la fracción IX y XVII respectivamente, del artículo 4 de la Ley en Materia de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Asimismo, el proyecto normativo busca establecer, por lo que hace a la atención médica que** los beneficiarios del trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida de conformidad con la ley de la materia, durante los cinco meses siguientes a la fecha de la presentación de la denuncia, reporte o queja de su desaparición, conservarán el derecho a recibir la asistencia médica, de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, en términos de las disposiciones aplicables., salvo que las leyes dispongan lo contrario, y que en el caso de que se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, en los términos establecido por la ley especial en la materia, continuarán conservando los derechos a que se refiere este artículo hasta su conclusión.

Cuando a favor del trabajador, se decrete la declaración especial de ausencia, sus beneficiarios conservarán estos derechos en términos de la ley especial en la materia.

**En el mismo orden de ideas la propuesta contempla que se fije en el artículo 41, concerniente a los casos en que** el nombramiento de dichos trabajadores dejará de surtir efectos sin responsabilidad para el Estado, la prohibición a la Secretaría de Educación de dar de baja o terminar la relación laboral de los trabajadores de la educación que tengan la calidad de personas desaparecidas, siempre que exista denuncia, reporte o queja, en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y únicamente durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido el plazo se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia, caso en el cual continuará la prohibición.

En el caso referido, se tendrá al trabajador con licencia sin goce de sueldo.

**Por lo que hace a la prescripción de** las acciones que nazcan de este Estatuto, se adicionan entre los casos entre los cuales la prescripción no puede comenzar ni correr los siguientes:

* Contra los trabajadores que cuenten con Declaración Especial de Ausencia, de conformidad con la ley especial en la materia.
* Contra los trabajadores que tengan denuncia, reporte o queja de desaparición de conformidad con la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables, únicamente durante los cinco meses siguientes contados a partir de la fecha de su interposición.
* Si se promueve el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, en los términos establecidos por la ley especial en la materia.

Asimismo se fija que una vez concluido el procedimiento en definitiva, sin que se decrete la declaración especial de ausencia solicitada, la prescripción comenzará o continuará corriendo en su caso.

1. **Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

Se propone adicionar dos párrafos al artículo que regula lo referente al cobro de los adeudos por préstamos a corto plazo que no hubieren sido cubiertos por el trabajador, estableciendo que cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia, así como aquellos trabajadores a los que se le es haya solicitado la declaración especial de ausencia y esta se encuentre en trámitese suspenderá su cobro hasta la localización del trabajador conforme a la ley especial de la materia.

Asimismo se dispone que los préstamos a que se refiere el párrafo anterior, quedarán sin efecto, transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.

En este contexto el proyecto también plantea que en el caso de que un trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite y tenga un préstamo o crédito con garantía hipotecaria con el Instituto, se suspenderá su cobro hasta la localización del trabajador conforme a la ley especial de la materia. Si el trabajador es localizado con vida, se reanudará la obligación de pago sin el incremento del 5% a que se refiere dicha ley.

También pretende establecerse que el préstamo o crédito con garantía hipotecaria, quedará sin efectos transcurridos quince años, contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.

1. **Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

En el proyecto de reforma se propone establecer para en los artículos referentes a los préstamos de cualquier especie y quirografarios lo siguiente:

* Cuando el trabajador cuente con resolución de Declaración Especial de Ausencia, los créditos quedarán sin efectos transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece el Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y los Municipios de Coahuila de Zaragoza.
* En caso de que el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite, de conformidad con la ley especial en la materia, no se causarán los intereses moratorios.
* Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausenciao la solitud de esta se encuentre en trámite, de conformidad con la ley especial de la materia, y tenga adeudos por préstamos, se suspenderá su cobro hasta su localización. Esta suspensión también será aplicable al aval.

1. **Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

Con respecto a este ordenamiento se plantea establecer que los beneficiarios de los trabajadores que cuenten con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite, tendrán derecho a percibir las prestaciones que se establecen en esta ley, de conformidad con la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

1. **Ley del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

Se propone la modificación al artículo 84, disposiciones concerniente ala facultad del organismo de rescindir los contratos de hipoteca que se celebren con los trabajadores de la Educación, de las instituciones de seguridad social aportantes y de la Sección 38 del S.N.T.E, a efecto de fijar que no se podrá rescindir el contrato, en el caso de falta de pago de 6 amortizaciones mensuales consecutivas cuando el deudor hipotecario cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite, de conformidad con la ley de la materia.

1. **Ley del Seguro de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila.**

Se propone establecer que este organismo otorgará a sus miembros una Póliza del Seguro de los Trabajadores, una de Fondo de Retiro y una de Fondo de Defunción, que se harán efectivas en caso de declaración especial de ausencia, de muerte, de invalidez o de incapacidad total y permanente, según corresponda.

Además se consideran entre los acreedores a la Póliza correspondiente en caso de declaración especia de ausencia o muerte, las personas que dichos trabajadores hayan señalado como beneficiarios. Si el trabajador no designó beneficiario alguno, se procederá con apego a lo que señala el Código Civil del Estado.

También se propone modificar el artículo 8 que establece que no tendrán derecho a reclamar sus aportaciones los trabajadores que se separen definitivamente del servicio, por causas distintas a la jubilación, para exceptuar de este supuesto a los trabajadores que cuenten con declaración especial de ausencia o la misma se encuentre en trámite.

Se propone establecer que en los casos de trabajadores que cuenten con resolución de declaración especial de ausenciao la solitud de esta se encuentre en trámite y presenten saldos insolutos de su crédito, se deberá suspender su pago hasta su localización.

Por último, en cuanto hace a este ordenamiento se agrega entre las personas que tienen derecho a la póliza de Fondo de Retiro tiene un valor fijo a los beneficiarios en caso de declaración especial de ausencia de conformidad con la ley de la materia.

1. **Reformas a Leyes de Pensiones de los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.**

Se modifican las leyes de pensiones de los municipios de Saltillo, Torreón, Acuña, Cuatro Ciénegas, Múzquiz, Ramos Arizpe y Zaragoza a efecto de establecer en lo concerniente a los préstamos quirografarios que en el caso de que el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámitey tenga adeudos por préstamos, se suspenderá su cobro hasta su localización, de conformidad con la ley especial en la materia, y que dichos préstamos quedarán sin efectos transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece la fracción IX, del artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

1. **Reformas al Código Municipal.**

Se establece dentro de lasobligaciones de las entidades públicas municipales relativas a cubrir las aportaciones que fijen las leyes especiales, para que los trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales comprendidos en los conceptos como atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria y en su caso, indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, los mismos beneficios en los casos de enfermedades no profesionales y maternidad, así como la asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador en los términos de la ley que rija a la institución médica con la cual se haya contratado la prestación del servicio, a efecto de disponer que cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia en términos de la legislación especial en la materia, las entidades públicas municipales deberán cubrir las aportaciones a que se refiere esta fracción para que sus beneficiarios reciban los beneficios a que referidos.

Asimismo se establece que los beneficiarios del trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida de conformidad con la ley de la materia, durante los cinco meses siguientes a la fecha de la denuncia, reporte o queja de su desaparición, conservarán el derecho a que se refiere el párrafo anterior, en términos de las disposiciones aplicables, salvo que las leyes dispongan lo contrario.

En el mismo sentido la reforma pretende incorporar una disposición con la finalidad de fijar que en caso de que se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, los trabajadores, continuarán conservando los derechos a que se refiere este artículo hasta su conclusión.

Ahora bien, con respecto a las licencias sin goce de sueldo se dispone la obligación de las dependencias y entidades municipales de conceder licencia sin goce de sueldo a sus trabajadores que cuenten con resolución de declaración especial de ausencia de conformidad con la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Asimismo se plante el conceder licencia con goce de sueldo cuando el trabajador sea familiar de una persona desaparecida y deba ausentarse de su centro de trabajo para la realización de trámites, gestiones o diligencias ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional, debidamente acreditadosasí como ante organizaciones de derechos humanos o de protección a víctimas conocidas en el ámbito estatal, nacional o internacional.

En concordancia a lo anterior, también se prevé que las licencias que se conceden en los términos de esta fracción y de la anterior salvo las que se otorguen para asuntos particulares, se computarán como tiempo efectivo de servicios dentro del escalafón.

Por lo que hacea las causas de terminación de la relación jurídica laboral la a las disposiciones relativasiniciativa plantea adicionar la prohibición a las dependencias dar de baja o terminar la relación laboral de los trabajadores de base y de confianza que tengan la calidad de personas desaparecidas, siempre que exista denuncia, reporte o queja, en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y únicamente durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido el plazo se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia, caso en el cual continuará la prohibición.

En este último caso se tendrá al trabajador con licencia sin goce de sueldo.

Por última el proyecto normativo busca incorporar por lo que hace al tema de la prescripción que ésta no podrá correr contra los trabajadores que cuenten con Declaración Especial de Ausencia, de conformidad con la ley especial en la materia; contra los trabajadores que tengan denuncia, reporte o queja de desaparición de conformidad con la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables, únicamente durante los cinco meses siguientes contados a partir de la fecha de su interposición, ni en el caso de que se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, en los términos establecidos por la ley especial en la materia.

Por último se dispone que una vez concluido el procedimiento en definitiva, sin que se decrete la declaración especial de ausencia solicitada, la prescripción comenzará o continuará corriendo en su caso.

Así, efectuado el análisis de la iniciativa, quienes conformamos estas comisiones unidas, revisamos que la misma fuera acorde al nuevo marco legal en materia de desaparición de personas, constatando que el proyecto está apegado a las bases constitucionales y legales en la materia.

Por ello y toda vez que el fenómeno de la desaparición de personas en México, es un tema prioritario sobre el que se han hecho diversas reformas, que permiten la protección más amplia para las personas desaparecidas y su familia, estimamos oportuno realizar estas reformas que de ser aprobadas garantizarán la plena eficacia del marco normativo en la materia.

Una vez precisado lo anterior y seguros de la importancia de acciones legislativas en pro de la garantía y defensa de los derechos humanos de las víctimas de desaparición de personas es que se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**PRIMERO.** Se **adicionan** los párrafos tercero y cuarto del inciso b), fracción VI, del artículo 48, los párrafos segundo y tercero del artículo 49, los incisos d) y e) de la fracción VIII del artículo 86, el artículo 87 Bis y las fracciones V, VI y VII del artículo 164, del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 48.-** …

I.- a la V.- …

VI. …

a).- …

b).- …

...

Queda prohibido a las dependencias dar de baja o terminar la relación laboral de los trabajadores de base o de base sindicalizados que tengan la calidad de personas desaparecidas, siempre que exista denuncia, reporte o queja, en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y únicamente durante los cinco meses siguientes a aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia, caso en el cual continuará la prohibición.

En el caso del párrafo anterior, se tendrá al trabajador con licencia sin goce de sueldo.

c).- a la j).- …

…

…

**ARTICULO 49.-** …

Queda prohibido a las dependencias dar de baja o terminar la relación laboral de los trabajadores de confianza que tengan la calidad de personas desaparecidas, siempre que exista denuncia, reporte o queja, en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y únicamente durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido el plazo se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia, caso en el cual continuará la prohibición.

En el caso del párrafo anterior, se tendrá al trabajador con licencia sin goce de sueldo.

**ARTÍCULO 86.-** …

I.- a la VII.- …

VIII.-

a) al c) …

d) Sin goce de sueldo cuando el trabajador cuente con Declaración Especial de Ausencia, de conformidad con la ley especial en la materia; y

e) Con goce de sueldo cuando el trabajador sea familiar de una persona desaparecida y deba ausentarse de su centro de trabajo para la realización de trámites, gestiones o diligencias ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional, debidamente acreditados, así como organizaciones de derechos humanos o de protección a víctimas conocidas en el ámbito estatal, nacional o internacional.

Para efectos de este inciso, se entiende por familiar y persona desaparecida lo que establece la fracción IX y XVII respectivamente, del artículo 4 de la Ley en Materia de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

IX.- a la XVII.- …

**ARTÍCULO 87 Bis.-** Los beneficiarios del trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida de conformidad con la ley de la materia, durante los cinco meses siguientes a la fecha de presentación de la denuncia, reporte o queja de su desaparición, conservarán el derecho a recibir la asistencia médica, de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, en términos de las disposiciones aplicables, salvo que las leyes dispongan lo contrario.

Si se promueve el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, en los términos establecidos por la ley especial en la materia, continuarán conservando los derechos a que se refiere este artículo hasta su conclusión.

Cuando a favor del trabajador, se decrete la declaración especial de ausencia, sus beneficiarios conservarán los derechos previstos en el primer párrafo de este artículo, en términos de la ley especial en la materia.

**ARTÍCULO 164.-** …

I.- a la IV.- …

V.- Contra los trabajadores que cuenten con Declaración Especial de Ausencia, de conformidad con la ley especial en la materia.

VI.- Contra los trabajadores que tengan denuncia, reporte o queja de desaparición de conformidad con la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables, únicamente durante los cinco meses siguientes contados a partir de la fecha de su interposición.

VII.- Si se promueve el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, en los términos establecidos por la ley especial en la materia.

Una vez concluido el procedimiento en definitiva, sin que se decrete la declaración especial de ausencia solicitada, la prescripción comenzará o continuará corriendo en su caso.

**SEGUNDO. Se adicionan** las fracciones IX y X del artículo 37, el artículo 38 Bis, los párrafos séptimo y octavo del artículo 41 y las fracciones IV, V y VI del artículo 78 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y de los Municipios de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 37.-** …

**I.-** a la **VIII.-** …

**IX.-** Conceder licencia sin goce de sueldo cuando el trabajador cuente con Declaración Especial de Ausencia, de conformidad con la ley especial en la materia; y

**X.-** Con goce de sueldo cuando el trabajador sea familiar de una persona desaparecida y deba ausentarse de su centro de trabajo para la realización de trámites, gestiones o diligencias ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional, debidamente acreditados, así como organizaciones de derechos humanos o de protección a víctimas conocidas en el ámbito estatal, nacional o internacional.

Para efectos de esta fracción, se entiende por familiar y persona desaparecida lo que establece la fracción IX y XVII respectivamente, del artículo 4 de la Ley en Materia de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO 38 Bis.-** Los beneficiarios del trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida de conformidad con la ley de la materia, durante los cinco meses siguientes a la fecha de la presentación de la denuncia, reporte o queja de su desaparición, conservarán el derecho a recibir la asistencia médica, de maternidad, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, en términos de las disposiciones aplicables., salvo que las leyes dispongan lo contrario.

Si se promueve el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, en los términos establecido por la ley especial en la materia, continuarán conservando los derechos a que se refiere este artículo hasta su conclusión.

Cuando a favor del trabajador, se decrete la declaración especial de ausencia, sus beneficiarios conservarán los derechos previstos en el primer párrafo de este artículo, en términos de la ley especial en la materia.

**ARTÍCULO 41.-** …

…

…

…

…

…

Queda prohibido a las dependencias dar de baja o terminar la relación laboral de los trabajadores de la educación que tengan la calidad de personas desaparecidas, siempre que exista denuncia, reporte o queja, en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y únicamente durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido el plazo se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia, caso en el cual continuará la prohibición.

En el caso del párrafo anterior, se tendrá al trabajador con licencia sin goce de sueldo.

**ARTÍCULO 78.-** …

**I.-** a la **III**.- …

**IV.-** Contra los trabajadores que cuenten con Declaración Especial de Ausencia, de conformidad con la ley especial en la materia.

**V.-** Contra los trabajadores que tengan denuncia, reporte o queja de desaparición de conformidad con la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables, únicamente durante los cinco meses siguientes contados a partir de la fecha de su interposición.

**VI.-** Si se promueve el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, en los términos establecidos por la ley especial en la materia.

Una vez concluido el procedimiento en definitiva, sin que se decrete la declaración especial de ausencia solicitada, la prescripción comenzará o continuará corriendo en su caso.

**TERCERO.** Se **adicionan** los párrafos segundo y tercero del artículo 55 y los párrafos segundo y tercero del artículo 60 de la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTICULO 55.-** …

Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia, así como aquellos trabajadores a los que se le es haya solicitado la declaración especial de ausencia y esta se encuentre en trámitey tenga préstamos a corto plazo con el Instituto, se suspenderá su cobro hasta la localización del trabajador conforme a la ley especial de la materia.

Los préstamos a que se refiere el párrafo anterior, quedarán sin efecto, transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece la fracción VIII, inciso d) del artículo 86 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila y la ley en materia de declaración especial de ausencia.

**ARTICULO 60.-** …

Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite y tenga un préstamo o crédito con garantía hipotecaria con el Instituto, se suspenderá su cobro hasta la localización del trabajador conforme a la ley especial de la materia. Si el trabajador es localizado con vida, se reanudará la obligación de pago sin el incremento del 5% a que se refiere el párrafo anterior, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

El préstamo o crédito con garantía hipotecaria, quedará sin efectos transcurridos quince años, contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece la fracción VIII, inciso d) del artículo 86 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila.

**CUARTO.** Se **adiciona** el párrafo segundo del artículo 105, el párrafo segundo de la fracción VI, del artículo 110, el tercer párrafo del artículo 115 de la Ley de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores de la Educación Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 105.** …

Cuando el trabajador cuente con resolución de Declaración Especial de Ausencia, los créditos a que se refiere el párrafo anterior, quedarán sin efectos transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece la fracción IX, del artículo 37 del Estatuto Jurídico para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado y los Municipios de Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO 110.** …

I. a la V. …

VI. …

En caso de que el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite, de conformidad con la ley especial en la materia, no se causarán los intereses moratorios a que se refiere el primer párrafo de esta fracción.

VII. …

**ARTÍCULO 115.** …

…

Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausenciao la solitud de esta se encuentre en trámite, de conformidad con la ley especial de la materia, y tenga adeudos por préstamos, se suspenderá su cobro hasta su localización. Esta suspensión también será aplicable al aval.

**QUINTO.** Se **adiciona** el párrafo cuarto del artículo 4 de la Ley del Servicio Médico para los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 4.** …

…

…

Los beneficiarios de los trabajadores que cuenten con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite, tendrán derecho a percibir las prestaciones que se establecen en esta ley y de conformidad con la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**SEXTO.** Se **adiciona** el párrafo segundo del artículo 84 de laLey del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 84.-** …

En el caso del inciso c) de este artículo, no será aplicable cuando el deudor hipotecario cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite, de conformidad con la ley de la materia.

**SÉPTIMO.** Se **reforma** el artículo 5, 6, 8 y 32, se **adiciona** el párrafo segundo del artículo 23 de laLey del Seguro de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 5.-** Para los efectos anteriores, el Seguro de los Trabajadores de la Educación concederá a sus miembros una Póliza del Seguro de los Trabajadores, una de Fondo de Retiro y una de Fondo de Defunción, que se harán efectivas en caso de declaración especial de ausencia, de muerte, de invalidez o de incapacidad total y permanente, según corresponda.

**ARTÍCULO 6.-** Se considerarán como acreedores de la Póliza correspondiente, los trabajadores que se jubilen o pensionen, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 2 de esta Ley, y en caso de declaración especia de ausencia o muerte, las personas que dichos trabajadores hayan señalado como beneficiarios. Si el trabajador no designó beneficiario alguno, se procederá con apego a lo que señala el Código Civil del Estado.

**ARTÍCULO 8.-** No gozarán de los beneficios a que hace referencia esta Ley, ni tendrán derecho a reclamar sus aportaciones los trabajadores que se separen definitivamente del servicio, por causas distintas a la pensión o jubilación,a excepción de los trabajadores que cuenten con declaración especial de ausencia o la misma se encuentre en trámite.

**ARTÍCULO 23.-** …

En los casos de trabajadores que cuenten con resolución de declaración especial de ausenciao la solitud de esta se encuentre en trámite y presenten saldos insolutos de su crédito, se deberá suspender su pago hasta su localización.

**ARTÍCULO 32.-** La póliza de Fondo de Retiro tiene un valor fijo de $40,000.00, cumpliéndose el pago al 100% directamente al trabajador al momento de su jubilación o pensión, o a sus beneficiarios en caso de fallecimiento o declaración especial de ausencia de conformidad con la ley de la materia.

**OCTAVO.** Se **adiciona** el párrafo segundo y tercero del artículo 93 de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominada “Dirección de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Saltillo”, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 93.** …

Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámitey tenga adeudos por préstamos, se suspenderá su cobro hasta su localización, de conformidad con la ley especial en la materia, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Los préstamos a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo, quedarán sin efectos transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece la fracción IX, del artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**NOVENO.** Se **adiciona** el párrafo segundo y tercero del artículo 79 de la Ley Orgánica del Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal Denominada “Dirección de Pensiones y otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Torreón, Coahuila”, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 79.-** …

Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite y tenga adeudos por préstamos, se suspenderá su cobro hasta su localización, de conformidad con la especial en la materia, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Los préstamos a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo, quedarán sin efectos transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece la fracción IX, del artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**DÉCIMO.** Se **adiciona** el párrafo segundo y tercero del artículo 67 de laLey de Pensiones del Municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 67.-** …

Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite y tenga adeudos por préstamos, se suspenderá su cobro hasta su localización, de conformidad con la especial en la materia, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Los préstamos a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo, quedarán sin efectos transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece la fracción IX, del artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**DÉCIMO PRIMERO.** Se **adiciona** el párrafo segundo y tercero del artículo 69 de laLey de Pensiones del Municipio de Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 69.-** …

Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite y tenga adeudos por préstamos, se suspenderá su cobro hasta su localización, de conformidad con la especial en la materia, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Los préstamos a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo, quedarán sin efectos transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece la fracción IX, del artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**DÉCIMO SEGUNDO.** Se **adiciona** el párrafo segundo y tercero del artículo 69 de laLey de Pensiones del Municipio de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 69.-** …

Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite y tenga adeudos por préstamos, se suspenderá su cobro hasta su localización, de conformidad con la especial en la materia, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Los préstamos a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo, quedarán sin efectos transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece la fracción IX, del artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**DÉCIMO TERCERO.** Se **adiciona** el párrafo segundo y tercero del artículo 67 de laLey de Pensiones del Municipio de Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 67.-** …

Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite y tenga adeudos por préstamos, se suspenderá su cobro hasta su localización, de conformidad con la especial en la materia, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Los préstamos a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo, quedarán sin efectos transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece la fracción IX, del artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**DÉCIMO CUARTO.** Se **adiciona** el párrafo segundo y tercero del artículo 69 de laLey de Pensiones del Municipio de Zaragoza, Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 69.-** …

Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia o la solitud de esta se encuentre en trámite y tenga adeudos por préstamos, se suspenderá su cobro hasta su localización, de conformidad con la especial en la materia, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Los préstamos a que se hace referencia en el primer párrafo del presente artículo, quedarán sin efectos transcurridos quince años contados a partir de que concluya la licencia sin goce de sueldo que establece la fracción IX, del artículo 294 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**DÉCIMO QUINTO.** Se **reforma** el párrafo segundo de la fracción IX del artículo 294, se **adicionan** el párrafo segundo, tercero y cuarto de la fracción VII, el párrafo tercero, cuarto y quinto de la fracción IX del artículo 294, el párrafo segundo y tercero del artículo 298 y las fracciones IV, V y VI del artículo 359, del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 294.** …

I. a la VI. …

VIII…

a). al d). …

Cuando el trabajador cuente con resolución de declaración especial de ausencia en términos de la legislación especial en la materia, las entidades públicas municipales deberán cubrir las aportaciones a que se refiere esta fracción para que sus beneficiarios reciban los beneficios a que se refieren los incisos a), b) y d) anteriores.

Los beneficiarios del trabajador que tenga la calidad de persona desaparecida de conformidad con la ley de la materia, durante los cinco meses siguientes a la fecha de la denuncia, reporte o queja de su desaparición, conservarán el derecho a que se refiere el párrafo anterior, en términos de las disposiciones aplicables, salvo que las leyes dispongan lo contrario.

Si se promueve el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, en los términos establecido por la ley especial en la materia, continuarán conservando los derechos a que se refiere este artículo hasta su conclusión.

VIII. …

IX. …

Conceder licencia sin goce de sueldo a sus trabajadores que cuente con resolución de declaración especial de ausencia de conformidad con la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Conceder licencia con goce de sueldo cuando el trabajador sea familiar de una persona desaparecida y deba ausentarse de su centro de trabajo para la realización de trámites, gestiones o diligencias ante cualquier autoridad administrativa o jurisdiccional, debidamente acreditadosasí como ante organizaciones de derechos humanos o de protección a víctimas conocidas en el ámbito estatal, nacional o internacional.

Para efectos de esta fracción, se entiende por familiar y persona desaparecida lo que establece la fracción IX y XVII respectivamente, del artículo 4 de la Ley en Materia de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Las licencias que se conceden en los términos de esta fracción y de la anterior salvo las que se otorguen para asuntos particulares, se computarán como tiempo efectivo de servicios dentro del escalafón y se acordarán según lo dispuesto por el artículo siguiente.

X. a la XVI. …

**ARTÍCULO 298.** …

Queda prohibido a las dependencias dar de baja o terminar la relación laboral de los trabajadores de base y de confianza que tengan la calidad de personas desaparecidas, siempre que exista denuncia, reporte o queja, en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y únicamente durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido el plazo se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia, caso en el cual continuará la prohibición.

En el caso del párrafo anterior, se tendrá al trabajador con licencia sin goce de sueldo.

**ARTÍCULO 359.** …

I. a la III. …

IV.- Contra los trabajadores que cuenten con Declaración Especial de Ausencia, de conformidad con la ley especial en la materia.

V.- Contra los trabajadores que tengan denuncia, reporte o queja de desaparición de conformidad con la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables, únicamente durante los cinco meses siguientes contados a partir de la fecha de su interposición.

VI.- Si se promueve el procedimiento de declaración especial de ausencia ante la autoridad competente, en los términos establecidos por la ley especial en la materia.

Una vez concluido el procedimiento en definitiva, sin que se decrete la declaración especial de ausencia solicitada, la prescripción comenzará o continuará corriendo en su caso.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y de Trabajo y Previsión Social de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. Jesús Berino Granados (Coordinador), Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez. (Secretario), Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 13 de noviembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de decreto mediante la cual se crea la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-**  Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 13 del mes de noviembre del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa de decreto mediante la cual se crea la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que a la iniciativa de decreto mediante la cual se crea la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***EXPOSICION DE MOTIVOS***

*De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, la inversión en infraestructura es fundamental para el desarrollo económico y social de una región, ya que la provisión y administración eficiente de los servicios de infraestructura, estimulan el crecimiento económico y la competitividad.[[1]](#footnote-1)*

*De igual forma, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe[[2]](#footnote-2) , señala que la adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, contribuye a que una región pueda desarrollar ventajas competitivas, alcanzar un mayor grado de especialización productiva, mejorar el acceso a los mercados de bienes e insumos, e incrementar la cobertura y calidad de los servicios provistos a la población, así como su bienestar.*

*En virtud de lo anterior, y con el fin de impulsar la economía, incentivar el desarrollo, atraer la inversión y mejorar la calidad de los servicios públicos en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la presente iniciativa se busca robustecer la legislación en materia de asociaciones público privadas para fomentar la inversión en infraestructura de una manera más eficiente, en armonía con la legislación federal competente y en línea con las mejores prácticas internacionales.*

*A nivel internacional, destaca el uso de este tipo de esquemas para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos con capitales privados. El origen de este tipo de proyectos proviene del esquema conocido como “Private Finance Initiative” (Iniciativa de Financiamiento Privado). Este esquema fue creado por el gobierno británico en 1992[[3]](#footnote-3) y hoy en día existen diversos sub-modelos, siendo el más recurrido el conocido como “Public Private Partnerhsips” (Asociaciones Público Privadas).*

*El referido esquema ha sido utilizado como base para el desarrollo de un sinnúmero de transacciones para el desarrollo de infraestructura y servicios públicos con inversión privada en diversos países del mundo como Canadá, Irlanda, Portugal, Australia, Japón y Suecia, entre muchos otros.*

*Tales contratos han sido implementados en sectores como transporte, salud pública, educación e impartición de justicia y en virtud de éstos se han construido escuelas, hospitales, carreteras, viviendas, prisiones, alojamiento y obtenido equipo militar, representando una inversión de capital superior a 110 mil millones de dólares americanos tan sólo en el Reino Unido.[[4]](#footnote-4)*

*Según señala el Banco Mundial en su publicación “Objetivos del Gobierno: Beneficios y Riesgos de las Asociaciones Público Privadas”, desde la crisis financiera de 2008, tanto países desarrollados como en desarrollo demostraron mayor interés por este tipo de esquemas, por ser una forma de adquirir tecnología e innovación del sector privado para brindar servicios públicos de mejor calidad con una mayor eficiencia operacional[[5]](#footnote-5).*

*En México, los esquemas de asociaciones público privadas son aquéllos que se llevan a cabo por medio de cualquier contratación celebrada entre un Desarrollador y una entidad pública, que tenga como objeto, enunciativa mas no limitativamente, la inversión en el desarrollo de obra pública, infraestructura, provisión de equipamiento, investigación aplicada, tecnologías, licencias, mantenimiento, instalación u operación de equipo o infraestructura, o la prestación de servicios públicos, a un plazo no menor a cinco años y no mayor a cincuenta, en virtud de la cual el sector privado aporta la inversión o infraestructura de manera parcial o total y la entidad pública paga una contraprestación con los recursos que correspondan.*

*Por lo tanto, se presenta esta iniciativa con el objetivo de regular los esquemas de asociaciones público privadas en el Estado de Coahuila de Zaragoza, y así poder promover la inversión del sector privado en infraestructura pública, así como eficiencias operativas a través de tecnología e innovación para mejorar el suministro de servicios públicos.*

*El Banco Mundial[[6]](#footnote-6) señala como uno de los principales beneficios de estos esquemas, la posibilidad de crear proyectos autofinanciables, cuya fuente de pago al Desarrollador proviene de los pagos efectuados por los usuarios, recursos generados por el propio proyecto o aportaciones de terceros.*

*Por otra parte, los bienes aportados en dichas asociaciones pueden ser propiedad de la participación pública o bienes que el ente privado construya o provea, a cambio de una contraprestación. No obstante, en el supuesto de que los bienes se aporten por la iniciativa privada, al concluir la transacción éstos se transmiten a la entidad pública que corresponda. En otras palabras, a causa de tales esquemas los entes públicos se allegan de infraestructura, equipamiento o tecnologías en beneficio de la población.*

*De igual forma, un factor relevante al llevar a cabo este tipo de operaciones, en comparación con los esquemas tradicionales de obra pública o prestación de servicios, es la transmisión de riesgos por parte de ente público al privado. A través de la transferencia apropiada de riesgos hacia el sector privado durante el periodo del proyecto, así, el Estado puede enfocar sus recursos en otras áreas donde sean aprovechados de manera más eficiente.*

*De tal suerte que, la iniciativa privada asume los riesgos técnicos y de desempeño al ser encargado de ejecutar el proyecto, y por lo tanto será su responsabilidad conseguir la tecnología respectiva para la puntual prestación del servicio o construcción de la obra; llevar a cabo los mantenimientos que correspondan mientras conserva el medio ambiente; disponer de los materiales que correspondan para la adecuada consecución del proyecto, entre otros. Adicionalmente, el particular asume el riesgo financiero ya que contrata la deuda necesaria para la prestación del servicio o construcción de la obra.*

*Cabe mencionar que otros beneficios de estas operaciones incluyen los siguientes: (i) es un esquema a través del cual se transfieren los riesgos de entrega, asunción de costos y desempeño en los servicios a la iniciativa privada y protege al sector público de demoras, costos elevados y bajo rendimiento; (ii) mejora de la operación y eficiencia de los servicios públicos; (iii) es una alternativa de financiamiento para infraestructura y provisión de servicios públicos que no califica como deuda para la entidad pública, y (iv) provee mayor transparencia de los pasivos creados por proyectos a largo plazo y de los retornos de capital a los inversionistas.*

*Por otra parte, a nivel local, el primer modelo de este tipo en llegar a México fue el proyecto de infraestructura diferido en el registro del gasto (Pidiregas), introducido a la legislación mexicana federal a través de la reforma a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y a la Ley General de Deuda Pública en 1995.*

*El esquema de asociación público privada se consolidó en la normativa mexicana a nivel federal en 2012, al promulgarse la Ley de Asociaciones Público Privadas por contar éste con importantes beneficios que mejorarían la calidad de la infraestructura y la prestación de servicios públicos en el país.*

*Es importante destacar que este tipo de proyectos ya ha sido desarrollado exitosamente en diversas entidades federativas como Baja California, Nuevo León y Yucatán, entre otras, lo que ha permitido la inversión en proyectos innovadores, a bajo costo para el estado y con un impacto positivo en el bienestar de la sociedad.*

*En el caso de Baja California destaca el proyecto de construcción y operación de la planta desalinizadora de agua de mar más grande de América Latina[[7]](#footnote-7). Por otro lado, en Nuevo León[[8]](#footnote-8), se desarrolló una planta de generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del biogás generado en el relleno sanitario del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de Salinas Victoria.*

*En Yucatán, se construyó el Gran Museo Maya, el cual recibió el primer lugar en el Partnership Awards 2012 en la categoría de “Proyectos Innovadores para la preservación del patrimonio cultural y su divulgación”[[9]](#footnote-9).*

*En particular, el Estado de Coahuila de Zaragoza cuenta con eficiencia en la recaudación de ingresos y una economía estable que pudiera dar lugar a la implementación exitosa de este tipo de esquemas. De acuerdo con información del Gobierno del Estado[[10]](#footnote-10), nos encontramos dentro de los primeros lugares en el índice de competitividad estatal respecto de otros estados de la república, lo que se traduce en una buena capacidad para atraer y retener inversiones y fomentar el desarrollo.*

*Es por esto que, a través de la participación conjunta del sector público y privado se podrá satisfacer la creciente demanda de desarrollo de la infraestructura en el Estado de Coahuila de Zaragoza y por ende fomentar el desarrollo económico del Estado.*

*Por lo tanto, se requiere actualizar la normativa estatal para adecuarla a las necesidades del Estado, ya que si bien el marco jurídico actual prevé la existencia de este tipo de esquemas en la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la citada ley no contempla las nuevas reformas establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual incluye modificaciones a los procesos y contratación del tipo de operaciones aquí referidas, así como la referencia y obligación de registrar los proyectos ante el registro federal correspondiente que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo establecido en la referida normativa.*

*De igual forma, esta iniciativa incluye un órgano colegiado de análisis y autorización de proyectos, a través de un Comité de Proyectos a nivel estatal y órganos equivalentes a nivel municipal, con el fin de que las entidades municipales puedan implementar proyectos de asociaciones público privadas, siempre que se apeguen a la normativa aplicable.*

*A su vez, esta iniciativa de ley incluye la posibilidad de que las entidades municipales correspondientes celebren este tipo de proyectos conjuntamente con entidades estatales, con el fin de utilizar los recursos de los entes públicos de una manera eficiente en beneficio de la sociedad.*

*El Comité de Proyectos aprobará el tipo de proceso de contratación a llevarse a cabo, es decir si será un proceso de concurso público, adjudicación directa o invitación restringida. Considerando que la regla general deberá ser el proceso de licitación y únicamente de manera excepcional y en los casos señalados en la ley, se podrá llevar a cabo mediante invitación restringida o adjudicación directa.*

*Adicionalmente, el Comité de Proyectos deberá aprobar las bases y los documentos del proceso de licitación generando así mayor transparencia en las decisiones del Estado para la elaboración de este tipo de proyectos.*

*Para definir quién presidirá el Comité Proyectos, se tomó en consideración que la gran parte de los proyectos que se llevan a cabo bajo esquemas de asociaciones público privadas involucran alguno, o la totalidad, de los siguientes alcances: inversión, diseño, construcción****,*** *operación y explotación.*

*Asimismo, siendo competencia de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, observar lo relativo a:*

* *Gestionar la inversión pública en infraestructura estatal y proponer políticas para determinar la idoneidad de obras públicas, así como para la licitación y contratación de las mismas;*
* *Dirigir la ejecución de los planes y programas de obras públicas e infraestructura en la entidad;*
* *Conservar las obras públicas y la infraestructura de la red de carreteras y vías de comunicación de jurisdicción del Estado;*
* *Proponer la concesión en la construcción, administración, operación y conservación de carreteras y caminos de cuota de competencia local, y*
* *En general, la gestión en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial, obras públicas, transporte y vivienda.*

*Se determinó que los alcances pretendidos en los proyectos de asociaciones público privadas (diseño, construcción, operación y explotación), tienen relación directa con las atribuciones que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, por lo que se consideró que su naturaleza le permite llevar a cabo la dirigencia del Comité de Proyectos.*

*Otro elemento que considera la presente iniciativa, que no se contemplaba en la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, es la integración del expediente para un proyecto de asociación público privada.*

*Por la integración del expediente se entiende los análisis a realizar por la entidad o dependencia para poder llevar a cabo un proyecto de asociación público privada. La presente iniciativa prevé que dichos análisis se realizarán conforme a los lineamientos técnicos que emita la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad y a los lineamientos financieros que emita la Secretaría de Finanzas.*

*Por lo tanto, una dependencia o entidad que requiera llevar a cabo un proyecto de asociación público privada deberá ajustarse a los lineamientos técnicos y a los lineamientos financieros para llevar a cabo los análisis de preparación.*

*A su vez, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad y la Secretaría de Finanzas, o los entes públicos municipales equivalentes en su caso, validarán que dichos análisis se hayan ajustado a las metodologías de los lineamientos técnicos y lineamientos financieros respectivamente para ser validados posteriormente por el Comité de Proyectos correspondiente. Dicha validación respecto de la metodología asegura una estandarización en los análisis a realizar para la elaboración de un proyecto de asociación público privada.*

*Un aspecto relevante que se incluye en la presente iniciativa es la consulta de terceros especialistas por parte del Comité de Proyectos, ya sea que se trate del comité estatal o el municipal, terceros que podrán ser entes públicos, así como personas de reconocida experiencia y honorabilidad, con el fin de robustecer el análisis de los proyectos de asociación público privada y de fomentar la adecuada toma de decisiones en beneficio de la población.*

*En adición y considerando el incremento en la demanda de servicios públicos, se pretende desarrollar el marco normativo con el objeto de implementar mecanismos de coordinación entre las entidades públicas correspondientes con el fin de acelerar y hacer más eficientes los procesos.*

*Una vez aprobado el proyecto por el Comité de Proyectos, se requeriría autorización del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza para la implementación del mismo, el cual analizaría la capacidad de pago de la entidad pública interesada y autorizaría los activos a afectarse para el pago de la contraprestación correspondiente.*

*Otra característica relevante que la presente iniciativa incluye y que Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza carece, es un proceso para recepción de propuestas no solicitadas más robusto, al incluir, enunciativamente, aspectos tales como: a) la posibilidad de que la persona moral interesada en llevar a cabo un proyecto, solicite al ente público una manifestación de interés en analizar la propuesta no solicitada, previo a la presentación de los análisis correspondientes al proyecto, evitando así gastos innecesarios por parte de los entes privados, y b) la inclusión de un mecanismo de recepción de propuestas no solicitadas, cuya iniciativa sea meramente del particular o del ente público conforme a la publicación de las características de proyectos que esté dispuesto a realizar, a diferencia de la legislación actual en materia de proyectos para prestación de servicios que limita la recepción de propuestas no solicitadas únicamente respecto de proyectos cuyas características hayan sido publicadas por los entes públicos.*

*Considerando que la transparencia y el acceso a la información pública deben fortalecerse e innovarse con el fin de mejorar la rendición de cuentas públicas, surge la necesidad de implementar mecanismos de seguimiento que permitan a los habitantes del Estado de Coahuila de Zaragoza conocer el actuar de las autoridades.*

*Por lo tanto, se incrementan las obligaciones de publicidad y transparencia de la información respecto de los proyectos de asociaciones público privadas, incluyendo la publicación de los que se encuentren en etapa de estudio y análisis, así como de los ya ejecutados o en proceso de contratación.*

*Por todo lo antes expuesto, es necesario un marco legal incluyente de elementos de orden, control, seguimiento, coordinación y transparencia en la contratación. A través de la presente iniciativa se impulsaría a la iniciativa privada a participar en un rol más activo en el desarrollo en infraestructura y tecnologías en el Estado de Coahuila de Zaragoza y sus municipios, que se traduciría en un incremento en la competitividad de las empresas ubicadas en éstos y un mayor bienestar para los coahuilenses.*

*Considerando que la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza carece de los elementos señalados en la presente exposición, y que es de interés público la promoción de la inversión privada, como un instrumento para fomentar el desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus municipios, se propone la promulgación de una nueva normativa que abrogaría la legislación mencionada.*

**TERCERO.-** Quienes integramos la presente Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia efectuamos el estudio y análisis del objeto, contenido y alcances de la iniciativa, verificando que la misma busca robustecer la legislación en materia de asociaciones público- privadas a efecto de fomentar la inversión en infraestructura, en armonía con la legislación federal y en concordancia con las mejores prácticas internacionales.

Al respecto el iniciador describe en la exposición de motivos, los antecedentes de este tipo de esquemas, refiriendo que en su origen fueron conocidos como “Private Finance Initiatives” y fueron creadas por el gobierno británico.

En el mismo sentido refiere que este instrumento ha sido utilizado como base en el desarrollo de infraestructura y servicios públicos en países como Canadá, Irlanda, Portugal, Australia. Japón y Suecia.

Entre los principales beneficios que destaca el promovente de esta iniciativa de los esquemas de inversión denominados asociaciones público- privadas, las siguientes:

1. La posibilidad de crear proyectos autofinanciables, cuya fuente de pago al desarrollador proviene de los pagos efectuados por los usuarios, recursos generados por el propio proyecto o aportaciones de terceros.
2. Los bienes aportados pueden ser propiedad de la participación pública o aportados por la iniciativa privada, no obstante ello, en este último supuesto, al concluir el proyecto los bienes se transmiten a la entidad pública que corresponda, así a causa de estos esquemas los entes públicos se allegan de infraestructura, equipamiento y tecnología en beneficio de la población.
3. La transferencia de Riesgos. Al realizarse este tipo de operaciones los riesgos se transmiten del ente público al privado, al ser este último el encargado de ejecutar el proyecto.
4. Mejora la operación y eficiencia de los servicios públicos.
5. Es una alternativa de financiamiento para infraestructura y provisión de servicios públicos, que no constituye deuda pública.
6. Provee mayor transparencia de los pasivos creados por proyectos a largo plazo y de los retornos de capital de los inversionistas.

Quienes dictaminamos observamos, dentro del contenido de las consideraciones que acompañan el proyecto de nueva ley, se plasman ejemplos de entidades federativas en la que este tipo de esquemas se han venido realizando con éxito, como es el casi del Estado de Baja California, en la que se construyó la planta desalinizadora de agua de mar más grande de América Latina, Nuevo León, en donde se construyó una planta de generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del biogás generado en el relleno sanitario de Salinas Victoria, y el Estado de Yucatán en donde se construyó el Gran Museo Maya.

En este contexto el promovente sustenta la iniciativa en que dado que el Estado de Coahuila se encuentra dentro de los primeros lugares en el índice de Competitividad Estatal, nuestro estado cuenta con capacidad para atraer y retener inversiones.

No obstante lo anterior, a efecto de realizar esquemas de esta naturaleza quien suscribe, señala que “*se requiere actualizar la normativa estatal para adecuarla a las necesidades del Estado, ya que si bien el marco jurídico actual prevé la existencia de este tipo de esquemas en la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, la citada ley no contempla las nuevas reformas establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual incluye modificaciones a los procesos y contratación del tipo de operaciones aquí referidas, así como la referencia y obligación de registrar los proyectos ante el registro federal correspondiente que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conforme a lo establecido en la referida normativa”.*

Así, se plantea la emisión de una nueva Ley, compuesta por nueve Capítulos y ciento noventa y ocho artículos.

En este orden de ideas quienes dictaminamos revisamos el contenido y alcances de la iniciativa de lo cual se verificó lo que a continuación se describe:

**CAPÍTULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES PRELIMINARES**

Describe el objeto de la Ley, constituyendo éste la regulación de las asociaciones público privadas que lleven a cabo las personas de derecho público, a que se refiere el artículo 2 del mismo ordenamiento, entre las cuales podemos menciona**r** entidades estatales;entidades municipales;organismos públicos autónomos, reconocidos en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza;elPoder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza; yel Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Este capítulo también fija lo concerniente a la interpretación de la norma, estando dando dicha facultad a la Secretaría de Infraestructura y de Finanzas, conforme a sus respectivas facultades, y que la misma se hará en consistencia con la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Regula lo relativo a la supletoriedad de la ley, disponiendo que “a falta de disposición expresa (…), serán aplicables de manera supletoria, siempre que sus disposiciones no se opongan a la naturaleza administrativa de los contratos y procedimientos previstos en este ordenamiento, el Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Además prevé que no estarán sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, las obras y servicios que realicen los particulares para cumplir con sus obligaciones en un proyecto de asociación público privada, salvo por el supuesto a que se refieren los artículos 50 y 58, último párrafo de esta Ley.

Este capítulo, asimismo establece disposiciones en las que se regula la intervención de autoridades previendo que ***cuando*** se requiera la intervención de dos o más entidades públicas, cada una de ellas será responsable de los trabajos que le correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación, formulación, estructuración, contratación, adjudicación y gestión de obtención de autorizaciones en su conjunto, de conformidad al convenio de participación conjunta.

El capítulo contiene un glosario y un artículo en el que se prevé el uso que deberá hacerse de la información y documentos derivados de un proyecto, fijando que la información y documentos en poder de las entidades públicas, durante cualquier etapa del proceso de ejecución de un proyecto de asociación público privada, será de carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**DE LOS ESQUEMAS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

El capítulo inicia con la definición *de asociación público privada,* refiriendo que **“***son aquellos proyectos de mediano y largo plazo que se realizan por cualquier contratación celebrada entre un desarrollador y una entidad pública conforme a los requisitos y procedimientos señalados en la Ley, cuando las erogaciones de las obligaciones tengan la finalidad de realizar inversión pública productiva. Adicionalmente, el destino de dichas obligaciones, podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la inversión pública productiva realizada”.*

En el mismo sentido se describen las clases de asociación público privadaacorde a la fuente de pago, haciendo una clasificación enunciativa y no limitativa, consignándose lo siguiente:

* Aquellas cuya fuente de pago de la contraprestación al desarrollador es a cargo de la contratante y proviene de recursos públicos presupuestarios o por otro tipo de recursos públicos a que tiene derecho la entidad pública que corresponda que no se trate de los recursos generados por el propio proyecto;
* Aquellas cuya fuente de pago al desarrollador proviene de los pagos efectuados por los usuarios, recursos generados por el propio proyecto o aportaciones de terceros; y
* Aquellas cuya fuente de pago al desarrollador proviene de una combinación de recursos públicos y pagos efectuados por los usuarios, recursos generados por el propio proyecto o aportaciones de terceros.

Como se alude en la denominación del Capítulo, se definen las autoridades en materia de asociaciones público privadas, conforme a lo establecido en esta Ley, serán las siguientes:

La Secretaría de Finanzas; la Secretaría de Infraestructura; la Tesorería Municipal cuando intervengan los municipios; el COPLADEC; el Congreso; el titular del Poder Ejecutivo del Estado; el titular de la Presidencia Municipal, cuando intervengan los municipios; el Comité de Proyectos; el Comité Municipal de Proyectos cuando intervengan entidades municipales; el Ayuntamiento que corresponda al municipio en cuestión; el órgano de control que corresponda; cualquier otra entidad pública o autoridad que deba emitir alguna autorización para la ejecución del proyecto; y cualquier otra entidad pública o autoridad que deba formar parte del procedimiento de implementación del proyecto en coordinación con alguna de las señaladas en las fracciones anteriores de este artículo, según sea requerida por el Comité de Proyectos o por el Comité Municipal de Proyectos.

En este orden de ideas en este capítulo, también se plasman las facultades de las entidades públicas, entre las cuales resaltan para esta dictaminadora las siguientes:

1. Integrar los análisis de viabilidad de los proyectos, en cumplimiento con los lineamientos técnicos y los lineamientos financieros, salvo tratándose de propuestas no solicitadas.
2. Elaborar el proyecto de iniciativa de decreto de autorización del Congreso;
3. Elaborar las bases del concurso, los documentos que las integran, así como los demás documentos del proceso que corresponda, incluyendo adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas;
4. Emitir la convocatoria correspondiente para dar inicio al procedimiento de adjudicación que corresponda;
5. Llevar el procedimiento de adjudicación conforme a lo señalado en esta Ley;
6. Emitir el fallo a favor del adjudicatario que corresponda;
7. Celebrar el contrato de asociación público privada con el desarrollador adjudicado;
8. Supervisar la prestación del servicio o construcción de la obra, así como demás obligaciones del desarrollador en la etapa de ejecución del proyecto, por sí mismas o por cuenta de un tercero.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de Infraestructura podrá supervisar la ejecución de la obra en cuestión para el caso de proyectos de entidades estatales, y el órgano de control competente, a su vez, cuenta con la facultad de supervisión del proyecto, ya sea que sea en la etapa de ejecución del proyecto o bien durante la operación del servicio conforme a su normatividad aplicable; y

1. Las demás que le correspondan conforme a lo establecido en la presente Ley y en la demás legislación aplicable.

Aunado a lo anterior, el Capítulo Segundo regula lo concerniente a los convenios entre las entidades públicas, disponiendo que en el caso de que dos o más entidades públicas pretendan llevar a cabo un proyecto en conjunto, éstas deberán celebrar el convenio de participación conjunta, conforme a las especificaciones del Reglamento de esta Ley, donde establezcan las funciones que realizará cada una de ellas, los análisis que deban realizar cada una de ellas, así como las obligaciones a las que se sujetan, los trabajos que realizarán, los bienes o aportaciones financieras que realizarán, así como las funciones de cada una de ellas en relación al proyecto a ejecutar, así como las demás especificaciones necesarias para la realización del proyecto, debiendo nombrar un representante común quien se dirigirá a las demás autoridades para la validación, autorización y aprobación del proyecto.

En este mismo sentido se establecen las facultades de la Secretaría de Finanzas y de las Tesorerías Municipales, resaltando las siguientes:

* Revisar y, en su caso, validar que los análisis de viabilidad fueron debidamente realizados, en cumplimiento a los lineamientos financieros, por parte de la entidad pública interesada que corresponda, o el promotor que corresponda tratándose de una propuesta no solicitada enviada a una entidad pública.
* Participar, con voz y voto, en las decisiones que tome el Comité de Proyectos o el Comité Municipal de Proyectos, según corresponda;
* Analizar y, en su caso, confirmar que el proyecto sea celebrado en las mejores condiciones de mercado;
* Emitir la autorización presupuestaria, conforme al artículo 40 de esta Ley, y gestionar la autorización y los parámetros para el cálculo de obligaciones y obligaciones contingentes y para el cálculo del monto máximo anual del gasto programable para proyectos, conforme a lo señalado esta Ley.
* La Secretaría emitirá la autorización correspondiente a las entidades públicas que pretendan la afectación de activos por parte del Estado como garantía o fuente de pago del proyecto, para que puedan continuar con el proceso de asociaciones público privadas correspondiente, una vez que se le remita el expediente respectivo conforme al artículo 47 de esta Ley.
* Tratándose de entidades públicas municipales, el Ayuntamiento correspondiente será el órgano competente para emitir la autorización referida en el párrafo anterior, conforme al artículo 47 de esta Ley; y

El Capítulo contiene también, disposiciones en las que se consagran las facultades de la Secretaría de Infraestructura y de su homóloga a nivel municipal, otorgándoles las siguientes:

* Revisar y, en su caso, validar que los análisis de viabilidad fueron debidamente integrados y realizados, en cumplimiento a los lineamientos técnicos, por parte de la entidad pública interesada, o el promotor que corresponda, tratándose de una propuesta no solicitada enviada a una entidad pública.
* Participar, con voz y voto, en las decisiones que tome el Comité de Proyectos o el Comité Municipal de Proyectos, según corresponda, conforme a lo establecido en la presente Ley;
* Supervisar la construcción de la obra en cuestión en la etapa de ejecución del proyecto;
* Recibir, por medio de la subsecretaría, dirección o departamento que corresponda, el expediente que contenga los análisis a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, para que el Comité de Proyectos o el Comité Municipal de Proyectos emita, en su caso, el dictamen de viabilidad; y

Respecto al COPLADEC, la iniciativa de ley refiere que las entidades públicas interesadas en llevar a cabo un proyecto, podrán solicitar a este Comité de Planeación, la validación de la consistencia de cada proyecto con los planes y programas estatales y municipales según corresponda.

Otra de las autoridades involucradas en el proceso de estos esquemas, es el Congreso, en este sentido, el proyecto de ley, establece que este órgano legislativo, será el encargado de realizar el análisis de capacidad de pago de la entidad pública interesada en implementar el proyecto, así como del otorgamiento de recursos, como fuente o garantía de pago, y **demás elementos señalados en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios**, así como en la legislación que resulte aplicable y, en su caso, emitir la autorización correspondiente. No obstante lo anterior, la Secretaría tendrá la facultad de coadyuvar con el Congreso en el análisis a que se refiere el presente artículo.

Por lo que hace al Poder Ejecutivo, se dispone que el titular del Poder Ejecutivo del Estado o el Presidente Municipal correspondiente, se encargará de recibir el anteproyecto de iniciativa de decreto por parte de la entidad pública interesada en implementar el proyecto, así como de turnarla al Congreso para su análisis y, en su caso, autorización.

También se prevé que las entidades municipales requerirán de la previa aprobación del ayuntamiento por dos terceras partes de sus miembros para la implementación de cualquier proyecto de asociación público privada.

Del mismo modo el capítulo contempla las facultades del Comité de Proyectos y del Comité Municipal de Proyectos, refiriendo que estos órganos contarán con las siguientes facultades:

* Analizar y, en su caso, autorizar la integración de los análisis de viabilidad, que le remitan las entidades públicas que correspondan conforme a la presente Ley y emitir, en su caso, el dictamen de viabilidad.
* Analizar y, en su caso, autorizar el tipo de procedimiento de adjudicación a seguirse y las bases del concurso, así como los documentos que las integran elaborados por las entidades públicas que correspondan; y
* Las demás facultades señaladas en la presente Ley, así como en la demás legislación aplicable.

Por lo que hace a los órganos internos de control, el Capítulo prevé una serie de facultades, consistentes en lo siguiente:

* Pronunciarse en el respectivo Comité, con voz pero sin voto, respecto de la congruencia del proceso con el presupuesto de egresos o el presupuesto municipal de egresos según corresponda; el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y patrimonio;
* Vigilar el apego a las políticas de contratación en las mejores condiciones de mercado conforme a los principios de eficiencia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez, según se indique en los lineamientos técnicos y los lineamientos financieros, y para llevar a cabo cualquier acto o función que se indique en la presente Ley y en la demás normativa aplicable;
* Supervisar el cumplimiento de los contratos en la etapa de ejecución de los proyectos;
* Acudir al fallo del procedimiento de concurso o excepción a concurso;
* Recibir, conducir y resolver las inconformidades por parte de los concursantes que se presenten en cualquier etapa del procedimiento o fallo del concurso, e,
* Imponer las sanciones a que se consignan en el proyecto de Ley.

En otro orden de ideas, el capítulo también contempla lo referente a la naturaleza e integración del Comité de Proyectos su sistema de suplencias, sus facultades, las decisiones, sus sesiones y sus acuerdos.

Así, se consigna que el Comité de Proyectos es un órgano colegiado de análisis y autorización respecto de los proyectos de las entidades estatales y que el mismo se integrará por el titular de la Secretaría de Infraestructura, quien fungirá como Presidente; el titular de la Secretaría, quien fungirá como vocal; el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, quien fungirá como vocal; el titular de la Secretaría de Economía, quien fungirá como vocal; el funcionario designado por el Presidente que fungirá como Secretario Técnico, el cual deberá contar con un rango jerárquico mínimo de director general dentro de la Secretaría de Infraestructura; y el titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, quien tendrá voz pero no voto en las decisiones del Comité de Proyectos.

Por cada integrante del Comité de Proyectos habrá un suplente. Los cargos en el Comité de Proyectos, son honoríficos y no percibirán remuneración alguna.

Con respecto a las sesiones la Ley prevé que el Comité de Proyectos sesionará previa convocatoria de su Secretario Técnico, y para que tales sesiones sean válidas se requerirá la presencia de cuando menos la mitad más uno de sus miembros, o suplentes.

AlComité de Proyectos se le otorgan además de las facultades plasmadas en el artículo 18 las siguientes facultades:

* Acordar el establecimiento de subcomités especiales, así como de grupos de trabajo, los cuales actuarán como sus instancias auxiliares, incluyendo sin limitar la participación de la ciudadanía que se invite a cada proyecto;
* Promover la participación e inversión en los proyectos que desarrolle el Estado o los municipios; y
* Cualesquier otra facultad relacionada a las distintas etapas de implementación de proyectos de asociaciones público privada conforme a lo señalado en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Por lo que hace a las resoluciones y acuerdos del Comité de Proyectos, se dispone que serán decididos por mayoría simple.

Además se dispone que los acuerdos tomados en el Comité de Proyectos deberán hacerse, en su caso, del conocimiento de los titulares de las dependencias, organismos y Entidades Públicas para que procedan a su cumplimiento.

Por último el capítulo establece la posibilidad de que el Comité de Proyectos pueda realizar consultas externas, estableciendo que dicho comité puede apoyarse de entidades estatales, entidades municipales, dependencias o entidades federales o cualquier otra entidad pública que estime conveniente para la toma de decisiones, o acordar el establecimiento de subcomités especiales o grupos de trabajo que actúen como instancias auxiliares del Comité de Proyectos.

En similar sentido se dispone que este Comité podrá requerir a personas especialistas de reconocida experiencia y honorabilidad, de los sectores privado, académico y social, que colaboren, con voz pero sin voto, con dicho comité respecto de cualquier aspecto que se les consulte, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

La última sección de este capítulo regula la naturaleza, la conformación, el sistema de suplencias, las facultades, lo concerniente a la toma de decisiones y las sesiones de los Comités Municipales de Proyectos.

A consecuencia de lo cual se dispone que el Comité Municipal de Proyectos es el órgano de análisis y autorización de cada municipio respecto de los proyectos de las entidades municipales, se conformará por el Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente; la autoridad municipal equivalente a la Secretaría de Infraestructura, que fungirá como Secretario Técnico; la Tesorería Municipal o su equivalente, que fungirá como vocal, el Síndico que sea designado por el Presidente Municipal, que fungirá como vocal, la autoridad municipal equivalente a la Secretaría de Economía, que fungirá como vocal; y el titular de la Contraloría Municipal, con voz pero sin voto.

Por cada integrante del Comité Municipal de Proyectos habrá un suplente. Los cargos en el Comité Municipal de Proyectos, son honoríficos y no percibirán remuneración alguna en virtud de los mismos.

Por lo que hace a las facultades de estos Comités, en el proyecto se precisan las siguientes:

* Acordar el establecimiento de subcomités especiales, así como de grupos de trabajo, los cuales actuarán como sus instancias auxiliares, incluyendo sin limitar la participación de la ciudadanía que se invite a cada proyecto; y
* Cualesquier otra facultad relacionada a las distintas etapas de implementación de proyectos de asociaciones público privada conforme a lo señalado en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

Al igual que en el Caso del Comité de Proyectos, las resoluciones y acuerdos del Comité Municipal de Proyectos, serán decididas por mayoría simple y las sesiones se efectuarán previa convocatoria del Secretario Técnico del Comité Municipal de Proyectos, siendo indispensable para que éstas sean válidas contar con la presencia de cuando menos la mitad más uno de sus miembros titulares, o suplentes.

Del mismo modo, se plantea la posibilidad de que Cada Comité Municipal de Proyectos podrá invitar, a las sesiones, a personas especialistas de reconocida experiencia y honorabilidad de los sectores privado, académico y social, con el objeto de que colaboren con el referido comité en cualquier consulta que considere pertinente respecto del proyecto en cuestión, con voz pero sin voto.

El Comité Municipal de Proyectos, a su vez, podrá solicitar la opinión de otras entidades públicas o comités de planeación, según resulte necesario o conveniente.

Por último se observa que el proyecto normativo contempla la posibilidad de que los Comités Municipales de Proyectos creen subcomités especiales o grupos de trabajo que actúen como instancias auxiliares para el cumplimiento de sus facultades.

**CAPÍTULO CUARTO**

**DE LA INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS**

**Se conforma de cuatro secciones a las que nos referiremos en lo particular.**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS**

El proyecto de Ley establece que las entidades públicas que pretendan llevar a cabo un proyecto de asociación público privada deberán dar prioridad a los que sean consistentes con las necesidades del Estado o con el municipio en cuestión, en consistencia con los planes y programas estatales y municipales respectivamente.

Los proyectos de asociación público privada serán preferentemente integrales, pero, cuando así resulte conveniente por las ventajas objetivas en su implementación, podrán contratarse por etapas.

Por lo que hace a los proyectos que involucren recursos del Presupuesto de Egresos, la norma fija una serie de requisitos, como son el contar con la autorización del dictamen de viabilidad; con el registro en la cartera de proyectos a que se refieren los artículos y con la autorización presupuestaria para asumir obligaciones y obligaciones contingentes.

En el caso de que los proyectos involucren recursos públicos en numerario o en especie, distintos a los previstos en el Presupuesto de Egresos, la nueva ley fija, al igual que en el supuesto anterior, requisitos específicos como lo son el contar con la autorización del dictamen de viabilidad

Y con el registro en la cartera de proyectos.

En este contexto, la iniciativa propone fijar que laSecretaría de Finanzas o en su caso la Tesorería Municipal serán las autoridades responsables de incluir, en el Presupuesto de Egresos del Estado o del municipio, según corresponda, la autorización presupuestaria incluyendo los proyectos de asociaciones público privadas autorizados conforme a esta Ley.

La autorización presupuestaria incluirá la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos.

Asimismo se prevé que cuando se pretendan realizar nuevos proyectos, así como cambios sobre el alcance de los ya autorizados, que involucren recursos del Presupuesto de Egresos del Estado o del municipio, serán analizados y, de ser el caso, autorizados durante el ejercicio fiscal de que se trate, por la Secretaría o la Tesorería Municipal, según corresponda, quien deberá ajustarse al monto máximo anual del gasto programable aprobado por el Congreso. Los cambios sobre el alcance de los proyectos de asociaciones público privadas serán especificados dentro de los lineamientos técnicos y financieros.

También se establece que el monto total de las obligaciones y obligaciones contingentes en los contratos que las entidades públicas celebren, calculado a valor presente, no podrá exceder del monto máximo autorizado por la Secretaría o por la Tesorería Municipal en su caso.

Con respecto a este mismo tema, la ley prevé la forma en que habrá de determinarse el monto de las obligaciones que se originen por la celebración de proyectos, disponiendo que, para tales efectos, se tomarán en cuenta aquellos que se pretendan iniciar en el ejercicio fiscal que corresponda, los que ya hubieran sido iniciados y los que se encuentren en la etapa de ejecución.

Así, la Secretaría de Finanzas y la Tesorería Municipal, conforme a los requerimientos financieros del Estado y del municipio, elaborarán una estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público privadas, con el fin de atender las obligaciones de pago requeridos, tanto de los que se pretendan iniciar durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados.

Ahora bien, para el caso de que se trate de compromisos plurianuales la nueva Ley determina que el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y de los municipios, de cada ejercicio fiscal, deberá prever este tipo de compromisos de gasto que deriven de los proyectos de asociación público privada aprobados en ejercicios fiscales anteriores, así como los proyectos que hayan sido aprobados por el Comité de Proyectos o el Comité Municipal de Proyectos o la entidad pública que corresponda, a la fecha de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado o del municipio, los cuales no podrán exceder la estimación sobre el monto máximo anual del gasto programable propuesto señalado en el Presupuesto de Egresos del Estado.

El proyecto de ley contempla la obligación del Estado y de los Municipios de presentar informes trimestrales al Congreso, sobre estos esquemas en los términos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Un punto que resalta dentro de la propuesta normativa es la creación de un fondo para los análisis y preparación de los proyectos con la partida presupuestal que, en su caso, apruebe el Congreso en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio correspondiente, a propuesta del Poder Ejecutivo y que será administrado por la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría de Finanzas conforme a lo que se disponga en el Reglamento y a lo establecido en los lineamientos técnicos y financieros según corresponda.

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se podrá capitalizar con el reembolso del valor de los bienes muebles e inmuebles, aportados por la entidad pública, utilizados en los proyectos; el reembolso de las cantidades por concepto de remanentes y otros rubros que se establezcan en los contratos; el pago de derechos que corresponda por la supervisión y vigilancia de la ejecución de la obra o de la prestación de los servicios, según lo autorice la contratante, así como, los rendimientos que generen los recursos financieros que lo integran, las transferencias que cualquier ente público o privado realice a su favor, donaciones o cualquier otro que le autoricen las disposiciones aplicables. Los recursos del fondo, solo se podrán utilizar para financiar análisis de proyectos de asociación público privada.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DE LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS**

Esta sección inicia con una serie de disposiciones referentes a la viabilidad de los proyectos, en este orden de ideas, se establece que la viabilidad de los mismos será determinada mediante el dictamen de viabilidad que expida el Comité de Proyectos o el Comité Municipal de Proyectos, según corresponda.

En caso de los organismos públicos autónomos, del Poder Legislativo, y del Poder Judicial, la ley fija que la viabilidad de sus proyectos se expedirá por la autoridad que designen dentro de su propia normativa, salvo que se haya celebrado un convenio de participación conjunta, en cuyo caso se atenderá a lo señalado en tal instrumento.

La autorización a que se refiere el presente artículo se fundará en los análisis que se indican a continuación:

* La descripción de las obras a implementarse o del servicio materia del proyecto y de la infraestructura o equipamiento asociados que se requieran para la prestación del servicio, incluyendo las obras necesarias para preservar o restituir las condiciones ambientales cuando éstas pudieren resultar afectadas;
* La viabilidad técnica, de construcción y la normativa técnica aplicable.

El dictamen de viabilidad deberá señalar las especificaciones técnicas y niveles de desempeño de la infraestructura conforme los lineamientos técnicos que emita la Secretaría de Infraestructura;

* Respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto, deberá contemplarse un análisis que incluya:

1. La problemática que puedan presentar y factibilidad de su adquisición o afectación al proyecto, así como la estimación sobre el valor de adquisición de los mismos; y
2. Tratándose de bienes inmuebles, la situación jurídica de éstos y la compatibilidad del uso de suelo con el tipo de proyecto que corresponda, con la opinión preliminar de las autoridades competentes;

* Asimismo deberá contemplarse la lista de las autorizaciones estatales, municipales y en su caso federales, que se requieran para el desarrollo del proyecto, el análisis de requisitos, factibilidad y oportunidad de su obtención;
* La viabilidad jurídica respecto al cumplimiento del proyecto con la presente Ley, incluyendo el análisis de las autorizaciones requeridas para la implementación del mismo, tomando en consideración las disposiciones aplicables en el ámbito municipal, estatal y federal;
* La viabilidad ambiental considerando los análisis preliminares de las autoridades competentes y, en su caso, afectación de zonas protegidas conforme a la legislación vigente;
* La viabilidad urbana considerando los análisis preliminares de las autoridades competentes y, en su caso, afectación de asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto, conforme a la legislación vigente;
* El análisis del costo y beneficio del proyecto que muestre que este último es susceptible de generar un beneficio social neto bajo supuestos razonables;
* Las estimaciones del monto total de inversión y sus fuentes potenciales de pago y/o garantía;
* La viabilidad económica y financiera, considerando los plazos de construcción y de prestación del servicio que correspondan;
* El análisis de los riesgos transferidos al sector privado y los riesgos retenidos por el Estado;
* La opinión de las entidades públicas, autoridades, ciudadanos, comités o subcomités de planeación, entre otros, según corresponda, conforme a lo señalado en la Ley y su Reglamento;
* La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante la modalidad de asociación público privada, en el que se incluya en su caso un análisis comparativo respecto de la opción de no llevarlo a cabo y la opción de hacerlo mediante al menos otra modalidad de contratación pública; y
* Los demás que indiquen, en su caso, los lineamientos técnicos, los lineamientos financieros o el Reglamento de la Ley.

Asimismo se fija que el dictamen de viabilidad deberá publicarse en CompraNet y en la página de internet oficial de la Secretaría de Infraestructura, y en su caso, del ayuntamiento correspondiente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido emitido.

Al respecto de la integración del expediente de los proyectos que se realicen mediante el esquema de asociación público- privada la ley establece un procedimiento en los términos que a continuación se describen:

* Integrarán el expediente del proyecto, elaborando los análisis que se han mencionado previamente, en cumplimiento con los lineamientos técnicos y los lineamientos financieros, salvo en el caso de propuestas no solicitadas y podrán solicitar la opinión de especialistas ciudadanos de reconocida experiencia y honorabilidad.

En el supuesto de que los especialistas no se pronuncien respecto del proyecto en cuestión conforme a lo establecido en el párrafo anterior, esto no será impedimento para continuar con el proceso correspondiente conforme a lo aquí señalado;

* Presentarán a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría y, en su caso, al COPLADEC, el expediente del proyecto con los análisis, a que se refiere la fracción anterior, debidamente realizados para su validación;
* En caso de que la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría y, en su caso, el COPLADEC validen el expediente, la entidad pública que corresponda turnará al Secretario Técnico del Comité de Proyectos, el documento que contenga el resumen ejecutivo del proyecto para que se presente en el pleno del Comité de Proyectos para su análisis, el documento contendrá por lo menos:

1. Nombre del proyecto;
2. Descripción del proyecto;
3. Nombre de la entidad pública que lo desea realizar, en caso de ser varias entidades públicas, el nombre de cada una de ellas y el nombre de la representante común;
4. Justificar la necesidad del proyecto, motivando y fundamentando su realización, incluyendo el fundamento legal, técnico, ambiental, urbano, financiero entre otros;
5. Monto de inversión y determinación del pago de la contraprestación, determinando un flujo de pagos y la fuente de pago y/o garantía;
6. Listado de autorizaciones y permisos requeridos para la realización y ejecución del proyecto, estableciendo aquellos con los que ya se cuente o haga falta;
7. El análisis costo y beneficio del proyecto;
8. El resultado del análisis de riesgos; e
9. El documento donde la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría y, en su caso, el COPLADEC validan el expediente presentado ante dichas dependencias u órganos;
10. A solicitud del Comité de Proyectos, la entidad pública deberá presentar:
    1. Los documentos, estudios y análisis realizados para corroborar la información que presente;
    2. Cualquier alcance o información complementaria a la señalada en el inciso a anterior; o
    3. La información a que se refiere la fracción III anterior, debido a que ésta no fue presentada o se presentó de forma incompleta.

La entidad pública remitirá la información a que hace referencia esta fracción en el término que para tales efectos le señale el Comité de Proyectos.

Las entidades municipales realizarán el mismo procedimiento a que se refiere este artículo, presentando el expediente para validación ante la Tesorería Municipal y la autoridad equivalente a la Secretaría de Infraestructura a nivel municipal, debiendo presentar el documento que integra el resumen ejecutivo al Comité Municipal de Proyectos para su autorización.

En el supuesto establecido en el párrafo anterior, la dependencia u órgano equivalente a la Secretaría de Infraestructura a nivel municipal deberá pronunciarse sobre la consistencia de los análisis presentados con los lineamientos técnicos y con el Plan Municipal que corresponda y con los programas que de éste emanen, mientras que la Tesorería Municipal analizará la consistencia del mismo con los lineamientos financieros.

En lo que respecta a los organismos públicos autónomos, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, éstas deberán realizar el proceso que se detalla en este artículo por sí mismos de conformidad a su propia normatividad, designando a las autoridades correspondientes y sus funciones.

En el caso de proyectos que se realicen en forma conjunta la ley dispone que las entidades públicas deberán realizar el procedimiento señalado en el presente artículo ante las autoridades que correspondan de conformidad con lo que indique el convenio de participación conjunta que, en su caso, se haya celebrado.

En esta misma sección se definen los alcances de los análisis de viabilidad y del dictamen de viabilidad.

Disponiendo entre otras cosas que el Comité de Proyectos y el Comité Municipal de Proyectos definirán la viabilidad del proyecto, debiendo fundamentar el motivo por el cual emite la viabilidad o no viabilidad del mismo, en caso de los Poderes Legislativo y Judicial y de los Organismos dotados de autonomía constitucional, definirán la viabilidad correspondiente conforme a su propia normatividad.

Una vez emitido el dictamen de viabilidad la Secretaría de Infraestructura, procederá a registrar el proyecto en la cartera de proyectos a que se refieren esta Ley y se continuará con las etapas subsecuentes de implementación del mismo.

La iniciativa de ley prevé que las entidades públicas, según corresponda, podrán contratar la realización de los análisis previstos en de la Ley, así como cualesquiera otros análisis, estudios, trabajos o servicios necesarios para la contratación del proyecto y que dicha contratación estará sujeta a la legislación vigente en el Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como, en materia de obras públicas, siempre que les resulte aplicable.

La sección Tercera de este capítulo contiene una serie de disposiciones quetiene por objeto reglamentar las denominadas propuestas no solicitadas.

Así, se dispone que este tipo de propuestas podrán presentarse cuando el promotor interesado en proponer la realización de un proyecto, presente su propuesta a la entidad pública que corresponda, para su posterior análisis y evaluación, en cuyo caso el promotor podrá solicitar por escrito una manifestación de interés, previo a la presentación de la propuesta no solicitada que corresponda; o cuando, la entidad pública respectiva invite directamente a empresas especializadas para que formulen una propuesta sobre un proyecto específico o publique un aviso indicando las características del mismo que desea realizar y del cual está dispuesto a recibir propuestas por parte de las personas interesadas que correspondan.

En este orden de ideas se prevén una serie de requisitos con los cuales deberán cumplir este tipo de propuestas, entre los cuales destacan los siguientes:

* Deberán presentarse por el representante legal de la o las promotoras, acompañadas del acta constitutiva y los poderes correspondientes, en copia certificada;
* Deberán incluir los análisis que correspondan de acuerdo con los lineamientos técnicos y lineamientos financieros;
* Podrán considerar recursos públicos o el otorgamiento de garantías, sujeto a la obtención posterior de la autorización del Congreso;
* En los casos de invitación a empresas especializadas para la presentación de propuestas no solicitadas, deberán acreditar que el proyecto se encuentra en los supuestos señalados en el aviso que emita la entidad pública, ya sea que haya sido publicado o solicitado directamente;
* No se trate de alguna previamente presentada en los planes y programas estatales y municipales y ya resueltas;
* Se adjunte una declaración unilateral de voluntad por parte del promotor, con carácter de irrevocable , en la que se obligue, en el caso de que se le adjudique el contrato a:
* Otorgar sin limitación alguna toda la información relativa al proyecto materia de la propuesta no solicitada que haya sido aprobada, a la entidad pública que ejecute el proyecto; y
* Ceder los derechos y otorgar las autorizaciones en materia de derechos de autor y propiedad industrial, así como cualquier otro derecho o autorización que se requiera para la ejecución del proyecto, debiendo ceder los mismos a favor de la entidad pública que corresponda, los cuales deberán estar debidamente registrados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y/o de conformidad con cualquier tratado internacional del que México forme parte.

En este mismo orden de ideas se precisa en esta Sección los requisitos a los que habrá de ajustarse el aviso que haga la entidad pública a efecto de invitar a empresas especializadas a formular una propuesta, entre los que se establecen los siguientes:

* La necesidad pública a atender;
* El servicio o bienes materia de la misma;
* La información con la que cuente la entidad pública sobre la necesidad pública a atender y el servicio o bienes materia de la misma, y la forma de acceder a ella;
* El mecanismo para lograr eficiencia en la preparación de las propuestas no solicitadas y/o presentación de estudios con el fin de evitar gastos innecesarios a los promotores; y
* El plazo con el que contarán los promotores para presentar la propuesta correspondiente.

Una de las particularidades de las propuestas no solicitadas, recae en que en el supuesto de se emita el dictamen de viabilidad conforme a lo señalado en esta Ley, se llevará a cabo el procedimiento de adjudicación que corresponda., es decir, bajo ninguna circunstancia se entenderá que la emisión del referido dictamen constituye la adjudicación del proyecto.

Conforme a lo estipulado en la ley, una vez recibidas las propuestas no solicitadas,

la entidad pública deberá revisar que las mismas cumplan con los requisitos previstos, y en caso de no cumplir con lo solicitado, requerirá al promotor, para que en un plazo no mayor a treinta días hábiles subsane la deficiencia de que se trate, el plazo podrá ser prorrogado a juicio de la entidad pública que corresponda.

En caso que el promotor no atienda en tiempo y forma el requerimiento correspondiente, la propuesta no solicitada será desechada, devuelta al promotor y no podrá ser presentada nuevamente. El desechamiento se publicará en la página de internet de la entidad pública que corresponda.

En el supuesto de que una propuesta no solicitada, sea entregada a las entidades públicas no facultadas para su tramitación, será desechada.

La entidad pública, una vez que se haya tenido conocimiento de la propuesta no solicitada, y que el promotor haya cumplido con los requerimientos exigidos, determinará la conveniencia de solicitar el trámite de autorización respectivo, debiendo en un término no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la presentación de la propuesta o subsanación, informar al promotor la conveniencia o no conveniencia de su tramitación.

Una vez aceptada a trámite la propuesta no solicitada, la entidad pública deberá realizar el trámite necesario para la validación y la determinación de la viabilidad de la propuesta no solicitada tomando en consideración que la integración del expediente es responsabilidad del promotor.

La viabilidad del proyecto presentado mediante una propuesta no solicitada, deberá cumplir los mismos requisitos aplicables a aquellos proyectos presentados directamente por una entidad pública.

El proyecto asimismo prevé que durante el plazo de análisis de las propuestas no solicitadas, se podrá requerir por escrito al promotor de las mismas, aclaraciones, información adicional, o realizar análisis complementarios, por parte de la Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría de Finanzas, del Comité de Proyectos, del Comité Municipal de Proyectos o de la entidad pública, estableciendo el plazo en que deberá atender el requerimiento respectivo considerando los límites establecidos en el artículo 54 de esta Ley.

Cualquiera de las secretarías, comités o entidades, a que se refiere el párrafo anterior, podrá autorizar la contratación con terceros para la evaluación de los análisis que sustenten la propuesta no solicitada o la realización de análisis, estudios, trabajos o servicios complementarios que se requieran para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación que corresponda.

La contratación de los análisis, estudios, trabajos y servicios a que se refiere este artículo se sujetarán a la legislación en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, y podrá celebrarse a través de invitación a cuando menos tres personas o mediante adjudicación directa, en adición a los supuestos previstos en la legislación referida.

El dictamen de viabilidad de la propuesta no solicitada, además de lo establecido en el artículo 46 de la Ley, deberá señalar la que corresponda de las siguientes opciones:

* La procedencia y oportunidad para llevar a cabo el proyecto;
* Determinar que la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto podrá adquirir los análisis estudios y trabajos presentados y la titularidad de la propuesta no solicitada, una vez que cuente con las autorizaciones presupuestarias respectivas, lo que constituirá una condición suspensiva, o
* Declarar que no ha lugar a ejecutar el proyecto, ni a la adquisición de los análisis, estudios y trabajos presentados.

La decisión se notificará al promotor, según se indique en el Reglamento, sin incluir información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables.

Desde el momento de presentación de la propuesta no solicitada y hasta la fecha de la resolución, toda la documentación que la integra y que constituya propiedad del promotor, tendrá el carácter confidencial.

En caso de que, durante la evaluación de la propuesta no solicitada, el promotor no proporcione la información complementaria que se le requiera, sin causa justificada, se dará por concluido el trámite y el promotor deberá pagar a la entidad pública que corresponda todos los gastos generados en relación a, la revisión o elaboración de los análisis, estudios y trabajos en cuestión.

Si el proyecto, materia de la propuesta no solicitada, se ejecuta y se realiza el procedimiento de adjudicación, se procederá conforme a lo siguiente:

* La entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto entregará al promotor un certificado en el que se indicará el nombre del beneficiario, monto, plazo y demás condiciones para el reembolso de los gastos generados por los análisis, estudios y trabajos realizados, para el caso de que no se adjudique el proyecto al promotor.
* Contra la entrega del certificado antes señalado, todos los derechos relativos a los análisis, estudios y trabajos presentados y la propuesta no solicitada pasarán al dominio de la entidad pública que ejecutará el proyecto;
* El inicio del procedimiento de adjudicación lo realizará la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, siempre y cuando se haya cumplido con los requisitos aludidos. Si el procedimiento de adjudicación no se realiza por causa imputable al promotor, éste perderá en favor del entidad pública según corresponda, todos sus derechos sobre los análisis, estudios y trabajos presentados;
* Las bases del concurso o de invitación a cuando menos tres personas, establecerán el mecanismo por el cual se evaluará al promotor que presente la propuesta no solicitada; el promotor tendrá un beneficio de hasta un diez por ciento adicional dentro de su evaluación de la propuesta económica, según el Reglamento de esta Ley lo establezca; y
* En caso de que se declare desierto el procedimiento de adjudicación, y que la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto decida no adquirir los derechos sobre los análisis, estudios y trabajos presentados, se procederá a cancelar el certificado y a devolver al promotor los análisis, estudios y trabajos que éste haya presentado, así como la titularidad de los mismos.

Así, una vez agotados los procedimientos previstos en esta Ley, incluyendo sin limitar la emisión del dictamen de viabilidad y la autorización de los documentos de contratación la convocante decidirá cuándo iniciar al procedimiento de adjudicación que, salvo las excepciones de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, será mediante concurso que se realizará conforme a lo previsto en el capítulo sexto, sección segunda de la presente Ley. La decisión referida en este párrafo será fundada y motivada.

En el caso de que se presenten dos o más propuestas para la atención de una misma necesidad que resulten procedentes, el Comité de Proyectos, el Comité Municipal de Proyectos, o las entidades públicas según corresponda, resolverán de manera fundada y motivada, en favor de la que represente mayores beneficios esperados para la población del Estado y, en igualdad de condiciones, en favor de aquella que fue presentada primero en tiempo.

**SECCIÓN CUARTA**

**DE LA VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS**

El capítulo inicia, disponiendo que la entidad pública que corresponda, deberá remitir el expediente integrado que contenga los análisis a que se refiere esta Ley a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría de Finanzas y, en su caso, al COPLADEC.

A efecto de que, la Secretaría de Infraestructura, atendiendo a los lineamientos técnicos, y la Secretaría de Finanzas, atendiendo a los lineamientos financieros, en un plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, lo validen o en su caso emitan observaciones a la entidad pública correspondiente respecto de la debida integración del mismo conforme a los análisis respectivos.

En este sentido, tanto la Secretaría de Infraestructura como la Secretaría deberán expedir, cada una, el oficio que corresponda en donde validen o en su caso observen el expediente que les fue presentado. Los oficios deberán entregarse a la entidad pública que haya presentado el expediente para su validación y deberá contar con los requisitos que se indiquen en el Reglamento, los lineamientos técnicos y los lineamientos financieros.

En el supuesto de que el ente público interesado en llevar a cabo un proyecto solicite al COPLADEC la validación del mismo, dicho órgano, contará con quince días naturales, contados a partir de la recepción del expediente, para pronunciarse respecto de la consistencia del proyecto con el Plan Estatal o el Plan Municipal que corresponda, así como con los programas que emanen de éstos, expidiendo para tales efectos el oficio donde valide o en su caso observe el expediente que les fue presentado, mismo que deberá ser entregado a la entidad pública que haya presentado el expediente para su validación.

Así, una vez que la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría hayan validado la elaboración e integración de los análisis, y que, en caso de haber sido requerido, el COPLADEC se haya pronunciado positivamente a favor del proyecto, dentro de los tres días hábiles posteriores a tales validaciones, estas notificarán de tal situación a la entidad pública interesada, para que ésta última remita el resumen ejecutivo del proyecto al Comité de Proyectos a través de su Secretario Técnico para su análisis y, en su caso, emisión del dictamen de viabilidad.

El Comité de Proyectos contará con quince días hábiles para la emisión del dictamen de viabilidad respectivo, en el supuesto de que el Comité de Proyectos no cuente con la información suficiente para la emisión del dictamen de viabilidad, aún y habiéndola requerido, el referido comité desechará la solicitud y no estará obligado a emitir dictamen alguno.

En el supuesto anterior, la entidad pública deberá solicitar nuevamente la emisión del dictamen de viabilidad.

Por lo que hace al procedimiento de valoración del proyecto de entidades municipales la ley fija lo siguiente:

* Una vez que la entidad municipal cuente con autorización de dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento respectivo, deberá remitir el expediente integrado del proyecto, a la Tesorería Municipal y a la autoridad equivalente a la Secretaría de Infraestructura a nivel municipal, para su validación;
* La Tesorería Municipal y la autoridad equivalente a la Secretaría de Infraestructura a nivel municipal, contarán con quince días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, para validarlo conforme a los lineamientos técnicos y financieros y respecto a su consistencia con el Plan Municipal que corresponda y los programas que de éste emanen, o en su caso dar observaciones a la entidad municipal.
* Una vez validado el expediente, la entidad municipal enviará el resumen ejecutivo, al Secretario Técnico del Comité Municipal de Proyectos para que, en su caso, éste emita el dictamen de viabilidad. El Comité Municipal de Proyectos podrá solicitar la información que considere conveniente a la entidad municipal previo a la emisión del dictamen de viabilidad;
* En caso de que el Comité Municipal de Proyectos valide el expediente, éste emitirá el dictamen de viabilidad de los análisis y lo notificará a la entidad municipal interesada, conforme a lo que se disponga en el Reglamento, para que implemente las siguientes etapas del proyecto conforme a lo establecido en esta Ley, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión del mismo.

Agotado lo anterior, la entidad pública interesada en llevar a cabo un proyecto remitirá el expediente respectivo a la Secretaría de Infraestructura para la integración del registro de cartera de proyectos, en el supuesto de que la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto sea una entidad municipal, ésta remitirá el expediente tanto a la Secretaría de Infraestructura como a la Tesorería Municipal la cual integrará un registro de cartera.

El registro de cartera de proyectos incluirá la inscripción de éstos en las distintas etapas del proceso de asociación público privada, dividiéndose en proyectos en proceso de pre-inversión, proyectos en proceso de contratación y proyectos en etapa de ejecución, ya sea que se trate de construcción de obras o prestación de servicios. Dentro de esta clasificación deberán identificarse los proyectos que correspondan a propuestas no solicitadas.

En mismo sentido, se dispone la obligación de la Secretaría de Infraestructura y la Tesorería Municipal de abrir en su portal de internet una sección relativa a los proyectos que integran el registro de la cartera de proyectos de asociación público privada, donde publicarán de manera sistemática, conforme al proceso señalado, datos como los siguientes: nombre del proyecto, número y tipo del procedimiento de adjudicación, nombre de la contratante; nombre del desarrollador, plazo del contrato, monto total de inversión del proyecto, monto de las obligaciones con cargo a recursos públicos presupuestarios durante el ciclo de vida del proyecto, indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica del proyecto, en los términos que determine el Reglamento, resultado de la evaluación de conveniencia, etc.

La información a que se refiere este artículo será de carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

**SECCIÓN SEXTA**

**DE LA AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO**

El proyecto de ley dispone quepara la contratación de asociaciones público privadas se requerirá autorización del Congreso, por dos terceras partes de sus miembros presentes.

En este contexto se determina que***,*** la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, de acuerdo con su capacidad de pago, podrá asumir obligaciones y obligaciones contingentes, y aportar al proyecto bienes, derechos, capital o cualquier otro bien o recurso que esté legalmente facultada para ello, previa obtención de las autorizaciones y de la autorización del Congreso que correspondan conforme a las disposiciones legales que los rijan. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, no podrá llevar a cabo ninguno de los actos señalados en este artículo, si no están previstos en el contrato.

Para emitir las autorizaciones legislativas que correspondan, el Congreso, deberá considerar la capacidad de pago de la contratante a cuyo cargo estarían las obligaciones correspondientes, el destino del proyecto de asociación público privada y el otorgamiento de recursos como garantía o fuente de pago de las obligaciones a cargo de la contratante.

A efecto de que se emita la autorización correspondiente la entidad pública interesada en levar a cabo el proyecto elaborará una iniciativa de decreto la cual se acompañará la información que permita valorar los aspectos descritos en la ley, y los aspectos siguientes: una exposición de motivos, la información técnica y financiera que corresponda, el techo financiero para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la realización del proyecto, incluyendo obligaciones de pago y garantía, el techo financiero necesario para hacer frente a las obligaciones de pago que sean contraídas en el contrato durante los ejercicios fiscales en que el mismo se encuentre vigente, una proyección que demuestre que la entidad contratante tendrá los recursos suficientes para cubrir la contraprestación establecida en el dictamen de viabilidad, un análisis del destino de la obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago y sus demás compromisos durante la vigencia del contrato en que se formalice el proyecto, una clasificación detallada de las obligaciones que se deriven del proyecto; y la aprobación del dictamen de viabilidad correspondiente del proyecto de asociación público privada.

Una vez elaborada la iniciativa de decreto por parte de la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, se le turnará al titular del Poder Ejecutivo del Estado o en su caso, al Presidente Municipal, para que a su vez se presente dicha iniciativa ante el Congreso para su aprobación.

Previo a la presentación de la iniciativa por parte del Presidente Municipal correspondiente al Congreso, se deberá contar con acuerdo aprobado por las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento respectivo.

La iniciativa será analizada y en su caso aprobada emitiéndose el decreto que contenga la autorización legislativa correspondiente, mismo que deberá incluir, como mínimo, el monto autorizado de las obligaciones a incurrir, el plazo máximo autorizado para el pago, el destino de los recursos, y en su caso, la fuente de pago o la garantía de pago de la obligación de que se trate.

Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso no podrá exceder del ejercicio fiscal siguiente. De no establecer vigencia, se entenderá que la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada.

Los requisitos señalados en los dos párrafos previos deberán cumplirse, en lo conducente, para la autorización del Congreso en el otorgamiento de avales o garantías que pretendan otorgar al Estado o los municipios conforme a lo señalado en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en la normatividad aplicable.

**SECCIÓN SÉPTIMA**

**DE LA VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN**

La entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto será la encargada de elaborar las bases del procedimiento de adjudicación, así como los documentos que forman parte de éstas.

El órgano encargado de validar los documentos del procedimiento de asociación público privada así como el tipo de procedimiento de adjudicación que se llevará a cabo, previo al inicio de dicho procedimiento, será el Comité de Proyectos, el Comité Municipal de Proyectos o los órganos internos de las entidades públicas a que se refieren las fracciones III, IV y V del artículo 2 de la Ley, conforme a lo siguiente:

* Siempre que la entidad pública que corresponda cuente con el dictamen de viabilidad, se haya registrado el proyecto en el registro respectivo y se cuente con la autorización del Congreso, la entidad pública interesada podrá elaborar los documentos para el procedimiento de adjudicación;
* La entidad estatal interesada, deberá remitir los documentos del procedimiento de adjudicación correspondiente a que se refiere la fracción anterior al Comité de Proyectos, a través de su Secretario Técnico, para su análisis y, en su caso, autorización;
* El Comité de Proyectos contará con quince días hábiles para la emisión de la autorización o inclusión de observaciones en los documentos del procedimiento respectivo, el cual se podrá auxiliar de las entidades y personas a que se refiere esta normativa.
* La etapa del procedimiento de adjudicación a que se refiere la presente fracción se repetirá cuantas veces resulte necesario;
* El Comité de Proyectos deberá notificar, conforme a lo que se establezca en el Reglamento, a la entidad estatal interesada, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión de la autorización de los documentos del procedimiento de adjudicación; y
* Recibida la notificación a que se refiere la fracción anterior, la entidad pública interesada podrá continuar con el procedimiento de adjudicación, conforme a lo establecido en esta Ley.

Las entidades municipales realizarán el mismo procedimiento, presentando los documentos del procedimiento de adjudicación al Comité Municipal de Proyectos a través de su Secretario Técnico, quien deberá contemplar lo establecido en este artículo.

**CAPÍTULO QUINTO**

**DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA**

El Capítulo refiere que el contrato sólo podrá celebrarse con personas morales mexicanas cuyo objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar actividades en la materia o especialidad necesarias para desarrollar el proyecto respectivo, el cual una vez firmado por las partes será información pública.

Las personas que participen en un procedimiento de adjudicación, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una persona moral de nacionalidad mexicana, con domicilio en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en términos del presente artículo.

Asimismo se consignan las previsiones que deberá contener dicho contrato entre los cuales se observan, los siguientes:

* Las razones y motivos que den lugar al mismo, y los preceptos legales que autoricen a la contratante a celebrarlo;
* Los antecedentes del procedimiento de adjudicación llevado a cabo;
* El nombre, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes;
* La acreditación de la personalidad de los representantes legales de las partes;
* El objeto del contrato, describiendo el servicio a prestar y la infraestructura y equipamiento a proveer, necesarios para la prestación de dichos servicios;
* Los derechos y obligaciones de las partes;
* Las características, especificaciones, estándares técnicos, indicadores de desempeño e indicadores de gestión aplicables a la ejecución de la obra y la prestación de los servicios;
* La relación de los bienes muebles e inmuebles afectos al proyecto y su destino a la terminación del contrato, y la obligación de mantener dicha relación actualizada, anualmente;
* El régimen económico y financiero del proyecto, con la descripción de las contraprestaciones, en su caso desglosadas, a favor del desarrollador, los mecanismos y las fuentes de pago, con la indicación de las autorizaciones que correspondan;
* La mención de que los muebles e inmuebles del proyecto sólo podrán ser afectados;
* Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, la transferencia temporal del control de la propia sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización del Comité de Proyectos;
* El régimen de distribución de riesgos de diseño, financieros, construcción, operación, mantenimiento, tecnológicos, de demanda, por caso fortuito o fuerza mayor, terminación anticipada y de cualquier otra naturaleza, entre las partes;
* En su caso, la obligación del desarrollador de constituir uno o varios fideicomisos para administrar los flujos u otros propósitos relacionados con el contrato;
* La disposición de que sólo podrán otorgarse garantías, por parte de la contratante, previamente aprobadas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y no podrá garantizar a los desarrolladores ningún pago por concepto de riesgos distintos de los establecidos en el contrato o bien establecidos por mecanismos diferentes de los señalados por esta Ley y su Reglamento;
* El plazo para el inicio y terminación de la obra, para el inicio en la prestación de los servicios, el plazo de vigencia del contrato y, en su caso, el régimen para prorrogarlos;
* La indicación de las autorizaciones requeridas para el desarrollo del proyecto;
* Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato y sus efectos, incluyendo las obligaciones, reembolsos, indemnizaciones y penas convencionales que, según sea el caso, deriven de las mismas, así como los términos y condiciones para realizarlas;
* El régimen de penas convencionales y de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las partes;
* Los procedimientos de solución de controversias, las cuales incluirán el procedimiento de arbitraje o medios alternativos de resolución de conflictos como primer recurso y, de forma secundaria, el proceso legal correspondiente a través de los tribunales competentes. Se deberá señalar en el contrato que, en los supuestos de rescisión o terminación anticipada, el procedimiento de arbitraje o medios alternativos de resolución de conflictos señalados anteriormente no serán aplicables;
* La disposición expresa de que la divulgación de la información del expediente se regirá en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
* La designación del administrador del proyecto, que será encargado de la ejecución y supervisión del contrato en representación de la contratante conforme a la presente Ley; etc.

El contrato podrá estipular que la contratante adquiera los activos con los cuales se prestan los servicios bajo ciertas circunstancias. Asimismo, la contratante tendrá el derecho de intervenir los activos para asegurar la prestación de servicios en caso de desastre natural, epidemia o desorden social o por caso fortuito o fuerza mayor. Tendrá el mismo derecho la contratante respecto del incumplimiento de la contraparte en los términos que el mismo contrato establezca, o cuando el desarrollador entre en un proceso de quiebra o concurso mercantil.

Las estipulaciones del contrato no deberán contravenir los términos y condiciones de las bases del procedimiento de adjudicación, ni los modelos o formatos que éstas incluyen.

La iniciativa de nueva ley contempla también las causas que podrán originar la terminación anticipada del contrato disponiendo que éstas podrán ser por razones de interés general; cuando se presenten eventos de caso fortuito o fuerza mayor que afecten la prestación del servicio o bien o la ejecución de la obra, de conformidad con lo señalado en el contrato; o cuando se revoquen, cancelen o terminen las autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto correspondiente.

Adicionalmente, se podrán establecer las causas de terminación que se incluyan en las bases y en el contrato respectivo, en favor de la contratante o del desarrollador.

En similar sentido se prevé que la contratante podrá dar por rescindido el contrato sin incurrir en responsabilidad:

* Cuando se cancele, abandone o retrase la ejecución de la obra, en los supuestos previstos en el propio contrato;
* Cuando no se presten los servicios contratados o éstos se presten en términos distintos a los pactados; o
* Por cualquier otro incumplimiento del desarrollador al contrato correspondiente.

En los supuestos señalados en las fracciones anteriores, la contratante tendrá la opción de otorgar un período al desarrollador para subsanar el incumplimiento en cuestión y, en caso de no hacerlo, imponerle la pena que resulte aplicable conforme al contrato respectivo.

La propuesta de ley también estipula que el contrato deberá contener una descripción del régimen de riesgos aplicable al proyecto, con objeto de lograr una adecuada distribución de riesgos de manera que éstos sean asignados a la parte que cuente con mayores capacidades para administrarlos a un costo razonable, considerando el perfil de riesgos del proyecto.

Un punto a destacar es que***,*** la iniciativa dispone que los plazos de los contratos de asociación público privada, con sus prórrogas, no deberán ser menores a cinco años o exceder, en su conjunto, el plazo de cincuenta años.

El proyecto dispone que los contratos deberán inscribirse en el Registro Público Único en los términos señalados por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de conformidad con la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

En este Capítulo también se consignan los derechos y obligaciones del desarrollador, determinándose, entre sus derechos, los de no ser obstaculizado en el cumplimiento del objeto del contrato y en el ejercicio de sus derechos; recibir las contraprestaciones por la prestación de los servicios previstas en el régimen económico y financiero del contrato; solicitar prórroga de los plazos del contrato, cuando éstos se hayan demorado por causas imputables a cualquier entidad pública, y recibir las indemnizaciones y pagos previstos en el contrato.

En cuanto a sus obligaciones el proyecto normativo enuncia entre otras las de prestar los servicios contratados, en los términos y condiciones establecidos en el contrato, cumpliendo con los indicadores de desempeño e indicadores de gestión convenidos, ejecutar parcial o totalmente, según se hubiera acordado, la obra de infraestructura y el equipamiento requeridos para la prestación de los servicios objeto del contrato, cumplir con las instrucciones del contratante o cualquier autoridad competente, cuando se expidan con fundamento legal o de acuerdo con las estipulaciones del contrato, contratar y mantener vigentes los seguros y asumir los riesgos establecidos en el contrato, otorgar y mantener en pleno vigor y efecto las garantías establecidas en el contrato, proporcionar oportunamente la información técnica, operativa, financiera y de cualquier otra naturaleza que solicite la contratante y cualquier otra autoridad competente, permitir y facilitar la supervisión y auditorías conforme a las disposiciones aplicables y a lo establecido en el contrato y cumplir con el régimen de comunicación y responsabilidad social pactado en el contrato.

También se refiere queel desarrollador será responsable de aportar todos los recursos necesarios para la prestación de los servicios, la ejecución de la obra, el equipamiento, la operación y mantenimiento del proyecto durante toda la vigencia del contrato.

La ley del mismo modo establece queen caso de que así lo permita la rentabilidad financiera del proyecto y según se haya establecido en las bases del procedimiento de adjudicación y el contrato respectivo, el desarrollador estará obligado a cubrir a la entidad pública que corresponda, con independencia de lo que señalen otras disposiciones aplicables, alguna o algunas de las prestaciones siguientes:

* El reembolso del valor de los bienes muebles e inmuebles, aportados por la entidad pública, utilizados en el proyecto;
* El reembolso de las cantidades por concepto de remanentes y otros rubros en la forma y términos que se establezcan en el contrato;
* El pago de derechos que corresponda por la supervisión y vigilancia de la ejecución de la obra o de la prestación de los servicios, previstos en las disposiciones legales aplicables; o
* Cualquier otra que las partes estipulen en el contrato.

Asimismo se impone la obligación al desarrollador de contratar y mantener vigentes cubrir, por lo menos, los riesgos a que estén expuestos los usuarios, la infraestructura y todos los bienes afectos al servicio, así como los de responsabilidad civil, a través de la contratación de seguros.

Para estos efectos, el desarrollador contratará con empresas especializadas, previamente aprobadas por la contratante para la elaboración de un estudio de riesgos, coberturas, indemnizaciones, montos mínimos, vigencia y demás términos y condiciones de los seguros. Dicho estudio servirá de base para que las partes acuerden las características y alcances de tales seguros, que el desarrollador estará obligado a contratar.

Otras disposiciones relacionadas con los contratos de los proyectos que se realicen bajo el esquema de asociación público privada que se plasman en la iniciativa, son las concernientes a la subcontratación de obras o servicios, que podrá efectuar el desarrollador según lo establecido en el contrato, pero previéndose que en cualquier caso el desarrollador será el único responsable ante la contratante, del cumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en el contrato; la posibilidad de que los derechos de cobro del desarrollador, derivados del contrato, se otorguen en garantía a favor de terceros, o afectarse de cualquier manera, en los términos y condiciones que el propio contrato señale, siempre y cuando no afecten bienes de dominio público y sin que la garantía correspondiente exceda el plazo de vigencia del contrato; la imposibilidad del desarrollador de ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato, total o parcialmente, con la excepción de que se podrán ceder los derechos de cobro del desarrollador, derivados del contrato, en los términos y condiciones que se establezcan en el mismo, previa autorización de la contratante.

Por último, este capítulo establece las únicas causas que podrán dar origen a la modificación del contrato durante el plazo de su vigencia original, disponiéndose que la modificación podrá darse cuando tenga por objeto:

* Mejorar las características de la infraestructura o el equipamiento, que podrán incluir obras adicionales;
* Incorporar nuevas tecnologías, incrementar los servicios, los indicadores de desempeño o los indicadores de gestión;
* Atender aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, así como la preservación y conservación de los recursos naturales, en términos de lo que dispongan las autoridades competentes;
* Ajustar el alcance de los proyectos por causas supervenientes no previsibles al realizarse la preparación y adjudicación del contrato;
* Mitigar un evento de caso fortuito o fuerza mayor; o
* Restablecer el equilibrio económico del proyecto.

Ninguna modificación deberá implicar la transferencia de riesgos, de una de las partes a la otra, en términos distintos a los pactados en el contrato original, ni suplir las deficiencias o incumplimientos del desarrollador con cargo a recursos públicos.

Es necesario destacar queen los tres primeros casos previstos, la contratante podrá solicitar al desarrollador llevar a cabo las obras, o modificar sus características o las correspondientes a la prestación de los servicios, siempre y cuando las inversiones requeridas no excedan del equivalente al veinte por ciento del monto total de inversión considerado en la oferta económica presentada en el procedimiento de adjudicación respectivo, actualizada a valor presente.

Aunado a lo anterior la iniciativa prevé la obligación por parte de la entidad contratante de notificar ualquier modificación al contrato a la Secretaría de Infraestructura y, de tratarse de un proyecto que involucre a una o más entidades municipales, se notificará a la Tesorería Municipal para la actualización del registro de la cartera de proyectos y que de modificarse el contrato, deberán modificarse, en lo conducente, las respectivas autorizaciones.

Adicionalmente, la modificación del contrato, requiere de autorización emitida previamente por el Comité de Proyectos, por el Comité Municipal de Proyectos cuando corresponda.

Finalmente se establece queen casos de urgencia o en los que se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, la contratante podrá solicitar por escrito al desarrollador que lleve a cabo las acciones que correspondan, aún antes de que se formalicen las modificaciones en cuestión.

**CAPÍTULO SEXTO**

**DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LAS GENERALIDADES DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS**

En primer término se prevé quela entidad pública interesada en llevar a cabo un proyecto será la facultada para dar inicio al procedimiento de adjudicación que corresponda, será la convocante, siempre que cuente con la autorización del modelo de contrato y documentos del procedimiento de adjudicación conforme a lo establecido en esta Ley.

El procedimiento de adjudicación de asociaciones público privadas se llevará a cabo a través de concurso, adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas y se sujetará a los principios de legalidad, libre concurrencia, competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad, en igualdad de condiciones para todos los concursantes y en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Se establece en este capítulo, el impedimento para participar en los procedimientos de adjudicación, y celebrar un contrato de asociación público privada los servidores públicos que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación tenga interés personal, familiar o de negocios, o bien de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, concubina, concubino o compañera o compañero civil o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de adjudicación de que se trate; a quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien, las sociedades en las que dichas personas formen parte; así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;a quienes por causas imputables a ellas mismas, la contratante le hubiere rescindido administrativamente un contrato ya sea de asociación público privada o de cualquier tipo, dentro de un lapso de cinco años calendario inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria;a las personas queno hubieren cumplido sus obligaciones derivadas de contratos de asociaciones público privadas o de cualquier otro tipo celebrados con cualquier entidad pública, por causas imputables a ellas, declarado mediante resolución firme dentro de los cinco años calendario inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria; aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que haya actuado con dolo o mala fe, en algún procedimiento de adjudicación, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad; por mencionar algunos supuestos.

Este Capítulo también prevé la posibilidad de que en los términos de la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de Tecnologías Digitales de Información del Estado de Coahuila de Zaragoza y los que se establezcan en las bases del procedimiento de adjudicación de que se trate, los actos del mismo podrán realizarse a través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información, siempre que tales tecnologías, con las características citadas, se encuentren certificadas de conformidad con lo señalado en la referida legislación.

Sobre la publicidad de los actos del procedimiento de adjudicación se dispone que cualquier persona podrá asistir a los mismos, en calidad de observador, previo registro de su participación ante la convocante. Los observadores se abstendrán de intervenir en cualquier forma en los eventos a que asistan, en similar sentido se refiere que el reglamento de esta Ley establecerá la figura de testigos sociales y preverá los términos de su participación para atestiguar los actos correspondientes a los procedimientos de adjudicación.

En este mismo orden de ideas se fija que a todos los actos del procedimiento de adjudicación, la convocante podrá invitar al órgano de control correspondiente.

Por último, esta sección del Capítulo \_ prevé que en los procedimientos de adjudicación se establecerán los mismos requisitos y condiciones para todos los concursantes. Con el objeto de llevar a cabo procedimientos transparentes y no discriminatorios, la entidad pública que corresponda deberá proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos y que no será necesario que el concursante esté registrado en el padrón de proveedores de la administración pública estatal.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DEL CONCURSO**

Salvo por las excepciones a que se refiere la sección tercera de este capítulo, la ley establece que la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto convocará a un procedimiento de adjudicación a través de concurso con el fin de adjudicar el proyecto en las mejores condiciones, considerando precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás elementos aplicables.

En los procedimientos de adjudicación de proyectos de asociación público privada que se lleven a cabo podrá participar toda persona nacional, que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto de que se trate.

Los referidos concursos se clasifican en estatales, cuando sólo puedan participar en el proceso personas morales de nacionalidad mexicana, que presten servicios o mantengan sus operaciones en el territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza y cuyo domicilio fiscal se encuentre en dicha entidad federativa; nacionales, cuando sólo puedan participar personas morales de nacionalidad mexicana; e internacionales, cuando adicionalmente a personas mexicanas, puedan participar personas de nacionalidad extranjera, a través de una persona moral de nacionalidad mexicana.

El proyecto dispone que las convocatorias de los concursos estatales se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en su caso a través de CompraNet, las de los concursos nacionales en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y adicionalmente en un periódico de circulación nacional y en su caso a través de CompraNet y las de concursos internacionales en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en un periódico de circulación nacional y en su caso a través de CompraNet y por cualquier otro medio de difusión que la entidad pública que corresponda considere conveniente.

En esta sección también se enuncian las distintas etapas que conforman el procedimiento de adjudicación a través de concurso mismas que consisten en la convocatoria del concurso y emisión de bases del concurso; los actos previos a la presentación de propuestas; la presentación y apertura de propuestas; y el análisis de propuestas y fallo del concurso.

Con respecto de la convocatoria la iniciativa de ley dispone que la mismaserá preparada por la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, debiendo prever lo siguiente:

* El nombre de la convocante, y la indicación de tratarse de un concurso y un proyecto de asociación público-privada, regidos por la presente Ley;
* La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar y, en su caso de la infraestructura a construir o el equipamiento a proveer;
* Las fechas previstas para el concurso, los plazos de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, así como las fechas estimadas para el inicio de una y otra;
* Los lugares, portales, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir las bases del concurso;
* En su caso los datos correspondientes al proceso de precalificación que se lleve a cabo y la forma de adquirir los términos y condiciones que deberán cumplir los interesados en participar;
* Los requisitos a cumplir para obtener las bases de concurso; y
* Aquellos elementos que sean requeridos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza o disposiciones regulatorias relacionadas, así como los requisitos o alcances que el Reglamento señale.

La adquisición de las bases por parte de los interesados conforme se establezca en la convocatoria será requisito indispensable para participar en el concurso.

La publicación de la convocatoria se realizará a través del portal de internet de la convocante que corresponda y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en otros medios de difusión.

Ahora bien, con respecto a las bases del concurso, el proyecto fija que éstas también serán preparadas por la convocante y contendrán por lo menos los elementos siguientes:

* Los requisitos necesarios para que los concursantes estén en posibilidad de elaborar sus propuestas, que comprenderán, por lo menos:

a. Las características y especificaciones técnicas, así como los indicadores de desempeño e indicadores de gestión de los servicios a prestar; y

b. Las características y especificaciones técnicas para la construcción de las obras de infraestructura y el equipamiento a cargo del Desarrollador;

* En caso de información que no pueda ser proporcionada a través del portal de la convocante, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio de ésta;
* Los bienes muebles e inmuebles principales necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su caso, el responsable de su obtención;
* El plazo de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, con indicación de las fechas estimadas de inicio de una y otra;
* Los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán subcontratarse por el desarrollador;
* El proyecto de contrato, con los derechos y obligaciones de las partes, así como la distribución de riesgos del proyecto incluyendo, en su caso la fuente de pago o mecanismo de pago que aplicaría;
* Los proyectos de autorizaciones que, conforme a las propias bases, en su caso, corresponda emitir a la convocante;
* Las autorizaciones que en forma limitativa deberán obtenerse;
* La forma en que los concursantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de acuerdo con las características, complejidad y magnitud del proyecto;
* La obligación de constituir la persona moral en términos del artículo 87 de esta Ley;
* Las garantías que los concursantes deban otorgar para participar en el concurso, para la etapa de construcción de la infraestructura y para la etapa de prestación de los servicios;
* Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de localización del proyecto;
* La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la firma del contrato;
* El idioma o idiomas, en su caso además del español, en que la información o documentos que se indique o las propuestas mismas podrán presentarse;
* La moneda o monedas, en su caso, en que las propuestas podrán presentarse;
* La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus propuestas;
* Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la adjudicación del proyecto. En estos criterios se señalará el coeficiente de integración de producto nacional que deberán cumplir los concursantes de conformidad con el tipo de proyecto de que se trate, procurando la mayor integración de contenido nacional posible, respetando lo dispuesto en los tratados internacionales;
* Las causas para declarar desierto el concurso, para cancelarlo o para descalificar a los concursantes;
* Carta bajo protesta de decir verdad del concursante o su representante legal, manifestando que no se encuentran en los supuestos del artículo 113 de esta Ley;
* Los mecanismos para resolver los casos de empate en igualdad de condiciones técnicas y económicas presentadas por los concursantes;
* Se establecerá en las bases del concurso que toda obligación de pago de las entidades públicas, originada por la celebración de una asociación público privada, se realizará en estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 117, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;
* Señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requisitos que el desarrollador deberá cumplir; y

La nueva ley establece la posibilidad de que las bases del concurso sufran modificaciones siempre y cuando éstas tengan por objeto facilitar la presentación de las propuestas o la conducción de los actos del concurso; atender solicitudes o propuestas de autoridades o de los concursantes comentadas en la junta de aclaraciones correspondiente; corregir errores o imprecisiones; o incorporar mejoras.

En el mismo sentido se estipula que dichas modificaciones deberán notificarse a través de CompraNet, o a través de la página oficial de la entidad pública que corresponda, a cada uno de los concursantes, a más tardar el décimo día hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse; y darán oportunidad a los concursantes de retirarse del concurso, sin que ello implique incumplimiento o hacer efectiva garantía o aplicar sanción alguna por ese motivo.

Las modificaciones que cumplan con los requisitos anteriores serán incorporadas a la convocatoria y bases del concurso mediante adenda, por lo que deberán ser consideradas por los concursantes en la elaboración de sus propuestas. Sólo el contenido de la convocatoria y las bases será vinculante entre la convocante y los concursantes.

Un último punto que se regula en relación a las modificaciones de las bases del concurso es el concerniente a la prohibición de quelas condiciones contenidas en la convocatoria, en las bases de concurso y sus anexos, o en las propuestas de los concursantes, puedan ser objeto de negociación durante el procedimiento de adjudicación.

Por lo que hace a los actos previos a la presentación de las propuestas, el proyecto del ley dispone que a efecto de facilitar el concurso, previo a la presentación de las propuestas podrán realizarse actos como, efectuar el registro de concursantes; realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la referida al importe de la oferta económica; realizar procedimientos de precalificación en los que los interesados acrediten contar con la capacidad técnica, económica, financiera y jurídica, y en su caso la experiencia, para presentar una oferta en el concurso, conforme se señale en el Reglamento; o juntas de aclaraciones, en las que la convocante contestará por escrito las consultas y preguntas que los concursantes hayan presentado, pero sólo lo establecido en las bases será vinculante a las partes, por lo que cuando la respuesta a una consulta o aclaración, las modifique, será necesario que la convocante emita la adenda a las bases, que corresponda, lo que podrá ser solicitado por cualquier concursante. Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación de las propuestas deberá existir plazo suficiente para la presentación de las propuestas.

Ahora bien, en relación a la presentación y apertura de las propuestas, la norma propuesta fija que una vez iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes.

Además se señala que para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas bastará que los concursantes presenten un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario que acrediten su personalidad.

También se prevé la posibilidad de quedos o más personas podrán presentar una propuesta conjunta, a cuyo efecto deberán designar a un representante común que las represente en el procedimiento de adjudicación correspondiente.

Acerca del plazo de presentación la propuesta legislativa, refiere que el mismo no podrá ser menor a cinco días hábiles, una vez celebrada la última junta de aclaraciones.

Las ofertas irrevocables deberán contar con los requisitos que estable la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y su regulación secundaria para la presentación de ofertas calificadas, así como con los elementos que para tales efectos señale el Reglamento.

De acuerdo a lo dispuesto en la nueva ley, las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo que se establezca en el Reglamento y en las bases de concurso, y serán abiertas en sesión pública.

Dichas propuestas serán irrevocables y no estarán sujetas a condiciones adicionales, deberán tener la vigencia establecida en las bases de concurso, la cual no podrá ser menor a sesenta días naturales, estar firmadas por el representante legal de la concursante y cumplir los requisitos establecidos.

Además se establece que en cada concurso los concursantes sólo podrán presentar una propuesta conformada por una oferta técnica y una oferta económica, por lo que, en caso que una persona, su matriz, filiales o subsidiarias participe en la presentación de dos o más propuestas, todas las propuestas en las que participen serán desechadas.

Conforme a lo estipulado en esta sección, las propuestas se presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán objeto de negociación, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar aclaraciones o información adicional, en términos de la presente Ley y en ningún caso podrán suplirse las deficiencias de las propuestas presentadas.

Con respecto ala evaluación de las propuestas, la nueva ley reitera que ésta se realizará, donde se permita establecer las mejores condiciones de mercado, de conformidad a las bases emitidas en el procedimiento de adjudicación, tomando en consideración lo establecido en Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

En este sentido se dispone que el Secretario de Finanzas, el Tesorero Municipal o su equivalente de cada ente público que corresponda, será el responsable de confirmar que el proyecto fue celebrado en las mejores condiciones de mercado atendiendo al procedimiento, requisitos y disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Una vez realizada la evaluación de las propuestas por parte de la convocante, el proyecto se adjudicará al concursante que cumpla los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros establecidos en las bases y que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad de los servicios prestados a los usuarios, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases.

En caso de igualdad de condiciones técnicas y económicas, el proyecto se adjudicará conforme a los criterios de desempate que se hubieran establecido en las bases y, de no haberse señalado, se resolverá en favor de la que represente mayores beneficios esperados para la población del Estado a juicio de la convocante.

Así, agotado el análisis de las propuestas, la convocante emitirá el fallo en virtud del cual se adjudicará el proyecto o se declarará desierto el concurso, debiendo incluir las razones que lo motivaron, exceptuando aquella información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables.

El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los concursantes y se publicará en el portal de internet de la entidad pública que corresponda, dentro del plazo previsto en las bases del concurso que no será mayor a veinte días hábiles posteriores a su emisión.

Esta sección contempla las causasde descalificación de las propuestas, además de las que se indiquen en las bases, consignando entre otras, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases; si iniciado el procedimiento de adjudicación sobreviene una causa de impedimento prevista en el artículo 113 de esta Ley; en la ley el establecer, concertar, coordinar posturas o la abstención en el procedimiento de adjudicación de que se trate o intercambiar información con este propósito.

En similar sentido se prevén las causas por las que la entidad convocante podrá declarar desierto un concurso, estableciendo las que a continuación se enlistan:

* Ningún interesado haya adquirido las bases;
* Ninguna de las propuestas cumpla con los requisitos solicitados en las bases;
* Ninguna de las ofertas económicas de las propuestas presentadas fueren aceptables para la convocante; o
* Cuando exista únicamente un concursante. No obstante lo anterior, también se podrá proceder a adjudicar a dicho concursante de manera directa siempre y cuando haya cumplido con los requisitos establecidos en las bases.

Por último esta sección prevé las causas por las que la convocante puede proceder a la cancelación de un concurso, estableciéndose las siguientes:

* Por caso fortuito o fuerza mayor;
* Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del proyecto;
* Cuando se extinga la necesidad del servicio materia del procedimiento de adjudicación; o
* Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento de adjudicación, pudieren ocasionar un daño o perjuicio al Estado o al municipio, según corresponda.

**SECCIÓN TERCERA**

**DE LAS EXCEPCIONES AL CONCURSO**

Esta sección establece la posibilidad de que se puedan adjudicar proyectos de asociación público privada sin sujetarse al procedimiento de adjudicación a que se, a través de procedimientos de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas cuando se haya rescindido un contrato adjudicado antes de su inicio, sin haber podido adjudicar al segundo o ulterior lugar; en el concurso se haya presentado un solo concursante; en el concurso no se haya emitido o aceptado propuesta alguna; o se realicen dos concursos que hayan sido declarados desiertos, siempre que no se modifiquen los requisitos esenciales señalados en la convocatoria.

En similar sentido se prevé que se podrá adjudicar proyectos de asociación público privada sin sujetarse al procedimiento de, a través de procedimientos de adjudicación directa cuando:

* En el mercado sólo exista un posible oferente, o se trate de una persona física o moral que posea la titularidad exclusiva de patentes, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual exclusivos debidamente registrados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y/o de conformidad con cualquier tratado internacional del que México forme parte;
* Se realicen con fines exclusivamente de seguridad pública o su contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad del Estado o del municipio que corresponda, la seguridad pública o la procuración de justicia, en los términos de las leyes de la materia;
* Existan circunstancias que acrediten que de no ejecutar el proyecto se puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificables y comprobables;
* Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de concurso, antes de su inicio, en cuyo caso el contrato podrá adjudicarse al concursante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en la variable de adjudicación de carácter económica con la propuesta inicialmente ganadora no sea superior al diez por ciento. Se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador en ese mismo concurso o las subsecuentes en caso que la precedente no acepte;
* Se trate de la sustitución de un desarrollador por causas de terminación anticipada de un contrato en marcha;
* Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de concurso en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate; o
* Se hayan declarado desiertos dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas.

Tratándose de propuestas no solicitadas, no procederá la adjudicación directa, salvo que se trate de alguno de los casos primeros cuatro supuestos descritos e este párrafo.

Los procedimientos de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa deberán realizarse, previa autorización del Comité de Proyectos o del Comité Municipal de Proyectos, en su caso, y conforme a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad de condiciones, así como prever las medidas para que los recursos públicos que en su caso se utilicen, se administren con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.

Así esta sección fija que el procedimiento de adjudicación directa o de invitación a cuando menos tres concursantes se sujetará a lo siguiente:

* Solo podrán participar las personas que reciban una invitación por parte de la convocante;
* En todo caso, la convocante bajo su más estricta responsabilidad podrá solicitar la presentación de propuestas a personas que acrediten contar con capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones;
* Las personas invitadas deberán cumplir con todos los requisitos establecidos al efecto en las bases de contratación correspondientes;
* La invitación fijará los plazos del procedimiento de adjudicación, el mecanismo de evaluación de las ofertas y demás elementos pertinentes conforme a las disposiciones de la presente Ley;
* Junto con las invitaciones se entregará la descripción del servicio a contratar y la infraestructura o equipamiento requeridos, a cargo del desarrollador; y
* La apertura de ofertas se llevará a cabo en un acto público.

**SECCIÓN CUARTA**

**DE LOS ACTOS POSTERIORES AL FALLO**

El contrato se celebrará entre la entidad pública que corresponda y el concursante ganador, quien a partir de la suscripción del mismo tendrá el carácter de desarrollador, en el plazo que se indique en las bases del procedimiento correspondiente.

En el evento de que el contrato no se suscriba en el plazo señalado, por causa injustificada imputable al adjudicatario, se harán efectivas las garantías correspondientes según se señale en las bases correspondientes.

En este supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo lugar del procedimiento y, de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones previstas en las bases del proceso respectivo y su propuesta económica sea aceptable para la convocante.

Si realizado el concurso, la convocante decide no firmar el contrato respectivo cubrirá, con cargo a su presupuesto, a solicitud escrita del adjudicatario del contrato, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido.

Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento de adjudicación de que se trate.

A cerca de la formalización del contrato la iniciativa establece que en el caso de que el contrato no se formalice dentro del plazo establecido en las bases por razones atribuibles a la convocante, el desarrollador tendrá derecho a que se prorroguen los plazos que correspondan por un tiempo igual al atraso en la firma del contrato.

Respecto de las propuestas desechadas durante el concurso el proyecto dispone que estas podrán destruirse o ser devueltas a los concursantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista algún procedimiento de adjudicación en trámite, en cuyo caso procederá su destrucción o devolución después de la total conclusión de dicho procedimiento de adjudicación.

En todo caso, la convocante mantendrá una copia electrónica de la propuesta, en medios que garanticen su inalterabilidad. La propuesta será pública una vez que el fallo quede firme.

Por último esta sección estipula quelos medios de defensa, ordinarios o extraordinarios, mediante los cuales se pretenda impugnar el fallo, solamente suspenderán el procedimiento correspondiente, la obra en curso o el contrato firmado, cuando concurran todos los requisitos siguientes:

* Que la solicite el agraviado;
* Que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considera, entre otros casos, que se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando:

a. El proyecto involucre la prestación de un servicio público de necesidad inminente;

b. Se ponga en riesgo la rentabilidad social del proyecto o su ejecución misma;

* Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

La suspensión sólo será procedente si el solicitante otorga garantía suficiente sobre los daños y perjuicios que la misma pudiere ocasionar. Dicha garantía deberá ser por el equivalente al diez por ciento del monto de la inversión propuesta por el inconforme, en el procedimiento de adjudicación, para el desarrollo del proyecto; garantía que se hará efectiva en su totalidad en caso de resultar improcedente el recurso.

Cuando no haya sido procedente la suspensión del fallo y la resolución final favorezca al recurrente, este último tendrá derecho sólo al pago de los daños y perjuicios causados. En este caso se le devolverá la garantía señalada en el párrafo anterior.

**CAPÍTULO SÉPTIMO**

**DE LOS BIENES NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS**

En este capítulo se consigna que la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, el desarrollador, así como cualquier otra entidad pública, previo a la obtención de las autorizaciones correspondientes, podrán afectar los bienes y derechos que resulten necesarios o convenientes para la implementación del proyecto.

En este sentido podrá otorgarse el uso de bienes muebles o inmuebles a través de concesión, arrendamiento, comodato o cualquier otro medio legal, según la legislación que en la materia lo permita, para la realización del objeto del contrato. En cualquier caso, la vigencia del título legal a través del cual se otorgue dicho uso será por un periodo máximo equivalente a la vigencia del contrato.

La iniciativa prevé que cuando en un proyecto el uso de bienes públicos o la prestación de los servicios por parte del desarrollador privado requieran de autorizaciones, éstas se otorgarán conforme a las disposiciones que las regulen.

En cualquier caso, la o las concesiones que se requieran, serán otorgadas a la persona moral constituida en términos de esta Ley por quien resulte adjudicatario del contrato correspondiente, conforme a los procedimientos de adjudicación previstos en esta Ley. Su vigencia será suficiente para que el desarrollador pueda cumplir con el objeto del contrato, durante el plazo de vigencia establecido en el mismo.

Cualquiera de las autorizaciones para la prestación de los servicios otorgadas en términos de este artículo, se extingue por la terminación del contrato correspondiente. Tal disposición deberá señalarse en las autorizaciones que corresponda.

Cuando se trate de autorizaciones de carácter federal, podrán coaligarse con el contrato, cuando los ordenamientos que rijan a aquéllas lo permitan y sean compatibles con las disposiciones de la presente Ley.

El proyecto asimismo fija que los derechos de los desarrolladores, derivados de la o las autorizaciones, podrán cederse, darse en garantía o afectarse de cualquier manera, cuando se cedan, den en garantía o afecten los derechos del contrato correspondiente y previa autorización por escrito de la autoridad que los haya otorgado.

**CAPÍTULO OCTAVO**

**DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS**

Se establece que el desarrollador podrá iniciar la prestación de los servicios o la construcción de la obra previa autorización de la contratante o, en su caso, conforme al calendario respectivo, misma que no procederá sin la previa verificación técnica de que las instalaciones del proyecto, cumplen las condiciones de seguridad según las especificaciones establecidas en el contrato y las requeridas por las disposiciones aplicables.

Asimismo se dispone que en los proyectos, el desarrollador será responsable de la prestación de los servicios de manera continua, uniforme y regular, en condiciones que impidan cualquier trato discriminatorio, de acuerdo con los indicadores de desempeño y los indicadores de gestión pactados, así como de la construcción y equipamiento, parcial o total, y el mantenimiento y conservación de la infraestructura, necesarios para la prestación de los citados servicios, según se establezca en el contrato, en las autorizaciones y en la legislación aplicable.

También se prevé que salvo por lo que, en su caso establezca el contrato, el desarrollador no tendrá derecho a recibir el pago de contraprestación alguna, hasta en tanto no preste los servicios o entregue la obra en los términos y condiciones contratados.

De acuerdo a lo consignado en el proyecto de nueva ley, la contratante se encargará de la supervisión del contrato. No obstante lo anterior la Secretaría de Infraestructura, para el caso de proyectos de obra de entidades estatales, y/o el órgano de control que corresponda, en cualquier caso, tendrán facultades para supervisar el cumplimiento del mismo.

Asimismo se dispone que la construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y reparación de la infraestructura de un proyecto de asociación público privada deberán realizarse conforme al programa, características y especificaciones técnicas pactadas en el contrato correspondiente, así como, observar las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico, asentamientos humanos, desarrollo urbano, los acuerdos con las comunidades indígenas derivados de las consultas previas efectuadas y demás aplicables, en los ámbitos estatal, municipal, y en su caso federal.

Por último, se observan previsiones referentes al caso de concurso mercantil del desarrollador, en este supuesto, la contratante deberá solicitar a la autoridad que conozca del mismo, que disponga las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DE LA INTERVENCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto de ley contempla la facultad de la entidad pública contratante de intervenir en la preparación o ejecución de la obra, la prestación de los servicios o, en cualquier otra etapa del desarrollo de un proyecto cuando el desarrollador incumpla con las obligaciones objeto del contrato, por causas imputables a éste, y ponga en peligro el desarrollo del proyecto.

Para tales efectos la contratante deberá notificar por escrito al desarrollador la causa que motiva la intervención, para que en un término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que se le entregó el escrito señalado en este párrafo, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente.

Transcurrido dicho plazo, la contratante contará con un plazo de hasta quince días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el desarrollador. La determinación de proceder o no con la intervención deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al desarrollador dentro de dicho plazo.

Una vez notificada la determinación de la contratante, de ser el caso, la contratante procederá a la intervención, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades en las que, en su caso, incurra el desarrollador. Contra la resolución de intervención, procederá el juicio contencioso administrativo.

En este orden de ideas, se precisa, queen caso de intervención, corresponderá a la contratante la ejecución de la obra o la prestación del servicio, así como recibir, en su caso, los ingresos generados por el proyecto. Al efecto, podrá designar a uno o varios interventores, utilizar el personal que el desarrollador venía utilizando o contratar a un nuevo constructor u operador en términos de la Ley.

Acerca de la duración de la intervención la iniciativa dispone quela duración durará el tiempo que se determine en el acuerdo que ordene la intervención, sin que el plazo original y, en su caso, prórroga o prórrogas, puedan exceder, en su conjunto, de tres años, también se prevé que el desarrollador podrá solicitar la terminación de la intervención, cuando demuestre a la contratante que las causas que la originaron quedaron solucionadas y que, en adelante, está en posibilidades de cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en el contrato.

Al concluir la intervención, la contratante devolverá al desarrollador la administración del proyecto y los ingresos percibidos, una vez deducidos todos los gastos y honorarios de la intervención, así como las penas convencionales y sanciones en las que, en su caso, hubieren incurrido.

No obstante lo anterior, si transcurrido el plazo de la intervención el desarrollador no está en condiciones de continuar con sus obligaciones, la contratante procederá a la rescisión del contrato, lo que constituirá una causa de terminación por ministerio de ley, de las autorizaciones otorgadas para cualquiera de las etapas del proyecto.

**SECCIÓN TERCERA**

**DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

El proyecto de ley, impone la obligación a las entidades públicas de conservar en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica, comprobatoria de los actos y contratos relacionados con asociaciones público privadas, cuando menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de terminación del contrato; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables y también la de remitir a la Secretaría de Infraestructura, la información del contrato que suscriban la convocante y el desarrollador, copia de cada contrato celebrado, sus anexos y convenios modificatorios.

**SECCIÓN CUARTA**

**DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

Esta sección establece que los pagos que realicen las entidades públicas como contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato se registrarán **como gasto corriente**, los que incluirán, en su caso, cualquier erogación accesoria derivada de actos jurídicos o de administración que se requieran para la realización del proyecto y que pueda considerarse como gasto corriente, conforme a las disposiciones aplicables. Estas obligaciones no constituirán deuda pública.

Salvo lo que para el caso se indique en la presente ley, las entidades públicas no deberán realizar pago alguno al desarrollador antes de recibir los servicios objeto del contrato, salvo que de manera excepcional la Secretaría autorice pagos anticipados cuyos términos y condiciones, en su caso, deberán establecerse en el contrato respectivo.

La iniciativa establece la obligación a las entidades públicas de incluir en el proyecto de sus presupuestos anuales las cantidades que deban pagar al amparo de los contratos durante el año presupuestal correspondiente. Asimismo, deberán señalar en los anexos de los presupuestos, el monto aproximado a pagarse por concepto de valor de terminación en caso de una terminación anticipada por incumplimiento de las entidades públicas, fuerza mayor u otras causas, en caso de que el contrato lo contemple y tal contingencia llegara a realizarse.

Asimismola Secretaría de Finanzas deberá incluir en la Iniciativa del Presupuesto de Egresos para cada año presupuestal un informe sobre los contratos celebrados por las entidades estatales y la información a que se refiere el artículo anterior.

Aunado a lo anterior esta secretaría deberá presentar al Congreso como un apartado especial de su cuenta pública, un informe sobre la situación que guardan los proyectos celebrados y licitados por las entidades estatales y el avance de los proyectos correspondientes durante dicho trimestre.

En el caso de los municipios la Tesorería Municipal de cada ayuntamiento tendrá que incluir en el proceso presupuestal ante el ayuntamiento la información a que se refieren los dos párrafos anteriores.

Una previsión a destacar en el proyecto normativo, es aquella en la que se establece que las entidades públicas considerarán preferentes las obligaciones derivadas de las asociaciones público privadas, por lo cual al elaborar su anteproyecto de presupuesto de egresos deberán contemplar en primer término, tales conceptos de gasto.

La Secretaría deberá enviar al Congreso dentro de los treinta días siguientes al término de cada trimestre calendario, un informe sobre la situación que guardan los proyectos celebrados por las entidades estatales y el avance de ejecución de los proyectos correspondientes durante dicho trimestre.

Al igual que en el caso de entidades Estatales, el Tesorero Municipal de cada ayuntamiento deberá incluir en la iniciativa del Presupuesto de Egresos del municipio para cada año presupuestal las cantidades máximas que deban pagar las entidades municipales al amparo de los contratos durante el ejercicio correspondiente. Asimismo, deberán señalar en los anexos, el monto aproximado a pagarse por concepto de valor de terminación anticipada.

El ayuntamiento deberá aprobar en los términos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, los compromisos plurianuales que deriven de los contratos en cada uno de los presupuestos anuales.

El Tesorero Municipal enviará al órgano de control, dentro de los treinta días siguientes al término de cada trimestre calendario, un informe sobre la situación que guardan los contratos celebrados por las entidades municipales y el avance de ejecución de los proyectos correspondientes durante dicho trimestre.

**CAPÍTULO NOVENO**

**DE LAS INCONFORMIDADES, SANCIONES Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LAS INCONFORMIDADES**

La iniciativa de nueva ley prevé que los concursantes podrán inconformarse por escrito ante el órgano de control, contra los actos que se lleven a cabo en cualquier etapa o fase del procedimiento o contra el fallo del concurso, cuando èstos contravengan las condiciones definidas por la convocatoria, y/o las bases y/o la Ley.

A falta de disposición expresa en el presente capítulo, será aplicable de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Las referidas inconformidades deberán presentarse dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste, deberán presentarse por escrito y bajo protesta de decir verdad, debiéndose acreditar la personalidad de quien promueve el escrito, indicar los hechos que le dan motivo, los agravios que se le causan, acompañándose las pruebas documentales y ofreciendo las demás que acrediten su pretensión

Se observa que esta sección establece las reglas bajo las cuales habrán de presentarse estas inconformidades.

Asimismo se dispone que el promovente podrá solicitar en su escrito de inconformidad, la suspensión del procedimiento de adjudicación y corresponderá

al órgano de control resolver sobre la misma, tomando en cuenta que con ésta no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

A efecto de que la suspensión proceda, el inconforme deberá garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el órgano de control en los términos del Reglamento de esta Ley.

Por lo que hace a la substanciación del procedimiento, la iniciativa fija que estará a cargo del órgano de control, quien resolverá en un plazo que no excederá de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación.

En la substanciación del procedimiento, el órgano de control deberá otorgar la participación a los terceros interesados que puedan ser afectados con motivo de la resolución, aunado a lo anterior se prevé que el órgano de control podrá iniciar las investigaciones correspondientes en los procedimientos de adjudicación cuando sea necesario para proteger el interés del Estado.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DE LAS SANCIONES**

El proyecto de ley regula lo concerniente a las sanciones a las que serán acreedores los concursantes o desarrolladores que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, las infracciones a las disposiciones de esta Ley, no previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas serán sancionadas por el Órgano de Control, con multa de cien a veinte mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en la fecha de la infracción.

En este contexto se establece que los concursantes o desarrolladores, serán sancionados por el Órgano de Control, con multa de cien a veinte mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en la fecha de la infracción e inhabilitación temporal para participar en procedimientos de adjudicación o celebrar contratos regulados por esta Ley, cuando se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

* Los concursantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen el contrato adjudicado por la convocante; y
* Los Desarrolladores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la entidad pública de que se trate.

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el órgano de control lo haga del conocimiento de las entidades públicas.

Esta sección también fija las reglas a las que se ajustará la sustanciación del procedimiento administrativo para imponer las sanciones, entre las cuales destacan las siguientes:

* Se notificará a la persona presunta infractora los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro del término que para tal efecto se señale, que no podrá ser menor de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;
* Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se procederá al desahogo de la pruebas y alegatos, hecho lo anterior y dentro de los quince días hábiles siguientes se emitirá resolución considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y
* La resolución será debidamente fundada y motivada, así mismo se notificará por escrito en un plazo que no exceda de diez días hábiles.

En similar sentido, el proyecto señala los elementos que deberá considerar el órgano de control para la imposición de las sanciones, así se tomarán en cuenta los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse; el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción; a gravedad de la infracción; y las condiciones del infractor.

La iniciativa establece queen contra de las resoluciones que dicte el órgano de control, el interesado podrá interponer ante la misma, recurso de revisión dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación y contiene las nomas a las que habrá de sujetarse dicho recurso, señalando que éste deberá interponerse mediante escrito debidamente firmado en el que se expresarán nombre, razón o denominación social, domicilio y los agravios que el acto impugnado le cause; se acompañará del el documento en que se acredite la personalidad, anexando copia de la resolución impugnada y la constancia de la notificación de ésta última, excepto si la notificación se hizo por correo, por último se señala que éste recurso será resuelto dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir de su admisión.

***Por último se dispone que*** las responsabilidades a que se refiere la Ley, serán independientes de las de orden administrativo, civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

**SECCIÓN TERCERA**

**DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE**

Finalmente el proyecto termina con una disposición relativa a fijar la competencia y jurisdicción de los tribunales del Estado de Coahuila, para aquellas controversias que se s susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley. Y con otro artículo que establece la obligación de que las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución de los contratos celebrados con base en esta Ley, puedan ser resueltas mediante arbitraje u otro medio alternativo de resolución de conflictos según establezca el contrato correspondiente y, en caso de no llegar a ningún acuerdo, por los tribunales del Estado.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en los supuestos de rescisión o terminación anticipada del contrato, el procedimiento de arbitraje o medios alternativos de resolución de conflictos señalados anteriormente no serán aplicables.

Una vez agotado el estudio del contenido y alcances de la iniciativa, los integrantes de esta comisión dictaminadora coincidimos con quien suscribe en que los esquemas que permiten la participación privada en el desarrollo de infraestructura y provisión de servicios son un fenómeno que se ha extendido mundialmente.

Los esquemas que permiten la participación privada en el desarrollo de infraestructura y provisión de servicios son un fenómeno que se ha extendido mundialmente.

La experiencia internacional, sobre todo europea del uso de estos esquemas en los sectores de carreteras y agua demuestran, una aceptación creciente de estos arreglos como mecanismos complementarios o alternativos a las necesidades públicas de infraestructura y servicios. En América Latina y el Caribe la adopción de este tipo de esquemas es más reciente sin embargo países como Brasil, Chile, Perú y Colombia han utilizado estos esquemas de manera muy provechosa.

La creciente utilización de estos esquemas, se debe a que los mismos, ofrecen resultados en importantes ámbitos como lo son:

La aceleración de la Provisión de Infraestructura. Ya que ofrecen la posibilidad de traducir un pago anticipado de capital en un flujo constante de fondos por servicios requeridos, lo cual se traduce en que los proyectos proceden aún cuando la disponibilidad de capital público sea restringida.

Una implementación Acelerada. Al adjudicar al particular la responsabilidad de diseñar y construir el proyecto, además el flujo de pagos provee un incentivo en el privado de entregar los proyectos en periodos de tiempo más cortos.

Una reducción en los costos de vida total del proyecto. Ya que el inversionista privado tienen un fuerte incentivo en disminuir costos.

Una Mejor Adjudicación del riesgo. Distribuyéndosele a quien mejor lo pueda manejar, ya sea la entidad pública o el inversionista.

Se mejoran incentivos para el desempeño, pues la adjudicación del riesgo al inversionista privado lo incentiva para mejorar su administración y desempeño del proyecto.

Se mejora la calidad y el precio del servicio, como resultado de una mejor integración de los servicios a través del uso de los activos, mejor aprovechamiento de las economías a escala, la introducción de innovación en la entrega del servicio, incentivos o sanciones que se incluyen en los contratos de los proyectos.

Se generan ganancias adicionales. Para terceros cuando el sector privado, al reducir los costos de los servicios, los subcontrata por ser más eficiente, o, cuando el inversionista privado hace uso de su capacidad disponible.

Se mejora la gestión Pública. A través de transferir la responsabilidad de la provisión del servicio público a quién puede ofrecerlo de manera más eficiente. Además al exponer la provisión del servicio público a la competencia, permite que el costo del servicio se compare con estándares del mercado, lo que asegura que se alcanza la mejor calidad y precio.

Expertos académicos en el tema como Bracy & Moldovan, Medayle, y Sanger & Crawley aseguran que, si bien es cierto los beneficios de estos esquemas son muchos, es preciso cuidar algunos aspectos a fin de que los mismos sean exitosos, como lo son el asegurar el control por parte de la entidad pública de activos públicos valiosos, supervisión pública, participación ciudadana durante el proceso de desarrollo de los proyectos, la existencia de mecanismos de rendición de cuentas, asegurar que los proyectos cuenten con la rentabilidad social requerida, buscar una correcta distribución de riesgos y la existencia de mecanismos de solución de controversias eficientes.

En este mismo sentido la Organización para la cooperación y el Desarrollo (OCDE) ha establecido que para que este tipo de esquemas sean exitosos deben garantizarse una serie de condiciones esenciales.

Primeramente se requiere de un marco normativo e institucional específico y sólido, con procedimientos y proceso que produzcan proyectos con la mayor relación calidad-precio.

Además este marco requiere ser adoptado y aplicado a través de un enfoque de arriba hacia abajo en donde los tomadores de decisiones del más alto nivel gubernamental conozcan los proyectos, sus objetivos, costos, beneficios y retos.

Otro elemento fundamental que debe estar considerado en el marco normativo e institucional consiste en establecer en el mismo las especificaciones que deberán contener los contratos, entre las cuales deben contemplarse la clasificación medición y asignación del riesgo al que mejor lo pueda manejar.

Una vez que se cuenta con este marco normativo e institucional y que este cumple con las características descritas anteriormente, se debe asegurar que del mismo fluya un marco organizacional con roles claros y capacidades específicas para contratar y mantener un proyecto de esta naturaleza.

Debe haber una autoridad encargada de asegurarse de que los proyectos que sean una prioridad estatal.

También debe existir una autoridad encargada de evaluar el proyecto a profundidad y una autoridad contratante responsable de implementar directamente los proyectos en los sectores específicos.

Adicionalmente, debe garantizarse la existencia de una autoridad auditora, que evalué de manera ex post los proyectos.

Para la OCDE tanto el marco normativo e institucional al que nos referimos, como los contratos de los proyectos deben ser claros, transparentes, predecibles y no crear barreras a la entrada de mercados. El acceso a la información y procesos de decisión entorno a estos proyectos deben ser abiertos al público en general. Debe proveerse un ambiente regulatorio con una alta integridad de acuerdo a las características previamente señaladas.

Lo anterior íntimamente relacionado con que el gobierno tenga prácticas sanas, de contabilidad y presupuesto para plasmar la factibilidad económica de los proyectos, o lo que se traduce en que los mismos sean contemplados en el gasto gubernamental de los años fiscales que dure el proyecto.

Por último la OCDE considera que estos proyectos deben generar y mantener competencia en los mercados e introducir nuevos competidores.

Por lo que hace a nuestro País, el gobierno federal al igual que algunos gobiernos estatales desde hace más de una década han adoptado algunos de estos esquemas.

A nivel federal los proyectos que permitían algún tipo de asociación público- privada se iniciaron en el marco de importantes reformas de liberalización y privatización en los mercados mexicanos.

En este contexto a mediados de los noventas se dieron los primeros cambios institucionales mediante la modificación de leyes para producir bienes públicos y la construcción de infraestructura, a través de esquemas conocidos como PIDIREGAS.

Los PIDIREGAS permitían que inversionistas privados, con fondos de inversión privada construyera y transfiriera obra pública al gobierno, quien a su vez se comprometía a cubrir el costo de esta inversión por medio de la generación de ingresos derivados de la operación de dicha infraestructura y realizando pagos diferidos en un plazo largo, de conformidad a lo pactado en un contrato. El marco institucional de estos proyectos sólo permitía su realización en los sectores estratégicos planeados conforme a los artículos 25 y 28 de la Constitución Federal.

En menos de una década posterior a la creación de los PIDIREGAS, el marco normativo e institucional evolucionó de nuevo para emitir la participación privada no solo en la construcción de infraestructura, sino también en su diseño, operación, mantenimiento y financiamiento para la prestación de servicios públicos. Con ello se permitió este tipo de participación en sectores como el de salud, educación y el carretero.

La modificación al marco institucional que permitió lo anterior consistió en la publicación de reglas para desarrollar lo que desde entonces se conoce como Proyectos para la Prestación de Servicios, publicadas en el Diario Oficial el 9 de enero de 2004. Dichas normas preveían que el esquema no solo estuviera a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino también de la Secretaría de la Función Pública, ésta última encargada de vigilar los procesos de las compras públicas con recursos de la federación.

De acuerdo a un estudio del Programa para el Impulso de Asociaciones Público Privadas en Estados Mexicanos, del Banco Interamericano de Desarrollo, la implementación de los Proyectos para la Prestación de Servicios en México, significó un rompimiento de paradigmas respecto al desarrollo de infraestructura en Latinoamérica, promoviendo la adecuada planeación, autorización y seguimiento de proyectos, especialmente en el sector de infraestructura social. Así mismo las bondades del esquema han promovido su implementación en el ámbito estatal, mejorando aspectos técnicos y la administración y mitigación de riesgos con base en las lecciones aprendidas del gobierno federal.

Este mismo Programa del Banco Interamericano de Desarrollo ha realizado un trabajo descriptivo y de impacto con el objeto de evaluar la adopción e implementación del esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios concluyendo que han tenido éxito en su adopción, lo que los ha convertido en el principal esquema promovido por los gobiernos estatales. Además en la evaluación se asegura que estos proyectos han generado beneficios económicos superiores a los que se habrían obtenido si los proyectos se hubieran llevado a cabo mediante esquemas tradicionales.

En el año 2012 entró en vigor en nuestro país la Ley de Asociaciones Público- Privadas y con esto México dio un paso importante a nivel federal para proveer de mayor seguridad y certeza jurídica a los inversionistas privados que se asocian con gobierno compartiendo riesgos, en proyectos de infraestructura a largo plazo, se formaliza el esquema para conjuntar recursos privados y estatales con el objeto de generar importantes ahorros a las finanzas públicas, la ley también incluyó un importante componente de transparencia, a través del cual instruye a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a mantener registros públicos de todas las obras y contratos.

En el caso concreto del Estado de Coahuila de Zaragoza, desde el año 2009 se encuentra vigente la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, ordenamiento que si bien es cierto, en su momento constituyó una herramienta jurídica de gran utilidad y beneficio para los coahuilenses, hoy en día ya no es acorde con el nuevo marco legal en materia financiera.

Lo anterior aunado a la necesidad de propiciar condiciones e incentivos que genera inversión en el Estado, hacen, desde la perspectiva de quienes dictaminamos indispensable la emisión de un ordenamiento acorde a las mejores prácticas internacionales.

En virtud de lo anterior….

En virtud de las consideraciones expuestas, es que tenemos a bien poner a consideración de ustedes para su estudio, análisis y en su caso, aprobación el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO ÚNICO:** Se expide la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA**

**CAPÍTULO PRIMERO**

**DISPOSICIONES PRELIMINARES**

***Del objeto de la Ley***

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular las asociaciones público privadas que lleven a cabo las personas de derecho público, a que se refiere el artículo 2 de la Ley.

***De las autoridades sujetas a esta Ley***

Artículo 2. Las disposiciones de la presente Ley son aplicables a las asociaciones público privadas que realicen:

1. Las entidades estatales;
2. Las entidades municipales;
3. Los organismos públicos autónomos, reconocidos en la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza;
4. El Poder Legislativo del Estado de Coahuila de Zaragoza; y
5. El Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Las autoridades señaladas en este artículo, observarán y aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley y su Reglamento.

***De la interpretación de la Ley***

Artículo 3. La interpretación de esta Ley corresponde tanto a la Secretaría de Infraestructura como a la Secretaría, conforme a sus respectivas facultades, y se hará en consistencia con la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

***De la supletoriedad y aplicación de la Ley***

Artículo 4. A falta de disposición expresa en esta Ley, serán aplicables de manera supletoria, siempre que sus disposiciones no se opongan a la naturaleza administrativa de los contratos y procedimientos previstos en este ordenamiento, el Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

No estarán sujetos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, así como a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, sus reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, las obras y servicios que realicen los particulares para cumplir con sus obligaciones en un proyecto de asociación público privada, salvo por el supuesto a que se refieren los artículos 50 y 58 último párrafo, de esta Ley.

***De la intervención de dos o más autoridades***

Artículo 5. Cuando se requiera la intervención de dos o más entidades públicas, cada una de ellas será responsable de los trabajos que le correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus respectivas atribuciones, tenga la encargada de la planeación, formulación, estructuración, contratación, adjudicación y gestión de obtención de autorizaciones en su conjunto, de conformidad al convenio de participación conjunta.

***Glosario***

Artículo 6. Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:

1. Administrador del proyecto: El servidor público designado por la contratante, conforme a lo señalado en el artículo 89 fracción XXI, de la presente Ley;
2. Asociación público privada: Cualquier esquema de contratación celebrada entre un desarrollador y una entidad pública conforme lo establecido en el artículo 8 de la presente Ley;
3. Autorizaciones: Conjuntamente, las autorizaciones para la ejecución de la obra y las autorizaciones para la prestación de los servicios, cuando se trate de proyectos;
4. Autorización presupuestaria: La autorización, que en su caso debe emitir la Secretaría de acuerdo al artículo 40 de la presente Ley;
5. Autorizaciones para la ejecución de la obra: Los permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables, para la ejecución de las obras o el equipamiento de un proyecto;
6. Autorizaciones para la prestación de los servicios: Los permisos, licencias, concesiones y demás autorizaciones que, en su caso, se requieran conforme a las disposiciones aplicables para el uso o explotación de bienes de dominio público o bienes de dominio privado o la prestación de servicios por parte del desarrollador en un proyecto;
7. Comité de Proyectos: El Comité que fungirá como un órgano de análisis y autorización de los proyectos de las entidades públicas, conforme a lo establecido en esta Ley y su Reglamento, según corresponda;
8. Comité Municipal de Proyectos: El Comité que fungirá como un órgano de análisis y autorización de proyectos, de competencia municipal, conforme a lo establecido en esta Ley;
9. Concursante: La persona o grupo de personas que participan en un procedimiento que tenga por objeto la adjudicación de un contrato;
10. Concurso: El procedimiento de adjudicación a que se refiere la sección segunda del capítulo sexto de la presente Ley;
11. Congreso: El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza;
12. Contratante: Una o varias de las entidades públicas que celebran un contrato con el desarrollador, conforme a la presente Ley;
13. Contrato: El acuerdo de voluntades celebrado entre la contratante y el desarrollador para la realización de un proyecto;
14. Convenio de participación conjunta: Es el documento que suscribirán dos o más entidades públicas para la realización de un proyecto de manera vinculada, conforme al artículo 12 de esta Ley;
15. Convocante: Una o varias de las entidades públicas, que llevan a cabo un procedimiento de adjudicación previsto en esta Ley;
16. COPLADEC: El Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza;
17. Desarrollador: Sociedad mercantil mexicana, con objeto exclusivo de desarrollar un determinado proyecto de asociación público privada, y con quien la contratante celebre el contrato respectivo;
18. Dictamen de viabilidad: Dictamen emitido por el Comité de Proyectos, el Comité Municipal de Proyectos o la entidad pública que corresponda conforme a lo señalado en el artículo 46 de esta Ley;
19. Entidades estatales: El Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y cualquier dependencia u órgano desconcentrado de la administración pública centralizada; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos, de conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza y en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza;
20. Entidades municipales: Cualquier municipio y sus dependencias, órganos desconcentrados u organismos paramunicipales, de conformidad con lo dispuesto en el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
21. Entidad pública: Cualquiera de las entidades señaladas en el artículo 2 de la presente Ley;
22. Estado: El Estado de Coahuila de Zaragoza;
23. Indicadores de desempeño: El conjunto de especificaciones mínimas que debe cumplir el desarrollador en la prestación de los servicios materia del contrato;
24. Indicadores de gestión: El conjunto de requerimientos específicos para todos los aspectos vinculados con el modelo de gestión del proyecto referido en el contrato incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, parámetros para la operación y calidad de los servicios que se presten;
25. Inversión pública productiva: toda erogación por la cual se genere, directa o indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad específica sea: (i) la construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la adquisición de bienes para la prestación de un servicio público específico, comprendidos de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable;
26. Ley: La presente Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza;
27. Lineamientos financieros: Son los lineamientos a emitirse por parte de la Secretaría, que versarán sobre los requisitos financieros para la integración de los análisis a que se refiere el artículo 46 de esta Ley;
28. Lineamientos técnicos: Son los lineamientos a emitirse por parte de la Secretaría de Infraestructura, que versarán sobre los requisitos técnicos para la integración de los análisis a que se refiere el artículo 46 de esta Ley;
29. Municipios: Los municipios que integran el Estado de Coahuila de Zaragoza;
30. Obligaciones: significa los compromisos de pago a cargo de las entidades públicas derivados de las asociaciones público privadas;
31. Obligaciones contingentes: Las obligaciones de pago a cargo de la contratante y a favor del desarrollador, estipuladas en el contrato que se generan por la ocurrencia de uno o más eventos de riesgo propios del proyecto;
32. Órgano de control: La Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado o las contralorías municipales, según corresponda;
33. Planes y programas estatales: Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza y los programas sectoriales, regionales o especiales;
34. Planes y programas municipales: Plan municipal de desarrollo que corresponda según la entidad municipal de que se trate; programas sectoriales o programas especiales;
35. Procedimiento de adjudicación: procedimientos administrativos por medio de los cuales se adjudica un contrato consistentes en: concurso, adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos tres personas;
36. Proceso de pre-inversión: Se refiere a la fase, en la cual, los entes a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley, estudian, analizan e integran, los expedientes de viabilidad del proyecto, con el objetivo de obtener su validación y aprobación de las autoridades correspondientes conforme a lo establecido en la presente Ley;
37. Promotor: La persona moral mexicana que presenta una propuesta no solicitada;
38. Propuesta no solicitada: El proyecto de asociación público privada que cualquier persona promueva ante una entidad pública, conforme a lo señalado en el artículo 51 y demás relativos de esta Ley;
39. Proyecto: Un proyecto de asociación público privada;
40. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley;
41. Secretaría: La Secretaría de Finanzas; y
42. Secretaría de Infraestructura: La Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.

***De la información y documentos derivados de un proyecto***

Artículo 7. La información y documentos en poder de las entidades públicas, durante cualquier etapa del proceso de ejecución de un proyecto de asociación público privada, será de carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

**CAPÍTULO SEGUNDO**

**DE LOS ESQUEMAS DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

***Definición de asociación público privada***

Artículo 8. Las asociaciones público privadas son aquellos proyectos de mediano y largo plazo que se realizan por cualquier contratación celebrada entre un desarrollador y una entidad pública conforme a los requisitos y procedimientos señalados en la presente Ley, cuando las erogaciones de las obligaciones tengan la finalidad de realizar inversión pública productiva. Adicionalmente, el destino de dichas obligaciones, podrá ser la contratación de servicios, cuyo componente de pago incluya la inversión pública productiva realizada.

***Clases de asociación público privada acorde a la fuente de pago***

Artículo 9. Las asociaciones público privadas, por la fuente de pago al desarrollador, se clasifican, enunciativa más no limitativamente, de la siguiente forma:

I. Aquellas cuya fuente de pago de la contraprestación al desarrollador es a cargo de la contratante y proviene de recursos públicos presupuestarios o por otro tipo de recursos públicos a que tiene derecho la entidad pública que corresponda que no se trate de los recursos generados por el propio proyecto;

II. Aquellas cuya fuente de pago al desarrollador proviene de los pagos efectuados por los usuarios, recursos generados por el propio proyecto o aportaciones de terceros; y

III. Aquellas cuya fuente de pago al desarrollador proviene de una combinación de recursos públicos y pagos efectuados por los usuarios, recursos generados por el propio proyecto o aportaciones de terceros.

**CAPÍTULO TERCERO**

**DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS**

***De las autoridades en materia de asociaciones público privadas***

Artículo 10. Las autoridades en materia de asociaciones público privadas, conforme a lo establecido en esta Ley, serán las siguientes:

1. La entidad pública interesada en la implementación de un proyecto que fungirá como convocante y, en su caso, contratante del mismo;
2. La Secretaría;
3. La Secretaría de Infraestructura;
4. La Tesorería Municipal cuando intervengan los municipios;
5. El COPLADEC;
6. El Congreso;
7. El titular del Poder Ejecutivo del Estado;
8. El titular de la Presidencia Municipal correspondiente, cuando intervengan los municipios;
9. El Comité de Proyectos;
10. El Comité Municipal de Proyectos cuando intervengan entidades municipales;
11. El Ayuntamiento que corresponda al municipio en cuestión;
12. El órgano de control que corresponda;
13. Cualquier otra entidad pública o autoridad que deba emitir alguna autorización para la ejecución del proyecto; y
14. Cualquier otra entidad pública o autoridad que deba formar parte del procedimiento de implementación del proyecto en coordinación con alguna de las señaladas en las fracciones anteriores de este artículo, según sea requerida por el Comité de Proyectos o por el Comité Municipal de Proyectos.

***De las facultades de las entidades públicas***

Artículo 11. Las entidades públicas interesadas en la implementación de un proyecto tendrán las siguientes facultades:

1. Integrar los análisis a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, en cumplimiento con los lineamientos técnicos y los lineamientos financieros, salvo tratándose de propuestas no solicitadas.

Para la elaboración de los análisis a que se refiere la presente fracción, las entidades estatales, podrán solicitar la opinión preliminar de otras entidades públicas o autoridades competentes, de ser necesario;

1. Elaborar el proyecto de iniciativa de decreto a que se refiere el artículo 80 de esta Ley;
2. Elaborar las bases del concurso, los documentos que las integran, así como los demás documentos del proceso que corresponda, incluyendo adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas;
3. Emitir la convocatoria correspondiente para dar inicio al procedimiento de adjudicación que corresponda;
4. Llevar el procedimiento de adjudicación conforme a lo señalado en esta Ley;
5. Emitir el fallo a favor del adjudicatario que corresponda;
6. Celebrar el contrato de asociación público privada con el desarrollador adjudicado;
7. Supervisar la prestación del servicio o construcción de la obra, así como demás obligaciones del desarrollador en la etapa de ejecución del proyecto, por sí mismas o por cuenta de un tercero.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la Secretaría de Infraestructura podrá supervisar la ejecución de la obra en cuestión para el caso de proyectos de entidades estatales, y el órgano de control competente, a su vez, cuenta con la facultad de supervisión del proyecto, ya sea que sea en la etapa de ejecución del proyecto o bien durante la operación del servicio conforme a su normatividad aplicable; y

1. Las demás que le correspondan conforme a lo establecido en la presente Ley y en la demás legislación aplicable.

***De los convenios entre las entidades públicas***

Artículo 12. En el supuesto de que dos o más entidades públicas pretendan llevar a cabo un proyecto en conjunto, deberán celebrar el convenio de participación conjunta, conforme a las especificaciones del Reglamento de esta Ley, donde establezcan las funciones que realizará cada una de ellas, los análisis que deban realizar cada una de ellas, así como las obligaciones a las que se sujetan, los trabajos que realizarán cada una de ellas, los bienes o aportaciones financieras que realizarán, así como las funciones de cada una de ellas en relación al proyecto a ejecutar, así como las demás especificaciones necesarias para la realización del proyecto, debiendo nombrar un representante común quien se dirigirá a las demás autoridades para la validación, autorización y aprobación del proyecto.

***De las facultades de la Secretaría y de la Tesorería Municipal***

Artículo 13. La Secretaría y la Tesorería Municipal tendrán las facultades siguientes:

1. Revisar y, en su caso, validar que los análisis a que hace referencia el artículo 46 de esta Ley fueron debidamente realizados, en cumplimiento a los lineamientos financieros, por parte de la entidad pública interesada que corresponda, o el promotor que corresponda tratándose de una propuesta no solicitada enviada a una entidad pública.

Para el análisis a que se refiere la presente fracción la Secretaría y la Tesorería Municipal podrán solicitar la opinión preliminar de otras entidades públicas o autoridades competentes, en caso de resultar conveniente o necesario;

1. Participar, con voz y voto, en las decisiones que tome el Comité de Proyectos o el Comité Municipal de Proyectos, según corresponda;
2. Analizar y, en su caso, confirmar que el proyecto sea celebrado en las mejores condiciones de mercado;
3. La Secretaría, o en su caso la Tesorería Municipal, emitirá la autorización presupuestaria, conforme al artículo 40 de esta Ley, y gestionará la autorización y los parámetros para el cálculo de obligaciones y obligaciones contingentes y para el cálculo del monto máximo anual del gasto programable para proyectos, conforme a lo señalado en los artículos 40, 42, 43 y demás relativos de esta Ley.

La Secretaría emitirá la autorización correspondiente a las entidades públicas que pretendan la afectación de activos por parte del Estado como garantía o fuente de pago del proyecto, para que puedan continuar con el proceso de asociaciones público privadas correspondiente, una vez que se le remita el expediente respectivo conforme al artículo 47 de esta Ley.

Tratándose de entidades públicas municipales, el Ayuntamiento correspondiente será el órgano competente para emitir la autorización referida en el párrafo anterior, conforme al artículo 47 de esta Ley; y

1. Las demás que le correspondan conforme a lo establecido en la presente Ley y en la demás legislación aplicable.

***De las facultades de la Secretaría de Infraestructura y de la autoridad equivalente***

Artículo 14. La Secretaría de Infraestructura o su equivalente a nivel municipal, tendrá las facultades que se indican a continuación:

1. Revisar y, en su caso, validar que los análisis a que hace referencia el artículo 46 de esta Ley fueron debidamente integrados y realizados, en cumplimiento a los lineamientos técnicos, por parte de la entidad pública interesada, o el promotor que corresponda, tratándose de una propuesta no solicitada enviada a una entidad pública.

Para el análisis a que se refiere la presente fracción la Secretaría podrá solicitar una opinión preliminar de otras entidades públicas o autoridades competentes, de ser necesario;

1. Participar, con voz y voto, en las decisiones que tome el Comité de Proyectos o el Comité Municipal de Proyectos, según corresponda, conforme a lo establecido en la presente Ley;
2. Supervisar la construcción de la obra en cuestión en la etapa de ejecución del proyecto;
3. Recibir, por medio de la subsecretaría, dirección o departamento que corresponda, el expediente que contenga los análisis a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, para que el Comité de Proyectos o el Comité Municipal de Proyectos emita, en su caso, el dictamen de viabilidad; y
4. Las demás que le correspondan conforme a lo establecido en la presente Ley y en la demás legislación aplicable.

***De la función del COPLADEC***

Artículo 15. Las entidades públicas interesadas en llevar a cabo un proyecto, podrán solicitar al COPLADEC, como órgano de apoyo, la validación de la consistencia de cada proyecto con los planes y programas estatales y municipales según corresponda.

El COPLADEC podrá auxiliarse para tal encomienda en los comités u órganos a que hace referencia la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

***De la función del Congreso***

Artículo 16. En el proceso de asociaciones público privadas a que se refiere esta Ley, el Congreso será el encargado de realizar el análisis de capacidad de pago de la entidad pública interesada en implementar el proyecto, así como del otorgamiento de recursos, como fuente o garantía de pago, y demás elementos señalados en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en la legislación que resulte aplicable y, en su caso, emitir la autorización correspondiente. No obstante lo anterior, la Secretaría tendrá la facultad de coadyuvar con el Congreso en el análisis a que se refiere el presente artículo.

***De la función del titular del Poder Ejecutivo***

Artículo 17. El titular del Poder Ejecutivo del Estado o el Presidente Municipal correspondiente, se encargará de recibir el anteproyecto de iniciativa de decreto por parte de la entidad pública interesada en implementar el proyecto, según corresponda conforme al artículo 82 de esta Ley, así como de turnarla al Congreso para su análisis y, en su caso, autorización.

Las entidades municipales requerirán de la previa aprobación del ayuntamiento por dos terceras partes de sus miembros para la implementación de cualquier proyecto de asociación público privada.

***De las facultades del Comité de Proyectos y del Comité Municipal de Proyectos***

Artículo 18. Tanto el Comité de Proyectos como el Comité Municipal de Proyectos, como órganos de análisis y autorización de proyectos, contarán con las siguientes facultades:

1. Analizar y, en su caso, autorizar la integración de los análisis a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, que le remitan las entidades públicas que correspondan conforme a la presente Ley y emitir, en su caso, el dictamen de viabilidad.

Para la emisión del dictamen de viabilidad se podrá requerir la opinión de otras entidades públicas o autoridades competentes, en caso de resultar conveniente o necesario;

1. Analizar y, en su caso, autorizar el tipo de procedimiento de adjudicación a seguirse y las bases del concurso, así como los documentos que las integran elaborados por las entidades públicas que correspondan; y
2. Las demás facultades señaladas en la presente Ley, así como en la demás legislación aplicable.

***De las facultades del órgano de control***

Artículo 19. El órgano de control que corresponda, contará con las siguientes facultades:

1. Se pronunciará en el respectivo Comité, con voz pero sin voto, respecto de la congruencia del procedimiento con el presupuesto de egresos o el presupuesto municipal de egresos según corresponda; el cumplimiento de las disposiciones en materia de planeación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda y patrimonio;
2. Vigilar el apego a las políticas de contratación en las mejores condiciones de mercado conforme a los principios de eficiencia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez, según se indique en los lineamientos técnicos y los lineamientos financieros así como en la demás normatividad aplicable, y para llevar a cabo cualquier acto o función que se indique en la presente Ley y en la demás normativa aplicable;
3. Supervisar el cumplimiento de los contratos en la etapa de ejecución de los proyectos;
4. Acudir al fallo del procedimiento de concurso o excepción a concurso;
5. Recibir, conducir y resolver las inconformidades por parte de los concursantes a que se refiere el artículo 186 de esta Ley;
6. Imponer las sanciones a que se refiere el artículo 191 de esta Ley; y
7. Las demás que determine esta ley y otras disposiciones legales y administrativas aplicables.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DEL COMITÉ DE PROYECTOS**

***De la naturaleza del Comité de Proyectos***

Artículo 20. El Comité de Proyectos es un órgano colegiado de análisis y autorización respecto de los proyectos de las entidades estatales.

***De la integración del Comité de Proyectos***

Artículo 21. El Comité de Proyectos se integrará por:

1. El titular de la Secretaría de Infraestructura, quien fungirá como Presidente;
2. El titular de la Secretaría, quien fungirá como vocal;
3. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, quien fungirá como vocal;
4. El titular de la Secretaría de Economía, quien fungirá como vocal;
5. El funcionario designado por el Presidente que fungirá como Secretario Técnico, el cual deberá contar con un rango jerárquico mínimo de director general dentro de la Secretaría de Infraestructura; y

1. El titular de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, quien tendrá voz pero no voto en las decisiones del Comité de Proyectos.

***Del nombramiento de suplentes***

Artículo 22. Por cada integrante del Comité de Proyectos habrá un suplente. Los cargos en el Comité de Proyectos, en su caso, son honoríficos y no percibirán remuneración alguna.

***De las facultades del Comité de Proyectos***

Artículo 23. Además de las facultades del artículo 18 de esta Ley, el Comité de Proyectos contará con las siguientes facultades:

1. Acordar el establecimiento de subcomités especiales, así como de grupos de trabajo, los cuales actuarán como sus instancias auxiliares, incluyendo sin limitar la participación de la ciudadanía que se invite a cada proyecto;
2. Promover la participación e inversión en los proyectos que desarrolle el Estado o los municipios; y
3. Cualesquier otra facultad relacionada a las distintas etapas de implementación de proyectos de asociaciones público privada conforme a lo señalado en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

***De las decisiones emanadas del Comité de Proyectos***

Artículo 24. Las resoluciones y acuerdos del Comité de Proyectos, serán decididas por mayoría simple.

***De la consulta externa***

Artículo 25. El Comité de Proyectos, podrá consultar a entidades estatales, entidades municipales, dependencias o entidades federales o cualquier otra entidad pública que estime conveniente para la toma de decisiones, o acordar el establecimiento de subcomités especiales o grupos de trabajo que actúen como instancias auxiliares del Comité de Proyectos.

***De la consulta de especialistas***

Artículo 26. El Comité de Proyectos podrá requerir a personas especialistas de reconocida experiencia y honorabilidad, de los sectores privado, académico y social, que colaboren, con voz pero sin voto, con dicho comité respecto de cualquier aspecto que se les consulte, de conformidad con lo establecido en el Reglamento.

***De la sesión del Comité de Proyectos***

Artículo 27. El Comité de Proyectos sesionará previa convocatoria de su Secretario Técnico, y para que tales sesiones sean válidas se requerirá la presencia de cuando menos la mitad más uno de sus miembros, o suplentes.

***De los acuerdos***

Artículo 28. Los acuerdos tomados en el Comité de Proyectos deberán hacerse, en su caso, del conocimiento de los titulares de las dependencias, organismos y entidades públicas para que procedan a su cumplimiento.

**SECCIÓN TERCERA**

**DEL COMITÉ MUNICIPAL DE PROYECTOS**

***De la naturaleza del Comité Municipal de Proyectos***

Artículo 29. El Comité Municipal de Proyectos es órgano de análisis y autorización de cada municipio respecto de los proyectos de las entidades municipales.

***De la conformación del Comité Municipal de Proyectos***

Artículo 30. El Comité Municipal de Proyectos se conformará por:

I. El Presidente Municipal, quien fungirá como Presidente;

II. La autoridad municipal equivalente a la Secretaría de Infraestructura, que fungirá como Secretario Técnico;

III. La Tesorería Municipal o su equivalente, que fungirá como vocal;

1. El Síndico que sea designado por el Presidente Municipal, que fungirá como vocal;
2. La autoridad municipal equivalente a la Secretaría de Economía, que fungirá como vocal; y
3. El titular de la Contraloría Municipal, con voz pero sin voto.

***De la suplencia de los integrantes del Comité Municipal de Proyectos***

Artículo 31. Por cada integrante del Comité Municipal de Proyectos habrá un suplente. Los cargos en el Comité Municipal de Proyectos, en su caso, son honoríficos y no percibirán remuneración alguna en virtud de los mismos.

***De las facultades del Comité Municipal de Proyectos***

Artículo 32. Además de las facultades del artículo 18 de esta Ley, el Comité Municipal de Proyectos contará con las siguientes facultades:

1. Acordar el establecimiento de subcomités especiales, así como de grupos de trabajo, los cuales actuarán como sus instancias auxiliares, incluyendo sin limitar la participación de la ciudadanía que se invite a cada proyecto; y
2. Cualesquier otra facultad relacionada a las distintas etapas de implementación de proyectos de asociaciones público privada conforme a lo señalado en la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

***De la toma de decisión del Comité Municipal de Proyectos***

Artículo 33. Las resoluciones y acuerdos del Comité Municipal de Proyectos, serán decididas por mayoría simple.

***De la invitación de especialistas***

Artículo 34. Cada Comité Municipal de Proyectos podrá invitar, a las sesiones, a personas especialistas de reconocida experiencia y honorabilidad de los sectores privado, académico y social, con el objeto de que colaboren con el referido comité en cualquier consulta que considere pertinente respecto del proyecto en cuestión, con voz pero sin voto.

El Comité Municipal de Proyectos, a su vez, podrá solicitar la opinión de otras entidades públicas o comités de planeación, según resulte necesario o conveniente.

***De la creación de subcomités o grupos de trabajo***

Artículo 35. El Comité Municipal de Proyectos podrá crear subcomités especiales o grupos de trabajo que actúen como instancias auxiliares para el cumplimiento de sus facultades.

***De la sesión del Comité Municipal de Proyectos***

Artículo 36. El Comité Municipal de Proyectos sesionará previa convocatoria del Secretario Técnico del Comité Municipal de Proyectos y para que éstas sean válidas se requerirá la presencia de cuando menos la mitad más uno de sus miembros, o suplentes.

**CAPÍTULO CUARTO**

**DE LA INTEGRACIÓN DE LOS PROYECTOS**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LOS PROYECTOS**

***De la priorización de los proyectos***

Artículo 37. Las entidades públicas que pretendan llevar a cabo un proyecto de asociación público privada deberán dar prioridad a los que sean consistentes con las necesidades del Estado o con el municipio en cuestión, en consistencia con los planes y programas estatales y municipales respectivamente.

Los proyectos de asociación público privada serán preferentemente integrales, pero, cuando así resulte conveniente por las ventajas objetivas en su implementación, podrán contratarse por etapas.

***De los requisitos de los proyectos que involucren recursos del Presupuesto de Egresos***

Artículo 38. Los proyectos que involucren recursos del Presupuesto de Egresos del Estado o del municipio, deberán contar con lo siguiente:

I. Autorización del dictamen de viabilidad;

II. Registro en la cartera de proyectos a que se refieren los artículos 75 y 76 de esta Ley; y

III. Autorización presupuestaria para asumir obligaciones y obligaciones contingentes.

***De los requisitos de los proyectos que involucren recursos públicos en numerario o especie***

Artículo 39. Los proyectos que involucren recursos públicos estatales o municipales en numerario o en especie, distintos a los previstos en el Presupuesto de Egresos del Estado o del municipio, deberán contar con los requisitos previstos en las fracciones I y II del artículo anterior.

***De la responsabilidad de la Secretaría y la Tesorería Municipal***

Artículo 40. La Secretaría o en su caso la Tesorería Municipal será la autoridad responsable de incluir, en el Presupuesto de Egresos del Estado o del municipio, según corresponda, la autorización presupuestaria incluyendo los proyectos de asociaciones público privadas autorizados conforme a esta Ley.

La autorización presupuestaria incluirá la estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos a que se refiere el presente artículo.

Cuando se pretendan realizar nuevos proyectos, así como cambios sobre el alcance de los ya autorizados, que involucren recursos del Presupuesto de Egresos del Estado o del municipio, serán analizados y, de ser el caso, autorizados durante el ejercicio fiscal de que se trate, por la Secretaría o la Tesorería Municipal, según corresponda, quien deberá ajustarse al monto máximo anual del gasto programable aprobado por el Congreso. Los cambios sobre el alcance de los proyectos de asociaciones público privadas serán especificados dentro de los lineamientos técnicos y financieros.

***Del monto de las obligaciones***

Artículo 41. El monto total de las obligaciones y obligaciones contingentes en los contratos que las entidades públicas celebren, calculado a valor presente, no excederá del monto máximo autorizado por la Secretaría o por la Tesorería Municipal en su caso.

La Secretaría o la Tesorería Municipal, en su caso, autorizará la metodología para el cálculo de las obligaciones y obligaciones contingentes que sean cuantificables, así como el gasto y pasivos que los contratantes pueden asumir en la contratación de proyectos, de conformidad con lo establecido en los lineamientos financieros.

***De la determinación del monto de las obligaciones originadas***

Artículo 42. Para la determinación del monto de las obligaciones que se originen por la celebración de proyectos, se tomarán en cuenta aquellos que se pretendan iniciar en el ejercicio fiscal que corresponda, los que ya hubieran sido iniciados y los que se encuentren en la etapa de ejecución.

La Secretaría y la Tesorería Municipal, conforme a los requerimientos financieros del Estado y del municipio, elaborarán una estimación del monto máximo anual del gasto programable para los proyectos de asociaciones público privadas, con el fin de atender las obligaciones de pago requeridos, tanto de los que se pretendan iniciar durante el siguiente ejercicio fiscal, como de aquéllos ya autorizados.

***De la estimación de los compromisos plurianuales***

Artículo 43. El proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado y de los municipios, de cada ejercicio fiscal, deberá prever los compromisos plurianuales de gasto que deriven de los proyectos de asociación público privada aprobados en ejercicios fiscales anteriores, así como los proyectos que hayan sido aprobados por el Comité de Proyectos o el Comité Municipal de Proyectos o la entidad pública que corresponda, a la fecha de presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado o del municipio, los cuales no podrán exceder la estimación sobre el monto máximo anual del gasto programable propuesto señalado en el Presupuesto de Egresos del Estado.

La información a que se refiere el párrafo anterior deberá considerar, respecto de los proyectos ya celebrados, la descripción de cada uno de los proyectos, montos erogados acumulados conforme a las proyecciones y estimaciones correspondientes, avance en la ejecución y calendario, así como el monto de los pagos anuales comprometidos por la contratante.

***Del informe trimestral de la Secretaría y la Tesorería Municipal***

Artículo 44. El Ejecutivo Estatal y los municipios deberán presentar informes trimestrales al Congreso en los términos previstos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

***Del fondo para análisis y preparación de proyectos***

Artículo 45. El Comité de Proyectos creará un fondo para los análisis y preparación de los proyectos con la partida presupuestal que, en su caso, apruebe el Congreso en el Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio correspondiente, a propuesta del Poder Ejecutivo y que será administrado por la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría conforme a lo que se disponga en el Reglamento y a lo establecido en los lineamientos técnicos y financieros según corresponda.

El fondo a que se refiere el párrafo anterior se podrá capitalizar con los recursos a que se refiere el artículo 100 de esta Ley, según lo autorice la contratante, así como, los rendimientos que generen los recursos financieros que lo integran, las transferencias que cualquier ente público o privado realice a su favor, donaciones o cualquier otro que le autoricen las disposiciones aplicables. Los recursos del fondo, solo se podrán utilizar para financiar análisis de proyectos de asociación público privada.

Los recursos del fondo quedarán sujetos a las disposiciones que se establezcan en el Reglamento, a las autorizaciones correspondientes y regulaciones presupuestales que en su caso sean aplicables.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DE LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS**

***De la viabilidad de los proyectos***

Artículo 46. La viabilidad de los proyectos de asociaciones público privadas será determinada mediante el dictamen de viabilidad que expida el Comité de Proyectos o el Comité Municipal de Proyectos, según corresponda.

En caso de las autoridades establecidas en las fracciones III, IV y V del artículo 2 de esta Ley, la viabilidad del proyecto se expedirá por la autoridad que designen dentro de su propia normativa, salvo que se haya celebrado un convenio de participación conjunta, en cuyo caso se atenderá a lo señalado en tal instrumento.

La autorización a que se refiere el presente artículo se fundará en los análisis que se indican en las siguientes fracciones:

I. La descripción de las obras a implementarse o del servicio materia del proyecto y de la infraestructura o equipamiento asociados que se requieran para la prestación del servicio, incluyendo las obras necesarias para preservar o restituir las condiciones ambientales cuando éstas pudieren resultar afectadas;

II. La viabilidad técnica, de construcción y la normativa técnica aplicable.

El dictamen de viabilidad deberá señalar las especificaciones técnicas y niveles de desempeño de la infraestructura conforme los lineamientos técnicos que emita la Secretaría de Infraestructura;

III. Sólo respecto de los bienes muebles e inmuebles necesarios para el desarrollo del proyecto, un análisis que incluya:

1. La problemática que puedan presentar y factibilidad de su adquisición o afectación al proyecto, así como la estimación sobre el valor de adquisición de los mismos; y
2. Tratándose de bienes inmuebles, la situación jurídica de éstos y la compatibilidad del uso de suelo con el tipo de proyecto que corresponda, con la opinión preliminar de las autoridades competentes;

IV. La lista de las autorizaciones estatales, municipales y en su caso federales, que se requieran para el desarrollo del proyecto, el análisis de requisitos, factibilidad y oportunidad de su obtención;

V. La viabilidad jurídica respecto al cumplimiento del proyecto con la presente Ley, incluyendo el análisis de las autorizaciones requeridas para la implementación del mismo, tomando en consideración las disposiciones aplicables en el ámbito municipal, estatal y federal;

VI. La viabilidad ambiental considerando los análisis preliminares de las autoridades competentes y, en su caso, afectación de zonas protegidas conforme a la legislación vigente;

VII. La viabilidad urbana considerando los análisis preliminares de las autoridades competentes y, en su caso, afectación de asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto, conforme a la legislación vigente;

VIII. El análisis del costo y beneficio del proyecto que muestre que este último es susceptible de generar un beneficio social neto bajo supuestos razonables;

IX. Las estimaciones del monto total de inversión y sus fuentes potenciales de pago y/o garantía;

X. La viabilidad económica y financiera, considerando los plazos de construcción y de prestación del servicio que correspondan;

XI. El análisis de los riesgos transferidos al sector privado y los riesgos retenidos por el Estado;

XII. La opinión de las entidades públicas, autoridades, ciudadanos, comités o subcomités de planeación, entre otros, según corresponda, conforme a lo señalado en la presente Ley y su Reglamento;

XIII. La conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante la modalidad de asociación público privada, en el que se incluya en su caso un análisis comparativo respecto de la opción de no llevarlo a cabo y la opción de hacerlo mediante al menos otra modalidad de contratación pública; y

XIV. Los demás que indiquen, en su caso, los lineamientos técnicos, los lineamientos financieros o el Reglamento de esta Ley.

El dictamen de viabilidad deberá publicarse en CompraNet y en la página de internet oficial de la Secretaría de Infraestructura, y en su caso, del ayuntamiento correspondiente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que haya sido emitido.

***De la integración del expediente y su validación***

Artículo 47. Las entidades estatales que pretendan llevar a cabo un proyecto se sujetarán al siguiente procedimiento:

1. Integrarán el expediente del proyecto, elaborando los análisis a que se refiere el artículo 46 de esta Ley, en cumplimiento con los lineamientos técnicos y los lineamientos financieros, salvo en el caso de propuestas no solicitadas y podrán solicitar la opinión de especialistas ciudadanos de reconocida experiencia y honorabilidad, en los mismos términos señalados en los artículos 23 fracción I, 26, 32 fracción I y demás relativos de esta Ley.

En el supuesto de que los especialistas no se pronuncien respecto del proyecto en cuestión conforme a lo establecido en el párrafo anterior, esto no será impedimento para continuar con el proceso correspondiente conforme a lo aquí señalado;

1. Presentarán a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría y, en su caso, al COPLADEC, el expediente del proyecto con los análisis, a que se refiere la fracción anterior, debidamente realizados para su validación;
2. En caso de que la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría y, en su caso, el COPLADEC validen el expediente, la entidad pública que corresponda turnará al Secretario Técnico del Comité de Proyectos, el documento que contenga el resumen ejecutivo del proyecto para que se presente en el pleno del Comité de Proyectos para su análisis, el documento contendrá por lo menos:
3. Nombre del proyecto;
4. Descripción del proyecto;
5. Nombre de la entidad pública que lo desea realizar, en caso de ser varias entidades públicas, el nombre de cada una de ellas y el nombre de la representante común;
6. Justificar la necesidad del proyecto, motivando y fundamentando su realización, incluyendo el fundamento legal, técnico, ambiental, urbano, financiero entre otros;
7. Monto de inversión y determinación del pago de la contraprestación, determinando un flujo de pagos y la fuente de pago y/o garantía;
8. Listado de autorizaciones y permisos requeridos para la realización y ejecución del proyecto, estableciendo aquellos con los que ya se cuente o haga falta;
9. El análisis costo y beneficio del proyecto;
10. El resultado del análisis de riesgos; e
11. Integrar el documento donde la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría y, en su caso, el COPLADEC validan el expediente presentado ante dichas dependencias u órganos;
12. A solicitud del Comité de Proyectos, la entidad pública deberá presentar:
    1. Los documentos, estudios y análisis realizados para corroborar la información que presente;
    2. Cualquier alcance o información complementaria a la señalada en el inciso a anterior; o
    3. La información a que se refiere la fracción III anterior, debido a que ésta no fue presentada o se presentó de forma incompleta.

La entidad pública remitirá la información a que hace referencia esta fracción en el término que para tales efectos le señale el Comité de Proyectos.

Las entidades municipales realizarán el mismo procedimiento a que se refiere este artículo, presentando el expediente para validación ante la Tesorería Municipal y la autoridad equivalente a la Secretaría de Infraestructura a nivel municipal, debiendo presentar el documento que integra el resumen ejecutivo al Comité Municipal de Proyectos para su autorización.

En el supuesto establecido en el párrafo anterior, la dependencia u órgano equivalente a la Secretaría de Infraestructura a nivel municipal deberá pronunciarse sobre la consistencia de los análisis presentados con los lineamientos técnicos y con el Plan Municipal que corresponda y con los programas que de éste emanen, mientras que la Tesorería Municipal analizará la consistencia del mismo con los lineamientos financieros.

En lo que respecta a las autoridades establecidas en las fracciones III, IV y V del artículo 2 de esta Ley, éstas deberán realizar el proceso que se detalla en este artículo por sí mismos de conformidad a su propia normatividad, designando a las autoridades correspondientes y sus funciones.

Las entidades públicas deberán realizar el procedimiento señalado en el presente artículo ante las autoridades que correspondan de conformidad con lo que indique el convenio de participación conjunta que, en su caso, se haya celebrado.

***De los alcances de los análisis y del dictamen de viabilidad***

Artículo 48. Los lineamientos técnicos, los lineamientos financieros y el Reglamento señalarán el contenido y alcances de los análisis a que se refiere el artículo 46 o cualquier otro estudio o trabajo necesario para la revisión del proyecto en cuestión.

El Comité de Proyectos y el Comité Municipal de Proyectos definirán la viabilidad del proyecto, debiendo fundamentar el motivo por el cual emite la viabilidad o no viabilidad del mismo, en caso de las autoridades establecidas en el artículo 2 fracciones III, IV y V de esta Ley, definirán la viabilidad correspondiente conforme a su propia normatividad.

El dictamen de viabilidad contendrá la declaración de haberse revisado el resumen ejecutivo a que se refiere el artículo 47 fracción III de esta Ley, así como el pronunciamiento sobre la viabilidad del proyecto en cuestión.

***Del registro del proyecto***

Artículo 49. Una vez emitido el dictamen de viabilidad la Secretaría de Infraestructura, procederá a registrar el proyecto en la cartera de proyectos a que se refieren esta Ley y se continuará con las etapas subsecuentes de implementación del mismo.

***De la contratación de los análisis***

Artículo 50. Las entidades públicas, según corresponda, podrán contratar la realización de los análisis previstos en el artículo 46 de esta Ley, así como cualesquiera otros análisis, estudios, trabajos o servicios necesarios para la contratación del proyecto.

La contratación de los análisis de las entidades públicas señalados en el artículo 46 de esta Ley se sujetará a la legislación vigente en el Estado en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, así como, en materia de obras públicas, siempre que les resulte aplicable.

Las entidades públicas podrán optar por celebrar los contratos citados a través de invitación a cuando menos tres personas o mediante adjudicación directa, en adición a los supuestos previstos en la legislación referida en el párrafo anterior.

**SECCIÓN TERCERA**

**DE LAS PROPUESTAS NO SOLICITADAS**

***De las propuestas no solicitadas***

Artículo 51. Las propuestas no solicitadas a que se refiere la presente sección podrán presentarse en los siguientes casos:

1. Cuando el promotor interesado en proponer la realización de un proyecto, presente su propuesta a la entidad pública que corresponda, para su posterior análisis y evaluación, en cuyo caso el promotor podrá solicitar por escrito una manifestación de interés, previo a la presentación de la propuesta no solicitada que corresponda; o
2. Cuando, en términos del artículo 53, la entidad pública respectiva invite directamente a empresas especializadas para que formulen una propuesta sobre un proyecto específico o publique un aviso indicando las características del mismo que desea realizar y del cual está dispuesto a recibir propuestas por parte de las personas interesadas que correspondan.

***De los requisitos de las propuestas no solicitadas***

Artículo 52. Las propuestas no solicitadas, deberán cumplir los requisitos siguientes:

I. Se presentarán por el representante legal de la o las promotoras, acompañadas del acta constitutiva y los poderes correspondientes, en copia certificada;

II. Deberán incluir los análisis que correspondan de acuerdo con los lineamientos técnicos y lineamientos financieros;

III. Podrán considerar recursos públicos o el otorgamiento de garantías, sujeto a la obtención posterior de la autorización del Congreso;

IV. Respecto de las señaladas en el artículo 53 de la Ley, acreditarán que el proyecto se encuentra en los supuestos señalados en el aviso a que se refiere tal artículo, ya sea que haya sido publicado o solicitado directamente;

1. No se trate de aquellas previamente presentadas en los planes y programas estatales y municipales y ya resueltas;
2. El promotor deberá suscribir una declaración unilateral de voluntad irrevocable en la que, en el caso de que se adjudique el contrato, se obligue a:

a. Otorgar sin limitación alguna toda la información relativa al proyecto materia de la propuesta no solicitada que haya sido aprobada, a la entidad pública que ejecute el proyecto; y

b. Ceder los derechos y otorgar las autorizaciones en materia de derechos de autor y propiedad industrial, así como cualquier otro derecho o autorización que se requiera para la ejecución del proyecto, debiendo ceder los mismos a favor de la entidad pública que corresponda, los cuales deberán estar debidamente registrados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y/o de conformidad con cualquier tratado internacional del que México forme parte.

Lo anterior en el entendido que la cesión de derechos y el otorgamiento de autorizaciones en materia de derechos de autor y propiedad industrial deberá permanecer vigente cuando menos por el término que dure el proyecto incluyendo prórrogas, y que en virtud de tal cesión o autorización, el promotor no perderá la titularidad de tales derechos o autorizaciones de forma permanente salvo pacto en contrario entre las partes; y

1. Cualquier otro requisito que la entidad pública indique en el aviso respectivo conforme a lo señalado en el artículo 53 de esta Ley.

***De la invitación a empresas especializadas para la presentación de propuestas no solicitadas***

Artículo 53. En los términos que señale el Reglamento, la entidad pública de que se trate, podrá invitar directamente a empresas especializadas para que formulen una propuesta sobre un proyecto específico; o bien, publicará en su portal de internet y/o en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado las características de los proyectos de asociación público privada que estará dispuesta a recibir como propuestas no solicitadas, señalando en el aviso correspondiente:

I. La necesidad pública a atender;

II. El servicio o bienes materia de la misma;

1. La información con la que cuente la entidad pública sobre la necesidad pública a atender y el servicio o bienes materia de la misma, y la forma de acceder a ella;
2. El mecanismo para lograr eficiencia en la preparación de las propuestas no solicitadas y/o presentación de estudios con el fin de evitar gastos innecesarios a los promotores; y
3. El plazo con el que contarán los promotores para presentar la propuesta correspondiente.

En el supuesto de se emita el dictamen de viabilidad conforme a lo señalado en esta Ley, se llevará a cabo el procedimiento de adjudicación que corresponda. Bajo ninguna circunstancia se entenderá que la emisión del referido dictamen constituye la adjudicación del proyecto.

***De la aceptación de las propuestas no solicitadas***

Artículo 54. La entidad pública facultada deberá revisar que las propuestas no solicitadas cumplan con el artículo 52 de esta Ley, en caso de no cumplir con lo solicitado en dicho artículo, la entidad pública requerirá al promotor, para que en un plazo no mayor a treinta días hábiles subsane la deficiencia de que se trate, el plazo podrá ser prorrogado a juicio de la entidad pública que corresponda.

En caso que el promotor no atienda en tiempo y forma el requerimiento correspondiente, la propuesta no solicitada será desechada, devuelta al promotor y no podrá ser presentada nuevamente. El desechamiento se publicará en la página de internet de la entidad pública que corresponda.

En el supuesto de que una propuesta no solicitada, sea entregada a las entidades públicas no facultadas para su tramitación, será desechada.

***De la conveniencia de llevar a cabo el trámite de una propuesta no solicitada***

Artículo 55. La entidad pública, una vez que se haya tenido conocimiento de la propuesta no solicitada, y que el promotor haya cumplido con los requerimientos exigidos, determinará la conveniencia de solicitar el trámite de autorización respectivo, debiendo en un término no mayor a treinta días hábiles, contados a partir de la presentación de la propuesta o subsanación, informar al promotor la conveniencia o no conveniencia de su tramitación.

***De la validación de las propuestas no solicitadas***

Artículo 56. Una vez aceptada a trámite la propuesta no solicitada, la entidad pública deberá realizar el trámite necesario para la validación y la determinación de la viabilidad de la propuesta no solicitada de conformidad los artículos 46 y 47 de esta Ley, tomando en consideración que la integración del expediente es responsabilidad del promotor.

***De la viabilidad de las propuestas no solicitadas***

Artículo 57. La viabilidad del proyecto presentado mediante una propuesta no solicitada, deberá cumplir los mismos requisitos aplicables a aquellos proyectos presentados directamente por una entidad pública.

***De la aclaración o información adicional de las propuestas no solicitadas***

Artículo 58. Durante el plazo de análisis de las propuestas no solicitadas, se podrá requerir por escrito al promotor de las mismas, aclaraciones, información adicional, o realizar análisis complementarios, por parte de la Secretaría de Infraestructura, de la Secretaría, del Comité de Proyectos, del Comité Municipal de Proyectos o de la entidad pública, estableciendo el plazo en que deberá atender el requerimiento respectivo considerando los límites establecidos en el artículo 54 de esta Ley.

Cualquiera de las secretarías, comités o entidades, a que se refiere el párrafo anterior, podrá autorizar la contratación con terceros para la evaluación de los análisis que sustenten la propuesta no solicitada o la realización de análisis, estudios, trabajos o servicios complementarios que se requieran para llevar a cabo el procedimiento de adjudicación que corresponda.

La contratación de los análisis, estudios, trabajos y servicios a que se refiere este artículo se sujetarán a la legislación en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, y podrá celebrarse a través de invitación a cuando menos tres personas o mediante adjudicación directa, en adición a los supuestos previstos en la legislación referida.

***Del dictamen de viabilidad de la propuesta no solicitada***

Artículo 59. El dictamen de viabilidad de la propuesta no solicitada, además de lo establecido en el artículo 46 de esta Ley, deberá señalar la que corresponda de las siguientes opciones:

1. La procedencia y oportunidad para llevar a cabo el proyecto;
2. Determinar que la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto podrá adquirir los análisis, estudios y trabajos presentados y la titularidad de la propuesta no solicitada, una vez que cuente con las autorizaciones presupuestarias respectivas, lo que constituirá una condición suspensiva, o
3. Declarar que no ha lugar a ejecutar el proyecto, ni a la adquisición de los análisis, estudios y trabajos presentados.

La decisión se notificará al promotor, según se indique en el Reglamento, sin incluir información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables.

***De la información de la propuesta no solicitada***

Artículo 60. Desde el momento de presentación de la propuesta no solicitada y hasta la fecha de la resolución, toda la documentación que la integra y que constituya propiedad del promotor, tendrá el carácter confidencial.

***De la falta de interés del promotor***

Artículo 61. En caso de que, durante la evaluación de la propuesta no solicitada, el promotor no proporcione la información complementaria que se le requiera, en el plazo fijado en el artículo 58 de esta Ley, sin causa justificada, se dará por concluido el trámite y el promotor deberá pagar a la entidad pública que corresponda todos los gastos generados en relación a, la revisión o elaboración de los análisis, estudios y trabajos en cuestión.

***De la información presentada por el promotor***

Artículo 62. Si el proyecto, materia de la propuesta no solicitada, se ejecuta y se realiza el procedimiento de adjudicación, se procederá conforme a lo siguiente:

I. La entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto entregará al promotor un certificado en el que se indicará el nombre del beneficiario, monto, plazo y demás condiciones para el reembolso de los gastos generados por los análisis, estudios y trabajos realizados, para el caso de que no se adjudique el proyecto al promotor.

El reembolso a que se refiere el párrafo anterior será con cargo al adjudicatario del contrato, en los términos que se indiquen en el procedimiento de adjudicación;

1. Contra la entrega del certificado antes señalado, todos los derechos relativos a los análisis, estudios y trabajos presentados y la propuesta no solicitada pasarán al dominio de la entidad pública que ejecutará el proyecto;
2. El inicio del procedimiento de adjudicación lo realizará la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, siempre y cuando se haya cumplido lo señalado en las fracciones I, II y III del presente artículo y en las demás disposiciones aplicables de la presente Ley y su Reglamento. Si el procedimiento de adjudicación no se realiza por causa imputable al promotor, éste perderá en favor del entidad pública según corresponda, todos sus derechos sobre los análisis, estudios y trabajos presentados;
3. Las bases del concurso o de invitación a cuando menos tres personas, establecerán el mecanismo por el cual se evaluará al promotor que presente la propuesta no solicitada; el promotor tendrá un beneficio de hasta un diez por ciento adicional dentro de su evaluación de la propuesta económica, según el Reglamento de esta Ley lo establezca; y
4. En caso de que se declare desierto el procedimiento de adjudicación, y que la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto decida no adquirir los derechos sobre los análisis, estudios y trabajos presentados, se procederá a cancelar el certificado a que se refiere la fracción I del presente artículo y a devolver al promotor los análisis, estudios y trabajos que éste haya presentado, así como la titularidad de los mismos.

Una vez agotados los procedimientos previstos en esta Ley, incluyendo sin limitar la emisión del dictamen de viabilidad y la autorización de los documentos de contratación conforme a los artículos 18 fracción II, 86, 89 y 90 de esta Ley, la convocante decidirá cuándo iniciar al procedimiento de adjudicación que, salvo las excepciones de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, será mediante concurso que se realizará conforme a lo previsto en el capítulo sexto, sección segunda de la presente Ley. La decisión referida en este párrafo será fundada y motivada.

En el supuesto de que el contrato se adjudique vía adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, serán aplicables únicamente las fracciones del presente artículo que correspondan a tales procesos de excepción.

***De la excepción de la adquisición de los análisis, estudios y trabajos realizados por el promotor***

Artículo 63. En el caso previsto en la fracción II del artículo 59 de esta Ley, la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto podrá ofrecer al promotor adquirir los análisis, estudios y trabajos realizados, junto con los derechos de autor y de propiedad industrial correspondientes, mediante reembolso de todo o parte de los costos incurridos. La motivación correspondiente deberá acreditar, de manera expresa, la congruencia de la propuesta no solicitada con el Plan Estatal, y tratándose de proyectos municipales, deberán ser congruentes con el Plan Municipal correspondiente, así como con los programas que de estos derivan y le sean aplicables.

***Del pago por la adquisición de los análisis, estudios y trabajos relativos a la propuesta no solicitada***

Artículo 64. Cuando proceda el pago al promotor por la adquisición de los análisis, estudios y trabajos relativos a la propuesta no solicitada y la titularidad de la misma, éste deberá justificar ante la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, los gastos realizados y su monto. El monto final a reembolsar será determinado por un tercero acordado por ambas partes, contratado específicamente para ello y previo el respectivo estudio de mercado que lleve a cabo dicho tercero.

***De la presentación de dos o más propuestas no solicitadas***

Artículo 65. Cuando se presenten dos o más propuestas para la atención de una misma necesidad que resulten procedentes, el Comité de Proyectos, el Comité Municipal de Proyectos, o las entidades públicas a que se refieren las fracciones III, IV y V del artículo 2 de esta Ley según corresponda, resolverá de manera fundada y motivada, en favor de la que represente mayores beneficios esperados para la población del Estado y, en igualdad de condiciones, en favor de aquella que fue presentada primero en tiempo.

***De la naturaleza de las propuestas no solicitadas***

Artículo 66. La presentación de una propuesta no solicitada, tiene naturaleza de una declaración unilateral de voluntad, que puede ser aceptada o rechazada, y sólo da derecho al promotor a que el Comité de Proyectos, el Comité Municipal de Proyectos o las entidades públicas a que se refieren las fracciones III, IV y V del artículo 2 de esta Ley, según corresponda, la analicen, evalúen y emitan el dictamen que se refiere en el artículo 59 de esta Ley, lo que no representa un acto de autoridad y contra ella no procederá instancia ni medio de defensa o impugnación alguna.

**SECCIÓN CUARTA**

**DE LA VALIDACIÓN DE LOS PROYECTOS**

***De la validación de los proyectos***

Artículo 67. La entidad pública que corresponda, deberá remitir el expediente integrado que contenga los análisis a que se refiere el artículo 46 de esta Ley a la Secretaría de Infraestructura, a la Secretaría y, en su caso, al COPLADEC, conforme a lo señalado en el artículo 47 de esta Ley.

La Secretaría de Infraestructura, atendiendo a los lineamientos técnicos, y la Secretaría, atendiendo a los lineamientos financieros, contarán con quince días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, para validarlo o en su caso dar observaciones a la entidad pública correspondiente respecto de la debida integración del mismo conforme a los análisis respectivos.

Tanto la Secretaría de Infraestructura como la Secretaría deberán expedir, cada una, el oficio que corresponda en donde validen o en su caso observen el expediente que les fue presentado. Los oficios deberán entregarse a la entidad pública que haya presentado el expediente para su validación y deberá contar con los requisitos que se indiquen en el Reglamento, los lineamientos técnicos y los lineamientos financieros.

La Secretaría se pronunciará, además, respecto de la autorización a que se refiere el artículo 13 fracción IV de esta Ley, en su caso.

***De la validación del COPLADEC***

Artículo 68. En el supuesto de que el ente público interesado en llevar a cabo un proyecto solicite al COPLADEC la validación del mismo, dicho órgano, pudiéndose auxiliar de los comités u órganos regulados en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, contará con quince días naturales, contados a partir de la recepción del expediente, para pronunciarse respecto de la consistencia del proyecto con el Plan Estatal o el Plan Municipal que corresponda, así como con los programas que emanen de éstos.

El COPLADEC expedirá el oficio donde valide o en su caso observe el expediente que les fue presentado, el oficio deberá entregarlo a la entidad pública que haya presentado el expediente para su validación.

***De la notificación de la validación del proyecto***

Artículo 69. Una vez que la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría hayan validado la elaboración e integración de los análisis, y que, en caso de haber sido requerido, el COPLADEC se haya pronunciado positivamente a favor del proyecto, dentro de los tres días hábiles posteriores a tales validaciones, estas notificarán de tal situación a la entidad pública interesada, conforme a lo señalado en el Reglamento.

***Del dictamen de viabilidad del Comité de Proyectos***

Artículo 70. La entidad pública, conforme al procedimiento señalado en el Reglamento, remitirá el resumen ejecutivo del proyecto, a que se refiere el artículo 47 fracción III, al Comité de Proyectos a través de su Secretario Técnico para su análisis y, en su caso, emisión del dictamen de viabilidad.

El Comité de Proyectos contará con quince días hábiles para la emisión del dictamen de viabilidad respectivo, el cual se podrá auxiliar de las entidades y personas a las cuales les haya solicitado su opinión de conformidad a esta Ley.

En el supuesto de que el Comité de Proyectos no cuente con la información suficiente para la emisión del dictamen de viabilidad, aún y habiéndola requerido, el referido comité desechará la solicitud y no estará obligado a emitir dictamen alguno.

En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la entidad pública deberá solicitar nuevamente la emisión del dictamen de viabilidad.

***Del procedimiento de las entidades municipales***

Artículo 71. Las entidades municipales para la validación del proyecto deberán realizar lo siguiente:

1. Una vez que la entidad municipal que corresponda cuente con autorización de dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento respectivo, deberá remitir el expediente integrado del proyecto a que se refiere el artículo 47 de esta Ley, a la Tesorería Municipal y a la autoridad equivalente a la Secretaría de Infraestructura a nivel municipal, para su validación;
2. La Tesorería Municipal y la autoridad equivalente a la Secretaría de Infraestructura a nivel municipal, contarán con quince días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, para validarlo conforme a los lineamientos técnicos y financieros y respecto a su consistencia con el Plan Municipal que corresponda y los programas que de éste emanen, o en su caso dar observaciones a la entidad municipal.

Las autoridades señaladas en la presente fracción podrán solicitar la información que considere conveniente a la entidad municipal en cuestión, así como la opinión de otras entidades municipales o comités municipales de planeación conforme a lo que establezca la legislación aplicable;

1. Una vez validado el expediente conforme a la fracción II anterior, la entidad municipal enviará el resumen ejecutivo a que se refiere el artículo 47 fracción III de esta Ley, al Secretario Técnico del Comité Municipal de Proyectos para que, en su caso, éste emita el dictamen de viabilidad.

El Comité Municipal de Proyectos podrá solicitar la información que considere conveniente a la entidad municipal previo a la emisión del dictamen de viabilidad; y

1. En caso de que el Comité Municipal de Proyectos valide el expediente, éste emitirá el dictamen de viabilidad de los análisis y lo notificará a la entidad municipal interesada, conforme a lo que se disponga en el Reglamento, para que implemente las siguientes etapas del proyecto conforme a lo establecido en esta Ley, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión del mismo.

***De los elementos del dictamen de viabilidad***

Artículo 72. El Reglamento de esta Ley señalará los elementos a considerar para la emisión del dictamen de viabilidad, así como los elementos necesarios para la correcta integración del expediente del proyecto que corresponda, en atención a los lineamientos técnicos y a los lineamientos financieros.

**SECCIÓN QUINTA**

**DEL REGISTRO DE PROYECTOS**

***Del registro de proyectos***

Artículo 73. La entidad pública interesada en llevar a cabo un proyecto remitirá el expediente respectivo a la Secretaría de Infraestructura para la integración del registro de cartera de proyectos, conforme al siguiente proceso:

1. Para dar inicio al registro de proyectos, la entidad pública deberá solicitar el registro, en etapa de estudio, ante la Secretaría de Infraestructura el mismo día en que remita el expediente integrado a las autoridades que correspondan según lo señalado en el artículo 47 de esta Ley;
2. La entidad pública deberá solicitar la actualización del registro en etapa de estudio y presentar el dictamen de viabilidad emitido por el Comité de Proyectos o el Comité Municipal de Proyectos según corresponda, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que le fue notificado el dictamen de viabilidad por parte del Comité de Proyectos o del Comité Municipal de Proyectos, o dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que la misma entidad pública emitió tal dictamen;
3. La entidad pública deberá solicitar la actualización del registro, dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación de la autorización del Congreso para la realización del proyecto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;
4. Una vez autorizados los documentos del procedimiento de adjudicación conforme al artículo 86 de esta Ley, La entidad pública deberá solicitar dentro de los diez días hábiles siguientes la actualización del registro, en etapa de proceso de contratación, y presentar el informe donde establezca el procedimiento de adjudicación que realizará;
5. Adjudicado el proyecto, la entidad pública solicitará dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración del contrato, la actualización del registro en etapa de ejecución y remitirá copia del contrato suscrito con el desarrollador; y
6. La entidad pública deberá solicitar la actualización del registro cada vez que se celebre una modificación al contrato, así como respecto de las penas, sanciones o multas que se hayan impuesto al desarrollador, dentro de los diez días hábiles siguientes a la realización o ejecución de los mismos.

La Secretaría de Infraestructura, o la Tesorería Municipal para el caso que se indica en el artículo 74, verificarán la información correspondiente y autorizarán, en su caso, la integración del registro de cartera de proyectos de asociación público privada del Estado de Coahuila de Zaragoza y en el registro municipal, según corresponda.

***Del registro de proyectos a nivel municipal***

Artículo 74. En el supuesto de que la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto sea una entidad municipal, ésta remitirá el expediente tanto a la Secretaría de Infraestructura como a la Tesorería Municipal la cual integrará un registro de cartera en los mismos términos que los señalados en esta Ley.

***De la clasificación del registro de cartera de proyectos***

Artículo 75. El registro de cartera de proyectos incluirá la inscripción de éstos en las distintas etapas del proceso de asociación público privada, dividiéndose en los siguientes rubros:

I. Proyectos en proceso de pre-inversión;

II. Proyectos en proceso de contratación; y

III. Proyectos en etapa de ejecución, ya sea que se trate de construcción de obras o prestación de servicios.

Dentro de esta clasificación deberán identificarse los proyectos que correspondan a propuestas no solicitadas.

***De la publicación del registro de cartera de proyectos***

Artículo 76. La Secretaría de Infraestructura y la Tesorería Municipal abrirán en su portal de internet una sección relativa a los proyectos que integran el registro de la cartera de proyectos de asociación público privada, donde publicarán de manera sistemática, conforme al proceso señalado en el artículo 73, la información siguiente:

I. Nombre del proyecto;

II. Número y tipo del procedimiento de adjudicación;

III. Nombre de la contratante;

IV. Nombre del desarrollador;

V. Plazo del contrato;

VI. Monto total de inversión del proyecto;

VII. Monto de las obligaciones con cargo a recursos públicos presupuestarios durante el ciclo de vida del proyecto;

VIII. Indicadores asociados a la rentabilidad social, financiera y económica del proyecto, en los términos que determine el Reglamento;

IX. Resultado de la evaluación de conveniencia a que se refiere la fracción XIII del artículo 46 de esta Ley;

X. La información consolidada relativa a las obligaciones y obligaciones contingentes cuantificables, y las garantías otorgadas; y

XI. Cualquier otra información que la Secretaría de Infraestructura o la Tesorería Municipal considere relevante.

La información a que se refiere este artículo será de carácter público, a excepción de aquélla de naturaleza reservada o confidencial, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones aplicables.

**SECCIÓN SEXTA**

**DE LA AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO**

***De la autorización del proyecto por parte del Congreso***

Artículo 77. Para la contratación de asociaciones público privadas se requerirá autorización del Congreso, por dos terceras partes de sus miembros presentes.

***De la autorización de las obligaciones de la entidad pública***

Artículo 78. La entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, de acuerdo con su capacidad de pago, podrá asumir obligaciones y obligaciones contingentes, y aportar al proyecto bienes, derechos, capital o cualquier otro bien o recurso que esté legalmente facultada para ello, previa obtención de las autorizaciones y de la autorización del Congreso que correspondan conforme a las disposiciones legales que los rijan. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, no podrá llevar a cabo ninguno de los actos señalados en este artículo, si no están previstos en el contrato.

***De las consideraciones para la autorización del proyecto por parte del Congreso***

Artículo 79. El Congreso, al emitir las autorizaciones legislativas que correspondan, conforme a las disposiciones aplicables, deberá considerar la capacidad de pago de la contratante a cuyo cargo estarían las obligaciones correspondientes, el destino del proyecto de asociación público privada y el otorgamiento de recursos como garantía o fuente de pago de las obligaciones a cargo de la contratante.

***De la iniciativa de decreto***

Artículo 80. En la iniciativa de decreto que la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto elabore, se acompañará la información que permita valorar los aspectos descritos en el artículo anterior, que contenga como mínimo:

I. Una exposición de motivos;

II. El proyecto, acompañado de la información técnica y financiera que corresponda;

III. El techo financiero para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la realización del proyecto, incluyendo obligaciones de pago y garantía;

IV. El techo financiero necesario para hacer frente a las obligaciones de pago que sean contraídas en el contrato durante los ejercicios fiscales en que el mismo se encuentre vigente;

V. Una proyección que demuestre que la entidad contratante tendrá los recursos suficientes para cubrir la contraprestación establecida en el dictamen de viabilidad, un análisis del destino de la obligación y, en su caso, del otorgamiento de recursos como fuente o garantía de pago y sus demás compromisos durante la vigencia del contrato en que se formalice el proyecto;

VI. Una clasificación detallada de las obligaciones que se deriven del proyecto; y

VII. La aprobación del dictamen de viabilidad correspondiente del proyecto de asociación público privada en términos del artículo 46 de esta Ley.

La elaboración de la iniciativa de decreto a que se refiere este artículo, además de cumplir con lo señalado en esta Ley y su Reglamento, deberá dar cumplimiento a lo establecido en los lineamientos técnicos y los lineamientos financieros.

***Del apoyo para la realización de la iniciativa de decreto***

Artículo 81. Para la elaboración de la iniciativa de decreto, la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto podrá solicitar el apoyo y opinión tanto de la Secretaría de Infraestructura como de la Secretaría. Tratándose de entidades municipales, éstas podrán solicitar el apoyo de la Tesorería Municipal y de la entidad equivalente a la Secretaría de Infraestructura a nivel municipal.

La falta de apoyo u opinión por parte de las autoridades señaladas en el párrafo anterior no invalida ni detiene el proceso de realización y presentación de la iniciativa de decreto.

***De la presentación de la iniciativa de decreto***

Artículo 82. Una vez elaborada la iniciativa de decreto por parte de la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, se le turnará al titular del Poder Ejecutivo del Estado o en su caso, al Presidente Municipal, para que a su vez se presente dicha iniciativa ante el Congreso para su aprobación.

Previo a la presentación de la iniciativa por parte del Presidente Municipal correspondiente al Congreso, se deberá contar con acuerdo aprobado por las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento respectivo.

***Del decreto de autorización del proyecto***

Artículo 83. El Congreso, en el decreto que contenga la autorización legislativa correspondiente, deberá incluir, como mínimo, el monto autorizado de las obligaciones a incurrir, el plazo máximo autorizado para el pago, el destino de los recursos, y en su caso, la fuente de pago o la garantía de pago de la obligación de que se trate.

Las autorizaciones a que se refiere el párrafo anterior deberán establecer la vigencia de la autorización, en cuyo caso no podrá exceder del ejercicio fiscal siguiente. De no establecer vigencia, se entenderá que la autorización sólo se podrá ejercer en el ejercicio fiscal en que fue aprobada.

Los requisitos señalados en los dos párrafos previos deberán cumplirse, en lo conducente, para la autorización del Congreso en el otorgamiento de avales o garantías que pretendan otorgar al Estado o los municipios conforme a lo señalado en la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y en la normatividad aplicable.

***De la publicación del decreto de autorización***

Artículo 84. La publicación del decreto de autorización se llevará a cabo por el titular del Poder Ejecutivo del Estado conforme a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza y demás normatividad relativa aplicable.

**SECCIÓN SÉPTIMA**

**DE LA VALIDACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN**

***De la encargada de la realización de los documentos base del procedimiento***

Artículo 85. La entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto será la encargada de elaborar las bases del procedimiento de adjudicación, así como los documentos que forman parte de éstas según se indica en el artículo 125 de esta Ley.

La entidad pública a que se refiere el párrafo anterior elaborará los documentos ahí referidos siempre que cuente con la autorización del proyecto emitida por el Congreso en términos del artículo 83, para su posterior remisión y, en su caso validación, al Comité de Proyectos, al Comité Municipal de Proyectos, o al comité, entidad o autoridad competente, según corresponda.

***De la validación de los documentos base del procedimiento***

Artículo 86. El órgano encargado de validar los documentos del procedimiento de asociación público privada así como el tipo de procedimiento de adjudicación que se llevará a cabo, será el Comité de Proyectos, el Comité Municipal de Proyectos o los órganos internos de las entidades públicas a que se refieren las fracciones III, IV y V del artículo 2 de esta Ley, conforme a lo siguiente:

1. Siempre que la entidad pública que corresponda cuente con el dictamen de viabilidad, se haya registrado el proyecto en el registro respectivo y se cuente con la autorización del Congreso, la entidad pública interesada podrá elaborar los documentos para el procedimiento de adjudicación;
2. La entidad estatal interesada, deberá remitir los documentos del procedimiento de adjudicación correspondiente a que se refiere la fracción anterior al Comité de Proyectos, a través de su Secretario Técnico, para su análisis y, en su caso, autorización;
3. El Comité de Proyectos contará con quince días hábiles para la emisión de la autorización o inclusión de observaciones en los documentos del procedimiento respectivo, el cual se podrá auxiliar de las entidades y personas a que se refiere esta normativa en los artículos 25 y 26.

La etapa del procedimiento de adjudicación a que se refiere la presente fracción se repetirá cuantas veces resulte necesario;

1. El Comité de Proyectos deberá notificar, conforme a lo que se establezca en el Reglamento, a la entidad estatal interesada, a más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes a la emisión de la autorización de los documentos del procedimiento de adjudicación; y
2. Recibida la notificación a que se refiere la fracción anterior, la entidad pública interesada podrá continuar con el procedimiento de adjudicación, conforme a lo establecido en esta Ley.

Las entidades municipales realizarán el mismo procedimiento, presentando los documentos del procedimiento de adjudicación al Comité Municipal de Proyectos a través de su Secretario Técnico, quien deberá contemplar lo establecido en este artículo.

En lo que respecta a las autoridades establecidas en las fracciones III, IV y V del artículo 2 de esta Ley, éstas deberán realizar el proceso que se detalla en este artículo de conformidad a su propia normatividad, llevando por sí mismos dicho proceso y designando a las autoridades correspondientes y sus funciones.

Las entidades públicas podrán realizar el procedimiento de adjudicación señalado en el presente artículo ante las autoridades que correspondan de conformidad con lo que indique el convenio de participación conjunta que, en su caso, se haya celebrado.

El Reglamento considerará los parámetros adicionales para realizar lo establecido dentro de este artículo.

**CAPÍTULO QUINTO**

**DEL CONTRATO DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA**

***De la integración de la persona moral con propósito específico***

Artículo 87. El contrato sólo podrá celebrarse con personas morales mexicanas cuyo objeto social o fines sean, de manera exclusiva, realizar actividades en la materia o especialidad necesarias para desarrollar el proyecto respectivo, el cual una vez firmado por las partes será información pública.

Las personas que participen en un procedimiento de adjudicación, deberán obligarse a constituir, de resultar ganadoras, una persona moral de nacionalidad mexicana, con domicilio en el Estado de Coahuila de Zaragoza, en términos del presente artículo.

***De la inscripción de los contratos***

Artículo 88. Los contratos deberán inscribirse en el Registro Público Único en los términos señalados por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, así como en el Registro Único de Obligaciones y Empréstitos del Estado de conformidad con la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

***De los requisitos mínimos del contrato***

Artículo 89. El contrato deberá contener, como mínimo:

I. Las razones y motivos que den lugar al mismo, y los preceptos legales que autoricen a la contratante a celebrarlo;

II. Los antecedentes del procedimiento de adjudicación llevado a cabo;

III. El nombre, datos de identificación y capacidad jurídica de las partes;

IV. La acreditación de la personalidad de los representantes legales de las partes;

V. El objeto del contrato, describiendo el servicio a prestar y la infraestructura y equipamiento a proveer, necesarios para la prestación de dichos servicios;

VI. Los derechos y obligaciones de las partes;

VII. Las características, especificaciones, estándares técnicos, indicadores de desempeño e indicadores de gestión aplicables a la ejecución de la obra y la prestación de los servicios;

VIII. La relación de los bienes muebles e inmuebles afectos al proyecto y su destino a la terminación del contrato, y la obligación de mantener dicha relación actualizada, anualmente;

IX. El régimen económico y financiero del proyecto, con la descripción de las contraprestaciones, en su caso desglosadas, a favor del desarrollador, los mecanismos y las fuentes de pago, con la indicación de las autorizaciones que correspondan;

X. La mención de que los muebles e inmuebles del proyecto sólo podrán ser afectados en términos del artículo 156 de esta ley;

XI. Los términos y condiciones conforme a los cuales el desarrollador deberá pactar con sus respectivos acreedores, en caso de incumplimiento frente a éstos, la transferencia temporal del control de la propia sociedad desarrolladora a los acreedores de ésta, previa autorización del Comité de Proyectos;

XII. El régimen de distribución de riesgos de diseño, financieros, construcción, operación, mantenimiento, tecnológicos, de demanda, por caso fortuito o fuerza mayor, terminación anticipada y de cualquier otra naturaleza, entre las partes;

XIII. En su caso, la obligación del desarrollador de constituir uno o varios fideicomisos para administrar los flujos u otros propósitos relacionados con el contrato;

XIV. La disposición de que sólo podrán otorgarse garantías, por parte de la contratante, previamente aprobadas en términos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y no podrá garantizar a los desarrolladores ningún pago por concepto de riesgos distintos de los establecidos en el contrato o bien, establecidos por mecanismos diferentes de los señalados por esta Ley y su Reglamento;

XV. El plazo para el inicio y terminación de la obra, para el inicio en la prestación de los servicios, vigencia del contrato y, en su caso, el régimen para prorrogarlos;

XVI. La indicación de las autorizaciones requeridas para el desarrollo del proyecto;

XVII. Los supuestos de rescisión y terminación anticipada del contrato y sus efectos, incluyendo las obligaciones, reembolsos, indemnizaciones y penas convencionales que, según sea el caso, deriven de las mismas, así como los términos y condiciones para realizarlas;

XVIII. El régimen de penas convencionales y de sanciones por incumplimiento de las obligaciones de las partes;

XIX. Los procedimientos de solución de controversias, las cuales incluirán el procedimiento de arbitraje o medios alternativos de resolución de conflictos como primer recurso y, de forma secundaria, el proceso legal correspondiente a través de los tribunales competentes. Se deberá señalar en el contrato que, en los supuestos de rescisión o terminación anticipada, el procedimiento de arbitraje o medios alternativos de resolución de conflictos señalados anteriormente no serán aplicables;

XX. La disposición expresa de que la divulgación de la información del expediente se regirá en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza;

XXI. La designación del administrador del proyecto, que será encargado de la ejecución y supervisión del contrato en representación de la contratante conforme a la presente Ley; y

XXII. Los demás que el Reglamento establezca, en su caso.

***De la adquisición de los activos descritos en el contrato***

Artículo 90. El contrato podrá estipular que la contratante adquiera los activos con los cuales se prestan los servicios bajo ciertas circunstancias. Asimismo, la contratante tendrá el derecho de intervenir los activos para asegurar la prestación de servicios en caso de desastre natural, epidemia o desorden social o por caso fortuito o fuerza mayor. Tendrá el mismo derecho la contratante respecto del incumplimiento de la contraparte en los términos que el mismo contrato establezca, o cuando el desarrollador entre en un proceso de quiebra o concurso mercantil.

***De las estipulaciones del contrato y las bases del procedimiento de adjudicación***

Artículo 91. Las estipulaciones del contrato no deberán contravenir los términos y condiciones de las bases del procedimiento de adjudicación, ni los modelos o formatos que éstas incluyen.

***De la terminación anticipada del contrato***

Artículo 92. La contratante podrá dar por terminado anticipadamente el contrato:

1. Por razones de interés general;
2. Cuando se presenten eventos de caso fortuito o fuerza mayor que afecten la prestación del servicio o bien, o la ejecución de la obra, de conformidad con lo señalado en el contrato; o
3. Cuando se revoquen, cancelen o terminen las autorizaciones necesarias para la ejecución del proyecto correspondiente.

Adicionalmente, se podrán establecer las causas de terminación que se incluyan en las bases y en el contrato respectivo, en favor de la contratante o del desarrollador.

***De la rescisión del contrato***

Artículo 93. La contratante podrá dar por rescindido el contrato, sin incurrir en responsabilidad:

I. Cuando se cancele, abandone o retrase la ejecución de la obra, en los supuestos previstos en el propio contrato;

II. Cuando no se presten los servicios contratados o éstos se presten en términos distintos a los pactados; o

III. Por cualquier otro incumplimiento del desarrollador al contrato correspondiente.

En los supuestos señalados en las fracciones anteriores, la contratante tendrá la opción de otorgar un período al desarrollador para subsanar el incumplimiento en cuestión, y en caso de no hacerlo, imponerle la pena que resulte aplicable conforme al contrato respectivo.

Adicionalmente, se podrán establecer las causas de rescisión que se incluyan en las bases y en el contrato respectivo, en favor de la contratante o del desarrollador.

***De la naturaleza del contrato***

Artículo 94. El contrato constituye título suficiente para que el desarrollador haga valer los derechos que dicho contrato le otorga frente a terceros, incluyendo sin limitación, el de cobrar tarifas, peajes u otros sistemas de recuperación de las inversiones efectuadas. El desarrollador no podrá establecer por si, exenciones a usuario alguno, las que sólo procederán por disposición legal o previa autorización fundada y motivada de la contratante.

***De la integración del régimen de riesgos al contrato***

Artículo 95. El contrato contendrá una descripción del régimen de riesgos aplicable al proyecto, con objeto de lograr una adecuada distribución de riesgos de manera que éstos sean asignados a la parte que cuente con mayores capacidades para administrarlos a un costo razonable, considerando el perfil de riesgos del proyecto.

***De los derechos del desarrollador***

Artículo 96. Sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones aplicables y el contrato, el desarrollador tendrá los siguientes derechos:

I. No ser obstaculizado en el cumplimiento del objeto del contrato y en el ejercicio de sus derechos;

II. Recibir las contraprestaciones por la prestación de los servicios previstas en el régimen económico y financiero del contrato;

III. Solicitar prorroga de los plazos del contrato, cuando éstos se hayan demorado por causas imputables a cualquier entidad pública; y

IV. Recibir las indemnizaciones y pagos previstos en el contrato.

***De las obligaciones del desarrollador***

Artículo 97. Sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones aplicables y el contrato, el desarrollador tendrá las siguientes obligaciones:

I. Prestar los servicios contratados, en los términos y condiciones establecidos en el contrato, cumpliendo con los indicadores de desempeño e indicadores de gestión convenidos;

II. Ejecutar parcial o totalmente, según se hubiera acordado, la obra de infraestructura y el equipamiento requeridos para la prestación de los servicios objeto del contrato;

III. Cumplir con las instrucciones del contratante o cualquier autoridad competente, cuando se expidan con fundamento legal o de acuerdo con las estipulaciones del contrato;

IV. Contratar y mantener vigentes los seguros y asumir los riesgos establecidos en el contrato;

V. Otorgar y mantener en pleno vigor y efecto las garantías establecidas en el contrato;

VI. Proporcionar oportunamente la información técnica, operativa, financiera y de cualquier otra naturaleza que solicite la contratante y cualquier otra autoridad competente;

VII. Permitir y facilitar la supervisión y auditorías conforme a las disposiciones aplicables y a lo establecido en el contrato; y

VIII. Cumplir con el régimen de comunicación y responsabilidad social pactado en el contrato.

***De la responsabilidad del desarrollador***

Artículo 98. El desarrollador será responsable de aportar todos los recursos necesarios para la prestación de los servicios, la ejecución de la obra, el equipamiento, la operación y mantenimiento del proyecto durante toda la vigencia del contrato.

***Del plazo del contrato***

Artículo 99. Los plazos de los contratos de asociación público privada, con sus prórrogas, no deberán ser menores a cinco años o exceder, en su conjunto, el plazo de cincuenta años.

***De las prestaciones que podrán pactarse en el contrato***

Artículo 100. En caso de que así lo permita la rentabilidad financiera del proyecto y según se haya establecido en las bases del procedimiento de adjudicación y el contrato respectivo, el desarrollador estará obligado a cubrir a la entidad pública que corresponda, con independencia de lo que señalen otras disposiciones aplicables, alguna o algunas de las prestaciones siguientes:

I. El reembolso del valor de los bienes muebles e inmuebles, aportados por la entidad pública, utilizados en el proyecto;

II. El reembolso de las cantidades por concepto de remanentes y otros rubros en la forma y términos que se establezcan en el contrato;

III. El pago de derechos que corresponda por la supervisión y vigilancia de la ejecución de la obra o de la prestación de los servicios, previstos en las disposiciones legales aplicables; o

IV. Cualquier otra que las partes estipulen en el contrato.

***De los seguros que se establecerán dentro del contrato***

Artículo 101. Los seguros que la sociedad desarrolladora deberá contratar y mantener vigentes, cubrirán por lo menos, los riesgos a que estén expuestos los usuarios, la infraestructura y todos los bienes afectos al servicio, así como los de responsabilidad civil.

Para estos efectos, el desarrollador contratará con empresa especializada, previamente aprobada por la contratante para la elaboración de un estudio de riesgos, coberturas, indemnizaciones, montos mínimos, vigencia y demás términos y condiciones de los seguros. Dicho estudio servirá de base para que las partes acuerden las características y alcances de tales seguros, que el desarrollador estará obligado a contratar.

***De la contratación del desarrollador***

Artículo 102. El desarrollador podrá subcontratar la ejecución de las obras o la prestación de los servicios, en todo o en parte de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el contrato, previa aprobación de la contratante, pero en cualquier caso, el desarrollador será el único responsable ante la contratante, del cumplimiento de las obligaciones a su cargo establecidas en el contrato.

***De la afectación de los derechos***

Artículo 103. Los derechos de cobro del desarrollador derivados del contrato, podrán darse en garantía a favor de terceros, o afectarse de cualquier manera, en los términos y condiciones que el propio contrato señale, siempre y cuando no afecten bienes de dominio público y sin que la garantía correspondiente exceda el plazo de vigencia del contrato. Una vez que se afecten los derechos, deberá notificarse a la contratante dicha afectación y la notificación deberá contener, en su caso, los nuevos datos para realizar el pago que se hayan pactado. Dicha notificación deberá efectuarse con al menos quince días hábiles de anticipación a la afectación correspondiente, salvo disposición expresa pactada en el contrato correspondiente. El plazo para notificación podrá modificarse en el contrato.

De igual manera, podrán darse en garantía o transmitirse las acciones representativas del capital social del desarrollador, de conformidad con las disposiciones estatutarias aplicables, siempre y cuando se notifique a la contratante, a través de los medios de comunicación entre las partes y plazos previstos en el contrato respectivo, a la constitución de la garantía correspondiente. El plazo para notificación podrá modificarse en el contrato.

***De la cesión de derechos***

Artículo 104. El desarrollador no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato, total o parcialmente. Solamente se podrán ceder los derechos de cobro del desarrollador derivados del contrato, en los términos y condiciones que se establezcan en el contrato respectivo, previa autorización de la contratante.

Una vez que se cedan los derechos de cobro, deberá notificarse a la contratante dicha cesión y la notificación deberá contener, en su caso, los nuevos datos para realizar el pago que se haya pactado. La notificación deberá efectuarse con al menos quince días hábiles de anticipación a la fecha en que la contratante tenga que realizar pago o erogación alguna.

Esta cesión sólo podrá llevarse a cabo en los supuestos, términos y condiciones previstos en el propio contrato.

***De las garantías establecidas sobre los bienes destinados a la prestación de los servicios contratados***

Artículo 105. Si los derechos derivados del contrato y, en su caso, de las autorizaciones, o bien los bienes muebles e inmuebles destinados a la prestación de los servicios, no considerados de dominio público, fueron dados en garantía o afectados de cualquier manera, y dichas garantías o afectaciones se hicieren efectivas, los titulares de las mismas sólo tendrán derecho a los flujos generados por el proyecto, después de deducir los gastos y gravámenes fiscales de los mismos, conforme se haya pactado en el contrato y no más allá del plazo de vigencia del mismo.

Los titulares de las garantías o afectaciones, podrán contratar por su cuenta y previa autorización de la contratante, a un supervisor de la ejecución de la obra o la prestación de los servicios y no podrán oponerse a medida alguna que resulte necesaria para asegurar la continuidad en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio.

Lo dispuesto en este artículo deberá incluirse en los títulos de las autorizaciones, así como en el contrato correspondiente.

***De la modificación del contrato***

Artículo 106. Durante el plazo de vigencia original de un contrato, las partes podrán modificarlo exclusivamente cuando tengan por objeto:

I. Mejorar las características de la infraestructura o el equipamiento, que podrán incluir obras adicionales;

II. Incorporar nuevas tecnologías, incrementar los servicios, los indicadores de desempeño o los indicadores de gestión;

III. Atender aspectos relacionados con la protección del medio ambiente, así como la preservación y conservación de los recursos naturales, en términos de lo que dispongan las autoridades competentes;

IV. Ajustar el alcance de los proyectos por causas supervenientes no previsibles al realizarse la preparación y adjudicación del contrato;

V. Mitigar un evento de caso fortuito o fuerza mayor; o

VI. Restablecer el equilibrio económico del proyecto.

Ninguna modificación deberá implicar la transferencia de riesgos, de una de las partes a la otra, en términos distintos a los pactados en el contrato original, ni suplir las deficiencias o incumplimientos del desarrollador con cargo a recursos públicos.

***Del mejoramiento del contrato***

Artículo 107. En los casos previstos en las fracciones I a III del artículo anterior, la contratante podrá solicitar al desarrollador llevar a cabo las obras, o modificar sus características o las correspondientes a la prestación de los servicios, siempre y cuando las inversiones requeridas no excedan del equivalente al veinte por ciento del monto total de inversión considerado en la oferta económica presentada en el procedimiento de adjudicación respectivo, actualizada a valor presente, debiendo el desarrollador manifestar su conformidad para llevar a cabo tal solicitud, siempre en observancia de lo señalado en el artículo 40 de la presente Ley y de lo establecido en los lineamientos técnicos y financieros.

***De la notificación de las modificaciones del contrato***

Artículo 108. Cualquier modificación al contrato deberá notificarse por parte de la contratante a la Secretaría de Infraestructura y de tratarse de un proyecto que involucre a una o más entidades municipales, se notificará a la Tesorería Municipal para la actualización del registro de la cartera de proyectos.

De modificarse el contrato, deberán modificarse, en lo conducente, las respectivas autorizaciones.

***De las autorizaciones de las modificaciones***

Artículo 109. Respecto de los supuestos de las fracciones I, II, III y IV del artículo 106 de esta Ley, y en el caso de que las modificaciones impliquen un pago adicional o la disminución de obligaciones del desarrollador, se deberá demostrar la necesidad y beneficios de las modificaciones con dictamen de expertos independientes.

Adicionalmente, la modificación del contrato en los términos señalados en el párrafo anterior, requieren de autorización emitida previamente por el Comité de Proyectos, conforme a lo señalado en el artículo 86 de esta Ley o por el Comité Municipal de Proyectos cuando corresponda.

***De los casos de urgencia previa a la modificación del contrato***

Artículo 110. En casos de urgencia o en los que se ponga en riesgo la seguridad de los usuarios, la contratante podrá solicitar por escrito al desarrollador que lleve a cabo las acciones que correspondan, aún antes de que se formalicen las modificaciones en cuestión.

**CAPÍTULO SEXTO**

**DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LAS GENERALIDADES DE LA ADJUDICACIÓN DE LOS PROYECTOS**

***De la encargada del procedimiento de adjudicación***

Artículo 111. La entidad pública interesada en llevar a cabo un proyecto será la facultada para dar inicio al procedimiento de adjudicación que corresponda, quien será la convocante, siempre que cuente con la autorización del modelo de contrato y documentos del procedimiento de adjudicación conforme a lo establecido en los artículos 85 y 86 de esta Ley.

***De los tipos de procedimiento de adjudicación***

Artículo 112. El procedimiento de adjudicación de asociaciones público privadas se llevará a cabo a través de concurso, adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, según se establece en la secciones segunda y tercera del presente capítulo.

Los requisitos de participación en los procedimientos de adjudicación de los proyectos de asociación público privada, corresponderán a la experiencia y capacidad necesaria para cumplir con el objeto del contrato, mismos que deberán acreditarse en los procedimientos de adjudicación respectivos.

***Del impedimento para participar en el procedimiento de adjudicación***

Artículo 113. No podrán participar en los procedimientos de adjudicación, ni celebrar un contrato de asociación público privada, las personas siguientes:

I. El servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de adjudicación, tenga interés personal, familiar o de negocios, o bien, de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge, concubina, concubino o compañera o compañero civil o sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, o civil, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de adjudicación de que se trate;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público o bien, las sociedades en las que dichas personas formen parte; así como las inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;

III. Aquellas que por causas imputables a ellas mismas, la contratante le hubiere rescindido administrativamente un contrato, ya sea de asociación público privada o de cualquier tipo, dentro de un lapso de cinco años calendario inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria;

IV. Las que no hubieren cumplido sus obligaciones derivadas de contratos de asociaciones público privadas o de cualquier otro tipo celebrados con cualquier entidad pública, por causas imputables a ellas, declarado mediante resolución firme dentro de los cinco años calendario inmediatos anteriores a la fecha de la convocatoria;

V. Aquellas que hubieren proporcionado información que resulte falsa o que haya actuado con dolo o mala fe, en algún procedimiento de adjudicación, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación o desahogo de una inconformidad;

VI. Las que, en virtud de la información con que cuente el Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza o sus municipios, hayan celebrado contratos con entidades públicas, estando impedidas para ello;

VII. Las que se encuentren en situación de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones con cualquier dependencia de las señaladas en el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza o con cualquier entidad pública, por causas imputables a ellas mismas, respecto al cumplimiento de contratos;

VIII. Aquellas a las cuales se les declare en estado de quiebra o, en su caso sujetas a concurso mercantil;

IX. Las que contraten obras o servicios de cualquier naturaleza, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza o sus municipios por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación; y

X. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.

Los concursantes, previo al inicio del procedimiento de adjudicación que corresponda, deberán presentar a la entidad pública en cuestión, una declaración bajo protesta de decir verdad señalando que no actualizan ninguno de los supuestos a que se refiere el presente artículo.

***De los principios del procedimiento de adjudicación***

Artículo 114. El procedimiento de adjudicación del contrato deberá llevarse a cabo conforme a los principios de legalidad, libre concurrencia, competencia, objetividad, imparcialidad, transparencia y publicidad, en igualdad de condiciones para todos los concursantes y en cumplimiento con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

***De la publicación en medios electrónicos de las bases del procedimiento de adjudicación***

Artículo 115. En los términos de la Ley sobre Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de Tecnologías Digitales de Información del Estado de Coahuila de Zaragoza y los que se establezcan en las bases del procedimiento de adjudicación de que se trate, los actos del mismo podrán realizarse a través de medios electrónicos, con tecnologías que resguarden la autenticidad, confidencialidad e inviolabilidad de la información, siempre que tales tecnologías, con las características citadas, se encuentren certificadas de conformidad con lo señalado en la referida legislación.

Los medios de identificación electrónica que se usen con las características citadas en el párrafo anterior, producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos con firmas autógrafas y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. Las notificaciones mediante correo electrónico tendrán los mismos efectos que las notificaciones personales, cuando cumplan los requisitos que establece la ley referida en el presente artículo.

***De la publicidad de los actos del procedimiento de adjudicación***

Artículo 116. Cualquier persona podrá asistir a los actos del procedimiento de adjudicación, en calidad de observador, previo registro de su participación ante la convocante. Los observadores se abstendrán de intervenir en cualquier forma en los eventos a que asistan.

El Reglamento de esta Ley establecerá la figura de testigos sociales y preverá los términos de su participación para atestiguar los actos correspondientes a los procedimientos de adjudicación.

***De la información derivada del procedimiento de adjudicación***

Artículo 117. En los procedimientos de adjudicación se establecerán los mismos requisitos y condiciones para todos los concursantes. Con el objeto de llevar a cabo procedimientos transparentes y no discriminatorios, la entidad pública que corresponda deberá proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información relacionada con dichos procedimientos. No será necesario que el concursante esté registrado en el padrón de proveedores de la administración pública estatal.

***De la intervención del órgano de control***

Artículo 118. A todos los actos del procedimiento de adjudicación, la convocante podrá invitar al órgano de control correspondiente.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DEL CONCURSO**

***De las características del concurso***

Artículo 119. Salvo por las excepciones a que se refiere la sección tercera de este capítulo, la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto convocará a un procedimiento de adjudicación a través de concurso con el fin de adjudicar el proyecto en las mejores condiciones, considerando precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás elementos aplicables. Se podrá conducir cualquier procedimiento de adjudicación con el auxilio de consultores especializados en las materias que requiera.

***De la clasificación del concurso***

Artículo 120. Los concursos para contratar una asociación público privada podrán ser estatales, nacionales e internacionales, conforme a lo siguiente:

1. Serán estatales cuando sólo puedan participar en el procedimiento personas morales de nacionalidad mexicana, que presten servicios o mantengan sus operaciones en el territorio del Estado de Coahuila de Zaragoza y cuyo domicilio fiscal se encuentre en dicha entidad federativa;
2. Serán nacionales cuando sólo puedan participar personas morales de nacionalidad mexicana; y
3. Serán internacionales cuando adicionalmente a personas mexicanas, puedan participar personas de nacionalidad extranjera, a través de una persona moral de nacionalidad mexicana.

Las convocatorias de los concursos estatales se publicarán en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en su caso a través de CompraNet, las de los concursos nacionales en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y adicionalmente en un periódico de circulación nacional y en su caso a través de CompraNet y las de concursos internacionales en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en un periódico de circulación nacional y en su caso a través de CompraNet y por cualquier otro medio de difusión que la entidad pública que corresponda considere conveniente.

***De la participación en el concurso***

Artículo 121. En los procedimientos de adjudicación de proyectos de asociación público privada que se lleven a cabo, podrá participar toda persona nacional, que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria, las bases y en las disposiciones aplicables al proyecto de que se trate, con las excepciones señaladas en el artículo 113 de esta Ley.

***De las etapas del concurso***

Artículo 122. El procedimiento de adjudicación a través de concurso se llevará a cabo conforme a las siguientes etapas:

1. Convocatoria del concurso y emisión de bases del concurso;
2. Actos previos a la presentación de propuestas;

1. Presentación y apertura de propuestas; y
2. Análisis de propuestas y fallo del concurso.

***De los requisitos de la convocatoria***

Artículo 123. La convocatoria al procedimiento de adjudicación a través de concurso será preparada por la entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto. En todo caso, la convocatoria deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

I. El nombre de la convocante, y la indicación de tratarse de un concurso y un proyecto de asociación público privada, regidos por la presente Ley;

II. La descripción general del proyecto, con indicación de los servicios a prestar y, en su caso de la infraestructura a construir o el equipamiento a proveer;

III. Las fechas previstas para el concurso, los plazos de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, así como las fechas estimadas para el inicio de una y otra;

IV. Los lugares, portales, fechas y horarios en que los interesados podrán adquirir las bases del concurso;

1. En su caso los datos correspondientes al proceso de precalificación que se lleve a cabo y la forma de adquirir los términos y condiciones que deberán cumplir los interesados en participar;
2. Los requisitos a cumplir para obtener las bases de concurso; y
3. Aquellos elementos que sean requeridos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza o disposiciones regulatorias relacionadas, así como los requisitos o alcances que el Reglamento señale.

La adquisición de las bases por parte de los interesados conforme se establezca en la convocatoria será requisito indispensable para participar en el concurso.

***De la publicación de la convocatoria***

Artículo 124. La publicación de la convocatoria se realizará a través del portal de internet de la convocante que corresponda y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en otros medios de difusión conforme a lo señalado en el artículo 120 de esta Ley.

***De los requisitos de las bases del concurso***

Artículo 125. Las bases del concurso, serán preparadas por la convocante y contendrán por lo menos los elementos siguientes:

I. Los requisitos necesarios para que los concursantes estén en posibilidad de elaborar sus propuestas, que comprenderán, por lo menos:

a. Las características y especificaciones técnicas, así como los indicadores de desempeño e indicadores de gestión de los servicios a prestar; y

b. Las características y especificaciones técnicas para la construcción de las obras de infraestructura y el equipamiento a cargo del desarrollador;

II. En caso de información que no pueda ser proporcionada a través del portal de la convocante, la indicación de que la misma estará a disposición de los interesados en el domicilio de ésta;

III. Los bienes muebles e inmuebles principales necesarios para el desarrollo del proyecto y, en su caso, el responsable de su obtención;

IV. El plazo de la prestación de los servicios y, en su caso, de la ejecución de las obras de infraestructura, con indicación de las fechas estimadas de inicio de una y otra;

V. Los términos y condiciones en que los trabajos y servicios podrán subcontratarse por el desarrollador;

VI. El proyecto de contrato, con los derechos y obligaciones de las partes, así como la distribución de riesgos del proyecto incluyendo, en su caso la fuente de pago o mecanismo de pago que aplicaría;

VII. Los proyectos de autorizaciones que, conforme a las propias bases, en su caso, corresponda emitir a la convocante;

VIII. Las autorizaciones que en forma limitativa deberán obtenerse;

IX. La forma en que los concursantes acreditarán su capacidad legal, experiencia y capacidad técnica, administrativa, económica y financiera, que se requieran de acuerdo con las características, complejidad y magnitud del proyecto;

X. La obligación de constituir la persona moral en términos del artículo 87 de esta Ley;

XI. Las garantías que los concursantes deban otorgar para participar en el concurso, para la etapa de construcción de la infraestructura y para la etapa de prestación de los servicios;

XII. Cuando procedan, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de localización del proyecto;

XIII. La fecha, hora y lugar de la o las juntas de aclaraciones, de la presentación de las propuestas, de la apertura de éstas, de la comunicación del fallo y de la firma del contrato;

XIV. El idioma o idiomas, en su caso además del español, en que la información o documentos que se indique o las propuestas mismas podrán presentarse;

XV. La moneda o monedas, en su caso, en que las propuestas podrán presentarse;

XVI. La relación de documentos que los concursantes deberán presentar con sus propuestas;

XVII. Los criterios, claros y detallados, para la evaluación objetiva de las propuestas y la adjudicación del proyecto. En estos criterios se señalará el coeficiente de integración de producto nacional que deberán cumplir los concursantes de conformidad con el tipo de proyecto de que se trate, procurando la mayor integración de contenido nacional posible, respetando lo dispuesto en los tratados internacionales;

XVIII. Las causas para declarar desierto el concurso, para cancelarlo o para descalificar a los concursantes;

XIX. Carta bajo protesta de decir verdad del concursante o su representante legal, manifestando que no se encuentran en los supuestos del artículo 113 de esta Ley;

XX. Los mecanismos para resolver los casos de empate en igualdad de condiciones técnicas y económicas presentadas por los concursantes;

XXI. Se establecerá en las bases del concurso que toda obligación de pago de las entidades públicas, originada por la celebración de una asociación público privada, se realizará en estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 117 fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 22 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios;

XXII. Señalarán el capital mínimo sin derecho a retiro, limitaciones estatutarias y demás requisitos que el desarrollador deberá cumplir; y

XXIII. Los demás elementos que el Reglamento establezca, en su caso.

***De las modificaciones de las bases de concurso***

Artículo 126. Las modificaciones a las bases del concurso que, en su caso, la convocante realice deberán ajustarse a lo siguiente:

I. Tendrán por objeto:

a. Facilitar la presentación de las propuestas o la conducción de los actos del concurso;

b. Atender solicitudes o propuestas de autoridades o de los concursantes comentadas en la junta de aclaraciones correspondiente;

c. Corregir errores o imprecisiones; o

d. Incorporar mejoras;

II. Deberán notificarse a través de CompraNet, o a través de la página oficial de la entidad pública que corresponda, a cada uno de los concursantes, a más tardar el décimo día hábil previo a la presentación de las propuestas. De ser necesario, la fecha señalada para la presentación y apertura de las propuestas podrá diferirse; y

III. Darán oportunidad a los concursantes de retirarse del concurso, sin que ello implique incumplimiento o hacer efectiva garantía o aplicar sanción alguna por ese motivo.

Las modificaciones que cumplan con los requisitos anteriores serán incorporadas a la convocatoria y bases del concurso mediante adenda, por lo que deberán ser consideradas por los concursantes en la elaboración de sus propuestas. Sólo el contenido de la convocatoria y las bases será vinculante entre la convocante y los concursantes.

***De la negociación del procedimiento de adjudicación***

Artículo 127. Ninguna de las condiciones contenidas en la convocatoria, en las bases de concurso y sus anexos, ni en las propuestas de los concursantes, serán objeto de negociación durante el procedimiento de adjudicación.

***De los actos previos a la presentación de las propuestas***

Artículo 128. Para facilitar el concurso, se podrán llevar a cabo los siguientes actos previos a la presentación de propuestas:

1. Efectuar el registro de concursantes;
2. Realizar revisiones preliminares a la documentación distinta a la referida al importe de la oferta económica;
3. Realizar procedimientos de precalificación en los que los interesados acrediten contar con la capacidad técnica, económica, financiera, jurídica, y en su caso la experiencia, para presentar una oferta en el concurso, conforme se señale en el Reglamento; o
4. Se podrán llevar a cabo una o más juntas de aclaraciones, en las que la convocante contestará por escrito las consultas y preguntas que los concursantes hayan presentado, pero sólo lo establecido en las bases será vinculante a las partes, por lo que cuando la respuesta a una consulta o aclaración, las modifique, será necesario que la convocante emita la adenda a las bases, que corresponda, lo que podrá ser solicitado por cualquier concursante.

Entre la última junta de aclaraciones y el acto de presentación de las propuestas deberá existir plazo suficiente para su presentación.

***De la presentación de las propuestas***

Artículo 129. Iniciado el acto de presentación y apertura de propuestas, las propuestas ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los concursantes.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de las propuestas bastará que los concursantes presenten un escrito en el que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cuentan con las facultades suficientes para ello, sin que sea necesario que acrediten su personalidad.

***De la participación de dos o más personas en participación conjunta***

Artículo 130. Dos o más personas podrán presentar una propuesta conjunta, a cuyo efecto deberán designar a un representante común que las represente en el procedimiento de adjudicación correspondiente.

***Del plazo de presentación de las propuestas***

Artículo 131. El plazo para la presentación de propuestas no podrá ser menor a cinco días hábiles, una vez celebrada la última junta de aclaraciones.

Las ofertas irrevocables deberán contar con los requisitos que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y su regulación secundaria para la presentación de ofertas calificadas, así como con los elementos que para tales efectos señale el Reglamento.

***De la forma en que se presentarán las propuestas***

Artículo 132. Las propuestas se presentarán en sobres cerrados, de conformidad con lo que se establezca en el Reglamento y en las bases de concurso, y serán abiertas en sesión pública.

Las propuestas serán irrevocables y no estarán sujetas a condiciones adicionales, deberán tener la vigencia establecida en las bases de concurso, la cual no podrá ser menor a sesenta días naturales, estar firmadas por el representante legal de la concursante y cumplir los requisitos establecidos.

***De la presentación única de propuestas***

Artículo 133. En cada concurso los concursantes sólo podrán presentar una propuesta conformada por una oferta técnica y una oferta económica. En caso que una persona, su matriz, filiales o subsidiarias participe en la presentación de dos o más propuestas, todas las propuestas en las que participen serán desechadas.

***De las consecuencias de la presentación de las propuestas***

Artículo 134. Las propuestas se presentarán en firme, obligan a quien las hace y no serán objeto de negociación, sin perjuicio de que la convocante pueda solicitar aclaraciones o información adicional, en términos de la presente Ley. En ningún caso podrán suplirse las deficiencias de las propuestas presentadas.

***De la obligación de constituir la persona moral requerida***

Artículo 135. Los concursantes deberán obligarse en su propuesta a constituir, de resultar ganadores, la persona moral con la que se celebrará el contrato, en los términos del artículo 87 de esta Ley.

***De la evaluación de las propuestas***

Artículo 136. Se realizará la evaluación de las propuestas, donde se permita establecer las mejores condiciones de mercado, de conformidad a las bases emitidas en el procedimiento de adjudicación, tomando en consideración lo establecido en Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

El Secretario de Finanzas, el Tesorero Municipal o su equivalente de cada ente público que corresponda, será el responsable de confirmar que el proyecto fue celebrado en las mejores condiciones de mercado atendiendo al procedimiento, requisitos y disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

***De la selección de la propuesta ganadora***

Artículo 137. Una vez realizado el análisis de las propuestas, a que se refiere la fracción IV del artículo 122 de esta Ley por parte de la convocante, el proyecto se adjudicará al concursante que cumpla los requisitos legales, técnicos, económicos y financieros establecidos en las bases y que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio y calidad de los servicios prestados a los usuarios, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las bases.

***Del supuesto de igualdad de condiciones de las propuestas***

Artículo 138. En caso de igualdad de condiciones técnicas y económicas, el proyecto se adjudicará conforme a los criterios de desempate que se hubieran establecido en las bases y, de no haberse señalado, se resolverá en favor de la que represente mayores beneficios esperados para la población del Estado a juicio de la convocante.

***De la emisión del fallo***

Artículo 139. Una vez hecho el análisis de las propuestas a que se refieren los artículos 122 fracción IV y 137 de esta Ley, la convocante emitirá el fallo en virtud del cual se adjudicará el proyecto o se declarará desierto el concurso, debiendo incluir las razones que lo motivaron. No incluirá información reservada o confidencial en términos de las disposiciones aplicables.

El fallo se dará a conocer en junta pública a la que libremente asistan los concursantes y se publicará en el portal de internet de la entidad pública que corresponda, dentro del plazo previsto en las bases del concurso que no será mayor a veinte días hábiles posteriores a su emisión.

Lo no previsto en esta Ley respecto de la evaluación de las propuestas y fallo del concurso, se sujetarán a las disposiciones que establezca el Reglamento.

***De la subsanación de errores dentro del fallo***

Artículo 140. Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada, la convocante procederá a su corrección dentro de los diez días hábiles siguientes al fallo, mediante escrito que notificará a todos los concursantes que hubieran presentado una propuesta, pudiendo realizarse tal notificación vía CompraNet o a través de la página oficial de la entidad pública que corresponda.

***De las causales de descalificación***

Artículo 141. Serán causas de descalificación de las propuestas, además de las que se indiquen en las bases:

I. El incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases;

II. Si iniciado el procedimiento de adjudicación sobreviene una causa de impedimento prevista en el artículo 113 de esta Ley; o

III. Establecer, concertar, coordinar posturas o la abstención en el procedimiento de adjudicación de que se trate o intercambiar información con este propósito.

***De las causas para declarar desierto el concurso***

Artículo 142. La convocante procederá a declarar desierto el concurso, cuando:

I. Ningún interesado haya adquirido las bases;

II. Ninguna de las propuestas cumpla con los requisitos solicitados en las bases;

III. Ninguna de las ofertas económicas de las propuestas presentadas fueren aceptables para la convocante; o

IV. Cuando exista únicamente un concursante. No obstante lo anterior, también se podrá proceder a adjudicar a dicho concursante de manera directa siempre y cuando haya cumplido con los requisitos establecidos en las bases.

***De la cancelación del concurso***

Artículo 143. La convocante podrá cancelar un concurso:

I. Por caso fortuito o fuerza mayor;

II. Cuando se modifiquen sustancialmente las condiciones para el desarrollo del proyecto;

III. Cuando se extinga la necesidad del servicio materia del procedimiento de adjudicación; o

IV. Cuando se presenten circunstancias que, de continuarse con el procedimiento de adjudicación, pudieren ocasionar un daño o perjuicio al Estado o al municipio, según corresponda.

Salvo por las cancelaciones señaladas por las fracciones I y II de este artículo, la entidad pública que corresponda cubrirá a los concursantes los gastos no recuperables que en su caso procedan, en términos de lo dispuesto por el Reglamento.

***Del procedimiento administrativo contra el fallo***

Artículo 144. Contra el fallo que adjudique el contrato procederán, en su caso, las inconformidades señaladas en el capítulo noveno de esta Ley.

**SECCIÓN TERCERA**

**DE LAS EXCEPCIONES AL CONCURSO**

***De la invitación a cuando menos tres personas***

Artículo 145. Se podrá adjudicar proyectos de asociación público privada sin sujetarse al procedimiento de adjudicación a que se refiere la sección segunda del presente capítulo, a través de procedimientos de adjudicación por invitación a cuando menos tres personas cuando:

1. Se haya rescindido un contrato adjudicado antes de su inicio, sin haber podido adjudicar al segundo o ulterior lugar conforme a lo señalado en el artículo 146 fracción IV de esta Ley;
2. En el concurso se haya presentado un solo concursante;
3. En el concurso no se haya emitido o aceptado propuesta alguna; o
4. Se realicen dos concursos que hayan sido declarados desiertos, siempre que no se modifiquen los requisitos esenciales señalados en la convocatoria.

***De la adjudicación directa***

Artículo 146. Se podrá adjudicar proyectos de asociación público privada sin sujetarse al procedimiento de adjudicación a que se refiere la sección segunda del presente capítulo, a través de procedimientos de adjudicación directa cuando:

1. En el mercado sólo exista un posible oferente, o se trate de una persona física o moral que posea la titularidad exclusiva de patentes, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual exclusivos debidamente registrados en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y/o en el Instituto Nacional del Derecho de Autor y/o de conformidad con cualquier tratado internacional del que México forme parte;
2. Se realicen con fines exclusivamente de seguridad pública o su contratación mediante concurso ponga en riesgo la seguridad del Estado o del municipio que corresponda, la seguridad pública o la procuración de justicia, en los términos de las leyes de la materia;
3. Existan circunstancias que acrediten que de no ejecutar el proyecto se puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, cuantificables y comprobables;
4. Se haya rescindido un contrato adjudicado a través de concurso, antes de su inicio, en cuyo caso el contrato podrá adjudicarse al concursante que haya obtenido el segundo o ulteriores lugares, siempre que la diferencia en la variable de adjudicación de carácter económica con la propuesta inicialmente ganadora no sea superior al diez por ciento. Se podrá adjudicar a la propuesta que siga en calificación a la del ganador en ese mismo concurso o las subsecuentes en caso que la precedente no acepte;
5. Se trate de la sustitución de un desarrollador por causas de terminación anticipada de un contrato en marcha;
6. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible ejecutar los trabajos mediante el procedimiento de concurso en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate; o
7. Se hayan declarado desiertos dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas.

Tratándose de propuestas no solicitadas, no procederá la adjudicación directa, salvo que se trate de alguno de los casos descritos en las fracciones I, II, III o VI del presente artículo.

***De los principios de las excepciones al concurso***

Artículo 147. Los procedimientos de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa deberán realizarse, previa autorización del Comité de Proyectos o del Comité Municipal de Proyectos, en su caso, y conforme a los principios de legalidad, objetividad, imparcialidad, transparencia e igualdad de condiciones, así como prever las medidas para que los recursos públicos que en su caso se utilicen, se administren con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez.

Las disposiciones contenidas en la sección segunda de este capítulo, serán aplicables en lo conducente a estos procedimientos, en lo que no contradigan lo dispuesto en los artículos 145 y 146 de esta Ley y sean compatibles con la naturaleza y objetivos de dichos procedimientos de adjudicación.

***De las reglas para realizar el procedimiento de adjudicación directa o de invitación a cuando menos tres personas***

Artículo 148. El procedimiento de adjudicación directa o de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente:

I. Solo podrán participar las personas que reciban una invitación por parte de la convocante;

II. En todo caso, la convocante bajo su más estricta responsabilidad podrá solicitar la presentación de propuestas a personas que acrediten contar con capacidad financiera, técnica, operativa y demás necesarias para dar cumplimiento a sus obligaciones;

III. Las personas invitadas deberán cumplir con todos los requisitos establecidos al efecto en las bases de contratación correspondientes;

IV. La invitación fijará los plazos del procedimiento de adjudicación, el mecanismo de evaluación de las ofertas y demás elementos pertinentes conforme a las disposiciones de la presente Ley;

1. Junto con las invitaciones se entregará la descripción del servicio a contratar y la infraestructura o equipamiento requeridos, a cargo del desarrollador; y
2. La apertura de ofertas se llevará a cabo en un acto público.

**SECCIÓN CUARTA**

**DE LOS ACTOS POSTERIORES AL FALLO**

***De la calidad de desarrollador***

Artículo 149. El contrato se celebrará entre la entidad pública que corresponda y el concursante ganador, quien a partir de la suscripción del mismo tendrá el carácter de desarrollador, en el plazo que se indique en las bases del procedimiento correspondiente.

***De los casos en que no se suscriba el contrato***

Artículo 150. En el evento de que el contrato no se suscriba en el plazo señalado, por causa injustificada imputable al adjudicatario, se harán efectivas las garantías que procedan según se señale en las bases correspondientes.

En este supuesto, el proyecto podrá adjudicarse al segundo lugar del procedimiento y, de no aceptar, a los subsecuentes lugares, siempre y cuando cumplan con todas las condiciones previstas en las bases del proceso respectivo y su propuesta económica sea aceptable para la convocante.

***De la falta de firma de la convocante dentro del contrato***

Artículo 151. Si realizado el concurso, la convocante decide no firmar el contrato respectivo, cubrirá con cargo a su presupuesto, a solicitud escrita del adjudicatario del contrato, los gastos no recuperables en que éste hubiere incurrido.

Los reembolsos sólo procederán en relación con gastos no recuperables, que sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente con el procedimiento de adjudicación de que se trate.

El Reglamento señalará los procedimientos para determinar los montos y efectuar los pagos a que el presente artículo hace referencia.

***De la formalización del contrato***

Artículo 152. Si el contrato no se formaliza dentro del plazo establecido en las bases por razones atribuibles a la convocante, el desarrollador tendrá derecho a que se prorroguen los plazos que correspondan por un tiempo igual al atraso en la firma del contrato.

***De las propuestas desechadas***

Artículo 153. Las propuestas desechadas durante el concurso podrán destruirse o ser devueltas a los concursantes que lo soliciten una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo, salvo que exista algún procedimiento de adjudicación en trámite, en cuyo caso procederá su destrucción o devolución después de la total conclusión de dicho procedimiento de adjudicación.

En todo caso, la convocante mantendrá una copia electrónica de la propuesta, en medios que garanticen su inalterabilidad. La propuesta será pública una vez que el fallo quede firme.

***De los medios de defensa para la impugnación del fallo***

Artículo 154. Los medios de defensa, ordinarios o extraordinarios, mediante los cuales se pretenda impugnar el fallo, solamente suspenderán el procedimiento correspondiente, la obra en curso o el contrato firmado, cuando concurran todos los requisitos siguientes:

I. Que la solicite el agraviado;

II. Que no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Se considera, entre otros casos, que se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravenciones, cuando:

a. El proyecto involucre la prestación de un servicio público de necesidad inminente;

b. Se ponga en riesgo la rentabilidad social del proyecto o su ejecución misma;

III. Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

La suspensión sólo será procedente si el solicitante otorga garantía suficiente sobre los daños y perjuicios que la misma pudiere ocasionar. Dicha garantía deberá ser por el equivalente al diez por ciento del monto de la inversión propuesta por el inconforme, en el procedimiento de adjudicación, para el desarrollo del proyecto; garantía que se hará efectiva en su totalidad en caso de resultar improcedente el recurso.

Cuando no haya sido procedente la suspensión del fallo y la resolución final favorezca al recurrente, este último tendrá derecho sólo al pago de los daños y perjuicios causados. En este caso se le devolverá la garantía señalada en el párrafo anterior.

**CAPÍTULO SÉPTIMO**

**DE LOS BIENES NECESARIOS PARA LOS PROYECTOS**

***De la afectación de los bienes necesarios para el proyecto***

Artículo 155. La entidad pública interesada en llevar a cabo el proyecto, el desarrollador, así como cualquier otra entidad pública, previo a la obtención de las autorizaciones correspondientes, podrán afectar los bienes y derechos que resulten necesarios o convenientes para la implementación del proyecto.

Podrá otorgarse el uso de bienes muebles o inmuebles a través de concesión, arrendamiento, comodato o cualquier otro medio legal, según la legislación que en la materia lo permita, para la realización del objeto del contrato. En cualquier caso, la vigencia del título legal a través del cual se otorgue dicho uso será por un periodo máximo equivalente a la vigencia del contrato.

***De la unidad de los bienes que conforman el proyecto***

Artículo 156. Es responsabilidad del desarrollador mantener la unidad de los bienes que conforman el proyecto, por lo que no podrán afectarse por separado bienes que sean indispensables para la prestación del servicio materia del contrato.

Los demás muebles e inmuebles del desarrollador incorporados a la infraestructura, o necesarios para la prestación de los servicios del proyecto, podrán ser enajenados, hipotecados, gravados o afectados, con la previa autorización expresa y por escrito de la contratante. Lo anterior, sin perjuicio de las demás autorizaciones que conforme a las disposiciones aplicables, corresponda a otras autoridades competentes.

***De las autorizaciones de los bienes utilizados dentro del proyecto***

Artículo 157. Cuando en un proyecto el uso de bienes públicos o la prestación de los servicios por parte del desarrollador privado requieran de autorizaciones, éstas se otorgarán conforme a las disposiciones que las regulen.

En cualquier caso, la o las concesiones que se requieran, serán otorgadas a la persona moral constituida en términos del artículo 87 de esta Ley, por quien resulte adjudicatario del contrato correspondiente, conforme a los procedimientos de adjudicación previstos en esta Ley. Su vigencia será suficiente para que el desarrollador pueda cumplir con el objeto del contrato, durante el plazo de vigencia establecido en el mismo.

Cualquiera de las autorizaciones para la prestación de los servicios otorgadas en términos de este artículo, se extingue por la terminación del contrato correspondiente. Tal disposición deberá señalarse en las autorizaciones que corresponda.

Cuando se trate de autorizaciones de carácter federal, podrán coaligarse con el contrato, cuando los ordenamientos que rijan a aquéllas lo permitan y sean compatibles con las disposiciones de la presente Ley.

***De las condiciones de las autorizaciones para el uso de bienes públicos o la prestación de los servicios señalados en el contrato***

Artículo 158. Las autorizaciones referidas en el artículo anterior, que sea necesario otorgar, contendrán únicamente las condiciones mínimas indispensables que, conforme a las disposiciones que las regulan, permitan al desarrollador el uso de bienes públicos o la prestación de los servicios señalados en el contrato.

***De la cesión de los derechos de los desarrolladores derivados de las autorizaciones respectivas***

Artículo 159. Los derechos de los desarrolladores, derivados de la o las autorizaciones, podrán cederse, darse en garantía o afectarse de cualquier manera, cuando se cedan, den en garantía o afecten los derechos del contrato correspondiente y previa autorización por escrito de la autoridad que los haya otorgado.

***De la revisión de las autorizaciones de conformidad a las modificaciones del contrato***

Artículo 160. Cuando se pretenda modificar el contrato, deberán revisarse, en lo conducente, las autorizaciones para el desarrollo del proyecto, y en caso de que sea necesario, se deberán gestionar ajustes pertinentes frente a la autoridad que corresponda para formalizar la modificación.

***De la tramitación de las autorizaciones respectivas***

Artículo 161. Las entidades estatales y las entidades municipales darán prioridad a los proyectos de asociación público privada, en la valoración y trámites respecto del cumplimiento de los requisitos que establezcan las leyes como necesarios para su ejecución. Para este efecto, al solicitar cada una de las autorizaciones respectivas se deberá señalar que la autorización se refiere específicamente a un proyecto de asociación público privada regulado por esta Ley.

Las autorizaciones necesarias para el uso de bienes públicos o la prestación de los servicios señalados en el contrato, tratándose de autorizaciones estatales o municipales, podrán otorgarse a través de la modalidad de adjudicación directa en adición a las causales que señale la legislación que corresponda. En lo que respecta a las autorizaciones federales se dará prioridad a los proyectos de asociación público privada en atención a lo que establezca la normativa en cuestión.

**CAPÍTULO OCTAVO**

**DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LAS DISPOSICIONES COMUNES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS**

***De la autorización del inicio de la prestación de los servicios o de la construcción de la obra***

Artículo 162. El desarrollador podrá iniciar la prestación de los servicios o la construcción de la obra previa autorización de la contratante, o en su caso, conforme al calendario respectivo.

No procederá la autorización sin la previa verificación técnica de que las instalaciones del proyecto, cumplen las condiciones de seguridad según las especificaciones establecidas en el contrato y las requeridas por las disposiciones aplicables.

Salvo por lo que en su caso establezca el contrato, el desarrollador no tendrá derecho a recibir el pago de contraprestación alguna, hasta en tanto no preste los servicios o entregue la obra en los términos y condiciones contratados.

***De los riesgos del proyecto***

Artículo 163. Los riesgos de construcción, equipamiento, financiamiento, operación, prestación de los servicios, conservación y mantenimiento del proyecto, serán asumidos por el desarrollador, según sea el caso, y así se establecerá en el contrato.

***Del responsable de la prestación de los servicios***

Artículo 164. En los proyectos, el desarrollador será responsable de la prestación de los servicios de manera continua, uniforme y regular, en condiciones que impidan cualquier trato discriminatorio, de acuerdo con los indicadores de desempeño y los indicadores de gestión pactados, así como de la construcción y equipamiento, parcial o total, y el mantenimiento y conservación de la infraestructura, necesarios para la prestación de los citados servicios, según se establezca en el contrato, en las autorizaciones y en la legislación aplicable.

***Del supuesto del concurso mercantil del desarrollador***

Artículo 165. En caso de concurso mercantil del desarrollador, la contratante deberá solicitar a la autoridad que conozca del mismo, que disponga las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la ejecución de la obra o en la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en la ley de la materia.

***De la supervisión del proyecto***

Artículo 166. La contratante se encargará de la supervisión del contrato. No obstante lo anterior la Secretaría de Infraestructura, para el caso de proyectos de obra de entidades estatales, y el órgano de control que corresponda, en cualquier caso, tendrán facultades para supervisar el cumplimiento del mismo.

***De las obras de infraestructura***

Artículo 167. Las obras de infraestructura podrán incluir instalaciones para la realización de actividades complementarias, comerciales o de otra naturaleza, que resulten convenientes para los usuarios de los servicios, y sean compatibles y susceptibles de aprovechamiento diferenciado del servicio principal, siempre y cuando se encuentren previstas en el contrato.

En su caso, las características, términos y condiciones para ejecutar y utilizar estas instalaciones deberán preverse en el respectivo contrato.

***De la realización de la construcción de la infraestructura***

Artículo 168. La construcción, equipamiento, mantenimiento, conservación y reparación de la infraestructura de un proyecto de asociación público privada deberán realizarse conforme al programa, características y especificaciones técnicas pactadas en el contrato correspondiente, así como, observar las disposiciones de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico, asentamientos humanos, desarrollo urbano, los acuerdos con las comunidades indígenas derivados de las consultas previas efectuadas y demás aplicables, en los ámbitos estatal, municipal, y en su caso federal.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DE LA INTERVENCIÓN Y SUSPENSIÓN DEL PROYECTO**

***De la intervención de los proyectos***

Artículo 169. La contratante podrá intervenir en la preparación o ejecución de la obra, la prestación de los servicios, o en cualquier otra etapa del desarrollo de un proyecto, cuando el desarrollador incumpla con las obligaciones objeto del contrato por causas imputables a éste y ponga en peligro el desarrollo del proyecto.

Para tales efectos la contratante deberá notificar por escrito al desarrollador la causa que motiva la intervención, para que en un término de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que se le entregó el escrito señalado en este párrafo, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinente.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la contratante contará con un plazo de hasta quince días hábiles para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el desarrollador. La determinación de proceder o no con la intervención deberá ser debidamente fundada, motivada y notificada al desarrollador dentro de dicho plazo.

Una vez notificada la determinación de la contratante, de ser el caso, la contratante procederá a la intervención, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades en las que, en su caso, incurra el desarrollador. Contra la resolución de intervención, procederá el juicio contencioso administrativo.

***De la ejecución de la obra o prestación de servicios en caso de intervención***

Artículo 170. En caso de intervención, corresponderá a la contratante la ejecución de la obra o la prestación del servicio, así como recibir, en su caso, los ingresos generados por el proyecto. Al efecto, podrá designar a uno o varios interventores, utilizar el personal que el desarrollador venía utilizando o contratar a un nuevo constructor u operador en términos de la presente Ley.

La intervención no afectará los derechos adquiridos por terceros de buena fe relacionados con el proyecto.

***De la duración de la intervención***

Artículo 171. La intervención tendrá la duración que se determine en el acuerdo que la ordene, sin que el plazo original y, en su caso, prórroga o prórrogas, puedan exceder, en su conjunto, de tres años.

El desarrollador podrá solicitar la terminación de la intervención, cuando demuestre a la contratante que las causas que la originaron quedaron solucionadas y que, en adelante, está en posibilidades de cumplir con las obligaciones a su cargo establecidas en el contrato.

***De la devolución de la administración del proyecto y de los ingresos percibidos***

Artículo 172. Al concluir la intervención, la contratante devolverá al desarrollador la administración del proyecto y los ingresos percibidos, una vez deducidos todos los gastos y honorarios de la intervención, así como las penas convencionales y sanciones en las que, en su caso, hubieren incurrido.

***De la rescisión del contrato posterior a la intervención***

Artículo 173. Si transcurrido el plazo de la intervención el desarrollador no está en condiciones de continuar con sus obligaciones, la contratante procederá a la rescisión del contrato, lo que constituirá una causa de terminación por ministerio de ley, de las autorizaciones otorgadas para cualquiera de las etapas del proyecto.

***De la suspensión temporal del proyecto***

Artículo 174. Cuando se presente caso fortuito o fuerza mayor, o sobrevenga un riesgo al interés público, la contratante, bajo su responsabilidad podrá suspender el proyecto a través del procedimiento previsto en el contrato y en el Reglamento de esta Ley

**SECCIÓN TERCERA**

**DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELATIVA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

***Del resguardo de la información del proyecto***

Artículo 175. Las entidades públicas conservarán en forma ordenada y sistemática toda la documentación e información electrónica, comprobatoria de los actos y contratos materia del presente ordenamiento, cuando menos por un lapso de cinco años, contados a partir de la fecha de terminación del contrato; excepto la documentación contable, en cuyo caso se estará a lo previsto por las disposiciones aplicables.

***De la integración de información en el registro de cartera de proyectos***

Artículo 176. Las entidades públicas deberán remitir a la Secretaría de Infraestructura, la información del contrato que suscriban la convocante y el desarrollador, copia de cada contrato celebrado, sus anexos y convenios modificatorios.

***De la publicación del registro***

Artículo 177. La Secretaría de Infraestructura coordinará y publicará el registro a que se refieren los artículos 75 y 76 para efectos estadísticos con la información relativa a los proyectos.

**SECCIÓN CUARTA**

**DEL SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL**

***Del seguimiento de la contraprestación***

Artículo 178. Los pagos que realicen las entidades públicas como contraprestación por los servicios recibidos al amparo de un contrato se registrarán como gasto corriente, los que incluirán, en su caso, cualquier erogación accesoria derivada de actos jurídicos o de administración que se requieran para la realización del proyecto y que pueda considerarse como gasto corriente, conforme a las disposiciones aplicables. Estas obligaciones no constituirán deuda pública.

Salvo lo que para el caso se indique en la presente ley, las entidades públicas no deberán realizar pago alguno al desarrollador antes de recibir los servicios objeto del contrato, salvo que de manera excepcional la Secretaría autorice pagos anticipados cuyos términos y condiciones, en su caso, deberán establecerse en el contrato respectivo.

***De los montos establecidos como contraprestación***

Artículo 179. Las entidades públicas deberán incluir en el proyecto de sus presupuestos anuales las cantidades que deban pagar al amparo de los contratos durante el año presupuestal correspondiente. Asimismo, deberán señalar en los anexos de los presupuestos, el monto aproximado a pagarse por concepto de valor de terminación en caso de una terminación anticipada por incumplimiento de las entidades públicas, fuerza mayor u otras causas, en caso de que el contrato lo contemple y tal contingencia llegara a realizarse.

***Del informe de los proyectos en materia financiera***

Artículo 180. La Secretaría deberá incluir en la Iniciativa del Presupuesto de Egresos para cada año presupuestal un informe sobre los contratos celebrados por las entidades estatales y la información a que se refiere el artículo anterior.

La Secretaría deberá presentar al Congreso como un apartado especial de su cuenta pública, un informe sobre la situación que guardan los proyectos celebrados y licitados por las entidades estatales y el avance de los proyectos correspondientes durante dicho trimestre.

La Tesorería Municipal de cada ayuntamiento tendrá que incluir en el proceso presupuestal ante el ayuntamiento la información a que se refieren los dos párrafos anteriores.

***Del informe financiero presentado ante el ayuntamiento***

Artículo 181. La Tesorería Municipal de cada ayuntamiento deberá presentar al mismo, dentro de los treinta días siguientes al término de cada trimestre calendario, un informe sobre la situación que guardan los proyectos celebrados y licitados por las entidades municipales y el avance de los proyectos correspondientes durante dicho trimestre.

***De la preferencia de las obligaciones derivadas del proyecto***

Artículo 182. Las entidades públicas considerarán preferentes las obligaciones derivadas de las asociaciones público privadas, por lo cual al elaborar su anteproyecto de presupuesto de egresos deberán contemplar en primer término, tales conceptos de gasto.

***Del informe de la situación de los proyectos ante el Congreso***

Artículo 183. La Secretaría deberá enviar al Congreso dentro de los treinta días siguientes al término de cada trimestre calendario, un informe sobre la situación que guardan los proyectos celebrados por las entidades estatales y el avance de ejecución de los proyectos correspondientes durante dicho trimestre, en atención a lo establecido en el artículo 44 de esta Ley.

***Del informe de la situación actual del proyecto***

Artículo 184. El Tesorero Municipal de cada ayuntamiento deberá incluir en la iniciativa del Presupuesto de Egresos del municipio para cada año presupuestal las cantidades máximas que deban pagar las entidades municipales al amparo de los contratos durante el ejercicio correspondiente. Asimismo, deberán señalar en los anexos, el monto aproximado a pagarse por concepto de valor de terminación anticipada.

El ayuntamiento deberá aprobar en los términos de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, los compromisos plurianuales que deriven de los contratos en cada uno de los presupuestos anuales.

El Tesorero Municipal enviará al órgano de control, dentro de los treinta días siguientes al término de cada trimestre calendario, un informe sobre la situación que guardan los contratos celebrados por las entidades municipales y el avance de ejecución de los proyectos correspondientes durante dicho trimestre.

***De la información presentada***

Artículo 185. La información que se presente al Congreso o, en su caso al ayuntamiento, no limitará la obligación de pago de las entidades públicas, en los términos de los contratos, ni obligará al Estado o al municipio según corresponda, fuera de los recursos que fueron asignados al pago del contrato en el presupuesto correspondiente.

**CAPÍTULO NOVENO**

**DE LAS INCONFORMIDADES, SANCIONES Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**

**SECCIÓN PRIMERA**

**DE LAS INCONFORMIDADES**

***De las inconformidades***

Artículo 186. Los concursantes podrán inconformarse por escrito ante el órgano de control, contra los actos que se lleven a cabo en cualquier etapa o fase del procedimiento o contra el fallo del concurso, que contravengan las condiciones definidas por la convocatoria, las bases o la Ley.

A falta de disposición expresa en el presente capítulo, será aplicable de manera supletoria la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

***Del plazo de la presentación de las inconformidades***

Artículo 187. Las inconformidades deberán presentarse dentro de un plazo de diez días hábiles siguientes a aquél en que ocurra el acto o el inconforme tenga conocimiento de éste. La notificación de los procesos relacionados con los actos del concurso, surtirá efecto al día siguiente del plazo de su realización.

***De la forma en que se presentan las inconformidades***

Artículo 188. Las inconformidades se presentarán por escrito y bajo protesta de decir verdad, debiéndose acreditar la personalidad de quien promueve el escrito, indicar los hechos que le dan motivo, los agravios que se le causan, acompañándose las pruebas documentales y ofreciendo las demás que acrediten su pretensión, sujetándose a las siguientes reglas:

I. En la inconformidad se admitirán toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la confesional de las autoridades mediante absolución de posiciones;

II. Las pruebas que ofrezca el inconforme, deberá relacionarlas con cada uno de los hechos manifestados. Sin el cumplimiento de este requisito serán desechadas;

III. El órgano de control acordará lo que proceda sobre la admisión de la inconformidad y de las pruebas que el promovente hubiere ofrecido, que deberán ser pertinentes e idóneas para dilucidar las cuestiones controvertidas. El desahogo de las mismas se hará dentro del plazo de diez días hábiles a partir de su aceptación, el que será improrrogable; salvo lo señalado en el último párrafo de este artículo;

IV. Se tendrán por no ofrecidas las pruebas de documentos, si éstas no se acompañan al escrito en el que se interponga la inconformidad; en ningún caso serán recabadas por la autoridad, salvo que obren en el expediente en que se haya originado el acto recurrido;

V. El órgano de control, según el caso, podrá pedir que se le rindan los informes que estime pertinentes por parte de quienes hayan intervenido en el acto reclamado; y

VI. La prueba pericial se desahogará con la presentación del dictamen a cargo del perito designado por el promovente. De no presentarse el dictamen dentro del plazo establecido en la fracción III del presente artículo, la prueba será declarada desierta.

De considerarlo pertinente, el órgano de control podrá solicitar dentro de un plazo de tres días hábiles a la entidad pública que corresponda, que designe un perito en la materia, para que lleve a cabo el dictamen correspondiente, el cual deberá emitirse en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación de la solicitud. De haber contradicción entre los dictámenes periciales presentados, se procederá a nombrar un perito tercero en discordia, el cual emitirá su dictamen en un plazo de diez días hábiles contados a partir de que se le notifique la solicitud.

***Del escrito de inconformidad***

Artículo 189. El promovente podrá solicitar en su escrito de inconformidad, la suspensión del procedimiento de adjudicación.

Corresponderá al órgano de control resolver sobre la misma, tomando en cuenta que con ésta no se cause perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

Para que la suspensión proceda, el inconforme deberá garantizar los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar, mediante fianza por el monto que fije el órgano de control en los términos del Reglamento de esta Ley.

***De la substanciación del procedimiento***

Artículo 190. El órgano de control, en atención a las inconformidades a que se refiere el artículo anterior, substanciará el procedimiento y resolverá en un plazo que no excederá de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de su presentación.

En la substanciación del procedimiento, el órgano de control deberá otorgar la participación a los terceros interesados que puedan ser afectados con motivo de la resolución.

Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, el órgano de control podrá iniciar las investigaciones correspondientes en los procedimientos de adjudicación cuando sea necesario para proteger el interés del Estado.

**SECCIÓN SEGUNDA**

**DE LAS SANCIONES**

***De la aplicación de sanciones***

Artículo 191. Los concursantes o desarrolladores que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves, serán sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Las infracciones a las disposiciones de esta Ley, no previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas serán sancionadas por el órgano de control, con multa de cien a veinte mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en la fecha de la infracción.

Los concursantes o desarrolladores, serán sancionados por el órgano de control, con multa de cien a veinte mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en la fecha de la infracción e inhabilitación temporal para participar en procedimientos de adjudicación o celebrar contratos regulados por esta Ley, cuando se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:

I. Los concursantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos, no formalicen el contrato adjudicado por la convocante; y

II. Los desarrolladores que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la entidad pública de que se trate.

La inhabilitación que se imponga no será menor de tres meses ni mayor de cinco años, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que el órgano de control lo haga del conocimiento de las entidades públicas.

El procedimiento administrativo para imponer las sanciones previstas en el presente artículo, sin perjuicio de las demás disposiciones aplicables, se substanciará conforme a lo siguiente:

I. Se notificará a la persona presunta infractora los hechos constitutivos de la infracción, para que dentro del término que para tal efecto se señale, que no podrá ser menor de diez días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se procederá al desahogo de la pruebas y alegatos, hecho lo anterior y dentro de los quince días hábiles siguientes se emitirá resolución considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer; y

III. La resolución será debidamente fundada y motivada, así mismo se notificará por escrito en un plazo que no exceda de diez días hábiles.

***De la imposición de sanciones***

Artículo 192. Para la imposición de las sanciones, el órgano de control tomará en consideración lo siguiente:

I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse;

II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción;

III. La gravedad de la infracción; y

IV. Las condiciones del infractor.

***Del recurso de revisión***

Artículo 193. En contra de las resoluciones que dicte el órgano de control, el interesado podrá interponer ante la misma, recurso de revisión dentro del término de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación.

***De la tramitación del recurso de revisión***

Artículo 194. La tramitación del recurso a que se refiere el artículo anterior se sujetará a las normas siguientes:

I. Se interpondrá por el recurrente mediante escrito debidamente firmado en el que se expresarán nombre, razón o denominación social, domicilio y los agravios que el acto impugnado le cause;

II. Deberá acompañar el documento en que se acredite la personalidad, anexando copia de la resolución impugnada y la constancia de la notificación de ésta última, excepto si la notificación se hizo por correo; y

III. El órgano de control, dictará resolución dentro de los veinte días hábiles siguientes contados a partir de la admisión del recurso.

***De la aplicación de las sanciones***

Artículo 195. El órgano de control aplicará las sanciones que procedan a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de la presente Ley, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

***De la responsabilidad de las personas que intervienen***

Artículo 196. Las responsabilidades a que se refiere la presente Ley, serán independientes de las de orden administrativo, civil o penal que puedan derivar de la comisión de los mismos hechos.

**SECCIÓN TERCERA**

**DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ARBITRAJE**

***Controversias en relación a la Ley***

Artículo 197. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o aplicación de esta Ley serán resueltas por los tribunales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

***Controversias en relación al Contrato***

Artículo 198. Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación o ejecución de los contratos celebrados con base en esta Ley, serán resueltas mediante arbitraje u otro medio alternativo de resolución de conflictos según establezca el contrato correspondiente y, en caso de no llegar a ningún acuerdo, por los tribunales del Estado.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, en los supuestos de rescisión o terminación anticipada del contrato, el procedimiento de arbitraje o medios alternativos de resolución de conflictos señalados anteriormente no serán aplicables.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Al entrar en vigor el presente decreto se abrogará la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11 de septiembre de 2007.

**TERCERO.-** El reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza deberá emitirse a más tardar a los noventa días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

Los lineamientos técnicos y los lineamientos financieros a que se refiere la presente Ley, deberán emitirse en un plazo de ciento ochenta días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.

**CUARTO.-** Los procedimientos ya iniciados conforme a la Ley de Proyectos para Prestación de Servicios para el Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, así como la celebración y perfeccionamiento de los contratos que correspondan, continuarán regulándose bajo dicha normativa hasta su conclusión.

**QUINTO.-** Publíquese el presente decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEXTO.-** El funcionamiento del sistema de juicio en línea iniciará para las entidades municipales de la siguiente manera:

1. 60 días posteriores a la emisión de los Acuerdos Generales a que a que se refiere el Tercero Transitorio por lo que hace a las autoridades municipales de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras.
2. 120 días posteriores a la emisión de los Acuerdos Generales a que a que se refiere el Tercero Transitorio por lo que hace a las autoridades municipales de Acuña, Ramos Arizpe, Parras de la Fuente, Sabinas, San Juan de Sabinas, Castaños y Frontera.
3. 180 días posteriores a la emisión de los Acuerdos Generales a que a que se refiere el Tercero Transitorio por lo que hace a las autoridades municipales del resto de los municipios del Estado.

**SÉPTIMO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, a 28 de noviembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y Hacienda, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa de decreto que reforma la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por la Diputación Permanente del Congreso el día 06 de agosto del año 2019, se acordó turnar a estas comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y Hacienda, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a estas comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y Hacienda, la iniciativa de decreto que reforma la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones, con fundamento en los artículos 90, 92, 94, 102, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa de decreto que reforma la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Los coahuilenses, son merecedores de una justicia real, con procedimientos simplificados en la mejor forma posible, para agilizar su impartición en beneficio de toda la sociedad.*

*Conforme a ello, se ha reconocido la necesidad de impulsar reformas que fortalezcan los cimientos del Estado de Derecho y que agilicen los procesos y etapas para el dictado de una sentencia, permitiendo, a su vez, aumentar la eficiencia y eficacia de nuestros tribunales de justicia y que, como consecuencia de esto, se garantice de forma efectiva una justicia pronta y expedita.*

*En relación con lo anterior, también se ha reconocido que, para alcanzar los postulados antes señalados, existe la posibilidad de simplificar y concentrar los procedimientos judiciales utilizando las tecnologías de la información; es decir, que en el ámbito jurisdiccional se puede utilizar la vía de lo que se ha venido llamando la ciberjusticia, para que las instancias judiciales eleven la eficiencia de su función.*

*Sin duda alguna, el avance de la tecnología implica nuevos retos en el mundo del derecho y uno de ellos es hacer que la justicia sea más asequible para los coahuilenses, ya que, por la gran extensión territorial de nuestro Estado, se ha señalado que existe dificultad para acceder a ella. Así pues, en vía de progreso, resulta imperativo explorar el uso de las modernas herramientas tecnológicas y de comunicación, con el fin de acortar distancias entre la ciudadanía y la justicia efectiva que debe brindarse en el verdadero Estado de Derecho.*

*Las exigencias de brindar un acceso efectivo a la justicia, implica analizar los cambios que demanda la modernidad en los servicios jurisdiccionales y cumplir con los requerimientos legales indispensables para su implementación, por lo cual el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, ha emprendido el establecimiento de estrategias que permitan hacer más eficiente la actividad jurisdiccional.*

*En dicha planeación estratégica, se contempla la inclusión de la telemática, como una herramienta eficaz para la modernización del sistema de impartición de justicia, ya que representa una ventana de oportunidad para facilitar la cooperación y colaboración de los diversos subsistemas que integran el propio sistema de impartición de justicia.*

*Por lo anterior, se considera que el marco jurídico vigente puede actualizarse para alcanzar este objetivo, y para ello es necesario impulsar reformas que bajo los principios de legalidad, máxima publicidad, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad y debido proceso, brinden certeza, seguridad, claridad y agilidad a los procedimientos que los particulares tramitan ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, para dirimir las controversias que se susciten con la administración pública del Estado y de sus Municipios.*

*Con la misma finalidad, se considera que la reforma procedente en este caso, debe incluir como elementos fundamentales la implementación y el establecimiento de lo siguiente:*

1. *Un nuevo esquema de juicio, con simplificación y abreviación de procedimientos.*
2. *La posibilidad de una terminación anticipada del juicio mediante un procedimiento de conciliación.*
3. *La implementación de una modalidad virtual, para la tramitación del nuevo esquema del juicio simplificado y abreviado, en el que se contemplan:*
4. *El uso de la Firma Electrónica Avanzada, en términos de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.*
5. *La aplicación de Cédulas Electrónicas, que como mensajes de datos generados por la autoridad competente, proporcione al destinatario todos los datos necesarios para que conozca la actuación o información que se le comunica.*
6. *El empleo de un Expediente Electrónico, es decir, el conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico, que haga posible su conversión de papel a medios virtuales o su resguardo en dispositivos de almacenamiento de información por medio electrónico, para una administración de justicia más ágil.*
7. *La realización mediante actuaciones electrónicas de: las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y, en su caso, las resoluciones definitivas que se emitan y sean comunicadas por medios electrónicos.*
8. *El acuse de recibo electrónico, que es el mensaje de datos que se emite o genera a través de medios de comunicación electrónica, para acreditar de manera fehaciente el momento de recepción de mensajes y documentos electrónicos relacionados con los actos dentro del procedimiento respectivo.*
9. *El envío y recepción de mensajes de datos y documentos relacionados con los actos jurisdiccionales, que se realicen a través de los medios de comunicación electrónica.*
10. *El uso de un sistema electrónico que tenga énfasis en la forma de presentar la demanda del juicio, para agilizar su procedimiento.*
11. *Un Sistema electrónico de seguimiento de expedientes.*

*En virtud de lo antes señalado, resulta necesario realizar la inclusión de los conceptos y una reforma estructural en la* *Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de permitir la incorporación de soluciones tecnológicas en el proceso y la posibilidad de acceder a un procedimiento abreviado y simplificado en casos específicos, obviando etapas procesales y que, además, privilegie la solución de los conflictos sobre las formalidades, pero respetando la igualdad y los derechos de las partes.*

1. *Dotar de facultades suficientes a las autoridades emisoras de actos administrativos impugnados para que condonen los accesorios de los créditos fiscales controvertidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.*

***Principios, criterios y fundamento de la iniciativa***

***Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza***

1. *Se propone adicionar a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Capítulo XIV, Del Juicio Contencioso Administrativo Sumario, a fin de regular de manera específica la tramitación y resolución del juicio contencioso administrativo sumario, al que independientemente de las particularidades que al efecto se establecen en el referido capítulo, le serán aplicables las disposiciones de la propia ley, con la salvedad de los casos de procedencia y la implementación de términos procesales simplificados y abreviados.*

*Se establecen casos específicos de procedencia, en contra de las resoluciones definitivas establecidas en la fracción II del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, así como de las resoluciones recaídas a sus recursos administrativos, transcribiéndose dicha disposición para una clara referencia:*

***“Artículo 3****. El Tribunal conocerá de los juicios o recursos que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación:*

*…*

***II.*** *Las dictadas por autoridades fiscales estatales y organismos fiscales autónomos estatales y municipales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación;*

*…”*

*Por lo que el Juicio Contencioso Administrativo Sumario, será procedente, siempre que su importe no exceda de cinco veces el valor anual de la UMA.*

*Por el tipo de actos impugnados que son materia de dicho Juicio, es posible abreviar los plazos de respuesta de las autoridades y términos procesales para ampliación de demanda y contestación de la misma, ya que la litis se centra en cuestiones de derecho y en procedimientos plasmados en piezas documentales.*

*Por ello, se contempla la posibilidad de prescindir de la celebración de audiencias, para el desahogo de pruebas, en aquellos casos que el objeto del juicio sea la valoración de pruebas documentales o que por su naturaleza no requieran un especial desahogo, pues ya es de explorado derecho que dichas probanzas, en lo referente a la apreciación de la prueba, cuentan ya con una valoración preestablecida fijada en ley, sin que con ello se vea conculcado el derecho de defensa de las partes, pues, en su caso, las mismas conservan en todo momento el derecho de impugnar la autenticidad de los documentos privados o públicos y demás pruebas que fueren ofrecidas, a través de los medios de impugnación establecidos.*

*De igual forma, se contempla la posibilidad de prescindir de la audiencia de desahogo de pruebas, para el caso en que los puntos controvertidos resulten en cuestiones de derecho, pues las cuestiones puras de derecho, no pueden ser sujetas a prueba y no requieren de trámites procesales posteriores para su desahogo, lo que se traduce en una justicia más expedita y en beneficio del ciudadano al disminuir los términos procesales de respuesta en la emisión de sentencia.*

1. *En forma innovadora, se propone adicionar la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para incorporar un nuevo Capítulo XV, del Procedimiento de Conciliación del Juicio Contencioso Administrativo Sumario, como parte del ejercicio de un efectivo acceso a la justicia pronta y expedita, el cual se tramitará por cuerda separada y sin suspensión del procedimiento, y que privilegia la solución del conflicto sobre las formalidades, en todos los casos que la ley del acto impugnado permita finalizar el juicio por esta vía. La propuesta de la autoridad demandada y la aceptación de la parte demandante será analizada por el magistrado instructor, quien, en caso de no ser contraria a derecho, emitirá dentro del plazo de 3 días declaración de legalidad y validez del mismo, previa garantía del interés fiscal en favor de la autoridad demandada para garantizar su cumplimiento, y, en su caso, decretará el consentimiento del acto impugnado para su cumplimiento. En el supuesto de incumplimiento del demandante, el acto que dio origen al juicio no podrá ser impugnado al tratarse de un acto consentido y podrá continuarse el procedimiento administrativo de ejecución para su cobro.*
2. *También, se propone adicionar a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, un Capítulo XVI, para incorporar, como una novedad en los procedimientos jurisdiccionales del Estado, lo relativo al Trámite del Juicio en Línea, que será de exclusiva aplicación en el caso del Juicio Contencioso Administrativo Sumario.*

*El trámite del Juicio Contencioso Administrativo Sumario en Línea, se realizará conforme a las disposiciones establecidas en el Capítulo XIV de la propia ley, con las particularidades establecidas en el Capítulo XVI, que se propone adicionar a este mismo ordenamiento.*

*Se propone que el juicio en línea sea opcional para el particular demandante, así como para el particular que sea llamado como tercero interesado, cuando ya se encuentre en trámite el juicio contencioso administrativo sumario en línea, por lo que podrá elegir continuarlo en la misma vía o en forma escrita y presencial.*

*En caso de que se elija por el particular el juicio en línea, será obligatorio dicho trámite para las autoridades, sin que ello implique alguna desventaja o desigualdad de partes, toda vez que las dependencias y organismos gubernamentales cuentan con la estructura necesaria y, de cualquier manera, se ha previsto un tiempo previo a la entrada en vigor de las reformas propuestas, para que aquellas autoridades que lo requieran obtengan los recursos humanos y materiales necesarios e implementen los sistemas adecuados para este fin.*

*Lo anterior, es acorde con los tratados internacionales en que el Estado Mexicano es parte, como miembro integrante de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas, al ser un instrumento eficaz para promover ``la buena gobernanza'' y el Estado de Derecho.*

*Además de reportar beneficios en aras de apoyar la pronta y eficaz impartición de la justicia administrativa, a los entes públicos del Estado de Coahuila de Zaragoza y sus Municipios, les significará también, a mediano y largo plazo, un ahorro en tiempo y recursos, que podrán ser aprovechados en sus funciones.*

*Las reformas prevén la facultad para que el Tribunal establezca por medio de acuerdos y/o reglamentos, los lineamientos técnicos y formales que deben cumplir las partes y quienes intervengan en el juicio contencioso administrativo sumario en línea, para garantizar la debida operación y seguridad de los juicios.*

*Todas las promociones y sus anexos deberán ser presentados ante el tribunal de manera digital y contendrán la firma electrónica avanzada que los valide, en términos de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, siendo ésta la única forma autorizada por la legislación federal vigente, para la sustitución de la firma autógrafa.*

*Se establece que en el juicio contencioso administrativo sumario en línea, el tribunal emitirá un acuse de recibo en el que se deberá señalar la fecha y hora de recepción de las promociones y los documentos que sean enviados y dirigidos al expediente correspondiente, lo que dará seguridad jurídica a los particulares de que fueron recibidos debidamente.*

*De la misma forma, se establece que los funcionarios jurisdiccionales que intervienen en el juicio contencioso administrativo sumario, firmarán con su correspondiente firma electrónica avanzada, con la que validarán sus actuaciones.*

*De igual manera, se prevén los casos de contingencia en cuanto a fallas temporales en el Sistema de Justicia en Línea del Tribunal, señalando la forma en la que las partes deberán de cumplir con los términos legales para la presentación de las promociones que correspondan en el trámite de los juicios en los que intervengan.*

***Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza***

***A.*** *Se propone dotar a la Secretaría de Finanzas, por conducto de la Administración Fiscal General, de facultades para condonar total o parcialmente**los accesorios de créditos fiscales, tales como recargos, multas fiscales y gastos de ejecución, en los casos de créditos fiscales fincados sobre contribuciones impugnadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en los asuntos que sea procedente el Juicio Contencioso Administrativo Sumario, para el fin de hacer efectivo el Procedimiento de Conciliación, en los que se podrá condonar total o parcialmente el monto de los accesorios antes referidos.*

***B.*** *Se propone modificar la mecánica de las condonaciones para permitir que sean procedentes cuando se trate de impugnación de créditos fiscales ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el juicio contencioso administrativo sumario en los términos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en cuyo caso quedará la condonación condicionada al cumplimiento de la propuesta de conciliación.*

***Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza***

***A.*** *Se propone dotar de facultades a los tesoreros municipales para realizar propuestas de conciliación y celebrar convenios dentro del juicio contencioso administrativo sumario en los términos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza****.***

***Código Financiero Para Los Municipios Del Estado De Coahuila De Zaragoza***

1. *Se propone la reforma al artículo 383 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, se establecen excepciones a la prohibición para condonar accesorios de los créditos fiscales.*
2. *De igual forma, se propone la adición del artículo 413 bis del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, para establecer que los Presidentes Municipales y los tesoreros municipales, puedan condonar total o parcialmente el monto sobre los accesorios de créditos fiscales, tales como recargos, multas fiscales y gastos de ejecución, en los casos de créditos fiscales fincados sobre contribuciones impugnadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, en los asuntos que sea procedente el Juicio Contencioso Administrativo Sumario, para el fin de hacer efectivo el Procedimiento de Conciliación, en los que se podrá condonar total o parcialmente el monto de los accesorios antes referidos.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de estas comisiones unidas efectuamos el análisis del objeto, contenido y alcances de la iniciativa que se dictamina de lo cual derivaron las siguientes consideraciones:

Por lo que hace al objeto principal de la iniciativa, del estudio y análisis del proyecto se desprende, que el mismo busca modificar la ley del Procedimiento Contencioso Administrativo a efecto de implementar un juicio contencioso administrativo sumario; establecer un procedimiento conciliatorio en los casos en que se trate de este tipo de juicios, y por último incorporar el trámite de juicio en línea tratándose también de juicios sumarios.

Por otro lado, de manera complementaria, se propone la modificación del Código Fiscal, Código Municipal, y del Código Financiero para los Municipios, a efecto de dotar a las autoridades estatales y municipales de las facultades legales necesarias para celebrar los convenios conciliatorios y para condonar total o parcialmente el monto de los accesorios de créditos fiscales con la finalidad de hacer efectivo el procedimiento de conciliación.

El promovente sustenta su propuesta en la necesidad de garantizar a los coahuilenses *“una justicia real, con procedimientos simplificados en la mejor forma posible, para agilizar su impartición en beneficio de toda la sociedad”,* lo que motiva a impulsar cambios normativos qu*e “agilicen los procesos y etapas para el dictado de una sentencia, permitiendo, a su vez, aumentar la eficiencia y eficacia de nuestros tribunales de justicia y que, como consecuencia de esto, se garantice de forma efectiva una justicia pronta y expedita”.*

El promovente también refiere que, hoy en día “*existe la posibilidad de simplificar y concentrar los procedimientos judiciales utilizando las tecnologías de la información; es decir, que en el ámbito jurisdiccional se puede utilizar la vía (…) de la ciberjusticia, para que las instancias judiciales eleven la eficiencia de su función”,* resultando *“imperativo explorar el uso de las modernas herramientas tecnológicas y de comunicación, con el fin de acortar distancias entre la ciudadanía y la justicia efectiva que debe brindarse en el verdadero Estado de Derecho”.*

En este contexto quienes dictaminamos observamos, en lo correspondiente al contenido y alcance de la iniciativa que la misma pretende la modificación de las fracciones II y X del artículo 46, la denominación del capítulo V y la adición de los capítulos XIV, XV y XVI de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Así el capítulo XIV, corresponde al Juicio Administrativo Contencioso Sumario, consignándose, en este capítulo, entre otras cosas, lo siguiente:

* Este juicio contencioso se substanciará ante la Sala competente del Tribunal, **con términos procesales simplificados y abreviados.**
* En lo no previsto, se aplicarán las disposiciones del juicio contencioso administrativo contenidas en la ley y demás disposiciones aplicables.
* Procederá contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por autoridades fiscales estatales y organismos fiscales autónomos estatales y municipales en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, así como contra las resoluciones derivadas de los recursos administrativos que los resuelvan, siempre que su importe no exceda de cinco veces el valor anual de la UMA (alrededor de 154,110.00 pesos por lo que corresponde al presente año), considerándose solo el crédito principal.
* La demanda deberá reunir los requisitos y adjuntar los documentos, previstos en los artículos 46 y 47 de la ley, respectivamente.
* El demandante en el escrito de demanda, deberá manifestar su aceptación o rechazo de someterse al Procedimiento de Conciliación.
* Admitida la demanda, se correrá traslado al demandado para que conteste la demanda y al tercero interesado, si lo hubiere, para que desahogue la vista, en ambos casos el **término será de diez días**.
* En el mismo auto que admita la demanda, se fijará día y hora para la audiencia de desahogo de pruebas, dicha fecha **no excederá de los veinte días hábiles siguientes** al de la emisión de ese auto.
* Se podrá ampliar la demanda en los casos previstos en esta ley, **dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la contestación** **de la demanda,** ordenándose correr traslado de la ampliación y sus anexos a las partes para los efectos de su contestación.
* Si no se adjuntan las copias que deben acompañar a la ampliación de la demanda, el promovente tendrá el plazo de tres días para presentarlas, en caso de no presentarlas dentro de dicho término, se tendrá por no presentada la ampliación de la demanda.
* Se concederá un término de cinco días para contestar la ampliación de la demanda, a la autoridad demandada y al tercero interesado, si lo hubiere, para que desahogue la vista, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del auto que la admita.
* Se establece que el incidente de acumulación, no será procedente en el Juicio Contencioso Administrativo Sumario.
* Se fija la posibilidad de prescindir de la audiencia, cuando las cuestiones controvertidas fueren puramente de derecho; las partes ofrezcan solamente pruebas documentales, o en caso de que las partes, ofrezcan pruebas que por su naturaleza no requieran un especial desahogo, se dictará un auto que certifique esta circunstancia, y otorgará el plazo para la formulación de alegatos.
* Desahogadas las pruebas en su caso, y sin que existan cuestiones pendientes de determinar, se declarará concluida la audiencia y se concederá a las partes un plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al de la conclusión de la audiencia, para que formulen alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta en la sentencia definitiva. Transcurrido el término mencionado, se dictará un auto que certifique que no hay cuestiones pendientes por desahogar y que se formularon o no alegatos, mismo que tendrá efectos de citación para sentencia.
* La sentencia se pronunciará dentro de los **diez días hábiles siguientes**.
* Se prevé que en contra de las sentencias, autos y resoluciones que se dicten en juicios seguidos en el Juicio Contencioso Administrativo Sumario, no procederá recurso alguno.
* Se establece que será causa de terminación anticipada del Juicio Contencioso Administrativo Sumario, la declaración de legalidad y validez que emita el Magistrado Instructor respecto del convenio conciliatorio celebrado entre la parte demandante y la autoridad demandada.
* Con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia y no dejar a los particulares en estado de indefensión se establece que se reconducirá del Juicio Contencioso Administrativo Sumario al Juicio Contencioso Administrativo, en caso de que no se localice al tercero interesado en el domicilio proporcionado, por no ser el domicilio, o encontrarse deshabitado, previa constancia actuarial de tal circunstancia; cuando el demandante manifieste desconocer el domicilio del tercero interesado; se advierta que no se actualizan las causas de procedencia del Juicio Contencioso Administrativo Sumario, hasta antes de la celebración de audiencia, y el demandante no se obligue en forma expresa a presentar testigos y peritos.
* Finalmente el capítulo contiene una disposición concerniente a los casos en que la ley no señale plazo expreso para la práctica de alguna actuación en la vía sumaria, fijándose que éste será de tres días hábiles.

Agotado el estudio del contenido de este apartado de la iniciativa, quienes integramos estas comisiones unidas, observamos que la implementación de la medida legislativa propuesta, traería importantes beneficios al reducirse plazos durante las distintas etapas procesales, en comparación con el Juicio Contencioso Administrativo Ordinario, así de tratarse de un Juicio Sumario con desahogo de audiencia, se reducen entre otros, el plazo para realizar la contestación de 15 a 10 días hábiles, el plazo para la ampliación de la demanda de 15 días a 5 días hábiles, el plazo para formular alegatos de 5 a 3 días hábiles, el plazo para dictar sentencia de 30 a 10 días hábiles, pudiendo reducirse el plazo en la substanciación del juicio en hasta un 41%, si consideramos que se resolvería el procedimiento en la vía sumaria en 68 días, de los 115 que dura actualmente el Juicio Contencioso Administrativo.

Ahora bien, si además de los plazos que se analizaron con anterioridad, se considera que el proyecto contiene supuestos en los que se puede prescindir de la audiencia de desahogo de pruebas, el plazo de substanciación se reduciría en otros 20 días hábiles, lo que se traduce en 58% menos duración que el Juicio Contencioso Administrativo.

Quienes dictaminamos coincidimos en que lo anterior, impacta de manera favorable en la impartición de la justicia administrativa en nuestro Estado, beneficiando a los particulares que lleven procesos de esta naturaleza, al garantizar su acceso a la justicia de manera pronta y expedita, ello sin obviar su impacto en el mejor uso de recursos humanos y financieros del tribunal.

Siguiendo con el análisis de las propuestas contenidas, por lo que hace a la adición del capítulo XV concerniente al Procedimiento de Conciliación del Juicio Contencioso Administrativo Sumario, su contenido comprende lo siguiente:

* Se establece que dicho procedimiento procederá únicamente dentro del Juicio **Contencioso Administrativo Sumario.**
* A efecto de lo anterior, el demandante en el escrito de demanda, deberá manifestar su aceptación o rechazo de someterse al procedimiento, y, en caso de aceptación, anexará una copia más a la demanda para la sustanciación del procedimiento de conciliación en cuadernillo por separado, el que se tramitará sin suspensión del procedimiento del juicio principal.
* La propuesta establece que se dará por concluido el procedimiento de conciliación en caso de la negativa de alguna de las partes al sometimiento del procedimiento de conciliación, o a la propuesta de conciliación en caso de haberse realizado.
* Se dispone que en el auto de admisión, se informará a la autoridad demandada de la manifestación de aceptación o rechazo del demandante para someterse al procedimiento de conciliación, a efecto de que formule de manera conjunta con la contestación, la propuesta de conciliación.
* El silencio de la autoridad demandada con relación al procedimiento conciliatorio, se entenderá como una negativa de aceptación a someterse al mismo.
* Se estipula que la propuesta de conciliación de las autoridades, deberá ser realizada en los términos que las leyes, reglamentos y/o disposiciones generales aplicables a la materia del acto lo permitan, y suscrita por servidor público competente y facultado para ello.
* La iniciativa contempla que una vez recibida la propuesta de la autoridad demandada, se dará vista a la parte demandante, para que en el término de tres días, de manera directa en caso de personas físicas y en caso de personas morales por medio de representante con facultades legales, manifieste su aceptación o rechazo a la propuesta de conciliación.
* La aceptación de la propuesta de conciliación implica el consentimiento del acto impugnado, consentimiento que sólo surtirá sus efectos en caso de que el magistrado instructor declare legal y válido el convenio conciliatorio.
* En caso de que el convenio conciliatorio no sea declarado legal y válido, el consentimiento realizado como requisito de la aceptación de la propuesta de conciliación no surtirá ningún efecto.
* Además el demandante deberá garantizar el interés fiscal del acto originalmente impugnado.
* La propuesta normativa prevé que, una vez realizada la aceptación de la propuesta, y, en su caso, garantizado el interés fiscal, el Magistrado instructor resolverá dentro del plazo de 3 días hábiles, sobre la legalidad y validez del convenio conciliatorio o, en caso contrario, dará por concluido dicho procedimiento.
* Para finalizar, el capítulo dispone, que la declaratoria de legalidad y validez del convenio conciliatorio por el Magistrado Instructor, ante la aceptación de la propuesta de conciliación y del consentimiento de las partes sobre el acto impugnado originalmente, dará por terminado anticipadamente el Juicio Contencioso Administrativo Sumario, en cuyo caso el cuadernillo del procedimiento de la declaratoria de legalidad y validez del convenio conciliatorio, se agregará al expediente principal para debida constancia.
* Además se estipula que el cumplimiento del convenio conciliatorio declarado legal y valido, extingue el acto originalmente impugnado y que en caso de que el Juicio Contencioso Administrativo Sumario concluya por la declaratoria de legalidad y validez del convenio conciliatorio, el acto que dio origen al juicio no podrá ser impugnado nuevamente al tratarse de un acto consentido.
* Por último, se incluye una disposición cuya importancia resalta, puesto que en ella se prevé que el incumplimiento del convenio conciliatorio declarado legal y válido, deja en posibilidad a la autoridad demandada, de iniciar o continuar el procedimiento administrativo de ejecución por el acto originalmente impugnado, conjuntamente con actualizaciones, recargos y demás accesorios originalmente controvertidos, así, las cantidades que se hubieren pagado con motivo del convenio conciliatorio incumplido, se abonarán en primer término a las actualizaciones y recargos, así mismo se establece que en caso de incumplimiento del convenio conciliatorio declarado legal y valido por la autoridad vinculada a su cumplimiento, el demandante podrá por una sola vez, acudir en queja ante el Magistrado que haya conocido del asunto, en términos del Capítulo XI de esta ley, que será aplicable al incumplimiento del convenio conciliatorio declarado legal y valido.

Quienes dictaminamos no pasamos por alto que la implementación de este tipo de procedimientos en la normativa, en los términos planteados, significaría la posibilidad de resolver este tipo de controversias (Juicio Sumario) en un lapso de tiempo considerablemente menor que en la vía del Juicio Contencioso Administrativo, reduciéndose hasta en un 73%, al agotarse el procedimiento en 31 días hábiles.

En este contexto, para los integrantes de estas comisiones unidas resulta adecuado promover la inclusión de medios alternos de solución de controversias en la materia administrativa, en el tenor de que, quienes dictaminamos no podemos dejar de referir, como este tipo de mecanismos han venido a contribuir de manera importante en la impartición de justicia en materias como la civil, la mercantil, la familiar, la penal, entre otras, ayudando a disminuir el rezago que tienen los tribunales y proveyendo a los ciudadanos de opciones más sencillas, amigables y rápidas en la solución de sus controversias.

Así, la conveniencia de utilizar los Medios Alternos de Solución de Controversias ha sido señalada también por instituciones académicas, como es el caso del CIDE, que en el informe correspondiente a los diálogos por la justicia cotidiana, alude que los Medios Alternos de Solución de Controversias constituyen una herramienta importante para garantizar a la población el acceso a la justicia, por lo que promueve el uso intensivo de MASC como política general y la eliminación de disposiciones internas que inhiban su uso objetivo, así como el establecer mecanismos enfocados a la solución de conflictos basados en la comunicación y el restablecimiento de la confianza. En atención a lo referido, coincidimos con la pertinencia de esta adición.

En cuanto hace al Juicio en Línea, quienes dictaminamos observamos queel proyecto de reforma prevé que esta modalidad será optativa para el promovente quien podrá realizarlo a través del Sistema de Juicio en Línea implementado por el Tribunal.

Así, entre otras cosas, se prevé lo siguiente:

* Los documentos electrónicos se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme a la regulación que para tal efecto emita el Tribunal, mediante Acuerdos Generales.
* Los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes.
* El Tribunal, mediante Acuerdos Generales, determinará el funcionamiento del Sistema del Juicio en Línea, publicando los acuerdos respectivos en el Periódico Oficial del Estado.
* El usuario enviará promociones y demandas ingresando a la página web del Tribunal, una vez cumplidos los requerimientos para el acceso al Sistema de Juicio en Línea, que emita el Tribunal mediante Acuerdos Generales para el procedimiento de registro de usuarios.
* Una vez enviada la promoción o demanda, el Sistema de Juicio en línea emitirá acuse electrónico, que especificará la fecha y hora de envío y remitirá la demanda o promoción a la sala que corresponda.
* Las demandas o las promociones en forma electrónica a través del Sistema de Juicio en Línea, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento, conforme al huso horario señalado en acuse de envío. Las enviadas en día inhábil se tendrán por presentadas al día hábil siguiente de su envío.
* Todas las actuaciones en el Juicio Contencioso Administrativo Sumario en Línea, se firmarán de manera electrónica por los servidores jurisdiccionales que en él intervengan.
* Toda actuación electrónica se tendrá por practicada con el acuse que genera el Sistema de Juicio en Línea, asimismo se prevé que el actuario deberá realizar las actuaciones electrónicas que se ordenen en los expedientes electrónicos, dentro de las veinticuatro horas siguientes.
* Con respecto a las notificaciones vía electrónica, se dispone que éstas surtirán sus efectos cuando se genere el acuse electrónico respectivo.
* En el proyecto se estipula que, para los efectos del Juicio Contencioso Administrativo Sumario en Línea, por la referencia del señalamiento de “dar vista a las partes” o “correr traslado”, se entenderá el poner a la disposición de las partes el contenido del expediente electrónico.
* Se prevé que en los casos en los que el demandante opte por presentar su demanda a través del Sistema de Juicio en Línea, las autoridades demandadas tendrán la obligación de comparecer y dar seguimiento al trámite del juicio en la misma vía, para estos efectos la autoridad demandada previo a comparecer al Juicio Contencioso Administrativo Sumario en Línea, deberá estar inscrita ante el Sistema de Juicio en Línea, como emisor de actos administrativos. En este sentido, se fija que cuando las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación de registro, se le notificará emplazándola y corriéndole traslado previa impresión de los documentos digitales y certificación por el Secretario de Acuerdos de la Sala correspondiente que conozca del juicio contencioso administrativo sumario en línea, apercibiéndole que en caso de no cumplir con su obligación de registro en el término de tres días, se le aplicarán las medidas de apremio que autoriza la ley.
* Se dispone que si la autoridad demandada al contestar la demanda la realiza por escrito, se mandará digitalizar la contestación y sus anexos correspondientes, ordenándose que las notificaciones se realicen por lista de acuerdos; y se le aplicarán las medidas de apremio que autoriza la ley hasta su cumplimiento, dando vista al Órgano Interno de Control de la autoridad demandada y al Ministerio Publico para los efectos que resulten procedentes.
* En caso de no aceptar la substanciación del Juicio Contencioso Administrativo Sumario en Línea, en el acuerdo respectivo, se ordenará, que las promociones y anexos presentados, se digitalicen, así como las subsecuentes, debiendo imprimir y mantener actualizado un expediente físico para consulta del tercero interesado.
* Además se prevé que en los casos fortuitos, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Juicio en Línea que hagan imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, cualquiera de las partes deberá dar aviso de inmediato, por los medios autorizados por el tribunal mediante los Acuerdos Generales que al respecto se emitan y que una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de operar el sistema enviará un reporte a los órganos jurisdiccionales correspondientes en el que deberá señalar la causa y el tiempo de la interrupción del sistema, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma, para efectos del conteo del cómputo del plazo suspendido. Así se prevé que, los días en que ocurra la interrupción del sistema del juicio en línea, se considerarán inhábiles para efectos del cómputo de los términos y plazos.
* El proyecto estipula que los documentos que las partes ofrezcan como prueba, deberán exhibirse en forma legible a través de los formatos autorizados mediante Acuerdos Generales emitidos por el Tribunal, y deberán manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Asimismo se dispone que las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de la Ley y de los acuerdos normativos que emitan los órganos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, recepción, validación y notificación.

En atención a este punto los integrantes de estas comisiones unidas observamos que tal y como se desprende de los motivos en los que se basa la iniciativa, el uso de herramientas tecnológicas en procesos jurisdiccionales, hacen al ciudadano más fácil, menos costoso, y más rápido el acceso a la justicia.

En el caso particular de la justicia administrativa en el Estado de Coahuila, quienes dictaminamos coincidimos en que las particularidades del Estado, hacen que esta propuesta sea por demás oportuna.

En este sentido, quienes dictaminamos observamos que el Estado de Coahuila, tiene una amplia extensión territorial, y que actualmente el Tribunal de Justicia Administrativa, tiene sede únicamente en la capital del Estado, lo que significa que aquellos ciudadanos que tengan controversias de las que deba conocer este órgano jurisdiccional autónomo, se tengan que trasladar durante todo, o parte de los procesos jurisdiccionales, causando un impacto negativo en sus recursos económicos, en este orden de ideas tomando en consideración que el Estado de Coahuila está muy por encima del promedio nacional de los ciudadanos que tienen acceso y utilizan el internet, (63.9%) de acuerdo a los datos del comunicado de prensa 208/18 del INEGI de fecha 16 de mayo de 2018, para quienes dictaminamos resulta necesario y conveniente realizar las adecuaciones legales pertinentes a efecto de incorporar este tipo de medidas.

Aunado a lo anterior, desde la perspectiva del órgano jurisdiccional, se estima que la implementación de este tipo de herramientas en su actuar, agilizará los procesos, permitiéndoles un uso más efectivo de recursos materiales y humanos, lo que igualmente contribuirá en forma positiva en una impartición de justicia más eficaz, pronta y expedita.

Por lo que hace a las otras adecuaciones que se plantean a la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, se observa que las mismas persiguen la finalidad de dar congruencia al texto normativo en su totalidad con las adiciones propuestas.

Ahora bien, en cuanto a las reformas a los Códigos Financiero, Fiscal, y Municipal, los integrantes de estas comisiones unidas verificamos que son conducentes, puesto que buscan armonizar estos ordenamientos con la reforma principal a efecto de dotar a las autoridades de facultades legales suficientes a efecto de garantizar la implementación correcta de la ley.

Por último los integrantes de estas comisiones unidas observamos que la iniciativa en su régimen transitorio contempla lo siguiente:

* Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, excepto las disposiciones concernientes al juicio sumario en línea, mismas que serán aplicables cuando el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza lo determine, mediante la emisión de Acuerdos Generales, ello a efecto de dotar del tiempo necesario a la autoridad jurisdiccional de hacer las adecuaciones tecnológicas, contar con las plataformas y programas necesarios para ello.
* Dota a las Autoridades Estatales y Municipales emisoras de actos impugnables ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, un plazo de hasta 60 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que adecuen su normatividad a efecto de que puedan celebrar convenios conciliatorios que pongan fin al procedimiento.
* Prevé un plazo de hasta 60 días hábiles para que las autoridades estatales y municipales, que tengan dentro de sus atribuciones la de emitir actos impugnables de competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, registren las firmas electrónicas de los Servidores Públicos en su calidad de representantes y autorizados, señalando el alcance y límites de su intervención en los trámites jurisdiccionales ante dicho Tribunal y para señalar el tipo de usuarios para acceder a los expedientes electrónicos.

Es menester referir que dentro de los trabajos de análisis y discusión de la iniciativa objeto del presente dictamen, el día 20 de agosto del presente año a las 15:00 horas, se realizó una reunión de trabajo de estas comisiones unidas en la Sala de Juntas Luis Donaldo Colosio, en la cual se contó con la presencia de la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Sandra Luz Rodríguez Wong, quien señaló de manera puntual los beneficios de la reforma, y respondió a las preguntas que con motivo de su intervención se originaron.

Quienes dictaminamos tampoco queremos obviar que el día 2 de septiembre del año en curso la Magistrada Presidenta envió a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales Y Justicia la comunicación identificada como TJA/131/2019, en la que refiere lo siguiente:

*En atención a la presentación realizada el pasado veinte de agosto del presente año, ante las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Asuntos Municipales y Zona[s] Metropolitana[s],así como la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, del Congreso del Estado de Coahuila, en la que surgió la inquietud respecto a las dificultades que puede presentar para los municipios la conectividad al sistema de juicio en línea promovida por este Tribunal, me permito hacer las siguientes consideraciones:*

*1.- Todos los Municipios del Estado de Coahuila cuentan con el servicio de internet según datos estadísticos de INEGI actualizado a MAYO DE 2018.*

*Además a efecto de cumplir con las normas de transparencia de información, contenida en el artículo 57 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, lo anterior para accesar a información financiera en sus enlaces electrónicos, lo cual implica banda ancha suficiente para soportar el tránsito de dicha información financiera, dicha banda ancha soporta, con capacidad sobrada, los archivos para contestar demandas y subir pruebas en forma digital necesarios para cumplir con los perfiles técnicos que requiere la operatividad del juicio en línea.*

*2.- Por otra parte, se tomó en cuenta en favor del ciudadano común, el derecho humano de tener acceso a internet que se encuentra instituido en nuestra Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, contenido en el artículo 8, donde el Estado de Coahuila se encuentra sobre la media nacional en el uso de computadoras y dispositivos móviles para hacer efectivo dicho derecho, es decir 73.5% de la población encuestada, de conformidad al comunicado de prensa 179/19 de fecha 2 de abril de 2019.*

*Es de señalarse que el derecho a acceso a internet se ha proyectado en el Plan de Gobierno de la Presente Administración Estatal así como el Plan Estatal de Desarrollo de la Presente Administración Federal, en el sentido de que dicho derecho de tener acceso a internet, llegue a cada población y que el ciudadano tenga el servicio en plazas públicas, como sucede a la fecha.*

*La anterior información investigada con anterioridad es soporte de la viabilidad del proyecto del sistema de Juicio en Línea, la cual es pública y se encuentra a su disposición para consulta.*

Así una vez agotado el estudio del objeto, análisis y alcances de la propuesta y del análisis de los elementos proporcionados por el Tribunal de Justicia Administrativa, quienes dictaminamos estimamos que hace dos años este congreso emitió la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, con la finalidad de que se creara la ley que regulara lo concerniente a la substanciación y resolución de los juicios de esta naturaleza que se promovieran ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza y que permitiera el adecuado funcionamiento del órgano jurisdiccional en comento.

En este sentido, quienes integramos estas comisiones, estimamos que a dos años de su implementación, se han encontrado importantes áreas de oportunidad para su mejora, como es el caso de la necesidad de incorporar los procedimientos sumario, procedimiento conciliatorio y la posibilidad de que este tipo de procesos se realicen vía electrónica.

Ello cobra mayor relevancia si tomamos en consideración que la justicia administrativa comprende un conjunto de instrumentos jurídicos y procesales para la tutela de los particulares frente a la administración pública, así, resulta indispensable reforzar la protección de los derechos subjetivos y los intereses legítimos de los particulares frente a la actividad de la administración pública o de la conducta en materia administrativa de cualquier autoridad, mediante instrumentos normativos adecuados.

Antes de finalizar queremos puntualizar que el proyecto de dictamen, propone una modificación sustantiva al artículo 109, relativo al desahogo de las pruebas periciales en relación a fijar que tratándose de casos en que se requiera rendir dictamen donde se concederá un plazo máximo de diez días hábiles en lugar de tres.

Lo anterior considerando que este es un plazo idóneo para la emisión del mismo toda vez que se requiere la participación de auxiliares de la administración de justicia como lo son los peritos.

Con respecto al Juicio Sumario en Línea, se modificó el plazo genérico de tres días a cinco días, con el propósito de dar mayor oportunidad a las partes en cada una de las atapas de este procedimiento.

Del mismo modo se hicieron algunas modificaciones de técnica legislativa, en este sentido se trasladó el último párrafo del artículo 105 que disponía que “si al momento del desahogo de la prueba testimonial no comparece el testigo, la prueba se declarará desierta”, al artículo 108, en atención a que es ésta última disposición es la relativa al desahogo de la prueba testimonial.

Por último, en cuanto hace al otorgamiento de facultades al Tesorero y Presidente Municipal de los Ayuntamientos de condenar accesorios de créditos fiscales impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa, contemplada en el artículo 413 BIS Código Municipal, se eliminó la palabra “discrecionalmente”, para en su lugar establecer que deberán hacerlo de manera fundada y motivada, a efecto de revestir estos procedimientos de legalidad y certeza.

Finalmente, se hacen adecuaciones al régimen transitorio para disponer que el funcionamiento del sistema de juicio en línea entrará en vigor sesenta días después de que el Tribunal de Justicia Administrativa emita los Acuerdos Generales correspondientes, y que las disposiciones relativas a este juicio serán aplicables noventa días posteriores a la emisión de los Acuerdos Generales respectivos para el caso de las autoridades municipales, esto con la finalidad de proveer un período de tiempo razonable para que las autoridades que lo requieran realicen las adecuaciones técnicas que les permitan dar cumplimiento a lo consignado en esta reforma.

En virtud de lo antes expuesto, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se reforman las fracciones II y X del 46, y la denominación del capítulo V; se adicionan los artículos 1 Bis, un segundo párrafo al artículo 4, el capítulo XIV con los artículos 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 y 115; el capítulo XV con los artículos 116, 117, 118, 119 y 120; el capítulo XVI con los artículos 121, 122, 123, 124, 125, 126, y 127, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 1 Bis.-** Para los efectos de esta ley se entenderá:

**I.** Contraseña: Conjunto único de caracteres alfanuméricos, clave elegida por el interesado en el proceso de su registro, con la que, en combinación con el usuario, tendrá acceso a la información establecida y autorizada en el Sistema de Juicio en Línea;

**II.** Convenio Conciliatorio: Es el acuerdo celebrado entre la Autoridad Demandada y el Demandante, conformado por la propuesta de conciliación hecha por la autoridad demandada y la aceptación por parte del demandante, en el Procedimiento de Conciliación del Juicio Contencioso Administrativo Sumario;

**III.** Expediente Electrónico: Conjunto de información contenida en archivos electrónicos o documentos digitales que conforman un Juicio Contencioso Administrativo Sumario seguido en línea ante el Tribunal, independientemente de que sea texto, imagen, audio o video, identificado por un número específico;

**IV.** Juicio Contencioso Administrativo: es el procedimiento jurisdiccional, establecido en la Ley para resolver las controversias de competencia del Tribunal de conformidad con esta ley demás disposiciones aplicables;

**V.** Juicio Contencioso Administrativo Sumario: Proceso seguido ante el Tribunal bajo los supuestos establecidos en esta ley, tramitado con términos procesales en forma simplificada y abreviada;

**VI.** Juicio en Línea: Es la vía de Substanciación procesal, a través del Sistema de Juicio en Línea;

**VII.** Nombre Usuario: Es una clave elegida por el interesado en el proceso de su registro para acceder e interactuar en el Sistema de Juicio en Línea, que será la identificación del interesado en el sistema;

**VIII.** Procedimiento de conciliación: Es el procedimiento de conciliación establecido en esta ley dentro del Juicio Contenciosos Administrativo Sumario;

**IX.** Propuesta de conciliación: Es el acto mediante el cual el servidor público facultado propone la emisión de un nuevo acto condicionado a su cumplimiento;

**X.** Sistema de Juicio en Línea: Sistema informático establecido por el Tribunal, para el efecto de registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, transmitir, gestionar, administrar y notificar el procedimiento que se substancie ante el propio Tribunal;

**XI.** Tecnologías digitales: Es el conjunto de procedimientos y estudios que son necesarios para poder realizar avances científicos que son expresados en números y que también permite aumentar y revitalizar de forma constante lo que se denomina calidad estándar de los elementos;

**XII.** Tribunal: Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila Zaragoza, y

**XIII.** UMA: La Unidad de Medida y Actualización.

En lo relativo al uso de medios electrónicos y tecnologías digitales señalados en esta ley, se aplicará las disposiciones contenidas en la Ley de Gobierno Electrónico y Fomento al Uso de Tecnologías Digitales de Información del Estado de Coahuila de Zaragoza.

**Artículo 4.-** ...

En el Juicio en Línea todas las promociones deberán de contener la firma electrónica de quien la formule, la que surtirá los efectos de la firma autógrafa. Sin este requisito no serán válidas, salvo los casos en que esta ley y los Acuerdos Generales que dicte el Tribunal, así lo señalen.

**CAPÍTULO V**

**DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

**Artículo 46.-** …

**I.** …

**II.** Señalar domicilio para recibir notificaciones en la ciudad de Saltillo Coahuila de Zaragoza, en la que tiene su sede el Tribunal;

**III. a** **IX.** …

**X.** La firma autógrafa del demandante, si éste no supiere o no pudiere firmar, lo hará un tercero a su ruego, estampando el primero su huella digital, y

En el caso de Juicio Contencioso Administrativo Sumario en Línea, la firma electrónica del demandante.

**XI.** …

…

…

…

**CAPÍTULO XIV**

**DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SUMARIO**

**Artículo 104.-** El Juicio Contencioso Administrativo Sumario se substanciará ante la Sala competente del Tribunal bajo los supuestos establecidos en la ley, con términos procesales simplificados y abreviados.

En lo no previsto, se aplicarán las disposiciones del juicio Contencioso Administrativo contenidas en esta ley y demás disposiciones aplicables.

El Juicio Contencioso Administrativo Sumario procederá en el supuesto de la fracción II del artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, así como contra las resoluciones derivadas de los recursos administrativos que los resuelvan, siempre que su importe no exceda de cinco veces el valor anual de la UMA.

Para determinar la cuantía sólo se considerará el crédito principal, sin considerar accesorios, tales como recargos, actualizaciones y gastos de ejecución.

Cuando en un mismo acto se contenga más de una resolución o crédito fiscal, la suma de éstos no deberá de exceder la cuantía señalada en este artículo, para efectos de determinar la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo Sumario.

La demanda deberá reunir los requisitos y adjuntar los documentos, previstos en los artículos 46 y 47 de esta ley, respectivamente.

El demandante en el escrito de demanda, deberá manifestar su aceptación o rechazo de someterse a Procedimiento de Conciliación.

El silencio del demandante con relación al procedimiento conciliatorio, se entenderá como una negativa de aceptación.

**Artículo 105.-** Una vez admitida la demanda, se correrá traslado al demandado para que conteste la demanda y al tercero interesado, si lo hubiere, para que desahogue la vista, en ambos casos el término será de diez días.

Si la parte demandada no contestara dentro del término señalado en el párrafo anterior, se declarará la preclusión correspondiente considerando confesados los hechos salvo prueba en contrario.

En el mismo auto que admita la demanda, se fijará día y hora para la audiencia de desahogo de pruebas. Dicha fecha no excederá de los veinte días hábiles siguientes al de emisión de ese auto.

**Artículo 106.-** Se podrá ampliar la demanda en los casos previstos en esta ley, dentro de los cinco días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación de la contestación de la demanda, ordenándose correr traslado de la ampliación y sus anexos a las partes para los efectos de su contestación.

En el escrito de ampliación de demanda se deberá señalar el nombre del demandante y el juicio en que se actúa, adjuntar las copias necesarias para el traslado, las pruebas y documentos, que en su caso se presenten.

Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, será aplicable en lo conducente lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 47 de esta Ley.

Si no se adjuntan las copias a que se refiere este artículo, se requerirá al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días. Si no las presenta dentro de dicho término, se tendrá por no presentada la ampliación de la demanda. Si se trata de las pruebas documentales o de los cuestionarios dirigidos a peritos y testigos, a que se refieren las fracciones IV, V y VI del artículo 47 de esta Ley, las mismas se tendrán por no ofrecidas.

Se concederá un término de cinco días para contestar la ampliación de la demanda, a la autoridad demandada y al tercero interesado, si lo hubiere, para que desahogue la vista, contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación del auto que la admita.

**Artículo 107.-** El incidente de acumulación, no será procedente en el Juicio Contencioso Administrativo Sumario.

**Artículo 108.-** El Magistrado que conozca del Juicio Contencioso Administrativo Sumario, podrá prescindir de la audiencia, en los siguientes casos:

**I.** Cuando las cuestiones controvertidas fueren puramente de derecho;

**II.** Cuando las partes ofrezcan solamente pruebas documentales, y

**III.** Cuando las partes, ofrezcan pruebas que por su naturaleza no requieran un especial desahogo.

Si se prescinde de la audiencia de desahogo de pruebas, se dictará un auto que certifique esta circunstancia, y otorgará el plazo para la formulación de alegatos.

Para la admisión de la prueba testimonial, será requisito que el oferente de la prueba se comprometa a la presentación del testigo en la fecha y hora que se señale para su desahogo.

Si al momento del desahogo de la prueba testimonial no comparece el testigo, la prueba se declarará desierta.

**Artículo 109.-** La prueba pericial, se sujetará a las reglas contenidas en los artículos 55 y 75 de esta Ley, con la salvedad de que todos los plazos serán de cinco días hábiles, a excepción del caso de rendir dictamen donde se concederá un plazo máximo de diez días.

**Artículo 110.-** Desahogadas las pruebas en su caso, y sin que existan cuestiones pendientes de determinar, se declarará concluida la audiencia y se concederá a las partes un plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al de la conclusión de la audiencia, para que formulen alegatos, los que deberán ser tomados en cuenta en la sentencia definitiva.

**Artículo 111.-** Transcurrido el término mencionado en el artículo anterior, se dictará un auto que certifique que no hay cuestiones pendientes por desahogar y que se formularon o no alegatos, mismo que tendrá efectos de citación para sentencia.

Se pronunciará sentencia dentro de los diez días hábiles siguientes.

**Artículo 112.-** En contra de las sentencias, autos y resoluciones que se dicten en juicios seguidos en el Juicio Contencioso Administrativo Sumario, no procederá recurso alguno.

**Artículo 113.-** Es causa de terminación anticipada del Juicio Contencioso Administrativo Sumario, la declaración de legalidad y validez que emita el Magistrado Instructor respecto del convenio conciliatorio celebrado entre la parte demandante y la autoridad demandada.

**Artículo 114.-** Cuando la ley no señale plazo expreso para la práctica de alguna actuación en la vía sumaria, éste será de cinco días hábiles.

**Artículo 115.-** Se reconducirá del Juicio Contencioso Administrativo Sumario al Juicio Contencioso Administrativo, en los siguientes supuestos:

**I.** Cuando no se localice al tercero interesado, en el domicilio proporcionado, por no ser el domicilio, o encontrarse deshabitado, previa constancia actuarial de tal circunstancia;

**II.** Cuando el demandante manifieste desconocer el domicilio del tercero interesado;

**III.** Cuando se advierta que no se actualizan las causas de procedencia del Juicio Contencioso Administrativo Sumario, hasta antes de la celebración de audiencia, y

**IV.** Cuando el demandante no se obligue en forma expresa a presentar testigos y peritos.

**CAPITULO XV**

**DEL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN DEL JUICIO CONTENCIOSO**

**ADMINISTRATIVO SUMARIO.**

**Artículo 116.-** El Procedimiento de Conciliación, procederá únicamente dentro del Juicio Contencioso Administrativo Sumario, bajo los términos y condiciones previstos en esta Ley.

**Artículo 117.-** El demandante en el escrito de demanda, deberá manifestar su aceptación o rechazo de someterse al Procedimiento de Conciliación, y, en caso de aceptación, anexará una copia más del escrito de demanda para la sustanciación del procedimiento de conciliación en cuadernillo por separado, el que se tramitará sin suspensión del procedimiento del juicio principal.

El silencio del demandante con relación al procedimiento conciliatorio, se entenderá como una negativa de aceptación.

En el caso del párrafo anterior, se dará por concluido el procedimiento de conciliación en caso de la negativa de alguna de las partes, al sometimiento del procedimiento de conciliación, o a la propuesta de conciliación en caso de haberse realizado.

**Artículo 118.-** En el auto de admisión, además se informará a la autoridad demandada de la manifestación de aceptación o rechazo del demandante para someterse a Procedimiento de Conciliación, a efecto de que en caso de estimarlo procedente y que sus facultades lo permitan, formule de manera conjunta con la contestación, propuesta de conciliación.

El silencio de la autoridad demandada con relación al procedimiento conciliatorio, se entenderá como una negativa de aceptación a someterse al mismo.

La propuesta de conciliación de las autoridades, deberá ser realizada en los términos que las leyes, reglamentos y/o disposiciones generales aplicables a la materia del acto lo permitan, y suscrita por servidor público competente y facultado para ello, lo que se deberá acreditar.

Recibida la propuesta de la autoridad demandada, se dará vista a la parte demandante por el término de tres días, para que el demandante de manera directa en caso de personas físicas y en caso de personas morales por medio de representante con facultades legales suficientes, manifieste su aceptación o rechazo a la propuesta de conciliación. La aceptación de la propuesta de conciliación implica el consentimiento del acto impugnado, consentimiento que solo surtirá sus efectos en caso de que el magistrado instructor declare legal y válido el convenio conciliatorio. En caso de que el convenio conciliatorio no sea declarado legal y válido, el consentimiento realizado como requisito de la aceptación de la propuesta de conciliación no surtirá ningún efecto.

El demandante deberá garantizar el interés fiscal del acto originalmente impugnado, dentro de los cinco días siguientes al que le fuera notificada la vista a que se refiere el párrafo anterior. Es obligación garantizar el interés fiscal en toda propuesta de acuerdo conciliatorio en que se otorguen plazos para el cumplimiento del convenio conciliatorio, sin este requisito no será válido.

**Artículo 119.-** Realizada la aceptación de la propuesta, y, en su caso, garantizado el interés fiscal, el Magistrado instructor resolverá dentro del plazo de 3 días hábiles, sobre la legalidad y validez del convenio conciliatorio o, en caso contrario, dará por concluido el procedimiento conciliatorio.

La declaratoria de legalidad y validez del convenio conciliatorio por el Magistrado Instructor, ante la aceptación de la propuesta de conciliación y del consentimiento de las partes sobre el acto impugnado originalmente, dará por terminado anticipadamente el Juicio Contencioso Administrativo Sumario, en cuyo caso el cuadernillo del procedimiento de la declaratoria de legalidad y validez del convenio conciliatorio, se agregará al expediente principal para debida constancia.

El cumplimiento del convenio conciliatorio declarado legal y valido, extingue el acto originalmente impugnado.

En caso de que el Juicio Contencioso Administrativo Sumario concluya por la declaratoria de legalidad y validez del convenio conciliatorio, el acto que dio origen al juicio no podrá ser impugnado nuevamente al tratarse de un acto consentido.

**Artículo 120.-** El incumplimiento del convenio conciliatorio declarado legal y válido, deja en posibilidad a la autoridad demandada, de iniciar o continuar el procedimiento administrativo de ejecución por el acto originalmente impugnado, conjuntamente con actualizaciones, recargos y demás accesorios originalmente controvertidos, y las cantidades que se hubieren pagado con motivo del convenio conciliatorio incumplido, se abonarán en primer término a las actualizaciones y recargos.

En caso de incumplimiento del convenio conciliatorio declarado legal y valido por la autoridad vinculada a su cumplimiento, el demandante podrá por una sola vez, acudir en queja ante el Magistrado que haya conocido del asunto, en términos del Capítulo XI de esta ley, que será aplicable al incumplimiento del convenio conciliatorio declarado legal y valido.

**CAPITULO XVI**

**DEL TRÁMITE DEL JUICIO EN LÍNEA**

**Artículo 121.-** Es optativo para el promovente tramitar el Juicio Contencioso Administrativo Sumario, en forma escrita impresa en papel o través del Sistema de Juicio en Línea implementado por el Tribunal.

Los servidores públicos que intervengan en la actividad jurisdiccional, en los trámites de Juicio en Línea, utilizarán la firma electrónica para la emisión de actos y resoluciones en las que intervengan.

Los documentos electrónicos se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Tribunal, mediante Acuerdos Generales.

Cuando las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes, en los términos de esta ley.

El Tribunal, mediante Acuerdos Generales, determinará el funcionamiento del Sistema del Juicio en Línea, publicando los acuerdos respectivos tanto en el Periódico Oficial del Estado como en su página de internet.

**Artículo 122.**- La presentación de las demandas o las promociones de término en forma electrónica a través del Sistema de Juicio en Línea, podrán enviarse hasta las veinticuatro horas del día de su vencimiento, conforme al huso horario señalado en acuse de envío.

Las demandas o promociones enviadas en día inhábil se tendrán por presentadas al día hábil siguiente de su envío.

**Artículo 123.-** El usuario enviará promociones y demandas ingresando a la página web del Tribunal, una vez cumplidos los requerimientos para el acceso al Sistema de Juicio en Línea, que emita el Tribunal mediante Acuerdos Generales para el procedimiento de registro de usuarios.

Enviada la promoción o demanda, el Sistema de Juicio en línea emitirá acuse electrónico, que especificará la fecha y hora de envío y remitirá la demanda o promoción a la sala que corresponda.

Todas las actuaciones en el Juicio Contencioso Administrativo Sumario en Línea, se firmarán de manera electrónica por los servidores jurisdiccionales que en él intervengan.

Toda actuación electrónica se tendrá por practicada con el acuse que genera el Sistema de Juicio en Línea.

El actuario deberá realizar las actuaciones electrónicas que se ordenen en los expedientes electrónicos, dentro de las veinticuatro horas siguientes. Si la notificación no se efectúa dentro de los términos establecidos en el presente artículo, ello no será motiva de anulación de la misma

Las notificaciones vía electrónica surtirán sus efectos cuando se genere el acuse electrónico respectivo.

**Artículo 124.-** Las partes podrán autorizar en términos del artículo 13 de esta ley, a las personas previamente registradas como usuarios del Sistema de Juicio en Línea, señalando el nombre de usuario y los alcances de su autorización.

**Artículo 125.-** Cuando el demandante opte por presentar su demanda a través del Sistema de Juicio en Línea, las autoridades demandadas tendrán la obligación de comparecer y dar seguimiento al trámite del juicio en la misma vía.

La autoridad demandada previo a comparecer al Juicio Contencioso Administrativo Sumario en Línea, deberá estar inscrita ante el Sistema de Juicio en Línea, como emisor de actos administrativos.

En el caso de que las autoridades demandadas no cumplan con esta obligación de registro, se le notificará por oficio en los términos del artículo 29 de esta ley, emplazándola y corriéndole traslado previa impresión de los documentos digitales y certificación por el Secretario de Acuerdos de la Sala correspondiente que conozca del juicio contencioso administrativo sumario en línea, apercibiéndole que en caso de no cumplir con su obligación de registro en el término de tres días, se le aplicarán las medidas de apremio que autoriza la ley.

Si la autoridad demandada al contestar la demanda la realiza por escrito, se mandará digitalizar la contestación y sus anexos correspondientes, ordenándose que las notificaciones se realicen por lista de acuerdos; y se le aplicarán las medidas de apremio que autoriza la ley hasta su cumplimiento, dando vista al Órgano Interno de Control de la autoridad demandada y al Ministerio Publico para los efectos que resulten procedentes.

El tercero interesado al contestar la demanda podrá elegir la opción de continuar el trámite de juicio en línea o bien elegir la forma escrita mediante el expediente físico impreso en papel.

En caso de no aceptar la substanciación del Juicio Contencioso Administrativo Sumario en Línea, en el acuerdo respectivo, se ordenará, que las promociones y anexos presentados, se digitalicen, así como las subsecuentes, debiendo imprimir y mantener actualizado un expediente físico para consulta del tercero interesado.

El expediente físico a que se refiere el párrafo anterior deberá coincidir, con el expediente electrónico, certificado por el Secretario de Acuerdos.

**Artículo 126.-** Cuando por caso fortuito, fuerza mayor o por fallas técnicas se interrumpa el funcionamiento del Sistema de Juicio en Línea haciendo imposible el envío y la recepción de promociones dentro de los plazos establecidos en la ley, cualquiera de las partes deberá dar aviso de inmediato, por los medios autorizados por el tribunal mediante los Acuerdos Generales que al respecto se emitan.

Una vez que se haya restablecido el sistema, la unidad administrativa encargada de operar el sistema enviará un reporte a los órganos jurisdiccionales correspondientes en el que deberá señalar la causa y el tiempo de la interrupción del sistema, indicando la fecha y hora de inicio y término de la misma, para efectos del conteo del cómputo del plazo suspendido.

Para efectos del párrafo anterior, una vez restablecido el Sistema del Juicio en Línea, en los vencimientos de término, los días en que ocurra la interrupción del sistema del juicio en línea, se considerarán inhábiles para efectos del cómputo de los términos y plazos.

**Artículo 127.-** Los documentos que las partes ofrezcan como prueba, incluyendo expedientes administrativos, deberán exhibirlos en forma legible a través de los formatos autorizados mediante Acuerdos Generales emitidos por el Tribunal, se deberá manifestar la naturaleza de los mismos, especificando si la reproducción digital corresponde a una copia simple, una copia certificada o al original y tratándose de esta última, si tiene o no firma autógrafa. Los particulares deberán hacer esta manifestación bajo protesta de decir verdad, la omisión de la manifestación presume en perjuicio sólo del promovente, que el documento digitalizado corresponde a una copia simple.

Las pruebas documentales que ofrezcan y exhiban las partes tendrán el mismo valor probatorio que su constancia física, siempre y cuando se observen las disposiciones de la presente Ley y de los acuerdos normativos que emitan los órganos del Tribunal para asegurar la autenticidad de la información, así como de su transmisión, recepción, validación y notificación.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Se modifica el párrafo tercero del artículo 67 y se adiciona el artículo 38 bis, delCódigo Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 38 BIS.** La Secretaría de Finanzas por conducto de la Administración Fiscal General podrá condonar total o parcialmente accesorios de los créditos fiscales impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza mediante el juicio contencioso administrativo sumario, en los términos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Esta condonación quedará condicionada al cumplimiento de la propuesta de conciliación de conformidad con la misma ley.

**ARTICULO 67.** …

…

Sólo procederá la condonación de multas que hayan quedado firmes y siempre que un acto administrativo conexo no sea materia de impugnación, salvo cuando se impugne el crédito fiscal ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el juicio contencioso administrativo sumario en los términos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en cuyo caso quedará la condonación condicionada al cumplimiento de la propuesta de conciliación.

**ARTÍCULO TERCERO.** Se adiciona un segundo párrafo a la fracción XIII del artículo 129, delCódigo Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO. 129.** …

I. a la XII. **…**

XIII.…

Realizar propuestas de conciliación y celebrar convenios dentro del juicio contencioso administrativo sumario en los términos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza**.**

XIV. a la XVI. …

**ARTÍCULO CUARTO.** Se reforman el primer párrafo del artículo 383 y se adiciona un artículo 413 Bis, del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 383.-** No se otorgará condonación total ni parcial de contribuciones o sus accesorios en favor de una o más personas determinadas, salvo los supuestos señalados en los artículos 413 y 413 BIS de este código.

…

…

**ARTICULO 413 BIS.-** El Presidente Municipal o el tesorero municipal, apreciando las circunstancias del caso y de manera fundada y motivada, podrán condonar total o parcialmente los accesorios a que se refiere el artículo 10 de este código, incluyendo multas fiscales, respecto de los créditos fiscales impugnados ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila de Zaragoza, mediante el juicio contencioso administrativo sumario.

La condonación quedará condicionada al cumplimiento de la propuesta de conciliación de conformidad con la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**TERCERO.**- La regulación referente al trámite del Juicio Contencioso Administrativo Sumario en Línea, entrará en vigor sesenta días después de la fecha en que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza emita los Acuerdos Generales respectivos.

**CUARTO.-** Las Autoridades Estatales y Municipales emisoras de actos impugnables ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, dentro del plazo de 60 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán adecuar su normatividad para celebrar convenios conciliatorios que pongan fin al procedimiento, conforme a lo previsto en este mismo decreto.

**QUINTO.-** Las Autoridades Estatales y Municipales que, dentro de sus atribuciones puedan emitir actos impugnables de competencia para el conocimiento del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, deberán de registrar las firmas electrónicas de los Servidores Públicos en su calidad de representantes y autorizados, señalando el alcance y límites de su intervención en los trámites jurisdiccionales ante dicho Tribunal y señalar el tipo de usuarios para acceder a los expedientes electrónicos, en un plazo no mayor a 60 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del mismo.

**SEXTO.-** El funcionamiento del sistema de juicio en línea iniciará para las entidades municipales de la siguiente manera:

1. 60 días posteriores a la emisión de los Acuerdos Generales a que a que se refiere el Tercero Transitorio por lo que hace a las autoridades municipales de Saltillo, Torreón, Monclova y Piedras Negras.
2. 120 días posteriores a la emisión de los Acuerdos Generales a que a que se refiere el Tercero Transitorio por lo que hace a las autoridades municipales de Acuña, Ramos Arizpe, Parras de la Fuente, Sabinas, San Juan de Sabinas, Castaños, Frontera.
3. 180 días posteriores a la emisión de los Acuerdos Generales a que a que se refiere el Tercero Transitorio por lo que hace a las autoridades municipales del resto de los municipios del Estado.

**SÉPTIMO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Asuntos Municipales y Zonas Metropolitanas, Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y Hacienda, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. Josefina Garza Barrera. (Coordinadora), Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván (Secretaria), Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares, Dip. Rosa Nilda González Noriega, Dip. Jesús Andrés Loya Cardona, Dip. Juan Antonio García Villa (Coordinador), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos (Secretaria), Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández Dip. María Eugenia Cázares Martínez (Coordinadora), Dip. Verónica Boreque Martínez González (Secretaria) y Dip. María Esperanza Chapa García.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de noviembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES Y ZONAS METROPOLITANAS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA. (COORDINADORA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GABRIELA ZAPOPAN GARZA GALVÁN.**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES.** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA.** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JESÚS ANDRÉS LOYA CARDONA.** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y CUENTA PÚBLICA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JUAN ANTONIO GARCÍA VILLA (COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS (SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ.** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE.** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ELISA CATALINA VILLALOBOS HERNÁNDEZ.** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA.** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR.** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE HACIENDA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZAREZ MARTÍNEZ (COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ (SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAMN AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia y de Hacienda de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza relativo a la Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan los siguientes ordenamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día del mes de 23 de octubre del año 2019, se acordó turnar a estas Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, y de Hacienda, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el 28 de octubre del año en curso, se turnó a estas Comisiones Unidas, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 90, 92, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan los siguientes ordenamientos del Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Suscrita por el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Para esta administración, la protección de víctimas ha sido tema primordial, como parte de las acciones que se realizan para garantizar esta protección, se ha llevado a cabo un análisis respecto a los instrumentos legislativos que requieran ser ajustados a las necesidades actuales y establecer un marco legal protector de los derechos humanos, marcando las pautas a seguir para garantizar su cumplimiento.*

*Uno de los temas principales en cuanto a protección de víctimas ha sido la desaparición de personas, buscando para ellos la mayor protección de derechos humanos, tanto de la persona desaparecida, así como también de sus familiares, tanto a nivel federal como a nivel estatal.*

*Es así, que a nivel federal se cuenta con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, así como la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.*

*En el Estado, se publicó la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo este el inicio de la armonización a la legislación estatal, asimismo, en fecha 28 de mayo de 2019, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza.*

*Como parte de los trabajos legislativos que corresponde esta obligación de protección, mediante el trabajo en conjunto con los colectivos de familias de personas desaparecidas del Estado, Alas de Esperanza de Allende, Coahuila, A.C., Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, A.C., Fuerzas Unidas Por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M), Asociación Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, A.C., Grupo V.I.D.A., Laguna A.C. (Víctimas por sus Derechos en Acción), Buscando Desaparecidos México, A.C. (BÚSCAME), así como también con el apoyo de la asociación civil Fray Juan de Larios y del Grupo Autónomo de Trabajo, es que estas acciones se armonizan los ordenamientos jurídicos que se requieren, para la debida aplicación de las disposiciones que garanticen la protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.*

*En esta tercera etapa de armonización de la legislación estatal, se trabajaron aquellos instrumentos en que se establecen diversas obligaciones por parte de los ciudadanos del Estado, así como sus derechos, entre los que se incluyen las obligaciones de carácter fiscal y los derechos de las víctimas, como lo son el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza y la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza.*

*Todos los ciudadanos del Estado tienen obligaciones de carácter fiscal y en caso de que estos no se cumplan se tiene la potestad de llevar a cabo procedimientos que aseguren su cumplimiento, sin embargo, cuando una persona desaparece, su situación no le permite dar cumplimiento a estas obligaciones, por lo cual se deben establecer los procedimientos y excepciones necesarios para que se suspendan aquellos procedimientos que los instrumentos normativos establecen para obligar a su cumplimiento por parte de los contribuyentes.*

*De esta manera, se modifica el Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para que aquellos actos administrativos que pretendan obligar al contribuyente al cumplimiento del crédito fiscal sean suspendidos, así como también que no se puedan aplicar los medios de apremio que el Código otorga a las autoridades fiscales en los casos que el contribuyente se oponga u obstaculice el ejercicio de sus facultades, protegiendo así los derechos de la persona desaparecida.*

*Esta protección se garantiza desde el momento en que se cuente con denuncia, reporte o queja respecto a la desaparición de la persona contribuyente, lo cual será aplicable sólo durante los cinco meses posteriores a ello, y una vez transcurridos, se deberá solicitar por parte de persona legitimada para ello, la Declaración Especial de Ausencia, con lo que se garantiza la continuidad en la protección de estos derechos de la persona desaparecida.*

*En el mismo sentido, el Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza establece disposiciones fiscales correspondientes a los municipios, así como los procedimientos contencioso-administrativos, de los cuales se protege al contribuyente que se encuentre desaparecido para que estos se suspendan desde el momento de la denuncia, queja o reporte de la desaparición, hasta por un plazo de cinco meses, así como posterior al vencimiento del plazo, en caso de que se haya solicitado por persona legitimada la Declaración Especial de Ausencia.*

*La Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, establece la regulación de los ingresos de la Hacienda Pública del Estado, por los diversos conceptos tributarios que establece el Código Fiscal del Estado, entre los cuales se establecen los relativos al Registro Civil y el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, las cuales brindan diversos servicios que requieren pago de derechos.*

*Sin embargo, como parte de la garantía de protección a los derechos de las personas desaparecidas y sus familias para facilitar los trámites relacionados al procedimiento de Declaración Especial de Ausencia, como lo son la expedición de copias certificadas del registro civil e inscripción para el trámite del procedimiento de declaración especial de ausencia o de la resolución correspondiente, se les exceptúa el pago correspondiente a las mismas.*

*Así también, como parte del procedimiento de Declaración Especial de Ausencia, se requiere hacer publicaciones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, para lo cual, se establece que aquellas publicaciones relativas a este procedimiento, no causarán derechos para quien deba llevar a cabo las mismas.*

*Por otro lado, en la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, cuyo objeto, entre otros, es reconocer, regular y garantizar los derechos de las víctimas del delito, se incluyen al artículo 8 como parte de los instrumentos internacionales, nacionales y locales que establecen derechos de las víctimas, a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, así como las leyes que rigen dichas materias en el Estado.*

*Como parte de las obligaciones de las autoridades estatales y municipales, se establecen funciones y atribuciones por parte de los asesores o representantes legales en materia penal y de procuración de justicia, incluyéndose en ellas, los casos de desaparición de personas, debiendo asesorar a las víctimas de manera oportuna y detallada respecto al procedimiento de Declaración Especial de Ausencia, otorgándoles la facultad de solicitar a petición de persona facultada para ello, la Declaración Especial de Ausencia y dar seguimiento hasta su resolución y cumplimiento.*

*Con la armonización de estos instrumentos, se concluye el proceso de armonización legislativa en aquellos instrumentos normativos que así lo requerían para dar efectivo cumplimiento a lo que establece la Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza, otorgando la protección más amplia a los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de estas comisiones unidas, efectuamos el estudio y análisis de la reforma, revisando que la misma tiene por objeto en primer término establecer las excepciones necesarias por lo que hace a los procedimientos de ejecución de obligaciones fiscales y medidas de apremio en este tipo de procedimientos, en el caso de personas desaparecidas; en segundo término, eliminar el cobro de derechos de los trámites estrechamente relacionados con el procedimiento de declaración de ausencia como lo son las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, o los servicios prestados por concepto de inscripción y registro de actas de adopción, inscripción y registro de actas de tutela, la inscripción y registro de adopción y/o tutela que se realice de forma automatizada, así como la expedición de copias certificadas del registro civil e inscripción solicitadas para el trámite del procedimiento; por último los integrantes de estas comisiones unidas verificamos que la iniciativa también busca establecer en la ley de víctimas del estado, en lo relativo a la asistencia jurídica y representación legal que éstas también se compondrán de la asistencia que se brinde enlos casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares hasta su resolución; e incorporar la asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación en los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares durante el proceso de declaración Especial de ausencia, dentro de las medidas de atención y asistencia en materia de procuración de justicia.

Así, una vez revisado el objeto de la misma, procedimos a evaluar el contenido de la reforma, lo cual se sintetiza en el siguiente cuadro comparativo:

1. **Código Fiscal:**

Se proponen modificaciones en el sentido siguiente:

|  |  |
| --- | --- |
| **Código Vigente** | **Modificación** |
| **ARTICULO 40.** Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, se opongan u obstaculicen el ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán aplicar como medidas de apremio, indistinta o conjuntamente, las siguientes:  **I.** Solicitar el auxilio de la fuerza pública.  Para los efectos de esta fracción, los cuerpos de seguridad o policiales deberán prestar en forma expedita el apoyo que solicite la autoridad fiscal.  El apoyo a que se refiere el párrafo anterior consistirá en efectuar las acciones necesarias para que las autoridades fiscales ingresen al domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, oficinas, locales, puestos fijos o semifijos, lugares en donde se almacenen mercancías y en general cualquier local o establecimiento que utilicen para el desempeño de sus actividades los contribuyentes, así como para brindar la seguridad necesaria al personal actuante, y se solicitará en términos de los ordenamientos que regulan la seguridad pública de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios o, en su caso, de conformidad con los acuerdos de colaboración administrativa que tengan celebrados con la Federación.  **II.** Imponer la multa que corresponda en los términos de este Código.  **III.** Practicar el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación del contribuyente o responsable solidario, respecto de los actos, solicitudes de información o requerimientos de documentación dirigidos a éstos, conforme a lo establecido en el artículo 40-A de este Código.  Para lo dispuesto en esta fracción, la autoridad que practique el aseguramiento precautorio deberá levantar acta circunstanciada en la que precise de que manera el contribuyente se opuso u obstaculizó físicamente el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, y deberá observar en todo momento las disposiciones contenidas en la Sección II del Capítulo III del Título V de este Código. | **ARTICULO 40.** …  I. a la III. …  **En caso de que el contribuyente se encuentre desaparecido y exista denuncia, reporte o queja de su desaparición en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, no serán procedentes las medidas de apremio durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia hasta su resolución, de conformidad con la ley especial en la materia.**  **Las medidas de apremio a que se refiere este artículo, no serán procedentes cuando el contribuyente cuente con declaración especial de ausencia de conformidad con la ley especial en la materia.** |
| **ARTÍCULO 126.** No se ejecutarán los actos administrativos cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requisitos legales. Tampoco se ejecutará el acto que determine un crédito fiscal hasta que venza el plazo de quince días siguientes a la fecha en que surta efectos su notificación. Si a más tardar al vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se hubiere intentado y se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución.  Cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación, el plazo para garantizar el interés fiscal será de tres meses siguientes a partir de la fecha en que se interponga cualquiera de los referidos medios de defensa, debiendo el interesado acreditar ante la autoridad fiscal que lo interpuso dentro de los quince días siguientes a esa fecha, a fin de suspender el procedimiento administrativo de ejecución.  Cuando en el medio de defensa se impugnen únicamente algunos de los créditos determinados por el acto administrativo, cuya ejecución fue suspendida, se pagarán los créditos fiscales no impugnados con los recargos correspondientes.  Si se controvierten sólo determinados conceptos de la resolución administrativa que determinó el crédito fiscal, el particular pagará la parte consentida del crédito y los recargos correspondientes, mediante declaración complementaria y garantizará la parte controvertida y sus recargos.  En el supuesto del párrafo anterior, si el particular no presenta declaración complementaria, la autoridad exigirá la cantidad que corresponda a la parte consentida, sin necesidad de emitir otra resolución. Si se confirma en forma definitiva la validez de la resolución impugnada, la autoridad procederá a exigir la diferencia no cubierta, con los recargos causados.  No se exigirá garantía adicional si en el procedimiento administrativo de ejecución ya se hubieran embargado bienes suficientes para garantizar el interés fiscal o cuando el contribuyente declare bajo protesta de decir verdad que son los únicos que posee. En el caso de que la autoridad compruebe por cualquier medio que esta declaración es falsa podrá exigir garantía adicional, sin perjuicio de las sanciones que correspondan. En todo caso, se observará lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 123 de este Código.  En caso de negativa o violación a la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, los interesados podrán ocurrir al superior jerárquico de la autoridad ejecutora conducente, de conformidad con lo dispuesto en las reglas establecidas por este Código para el citado incidente de suspensión de la ejecución. | **ARTÍCULO 126.** …  …  …  …  …  …  …  **En caso de que el contribuyente se encuentre desaparecido y exista denuncia, reporte o queja de su desaparición en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal en su contra, durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia hasta su resolución, de conformidad con la ley especial en la materia.**  **Cuando el contribuyente cuente con declaración especial de ausencia de conformidad con la ley especial en la materia, se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal en su contra, hasta que sea encontrado con o sin vida.** |
| **ARTICULO 127.** Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la Ley, mediante procedimiento administrativo de ejecución.  Se podrá practicar embargo precautorio, sobre los bienes o la negociación del contribuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En este caso, la autoridad trabará el embargo.  La autoridad que practique el embargo precautorio levantará acta circunstanciada en la que precise las razones del embargo.  El embargo precautorio practicado antes de la fecha en que el crédito discal sea exigible, se convertirá en definitivo al momento de la exigibilidad de dicho crédito fiscal y se continuará el procedimiento administrativo de ejecución.  Si el particular garantiza el interés fiscal en los términos del artículo 128 de este Código, se levantará el embargo.  Son aplicables al embargo precautorio a que se refiere este artículo y al previsto por el artículo 41, fracción III de este Código, las disposiciones establecidas para el embargo y para la intervención en el procedimiento administrativo de ejecución que, conforme a su naturaleza, le sean aplicables. | **ARTICULO 127.** …  …  …  …  …  …  **En caso de que el contribuyente adeude un crédito fiscal, se encuentre desaparecido y exista denuncia, reporte o queja de su desaparición en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, se suspenderá su cobro durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia hasta su resolución, de conformidad con la ley especial en la materia.**  **Cuando el contribuyente adeude créditos fiscales y cuente con declaración especial de ausencia de conformidad con la ley especial en la materia, se suspenderá su cobro ante cualquier instancia hasta que sea localizado con o sin vida.** |

1. **Código Financiero para los Municipios.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Código Vigente** | **Propuesta de Modificación** |
| **ARTÍCULO 423.-** Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución.  También se exigirá su pago mediante el procedimiento administrativo de ejecución de acuerdo con las disposiciones de este código, tratándose de:  **I.** La responsabilidad civil en que incurran quienes manejen fondos públicos del municipio.  **II.** Las fianzas constituidas por disposición de la ley o por acuerdo de las autoridades judiciales o administrativas cuando sean exigibles y cuyo cobro ordene la autoridad competente. | **ARTÍCULO 423.-** …  …  **En caso de que el contribuyente adeude un crédito fiscal, se encuentre desaparecido y exista denuncia, reporte o queja de su desaparición en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, se suspenderá su cobro durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia hasta su resolución, de conformidad con la ley especial en la materia.**  **Cuando el contribuyente adeude créditos fiscales y cuente con declaración especial de ausencia de conformidad con la ley especial en la materia, se suspenderá su cobro ante cualquier instancia hasta que sea localizado con o sin vida.** |
| **ARTÍCULO 469.-** Las autoridades fiscales municipales tendrán facultades para determinar que se ha cometido una infracción de las enunciadas en este capítulo y para imponer las sanciones procedentes que establezca este código.  La aplicación de las sanciones administrativas que procedan, se hará sin perjuicio de que se exijan las obligaciones fiscales respectivas, y de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal. | **ARTÍCULO 469.-** …  …  **En caso de que el contribuyente o deudor solidario tenga alguna sanción por las infracciones previstas en esta Sección, se encuentre desaparecido y exista denuncia, reporte o queja de su desaparición en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, se suspenderá su cobro durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia hasta su resolución, de conformidad con la ley especial en la materia.**  **Cuando el contribuyente o deudor solidario tenga alguna sanción por las infracciones previstas en esta Sección y cuente con declaración especial de ausencia de conformidad con la ley especial en la materia, se suspenderá su cobro ante cualquier instancia hasta que sea localizado con o sin vida.** |

1. **Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ley Vigente** | **Propuesta de Modificación** |
| **ARTÍCULO 85.-** Los servicios que se presten en relación con el Registro Civil, causarán derechos conforme a la siguiente:    **TARIFA**  **I.** Registro de nacimientos, $89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.);  **II.** Registro de reconocimientos, $140.00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.);  **III.** Inscripción actas de tutela de ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de muerte o que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes; o bien, de las resoluciones que rectifiquen o modifiquen una acta del Registro Civil, $468.00 (CUATRCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.);  **IV.** Registro de matrimonios, $610.00 (SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.);  **V.** Registro de divorcios, $610.00 (SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.);  **VI.** Registro de defunciones, $76.00 (SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.);  **VII.** Inscripción de actos o hechos registrados en el extranjero, $400.00 (CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.);  **VIII.** Registro de Pacto Civil de Solidaridad, $520.00 (QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.);  **IX.** Registro de terminación de Pacto Civil de Solidaridad, $520.00 (QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.);  **X.** Anotaciones en los registros por mandato judicial o a petición de la parte interesada, $140.00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.);  **XI.** Expedición de copias certificadas, $99.00 (NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), por hoja;  Para efectos de esta fracción, los oficiales de Registro Civil pagarán la cantidad de $89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) por la expedición del formato correspondiente.  **XII.** Impresión de copias certificadas de otros Estados, a través de procesos sistematizados o de interconexión de redes informáticas del Registro Civil $157.00 (CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)  **XIII.** Rectificaciones relativas a actas del Registro Civil, $310.00 (TRESCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.);  **XIV.** Expedición de certificados de inexistencia y cualquier otra clase de constancia relativa al Registro Civil, $140.00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.);  **XV.** Búsqueda de actas en el Registro Civil, $70.00 (SETENTA PESOS 00/100 M.N.); y  **XVI.** Por otros servicios no especificados, $179.00 (CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.).  No causarán derechos, los servicios prestados por concepto de inscripción y registro de actas de adopción, inscripción y registro de actas de tutela; así como la inscripción y registro de adopción y/o tutela que se realice de forma automatizada. | **Artículo 85:** …  **…**  **I. a la XVI.** …  **No causarán derechos, los servicios prestados por concepto de inscripción y registro de actas de adopción, inscripción y registro de actas de tutela, la inscripción y registro de adopción y/o tutela que se realice de forma automatizada, así como la expedición de copias certificadas del registro civil e inscripción solicitadas para el trámite del procedimiento de declaración especial de ausencia o de la resolución correspondiente.** |
| **OBJETO**  **ARTICULO 90.-** Los servicios prestados por el organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, denominado “Periódico Oficial del Gobierno del Estado”, causarán derechos conforme a la siguiente:  **TARIFA**    **I.** Avisos judiciales y administrativos:  **1.** Por cada palabra en primera o única inserción, $2.00 (DOS PESOS 00/100 M.N.);  **2.** Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $1.20 (UN PESO CON VEINTE CENTAVOS M.N.).  **II.** Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.);  **III.** Publicación de balances o estados financieros, $680.00 (SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.);  **IV.** Suscripciones:  **1.** Por un año, $1,860.00 (MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)  **2.** Por seis meses, $930.00 (NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)  **3.** Por tres meses, $490.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)  **V.** Número del día, $20.00 (VEINTE PESOS 00/100 M.N.);  **VI.** Números atrasados hasta 6 años, $70.00 (SETENTA PESOS 00/100 M.N.);  **VII.** Números atrasados de más de 6 años, $140.00 (CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.); y  **VIII.** Códigos, leyes, reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $250.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).  **IX.** Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $500.00 (QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.);  **PAGO**  El pago de las cuotas establecidas en la fracción IV, darán derecho a que el contribuyente reciba por la suscripción, todos los ejemplares incluyendo Códigos, Leyes y Reglamentos. | **…**  **Artículo 90:** …  **…**  **I. a la IX.** …  **…**  ...  **No causarán derechos las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ordenadas dentro del procedimiento de declaración especial de ausencia, de conformidad con la ley de la materia.** |

1. **LEY DE VÍCTIMAS**

|  |  |
| --- | --- |
| Ley Vigente | Propuesta de reforma |
| **Artículo 8.** Las víctimas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, así como los reconocidos en:    **I.** Leyes Generales, tales como:    **a.** Ley General de Víctimas;  **b.** Ley General de Acceso de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia;  **c.** Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos;  **d.** Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia;  **e.** Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro;  **f.** Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;  **g.** Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas;  **h.** Ley General de Salud; y  **i.** Las demás que expida el Congreso de la Unión.  **II.** Leyes Estatales, tales como:    **a.** Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Coahuila de Zaragoza;  **b.** Ley de Prevención, Asistencia y Atención de la Violencia Familiar;  **c.** Ley para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Estado de Coahuila de Zaragoza;  **d.** Ley para la Prevención, Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas y Ofendidos de los Delitos en Materia de Trata de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza;  **e.** Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Coahuila de Zaragoza;  **f.** Ley del Sistema Estatal para la Garantía de los Derechos Humanos de Niños y Niñas del Estado de Coahuila de Zaragoza; y    **g.** Las demás que expida el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.  **III.** Código Nacional de Procedimientos Penales. | **ARTÍCULO 8:** …  I. …  a. a la h…  i. Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;  j. Las demás que expida el Congreso de la Unión.  **II.** …  a. a la f. …  g. Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza;  h. Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza; y  i. Las demás que expida el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.  III. …  IV. Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. |
| **Artículo 36.** Además de las funciones y atribuciones que señala esta ley y el Reglamento acerca de la asesoría y representación legal, en materia penal, esta comprenderá:  **I.** Hacerle saber oportunamente y de manera accesible el delito o delitos que puedan tipificarse, los derechos, medidas de atención y protección con que cuenta, los procedimientos que se pueden seguir, las pruebas requeridas para reclamar sus derechos o hacerlos valer, la importancia de cada una de las actuaciones y la trascendencia jurídica de un avenimiento, en todas las etapas del procedimiento penal hasta su conclusión;  **II.** Realizar un análisis de las condiciones de la víctima desde el punto de vista jurídico;  **III.** Contar con el asesoramiento legal para el correcto ejercicio de la acción incidental, cuando se reclame la reparación del daño al responsable o a los terceros obligados por el Código Nacional de Procedimientos Penales y, cuando proceda, el ejercicio de la acción civil reparadora.  **IV.** Garantizar la reparación del daño a la víctima del delito, además de los derechos previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se podrá exigir por sí o por conducto del Ministerio Público, la restitución de la cosa o, en su caso, el pago del valor correspondiente, al momento de su afectación o perjuicio material; y  **V.** Que el Ministerio Público dicte o solicite desde el inicio de la investigación y durante el ejercicio de la acción penal, las medidas necesarias a efecto de recabar pruebas suficientes para acreditar los daños y perjuicios causados a la víctima u ofendido del delito, incluyendo la fijación del monto de la reparación material y moral, así como solicitar el aseguramiento y embargo precautorio de bienes para ese efecto. | **ARTÍCULO 36:** …  I. a la V. …  **VI. En los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, solicitar y dar seguimiento hasta su resolución del procedimiento para la declaración especial de ausencia.** |
| **Artículo 42.** Las medidas de atención y asistencia en materia de procuración y administración de justicia serán permanentes y comprenden, como mínimo:    **I.** La asistencia a la víctima durante cualquier procedimiento administrativo relacionado con su condición de víctima;  **II.** La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación;  **III.** La asistencia a la víctima durante el juicio; y  **IV.** La asistencia a la víctima durante la etapa posterior al juicio.  Estas medidas se brindarán a la víctima con independencia de la representación legal y asesoría que dé a la víctima el Asesor Jurídico. | **ARTÍCULO 42:** …  **I. …**  **II.** La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación; en **los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares la** **asistencia a la Víctima durante el proceso de declaración Especial de ausencia;**  **III.**  **IV. …**  … |
| **Artículo 146.** Se crea la figura del Asesor Jurídico Estatal de Atención a Víctimas, el cual tendrá las siguientes funciones:  **I.** Asistir y asesorar a la víctima desde el primer momento en que tenga contacto con la autoridad;  **II.** Representar a la víctima de manera integral en todos los procedimientos y juicios en los que sea parte, para lo cual deberá realizar todas las acciones legales tendientes a su defensa, incluyendo las que correspondan en materia de derechos humanos tanto en el ámbito nacional como internacional;  **III.** Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral y administrativa;  **IV.** Informar a la víctima, respecto al sentido y alcance de las medidas de protección, ayuda, asistencia, atención, y reparación integral, y, en su caso, tramitarlas ante las autoridades judiciales y administrativas;  **V.** Informar a la víctima sobre la estructura, funcionamiento, ventajas y beneficios del uso de los Medios Alternos de Solución de Controversias, siempre y cuando las leyes aplicables y contexto del caso mismo así lo permitan;  **VI.** Dar el seguimiento a todos los trámites de medidas de protección, ayuda, asistencia y atención, que sean necesarias para garantizar la integridad física y psíquica de las víctimas, así como su plena recuperación;  **VII.** Informar y asesorar a los familiares de la víctima o a las personas que ésta decida, sobre los servicios con que cuenta el Estado para brindarle ayuda, asistencia, asesoría, representación legal y demás derechos establecidos en esta Ley, en los Tratados Internacionales de los que México es parte y demás leyes aplicables;  **VIII.** Llevar un registro puntual de las acciones realizadas y formar un expediente del caso;  **IX.** Tramitar y entregar copias de su expediente a la víctima, en caso de que ésta las requiera;  **X.** Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor Jurídico Estatal de las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público, y  **XI.** Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas. | **Artículo 146.** …  I.  II. …  III. Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral, administrativa **y de declaración especial de ausencia;**  IV. a la X. …  XI. Iniciar a solicitud de persona facultada el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia, así como dar seguimiento hasta el cumplimiento de la resolución que se emita, conforme a la ley especial de la materia.  XII. Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas. |

Agotado el estudio del contenido y alcances de la iniciativa, los integrantes de estas dictaminadoras estimamos imprescindible, a efecto de pronunciarnos sobre la procedencia de las mismas hacer un análisis del marco normativo vigente en la materia.

En este sentido se observa el que 17 de noviembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y Sistema Nacional de Búsqueda de personas, ley que tiene por objeto lo siguiente:

* Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos vinculados que establece la Ley;
* Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;
* Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;
* Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas;
* **Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;**
* Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y
* Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias.

1. El referido ordenamiento establece los efectos, que como mínimo deberá tener la Declaración Especial de Ausencia, estableciendo los siguientes:
2. ***I.*** *Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;*
3. ***II.*** *Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en los términos de la legislación civil aplicable;*
4. ***III. Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;***
5. ***IV.*** *Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por la ley, pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;*
6. ***V. Permitir que los beneficiarios de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida, continúen gozando de todos los beneficios aplicables a este régimen;***
7. ***VI. Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida;***
8. ***VII.*** *Declarar la inexigibilidad temporal de deberes o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo;*
9. ***VIII. Proveer sobre la representación legal de la persona ausente cuando corresponda, y***
10. ***IX.*** *Establecer las reglas aplicables en caso de que la persona sea localizada con vida para el restablecimiento de sus derechos y cumplimiento de obligaciones.*

A partir de esta ley de carácter general, la federación comenzó el proceso de armonización legislativa y el 22 de junio de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley del Seguro Social; de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; de la Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley Agraria.

Por lo que hace a la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas, destaca que la misma establece entre los efectos de la declaración especial de ausencia los siguientes:

* *El reconocimiento de la ausencia de la Persona Desaparecida desde la fecha en que se consigna el hecho en la denuncia o en el reporte;*
* *Garantizar la conservación de la patria potestad de la Persona Desaparecida y la protección de los derechos y bienes de las y los hijos menores de 18 años de edad a través de quien pueda ejercer la patria potestad o, en su caso, a través de la designación de un tutor, atendiendo al principio del interés superior de la niñez;*
* *Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de 18 años de edad en términos de la legislación civil aplicable;*
* *Proteger el patrimonio de la Persona Desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;*
* *Fijar la forma y plazos para que los Familiares u otras personas legitimadas por ley, pueden acceder, previo control judicial, al patrimonio de la Persona Desaparecida;*
* *Permitir que las personas beneficiarias de un régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo de la Persona Desaparecida continúen gozando de todos los derechos y beneficios aplicables a este régimen;*
* *Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la Persona Desaparecida;*
* *Declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades que la Persona Desaparecida tenía a su cargo, incluyendo aquellas derivadas de la adquisición de bienes a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;*
* *El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio de la Persona Desaparecida;*
* *Asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la Persona Desaparecida;*
* *La protección de los derechos de los Familiares, particularmente de hijas e hijos menores de 18 años de edad, a percibir las prestaciones que la Persona Desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición;*
* *Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá los bienes que le correspondan hasta el día en que la Declaración Especial de Ausencia haya causado ejecutoria;*
* *Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente, quedando en todo caso el derecho para ejercitarlo en cualquier momento posterior a la Declaración Especial de Ausencia;*
* *Las que el Órgano Jurisdiccional determine, considerando la información que se tenga sobre las circunstancias y necesidades de cada caso, y*
* *Los demás aplicables que estén previstos en la legislación en materia civil, familiar y de los derechos de las Víctimas que sean solicitados por las personas legitimadas en términos de la presente Ley.*

Por lo que hace al caso particular de las obligaciones de carácter civil y mercantil, el artículo 27 del ya citado ordenamiento refiere que dichas obligaciones surtirán efectos suspensivos hasta en tanto no sea localizada la persona con o sin vida.

En al ámbito local, el viernes 14 de diciembre de 2018, se publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila, iniciando con ello el proceso de armonización legislativa.

En el mismo sentido, el 28 de mayo de 2019 fue publicada la Ley de Declaración Especial de Ausencia, ordenamiento que tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida; brindar certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida; otorgar las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares de la persona desaparecida; establecer los efectos de la declaración especial de ausencia respecto de la persona desaparecida, los familiares o personas legitimadas por ley; y establecer el procedimiento en el estado para la emisión de la declaración especial de ausencia.

Con respecto a los efectos de la declaración especial de ausencia el ordenamiento local fija los que a continuación se señalan:

* Garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida y el reconocimiento de la ausencia desde la fecha en que se consigna el hecho en la denuncia o en el reporte;
* Garantizar la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con los hijos menores de dieciocho años de edad, bajo el principio del interés superior de la niñez;
* Garantizar la protección de los derechos y bienes de los hijos menores de dieciocho años de edad, atendiendo al principio del interés superior de la niñez, a través de quien pueda ejercer la patria potestad, o en su caso, a través de la designación de un tutor;
* Fijar los derechos de guarda y custodia de las personas menores de dieciocho años de edad, en términos de la legislación aplicable;
* Garantizar la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes, así como de los bienes sujetos a hipoteca;
* Declarar la inexigibilidad o la suspensión temporal de obligaciones o responsabilidades que la persona desaparecida tenía a su cargo, incluyendo aquellas derivadas de la adquisición de bienes a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes;
* Fijar la forma y plazos para que los familiares u otras personas legitimadas por ley, puedan acceder previo control judicial, al patrimonio de la persona desaparecida;
* Suspender de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o administrativos en contra de los derechos o bienes de la persona desaparecida;
* El nombramiento de un representante legal con facultad de ejercer actos de administración y dominio de la persona desaparecida;
* La protección de los derechos de los familiares, particularmente de hijas e hijos menores de dieciocho años de edad, a percibir las prestaciones que la persona desaparecida recibía con anterioridad a la desaparición;
* Disolución de la sociedad conyugal. La persona cónyuge presente recibirá los bienes que le correspondan hasta el día en que la declaración especial de ausencia haya causado ejecutoria;
* Disolución del vínculo matrimonial a petición expresa de la persona cónyuge presente, quedando en todo caso el derecho para ejercitarlo desde la solicitud, durante el procedimiento oen cualquier momento posterior a la declaración especial de ausencia;
* Toda medida apropiada que resulte necesaria y útil para salvaguardar los derechos de la persona desaparecida y sus familiares;
* Las que el órgano jurisdiccional determine, considerando la información que se tenga sobre las circunstancias y necesidades de cada caso; y
* Los demás aplicables en otras figuras de la legislación civil, familiar y de los derechos de las víctimas del estado y que sean solicitados por los sujetos legitimados en la presente ley.

No obstante estos significativos avances en la materia, los integrantes de estas comisiones unidas coincidimos con el promovente y con los colectivos que participaron en la elaboración de los proyectos normativos en la necesidad de reformar otros ordenamientos para hacer posible la efectividad de las normas protectoras de derechos humanos. Además, las reformas propuestas son acordes con los instrumentos internacionales y regionales signados y ratificados por el Estado Mexicano, con las sentencias de la Corte Americana como Caso Algodonero y Radilla Pacheco y con la legislación general en la materia, en virtud de lo cual consideramos procedente y necesario reformar los tres ordenamientos descritos a fin de que se garanticen plenamente los derechos de las personas desaparecidas y sus familias.

Por las consideraciones que anteceden, sometemos al Pleno de esta Honorable Legislatura, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, la presente iniciativa con proyecto de:

**D E C R E T O**

**PRIMERO.** Se **adicionan** los párrafos tercero y cuarto al artículo 40, los párrafos octavo y noveno al artículo 126 y los párrafos séptimo y octavo del artículo 127, del Código Fiscal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTICULO 40.** …

…

En caso de que el contribuyente se encuentre desaparecido y exista denuncia, reporte o queja de su desaparición en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, no serán procedentes las medidas de apremio durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia hasta su resolución, de conformidad con la ley especial en la materia.

Las medidas de apremio a que se refiere este artículo, no serán procedentes cuando el contribuyente cuente con declaración especial de ausencia de conformidad con la ley especial en la materia.

**ARTÍCULO 126.** …

…

…

…

…

…

…

En caso de que el contribuyente se encuentre desaparecido y exista denuncia, reporte o queja de su desaparición en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal en su contra, durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia hasta su resolución, de conformidad con la ley especial en la materia.

Cuando el contribuyente cuente con declaración especial de ausencia de conformidad con la ley especial en la materia, se suspenderá la ejecución del acto que determine un crédito fiscal en su contra, hasta que sea encontrado con o sin vida.

**ARTICULO 127.** …

…

…

…

…

…

En caso de que el contribuyente adeude un crédito fiscal, se encuentre desaparecido y exista denuncia, reporte o queja de su desaparición en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, se suspenderá su cobro durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia hasta su resolución, de conformidad con la ley especial en la materia.

Cuando el contribuyente adeude créditos fiscales y cuente con declaración especial de ausencia de conformidad con la ley especial en la materia, se suspenderá su cobro ante cualquier instancia hasta que sea localizado con o sin vida.

**SEGUNDO. Se adicionan** los párrafos tercero y cuarto del artículo 423 y los párrafos tercero y cuarto del artículo 469, del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 423.-** …

…

En caso de que el contribuyente adeude un crédito fiscal, se encuentre desaparecido y exista denuncia, reporte o queja de su desaparición en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, se suspenderá su cobro durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia hasta su resolución, de conformidad con la ley especial en la materia.

Cuando el contribuyente adeude créditos fiscales y cuente con declaración especial de ausencia de conformidad con la ley especial en la materia, se suspenderá su cobro ante cualquier instancia hasta que sea localizado con o sin vida.

**ARTÍCULO 469.-** …

…

En caso de que el contribuyente o deudor solidario tenga alguna sanción por las infracciones previstas en esta Sección, se encuentre desaparecido y exista denuncia, reporte o queja de su desaparición en términos de la Ley en Materia de Desaparición de Personas del Estado de Coahuila de Zaragoza, se suspenderá su cobro durante los cinco meses siguientes a la presentación de aquellas, salvo que concluido este término, se promueva el procedimiento de declaración especial de ausencia hasta su resolución, de conformidad con la ley especial en la materia.

Cuando el contribuyente o deudor solidario tenga alguna sanción por las infracciones previstas en esta Sección y cuente con declaración especial de ausencia de conformidad con la ley especial en la materia, se suspenderá su cobro ante cualquier instancia hasta que sea localizado con o sin vida.

**TERCERO.** Se **reforma** el último párrafo del artículo 85; se **adiciona** un último párrafo al artículo 90, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 85.-** …

**…**

**I. a la XVI.** …

No causarán derechos, los servicios prestados por concepto de inscripción y registro de actas de adopción, inscripción y registro de actas de tutela, la inscripción y registro de adopción y/o tutela que se realice de forma automatizada, así como la expedición de copias certificadas del registro civil e inscripción solicitadas para el trámite del procedimiento de declaración especial de ausencia o de la resolución correspondiente.

**Artículo 90.-** …

**…**

**I. a la IX.** …

**…**

...

No causarán derechos las publicaciones del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, ordenadas dentro del procedimiento de declaración especial de ausencia, de conformidad con la ley de la materia.

**CUARTO.** Se **reforman** el inciso i), fracción I y el inciso g), fracción II del artículo 8, la fracción II del artículo 42 y la fracción III y XI del artículo 146; se **adicionan** el inciso j), fracción I, los incisos h) e i) de la fracción II y la fracción IV del artículo 8, la fracción VI del artículo 36 y la fracción XII del artículo 146, de la Ley de Víctimas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 8.** …

**I.** …

**a.** a la **h.** …

**i.** Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;

**j.** Las demás que expida el Congreso de la Unión.

**II.** …

**a**. a la **f.** …

**g.** Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Coahuila de Zaragoza;

**h.** Ley de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza; y

**i.** Las demás que expida el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

**III.** …

**IV.** Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas.

**ARTÍCULO 36.** …

**I.** a la **V.** …

**VI.** En los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, solicitar y dar seguimiento hasta su resolución del procedimiento para la declaración especial de ausencia.

**ARTÍCULO 42.** …

**I.** …

**II.** La asistencia a la víctima en el proceso penal durante la etapa de investigación; en los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares la asistencia a la Víctima durante el proceso de declaración Especial de ausencia;

**III.** y **IV**. …

…

**Artículo 146.** …

**I.** y **II.** …

**III.** Proporcionar a la víctima de forma clara, accesible, oportuna y detallada la información y la asesoría legal que requiera, sea esta en materia penal, civil, familiar, laboral, administrativay de declaración especial de ausencia;

**IV.** a la **X.** …

**XI.** Iniciar a solicitud de persona facultada el procedimiento de Declaración Especial de Ausencia, así como dar seguimiento hasta el cumplimiento de la resolución que se emita, conforme a la ley especial de la materia.

**XII.** Las demás que se requieran para la defensa integral de los derechos de las víctimas.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Las personas que hayan obtenido una declaración de ausencia conforme a lo dispuesto en la Ley de Declaración de Ausencia de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza, o una declaración especial de ausencia, conforme a lo previsto en la Ley de Declaración de Ausencia para personas Desaparecidas del Estado de Coahuila de Zaragoza, conservarán la protección de derechos en los términos de la sentencia, en concordancia con lo establecido en el régimen transitorio del Decreto 261, publicado el 28 de mayo de 2019 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**TERCERO.-** Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de Hacienda de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, Dip. María Eugenia Cázares Martínez (Coordinadora), Dip. Verónica Boreque Martínez González (Secretaria), Dip. María Esperanza Chapa García. En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de noviembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**COMISIÓN DE HACIENDA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. MARÍA EUGENIA CÁZARES MARTÍNEZ**  **(COORDINADORA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. VERÓNICA BOREQUE MARTÍNEZ GONZÁLEZ**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Municipal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos del Estado, suscrita por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 09de abril del año 2019,se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, se turnó a esta Comisión Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Municipal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos del Estado, suscrita por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, son competentes para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Quela iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona diversas disposiciones del Código Municipal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ambos del Estado, suscrita por la Diputada Elisa Catalina Villalobos Hernández, del Grupo Parlamentario “Presidente Benito Juárez García”, del Partido Movimiento de Regeneración, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“Con esta iniciativa se busca terminar con un vació legal en relación a los plazos y términos en que la expedición, reforma, derogación o abrogación de la legislación municipal debe publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.*

*1. De la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado como requisito necesario para la vigencia de la legislación municipal.*

*La fracción VI del artículo 176 del Código Municipal establece (y cito) “La reforma o adición de los ordenamientos legales municipales, se podrá llevar a cabo en cualquier tiempo, siempre que se cumplan las anteriores bases normativas.” (fin de la cita)*

*La fracción V del mismo artículo señala (y cito) “La publicación deberá hacerse siempre en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, en la gaceta oficial del Municipio siempre que se ordene publicarse expresamente. No obstante, para la vigencia del bando de policía y gobierno, los reglamentos, las circulares y las disposiciones de observancia general, bastará con la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.” (fin de la cita)*

*De lo anterior se desprende que la publicación relativa a la expedición, reforma, derogación o abrogación de la reglamentación municipal, debe hacerse obligatoriamente en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado para que dichas normas adquieran vigencia.*

*No obstante lo anterior, hemos detectado que muchos municipios expiden o reforman sus reglamentos y hacen depender su vigencia de su publicación en la “gaceta municipal” en contravención a lo expresamente dispuesto en el artículo 176, fracción V, del Código Municipal.*

*Bajo estas consideraciones, se estima que hay un número indeterminado de normas jurídicas municipales que nunca han sido publicadas con las formalidades que previene la multicitada disposición normativa y, por tanto, puede ser cuestionada la legalidad de su vigencia.*

*Para superar este problema se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción V, del artículo 176 del Código Municipal para establecer que la secretaría del ayuntamiento, dentro de los quince días naturales siguientes a la aprobación de la reforma, derogación, expedición o abrogación de las normas reglamentarias, deberá remitir a la secretaría de gobierno del Estado, la certificación que corresponda a las mismas.*

*2. De la obligación del Secretario de Gobierno de ordenar la publicación de la legislación municipal.*

*Aunque la fracción XII, del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, dispone que a la Secretaría de Gobierno le corresponde (y cito) “ordenar la publicación de los cuerpos normativos y demás disposiciones que para su cumplimiento lo requieran” (fin de la cita), lo cierto es que no existe una disposición expresa relativa a determinar un plazo para la publicación de la legislación municipal, lo que deriva en un problema de certeza jurídica porque, para tener vigencia, la expedición, reforma, derogación o abrogación de las normas reglamentarias municipales requieren de dicha publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.*

*Peor aún, sin un plazo, como hasta ahora ocurre, la no publicación puede convertirse en una herramienta política del Gobierno del Estado para desestabilizar jurídicamente a los Ayuntamientos.*

*Y voy a dar un ejemplo: Desde que se enfrentaron en una Controversia Constitucional, el entonces Gobernador Humberto Moreira y el entonces Alcalde de Torreón, José Ángel Pérez, hoy Diputado Federal de Morena, el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dejó de publicar todo lo concerniente a reformas y nuevos reglamentos del municipio de Torreón. Y aunque hay varios casos, sólo citaré uno: En la administración de José Ángel Pérez se aprobó el Reglamento para el Buen Gobierno del Municipio de Torreón. El artículo primero transitorio de dicho reglamento establecía que entraría en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.*

*Lo cierto es que concluyó la administración de José Ángel Pérez y ese reglamento nunca fue publicado. No obstante lo anterior, y de manera paradójica, ese reglamento fue abrogado posteriormente por el cabildo de Torreón y dicha abrogación fue publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 100, de fecha martes 16 de diciembre de 2014, páginas 65 a 67.*

*Es decir, por órdenes del ex gobernador Humberto Moreira ese reglamento nunca fue publicado en el Periódico Oficial y, por tanto, nunca tuvo vigencia. Pero, sin embargo, años después, ese mismo reglamento fue abrogado y, entonces si, apareció la publicación.*

*Por lo anterior, para otorgar certeza jurídica y evitar que la publicación de la legislación municipal se convierta en herramienta de presión política, se propone adicionar un segundo párrafo a la fracción XII, del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, para establecer que la Secretaría de Gobierno deberá ordenar la publicación dentro de los quince días naturales siguientes a que le sea notificada la certificación correspondiente, enterando de la publicación al Congreso del Estado y al Ayuntamiento respectivo.*

*Finalmente, con estas adiciones se logra que la expedición, reforma, abrogación o derogación de las normas jurídicas municipales, deban aparecer publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en un plazo máximo de 30 días naturales a partir de que el cabildo las hubiere acordado.*

*Además, el Secretario de Gobierno estaría obligado a enterar de la publicación tanto al Ayuntamiento respectivo como al Congreso del Estado, es decir, el Congreso sería responsable de vigilar que se cumpla con dicha obligación.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora nos abocamos al estudio y análisis de las consideraciones en las que se funda y motiva la iniciativa de reforma, así como al contenido y alcance del proyecto de decreto, verificando que el mismo tiene la finalidad de establecer los plazos en que deberá publicarse la legislación municipal en el periódico oficial del Gobierno del Estado.

En ese sentido, se plantea la adición de un segundo párrafo a la fracción V, al artículo 176 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para que se establezca lo siguiente:

*La secretaría del ayuntamiento, bajo su más estricta responsabilidad, deberá remitir a la secretaría de gobierno del Estado, dentro de los quince días naturales siguientes a la sesión de cabildo, la certificación donde conste la expedición, reforma, derogación o abrogación de la legislación municipal para los efectos de su publicación en los términos del párrafo anterior.*

En el mismo orden de ideas, propone la adición de un segundo párrafo a la fracción XII, del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la redacción siguiente:

*Tratándose de la legislación municipal, la secretaría de gobierno, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará su publicación dentro de los quince días naturales siguientes a que le sea notificada la certificación correspondiente, enterando de la publicación al Congreso del Estado y al Ayuntamiento respectivo.*

Una vez analizado lo anterior, quienes integramos la presente Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, coincidimos con la problemática expuesta por la promovente, y la necesidad de establecer un plazo a efecto de que los municipios remitan sus certificaciones, en similar sentido se observa que la Constitución Política del Estado de Coahuila, consigna en el caso del poder legislativo, esta obligación está prevista en el artículo 83, mismo que a la letra señala que “*el Ejecutivo tiene derecho de hacer observaciones a las leyes o decretos aprobados por el Congreso. Si quisiera hacer uso de esta facultad, en el término de treinta días naturales lo devolverá con sus observaciones, vencido este término sin realizar las observaciones, el Ejecutivo dispondrá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto, transcurrido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado, y* ***el Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente, dentro de los diez días naturales siguientes, ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, sin que se requiera el refrendo previsto en el artículo 88 de esta Constitución”.***

Así, si observamos el caso municipal, efectivamente en nuestra legislación existe una laguna legal sobre los plazos en las etapas de los procedimientos legislativos municipales, lo que hace necesario emitir normatividad, a fin de que éstos sean observados y aplicados debidamente,sino que además también consideramos que fortalecerá el principio de legalidad y certeza jurídica de los cabildos, por lo que se considera oportuna la modificación propuesta al código municipal.

En este orden de ideas, también se analizó la procedencia de la reforma a la ley orgánica de la administración pública, en la que se consigna la obligación de la Secretaría de Gobierno ordenar la publicación de las certificaciones de los ayuntamientos, dentro de los quince días naturales siguientes a que le sea notificada la certificación correspondiente, enterando de la publicación al Congreso del Estado y al Ayuntamiento respectivo.

Esta incorporación pretende hacerse en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, disposición concerniente a las facultades de la Secretaría de Gobierno, entre las cuales, en la fracción XII encontramos la relativa a dirigir y administrar el Periódico Oficial, ordenar la publicación de los cuerpos normativos y demás disposiciones que para su cumplimiento lo requieran.

En este sentido observamos que, si bien es cierto, la Secretaría de Gobierno tiene la facultad de ordenar la publicación de los documentos que así lo requieran, los términos en que se efectúa dicha publicación no se encuentran previstas en este ordenamiento, sino que son materia del reglamento interior, por lo que aunque consideramos que establecer un plazo para que el Periódico Oficial realice la publicación de certificaciones municipales pudiera ser oportuno, no estimamos conveniente que dicha disposición se plasme en esta Ley.

Por las consideraciones que anteceden, sometemos a su consideración y en aprobación, en su caso el siguiente Proyecto de:

**D E C R E T O**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se adiciona un segundo párrafo a la fracción V, del artículo 176 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**ARTÍCULO 176.** …

I. a IV. …

V. …

La secretaría del ayuntamiento, bajo su más estricta responsabilidad, deberá remitir a la secretaría de gobierno del Estado, dentro de los quince días naturales siguientes a la sesión de cabildo, la certificación donde conste la expedición, reforma, derogación o abrogación de la legislación municipal para los efectos de su publicación en los términos del párrafo anterior.

VI. y VII. …

**TRANSITORIOS**

**Primero.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; y

**Segundo.-** Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucia Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de noviembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan los artículos 193 bis; 193 ter; y 193 quater todos de la Ley General de Salud, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; y,

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 06 del mes de noviembre del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la propuesta de iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, el día 08 de noviembre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan los artículos 193 bis; 193 ter; y 193 quater todos de la Ley General de Salud, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática; y,

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adicionan los artículos 193 bis; 193 ter; y 193 quater todos de la Ley General de Salud, planteada por la Diputada Claudia Isela Ramírez Pineda, de la Fracción Parlamentaria “Elvia Carrillo Puerto” del Partido de la Revolución Democrática, se basa en las consideraciones siguientes:

**EXPOSICION DE MOTIVOS.**

*La menstruación es un proceso fisiológico natural en las mujeres que generalmente representa un síntoma de buena salud sexual y reproductiva. No obstante, y a pesar de los constantes avances médicos, el tema continua siendo un tabú en gran parte de la sociedad mexicana, debido a lo incomodo que resulta abordarlo y a la falta de sensibilización acrecentado por los prejuicios y los estigmas sociales que se imponen a la mujer menstruante.*

*Según la investigadora Phillipa Lysaght del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) las mujeres pasaremos en promedio 3000 días de nuestra vida menstruando y aproximadamente la mitad de la población femenina (equivalente a un 26% de la población total) en edad reproductiva, tiene menstruaciones que duran entre dos y siete días cada mes.[[11]](#footnote-11)*

*De ahí que los Estados tengan la obligación de implementar políticas públicas adecuadas que permitan una efectiva promoción y protección de la salud de las mujeres durante sus periodos de menstruación. La higiene menstrual es importante no solo para las mujeres y las niñas; sino también para la sociedad en general, pues su debida atención puede ayudar a romper mitos sobre el tema y generar una sociedad abierta que comprenda mejor la situación que vivimos prácticamente todas las mujeres.*

*En el aspecto educativo la salud menstrual es importante pues si las escuelas cuentan con las instalaciones y los materiales escolares adecuados, pueden ayudar a que las niñas lleven su menstruación con orgullo y dignidad y contribuir a mejorar la educación, la igualdad de género y los resultados médicos.*

*La educación referente a la salud menstrual también necesaria para los niños y los hombres pues una mejor comprensión sobre este tema ayuda a romper el silencio generalizado sobre la higiene menstrual, evitando las burlas o la violencia física o emocional que se puede generar en torno a las mujeres sobre todo en el caso de niñas y adolescentes*

*Por otro lado, resulta necesario generar políticas públicas que garanticen el acceso a elementos de gestión menstrual entre las personas de más escasos recursos pues según datos del Banco Interamericano para el Desarrollo, en la actualidad existen muchas niñas y mujeres que no se pueden permitir comprar compresas o tejidos higiénicos y, a menudo, deben utilizar materiales poco salubres que pueden causarles infecciones u otros daños graves en la salud.*

*Además no todas las mujeres disponen de acceso a instalaciones, productos y educación para la salud que son necesarios tanto dentro como fuera de sus, casas, escuelas y lugares de trabajo. Lo que genera un problema de discriminación por condición social.*

*Y la situación se complica aún más cuando hablamos de grupos en situación de vulnerabilidad, como lo son las mujeres privadas de su libertad, personas en situación de calle y las personas en instituciones de salud mental, pues en muchos casos se ven abandonadas a su suerte sin tener los recursos necesarios para cumplir con una necesidad tan básica como acceder a productos de higiene necesarios para sus periodos menstruales.*

*Es por estos motivos que la presente iniciativa tiene como objeto reformar diversas disposiciones a la Ley Estatal de Salud para que se promueva y garantice la entrega gratuita de elementos de gestión menstrual a las personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad, esto con el fin de tutelar de manera efectiva su derecho a la higiene, salud y cuidado personal de miles de mujeres en situaciones de marginación.*

*Además la ley pretende generar mecanismos de concientización y sensibilización sobre el tema a través de un Programa Nacional de Atención a la Salud Menstrual, mismo que proponemos sea diseñado y operado por profesionales de la salud y que contribuya a derribar los diferentes mitos y tabúes que hasta la actualidad siguen vigentes en nuestra sociedad.*

*Cabe mencionar que este tipo de iniciativas son hoy una realidad en países como China, Japón Indonesia[[12]](#footnote-12) y Argentina[[13]](#footnote-13), en donde la atención prioritaria a la salud menstrual ha contribuido a fortalecer la conciencia social sobre el tema así como reducir de forma significativa los prejuicios y carencias de miles de mujeres en situación de vulnerabilidad.*

**TERCERO.-** Los integrantes de la presente Comisión Dictaminadora nos abocamos al estudio de la iniciativa objeto de dictamen de lo cual se desprende que tiene por finalidad el crear mecanismos necesarios que tutelen de manera efectiva a las mujeres de todas las poblaciones del país el derecho a una salud menstrual digna.

Como se manifiesta en la exposición de motivos, la mujer promedio menstrúa aproximadamente 3 mil días durante toda su vida. Dicho periodo, a pesar de ser una señal de vida natural y saludable, *el tema continúa siendo un tabú en gran parte de la sociedad mexicana,* por ello resulta esencial formular trabajos de política y desarrollo, creando un marco de derechos humanos que resultaría como un elemento útil para garantizar el cumplimiento de las necesidades de todas las mujeres, poniendo primordial atención en sectores de la población que se encuentran excluidos, marginados o desatendidos.

Una de las razones por las que en muchas ocasiones no se trata el tema de la menstruación, es a causa de que aún se ve como una cuestión que no se debe discutir en público, debido a que a lo largo de la historia, prácticas sociales, culturales y religiosas han transformado este procesos natural en una fuente de desigualdad y exclusión por su mal manejo, lo que conlleva a un incorrecto conocimiento sobre la salud menstrual.

Es por ello que quienes aquí dictaminamos, coincidimos en que la desigualdad de género, la pobreza extrema, las crisis humanitarias y las tradiciones nocivas pueden tornar la menstruación en una etapa de estigma y privaciones, por lo cual resulta indispensable priorizar el fortalecimiento de la educación en la salud menstrual.

Por otro lado, nos abocamos al estudio del factor de desigualdad que existe debido a la falta de acceso a la información y los servicios de salud, así como la vulnerabilidad económica, que afecta principalmente a los sectores más desprotegidos, lo que limita el acceso de suministros seguros para la comodidad e higiene de las mujeres durante su periodo.

Desde la perspectiva del derecho humano al agua y saneamiento, así como del derecho humano a la salud, toda mujer o niña menstruando debe de tener acceso a un espacio seguro, limpio y privado para poder manejar su período con dignidad. Esto incluye el hogar así como los establecimientos laborales, educativos o de esparcimiento adecuados.

De acuerdo al estudio otorgado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre la menstruación y los derechos humanos, se alude que existe una serie de derechos universales, que pueden llegar a ser transgredidos, por el tratamiento que se presta a mujeres y niñas en ocasiones, durante su periodo, entre los que enlistan los siguientes:

* *El derecho a la dignidad humana: cuando las mujeres y las niñas no pueden acceder a instalaciones de baño seguras y medios seguros y eficaces de manejo de la higiene menstrual, no pueden manejar su menstruación con dignidad. Las burlas relacionadas con la menstruación, la exclusión y la vergüenza también socavan el derecho a la dignidad humana.*
* *El derecho a un nivel adecuado de salud y bienestar: las mujeres y las niñas pueden sufrir consecuencias negativas para la salud cuando carecen de suministros y servicios para manejar su salud menstrual. El estigma de la menstruación también pueden impedir que las mujeres y las niñas procuren tratamiento de trastornos o dolor relacionados con la menstruación, lo cual afecta su salud y bienestar.*
* *El derecho a la educación: la falta de un lugar seguro o de la capacidad para manejar la higiene menstrual, así como la falta de medicamentos para tratar el dolor relacionado con la menstruación, pueden contribuir a elevar las tasas de ausentismo escolar y los deficientes resultados educativos. Algunos estudios han confirmado que cuando las niñas no pueden manejar adecuadamente la menstruación en la escuela, su asistencia escolar y su rendimiento se resienten.*
* *El derecho al trabajo: el escaso acceso a medios seguros de manejo de la higiene menstrual y la falta de medicamentos para tratar los trastornos o el dolor relacionados con la menstruación también limitan las oportunidades de empleo para las mujeres y las niñas. Pueden abstenerse de realizar ciertos trabajos, o pueden ser obligadas a renunciar a horas de trabajo y salarios. Las necesidades relacionadas con la menstruación, tales como pausas para baño, podrían ser sancionadas, conduciendo de ese modo a la desigualdad en las condiciones de trabajo. Y las mujeres y las niñas pueden enfrentar discriminación en el lugar de trabajo relacionada con tabúes en torno a la menstruación.*
* *El derecho a la no discriminación y la igualdad de género: los estigmas y las normas relacionadas con la menstruación pueden reforzar las prácticas discriminatorias. Los obstáculos relacionados con la menstruación en la escuela, el trabajo, los servicios de salud y las actividades públicas también perpetúan las desigualdades de género.*

Algunos países como Italia u Honduras, han comenzado un debate en el seno de su poder legislativo para consolidar una política pública que beneficie a las mujeres y proteja su salud, alegando que resulta no solo como un beneficio que se arropa dentro de los derechos humanos de las mujeres, sino también como una acción permite un mayor bienestar.

Es en este contexto, que los integrantes de esta comisión dictaminadora, coincidimos con la ponente en promover y garantizar a través la Ley General de Salud, la entrega de elementos de gestión menstrual a personas en situación de vulnerabilidad, así como crear un Programa Nacional de Atención a la Salud Menstrual, el cual contribuirá a poner fin a mitos y tabúes para lograr un país más igualitario e inclusivo.

Una vez agotado el estudio, y efectuadas las consideraciones que anteceden, al tratarse de una responsabilidad compartida, estimamos que la propuesta coadyuva al mejor diseño y promoción de acciones pertinentes, puesto que de aprobarse, se creará un beneficio permanente para las mujeres mexicanas que se ven afectadas por este padecimiento, lo cual además protegerá su salud y sus derechos.

Por las consideraciones que anteceden se estima pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**A C U E R D O**

**ÚNICO.-** Se aprueba que la LXI Legislatura del Congreso del Estado, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presente una iniciativa para adicionar un Capítulo V con sus artículos 193 Ter; 193 Quáter; y 193 Quintus, al Título Décimo Primero, de la Ley General de Salud; para quedar en la forma siguiente:

**ÚNICO.-** Se adiciona un Capítulo V con sus artículos 193 ter; 193 Quáter; y 193 Quintus, al Título Décimo Primero, de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:

**CAPITULO V.**

**Programa Nacional de Atención a la Salud Menstrual.**

**Artículo 193 Ter**.- La prevención y atención de la salud menstrual, tendrá carácter prioritario. El Gobierno a través de la Secretaría de Salud, así como las entidades federativas y sus municipios garantizarán en el ámbito de sus competencias los servicios integrales de salud para la atención de la salud menstrual.

Para tal efecto, la Secretaría de Salud elaborará el Programa Nacional de Atención a la Salud Menstrual, y cuya ejecución corresponderá a ésta, en coordinación con las dependencias y entidades competentes de la federación, los estados y los municipios.

El Programa Nacional de Atención a la Salud Menstrual tendrá como finalidad promover la salud menstrual y garantizar el acceso a elementos para la gestión menstrual.

**Artículo 193 Quáter.-** A los efectos de este título se entienden como elementos de gestión menstrual a las toallas higiénicas descartables y reutilizables, los tampones, las esponjas marinas menstruales, los paños absorbentes lavables, la ropa interior absorbente, las copas menstruales y a todo otro producto de contención que sea considerado apto para su utilización durante la menstruación.

**Artículo 193 Quintus.-** Son objetivos del Programa Nacional de Atención a la Salud Menstrual los siguientes:

1. Promover la entrega gratuita de elementos de gestión menstrual en establecimientos educativos públicos y privados, en albergues, asilos, y otras instituciones de alojamiento diurno y/o nocturno para personas en situación de calle y en espacios comunitarios.
2. Garantizar de manera gratuita la entrega de elementos de gestión menstrual a personas que se encuentren privadas de su libertad en establecimientos penitenciarios y en instituciones de internación de salud mental.
3. Respetar las elecciones personales de la población destinataria y encontrarse a disposición de quien lo requiera sin mediación alguna, debiendo garantizarse la protección del derecho a la identidad y a la confidencialidad de la persona en caso de que así lo solicite.
4. Promover la capacitación y asistencia a las mujeres menstruantes en lo relativo a la salud menstrual en especial en niñas y adolescentes.
5. Generar campañas de sensibilización, conocimiento y visibilización de la adecuada atención de la salud menstrual, que sea libre de estigmas, prejuicios y/o discriminación.
6. Disponer de un sistema de recepción de consultas y orientación para personas menstruantes relativo al cuidado y atención de la salud menstrual.
7. Brindar asesoramiento a los establecimientos enumerados en las fracciones I y II del presente artículo, para que garanticen instalaciones sanitarias que promuevan la salud menstrual, y cuenten con los dispositivos necesarios para la adecuada eliminación de los desechos.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.-** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**SEGUNDO.-**Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de noviembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción IX al artículo 200, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 21 del mes de mayo del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 22 de mayo del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción IX al artículo 200, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se adiciona la fracción IX al artículo 200, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, planteada por el Diputado Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, conjuntamente con la Diputada Zulmma Verenice Guerrero Cázares, del Grupo Parlamentario “Brigido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

**E X P O S I C I Ó N D E M O T I V O S**

*“La violencia contra las mujeres mantiene una tendencia creciente en México y las acciones que ha desplegado el Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno han resultado profundamente ineficaces para evitar la violencia de género. Los últimos tres años tomando como base cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, en nuestro país los feminicidios se duplicaron.*

*La generalización de este ambiente profundamente hostil contra muchas mujeres ha provocado que, en 18 de las 32 entidades federativas, esto es el 56% del territorio nacional, se encuentra formalmente declarada la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres.*

*En este contexto, buscamos llamar la atención para realizar acciones legislativas inmediatas sobre una conducta cada vez más recurrente y que refleja el grado de sevicia extrema en la violencia que se comente contra las mujeres.*

*El ataque con ácido en el rostro para provocarles un daño irreparable a su moralidad e integridad como mujeres y el ensañamiento con lesiones y mutilaciones que buscan agredir la apariencia física para hacer ostensible e indeleble la marca del atacante, lo cual se convierte en un perenne recordatorio de la violencia física y a imponer de forma permanente las secuelas, se convierte en una violencia sostenida durante toda la vida de las mujeres.*

*Recientemente medios de comunicación como Milenio, dieron a conocer la historia de María del Carmen, una mujer que fue atacada en la cara con ácido por parte de su pareja por haberse negado a permanecer en una relación caracterizada por la violencia.*

*​"El ataque con ácido no sólo me quemó la piel, sino en su momento me quemó mi vida, paralizó mi vida, la vida de mis hijas, la de mi familia y han sido cinco años de lucha"[[14]](#footnote-14) manifestó María del Carmen al medio de comunicación.*

*Casos como los de María del Carmen, nos permiten vislumbrar una conducta que comienza a generar un patrón inédito de violencia de género, que es necesario contemplar en la Ley.*

*Jaf Shah, director ejecutivo de Acid Survivors Trust International (ASTI), comenta:*

*“El victimario usa diferentes tipos de fluidos corrosivos, pero principalmente ácido sulfúrico, nítrico o clorhídrico. El tipo de ‘arma’ varía según lo que esté más disponible en el momento o en la región”*

*Nuestro principal compromiso al proponer esta iniciativa es el de garantizar a las mujeres coahuilenses el derecho a vivir libre de toda violencia, esto cumpliendo con las obligaciones previstas en nuestra legislación estatal, nacional así como diversos tratados internacionales de los cuales México es parte, buscando principalmente erradicar por completo la violencia de género.*

*Debido a esto se busca tipificar dentro del catálogo de delitos relativos a las sanciones por conductas de violencia física contra las mujeres, no solo el hecho de causarles la muerte, contemplado ya este hecho dentro del delito de feminicidio, sino debe también penalizar aquellas lesiones que les producen una alteración en su salud tanto física como psicológica.*

*Nuestro Código Penal en su Capítulo segundo denominado Feminicidio contempla el hecho de que por razón de su género se le prive de la vida a una mujer, sin embargo existe el hecho de que, en base a la violencia de género que se presenta en la actualidad, no solo se busca privar de la vida a una mujer, sino producir un daño o alteración en la salud a través de lesiones infringidas para dejar una marca indeleble principalmente en la cara de una mujer, con lo que se busca plasmar un recordatorio constante para la victima de dicha agresión, por lo antes señalado es visto que no solo se tiene la intención de privarlas de la vida, sino el hecho de cierta forma dejar una marca tal en las victimas que les sea imposible continuar con su vida diaria.*

*Desafortunadamente en nuestro país aún no se encuentra un apartado en relación a este tipo de delitos, concretamente hablamos del hecho de que una mujer sea atacada en su persona y en el cual se utilice para causar dicho daño alguna sustancia corrosiva que dañe permanentemente su cara o su cuerpo; agentes químicos como el ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico, entre algunos otros, son los que se utilizan para agredir a las mujeres. De 96 mil casos de violencia de género, el 70 por ciento son causadas por este tipo de lesiones.*

*Con éste tipo de ataques el agresor pretende dejar una huella imborrable en su víctima, y con ello alimentar ese deseo que día a día le recuerde ese hecho tan lamentable. Sumado a esto, no solo el dolor físico por el que es sometida la víctima, sino el gasto en que incurre en su recuperación, ya que en ocasiones son necesarias varias cirugías estéticas con las cuales quizá no todas sean favorables, agreguemos el trauma psicológico con el que además tienen que lidiar.*

*Es por lo anterior que se somete a consideración de este H. Congreso la presente iniciativa de reforma, debido a que la variable expuesta dentro de la misma va en relación a la violencia contra las mujeres, en la que el agresor no tiene la intención de arrebatarle la vida, sino la de producir un daño a través de lesiones infringidas por agentes corrosivos que dejen huellas del maltrato al que fue sometida.*

*Tal como ocurrió en el caso del feminicidio que fue apartado del homicidio, proponemos distinguir las lesiones cometidas en contra de mujeres por razón de su género infringiéndoles una alteración o lesión en su salud a través de agentes corrosivos.*

*En este sentido es necesario el crear un tipo penal autónomo cuyo objetivo sea sancionar las conductas de violencia cometidas en contra de mujeres debido a su género, cuando la intención del agresor no sea el de privarlas de la vida, sino causarles un daño físico irreparable como lo serían las cicatrices de quemaduras que produce el ácido sulfúrico.”*

**TERCERO.-** Los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al análisis de la iniciativa que reforma el Código Penal de nuestro estado, a fin de incorporar en el artículo 200, en lo concerniente al delito de *lesiones simples*, un tipo penal enfocado a sancionar las lesiones cometidas en contra de las mujeres en razón de su género, cuando la intención del agresor no sea el de privarlas de la vida, sino causarles un daño físico irreparable.

Así se plantea la adición siguiente:

*Artículo 200.- (Lesiones simples)*

*A quien dolosamente infiriera una o más lesiones a otro causándole un daño a su salud, se le impondrá:*

*…*

*IX. Se le aplicara una pena de* ***seis a quince años*** *de prisión al que cause lesiones a una mujer en razón de su género. Se considera que existe razón de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:*

*1) Que previo a la lesión infringida, halla datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso o violencia del agresor en contra de la víctima siendo esta última de sexo femenino.*

*2) Si entre el agresor y la victima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o un grado de superioridad y, sea acreditado que en base a esa relación fueron infringidas las lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones.*

*Las penas previstas en la presente Fracción se aumentarán en dos tercios en el supuesto de que las lesiones sean provocadas a través del uso de ácidos o substancias corrosivas, para provocar un daño irreparable a su integridad física y psicológica.*

Esta comisión dictaminadora, considera que en México y en el Estado de Coahuila, sin lugar a dudas, ha habido una transformación y una evolución constante legislativa, en cuanto a la problemática de violencia de género. Sin embargo, estamos conscientes de que las cifras oficiales arrojan datos sobre el aumento de la violencia contra las mujeres.

Quienes dictaminamos analizamos que en 1992, el Comité de la CEDAW, en su Recomendación general Nº 19, declaró que la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación dirigida contra las mujeres por su condición de ser mujer y que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Esta violencia inhibe gravemente la capacidad de la mujer para disfrutar de los derechos y las libertades en plano de igualdad con los hombres.

Al respecto dicho Comité refirió que en el artículo 1 de la Convención se define la discriminación contra la mujer. En la cual se incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la **violencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada**. **Se incluyen actos que infligen daño o sufrimiento de índole física, mental o sexual, las amenazas de esos actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad.** La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones concretas de la Convención, independientemente de que en ellas se mencione expresamente a la violencia o no.

Así, la violencia contra la mujer, que menoscaba o anula el goce por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de convenios específicos de derechos humanos, constituye discriminación, tal como se entiende en el artículo 1 de la Convención. Estos derechos y libertades comprenden, entre otros:

a) el derecho a la vida;

b) el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

c) el derecho a la protección en condiciones de igualdad con arreglo a normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o interno;

d) el derecho a la libertad y la seguridad de las personas;

e) el derecho a la protección igual de la ley;

f) el derecho a la igualdad en la familia;

g) el derecho al nivel más alto posible de salud física y mental;

h) el derecho a condiciones de empleo justas y favorables.

En virtud de lo anterior, el Comité recomendó entre otras cosas que:

*a) Los Estados Partes adopten medidas apropiadas y eficaces para combatir todo tipo de violencia basada en el sexo, ejercida mediante actos públicos o privados.*

*b) Los Estados velen por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer proteja de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y dignidad.*

*…*

*r) Entre las medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia figuran las siguientes:*

*i) sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de violencia en el hogar;*

*ii) legislación que elimine la defensa del honor como justificativo para atacar a las mujeres de la familia o atentar contra su vida;*

*iii) servicios para garantizar la seguridad de las víctimas de violencia en la familia, incluidos refugios y programas de asesoramiento y rehabilitación;*

*iv) programas de rehabilitación para los culpables de violencia en el hogar;*

*v) servicios de apoyo para las familias en las que haya habido un caso de incesto o de abuso sexual.*

*s) Los Estados informen acerca del alcance de la violencia en el hogar y el abuso sexual y sobre las medidas preventivas, punitivas y correctivas que hayan adoptado.*

*t) Los Estados adopten todas las medidas jurídicas y de otra índole que sean necesarias para prestar protección eficaz a las mujeres contra la violencia dirigida a ellas, incluidas entre otras:*

*i) medidas jurídicas eficaces, incluidas sanciones penales, recursos civiles y disposiciones de indemnización para proteger a la mujer contra todo tipo de violencia, incluida la violencia y los malos tratos en la familia, el ataque sexual y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;*

*ii) medidas preventivas, incluidos programas de información pública y de educación para modificar las actitudes relativas a las funciones y la condición del hombre y de la mujer;*

*iii) medidas de protección, incluidos refugios, servicios de asesoramiento, rehabilitación y apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.*

*u) Los Estados informen sobre todas las formas de violencia contra la mujer, e incluyan todos los datos de que dispongan acerca de la frecuencia de cada forma de violencia y de los efectos de esa violencia sobre las mujeres víctimas.*

*v) En los informes de los Estados se incluya información acerca de las medidas jurídicas, preventivas y de protección que se hayan adoptado para superar el problema de la violencia contra la mujer y acerca de la eficacia de esas medidas.*

En este contexto, consideramos que además de que la reforma resulta necesaria, la misma es consistente con el nuevo marco normativo en materia de derechos humanos.

Es por lo anterior, que consideramos oportuna cualquier reforma que venga a robustecer el marco normativo, a fin de garantizar penas que de alguna forma incidan y coadyuven en la disminución de la violencia contra la mujer.

Como bien se señala en la exposición de motivos, *en el 56% del territorio nacional se encuentra formalmente declarada la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres*, cabe mencionar que en nuestro Código Penal, se han venido haciendo reformas en este tema tan sensible en nuestro entorno, es por ello que existe un apartado denominado *Tipo penal complementado de feminicidio*, el cual se ha ido fortaleciendo, respondiendo a las demandas de la ciudadanía, así como a recomendaciones de diversos tratados internacionales.

Es así que los integrantes de esta dictaminadora, consideramos que la iniciativa objeto del presente dictamen, es conveniente, toda vez que resulta necesario que se sancione penalmente la conducta, de lesiones cometidas en contra de las mujeres por razón de género, ya que definitivamente se requiere de acciones efectivas e inmediatas que coadyuven a reducir y eliminar el fenómeno de la violencia y la discriminación por género.

No obstante lo anterior, los integrantes de la presente comisión dictaminadora analizamos el contenido del artículo 200 Y 201, mismos que se transcriben a continuación:

***Artículo 200 (Lesiones simples)***

*A quien dolosamente infiriera una o más lesiones a otro causándole un daño a su salud, se le impondrá:*

***I.*** *(Lesiones levísimas)*

*De tres a seis meses de prisión, o de doscientos a cuatrocientos días multa, cuando la o las lesiones tarden en sanar quince días o menos y no pongan en peligro la vida.*

***II.*** *(Lesiones leves)*

*De seis meses a dos años de prisión y multa, cuando la o las lesiones tarden en sanar más de quince días y menos de sesenta, y no pongan en peligro la vida.*

***III.*** *(Lesiones leves extendidas)*

*De uno a tres años de prisión y multa, cuando la o las lesiones tarden en sanar sesenta días o más tiempo y no pongan en peligro la vida.*

***IV.*** *(Lesiones graves por cicatriz permanentemente notable en la cara)*

*De tres a cuatro años de prisión y multa, cuando la o las lesiones dejen cicatriz permanentemente notable en la cara.*

***V.*** *(Lesiones graves por disminución o entorpecimiento permanentes de una facultad o de la función de un órgano o miembro)*

*De tres a siete años de prisión y multa, cuando la o las lesiones ocasionen una disminución o entorpecimiento permanentes de alguna facultad, o del funcionamiento de algún órgano o miembro.*

*Si la disminución o entorpecimiento permanentes no causan dolor ni son perceptibles, y son apenas significativos tanto para las funciones orgánicas o corporales de la víctima, como para el desempeño de su actividad profesional o de su ocupación y para su imagen, al autor se le impondrá de seis meses a dos años de prisión, o de seis meses a un año de trabajo en favor de la comunidad o de libertad supervisada, y de doscientos a cuatrocientos días multa.*

***VI.*** *(Lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida)*

*De tres a ocho años de prisión y multa, cuando la o las lesiones inferidas coloquen a la víctima en peligro concreto de morir.*

***VII.*** *(Lesiones gravísimas por pérdida de funciones, miembros u órganos)*

*De cuatro a nueve años de prisión y multa, si la o las lesiones producen la pérdida de cualquier función orgánica o la de un miembro, de alguna facultad u órgano, cuyas funciones no sean sustituidas por otro u otros.*

*Se impondrán las mismas penas del párrafo anterior, cuando las lesiones causen la pérdida de algún órgano, cuyas funciones sean sustituidas por otro u otros, pero cuya eventual pérdida apareje la anulación absoluta de la función, o la muerte de la víctima.*

***VIII.*** *(Lesiones gravísimas por parálisis, enfermedad incurable o deformidad grave)*

*De cinco a doce años de prisión y multa, cuando las lesiones ocasionen parálisis permanente de ambas piernas, o de uno o los dos brazos o manos, o causen paraplejia permanente de por lo menos una tercera parte del cuerpo, u originen una enfermedad incurable, o cuando las lesiones dejen alguna deformidad grave y permanente.*

*La deformidad será grave, cuando la asimetría corporal, facial o de la cabeza, y sus características, puedan originar a primera impresión sentimientos de aversión o lástima, aunque no sean expresados a la víctima.*

*(Principio de consunción cuando se infieren varias lesiones en una misma ocasión)*

*Si en un mismo contexto de ocasión, se le causan a la víctima varias de las lesiones previstas en las fracciones de este artículo, sólo se impondrán las penas que correspondan a las lesiones de mayor gravedad, sin perjuicio de tomar en cuenta las demás lesiones causadas cuando se individualice la pena, según las pautas señaladas en la ley para tal efecto*.

***Artículo 201 (Lesiones calificadas)***

*Las lesiones dolosas serán calificadas cuando se cometan con una o más de las circunstancias previstas en el artículo 184 de este código.*

*Cuando respecto a la conducta lesiva concurran hasta tres circunstancias calificativas de las previstas en el artículo 184 de este código, se aumentará en una mitad el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según las lesiones de que se trate conforme a dicho artículo 200.*

*Más si respecto a la conducta lesiva concurren más de tres circunstancias calificativas de las previstas en el artículo 184 de este código, se incrementará en tres cuartas partes el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según la lesión de que se trate conforme a dicho artículo 200.*

De la lectura y análisis del artículo anterior se observa que el mismo comprende distintas sanciones, en distintos supuestos, por citar un ejemplo, el artículo considera una pena de tres a seis meses o de cuatrocientos días multa, cuando la o las lesiones tarden en sanar quince días o menos y no pongan en peligro la vida; hasta lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida, conducta que se sanciona de tres a ocho años de prisión y multa.

Esto ocasionó que quienes integramos la presente dictaminadora, consideráramos que las mujeres pueden ser víctimas de todos estas conductas, por lo que resulta más adecuado, establecer un agravante en los casos en que estas conductas se den por razón de género, en lugar de adicionar una conducta independiente.

En este orden de ideas, observamos que el artículo 201, contempla la figura típica de lesiones calificadas, aumentando las penas hasta*en tres cuartas partes el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según la lesión de que se trate conforme a dicho artículo 200.*

Por lo que dada la gravedad de la conducta que pretende sancionar el iniciador coincidimos en que resulta más oportuno hacer la adición dentro del artículo 201.

En este orden de ideas se propone la adición de dos últimos párrafos al artículo 201 del Código Penal en el que se establezca que:

**Artículo 201 (Lesiones calificadas)**

Las lesiones dolosas serán calificadas cuando se cometan con una o más de las circunstancias previstas en el artículo 184 de este código.

Cuando respecto a la conducta lesiva concurran hasta tres circunstancias calificativas de las previstas en el artículo 184 de este código, se aumentará en una mitad el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según las lesiones de que se trate conforme a dicho artículo 200.

Más si respecto a la conducta lesiva concurren más de tres circunstancias calificativas de las previstas en el artículo 184 de este código, se incrementará en tres cuartas partes el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según la lesión de que se trate conforme a dicho artículo 200.

También se considerarán lesiones calificadas las lesiones que se causen dolosamente lesiones a una mujer en razón de su género.

Se considera que existe razón de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) Que previo a la lesión infringida, haya datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso o violencia del agresor en contra de la víctima siendo esta última de sexo femenino.

2) Si entre el agresor y la victima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o un grado de superioridad y, sea acreditado que en base a esa relación fueron infringidas las lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones.

3) Las lesiones se hayan infligido en zonas genitales.

Cuando respecto a la conducta lesiva concurran cualquiera de las circunstancias de las previstas el párrafo anterior, se aumentará en una mitad el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según las lesiones de que se trate conforme a dicho artículo 200.

Más si respecto a la conducta lesiva concurren una o más circunstancias de las previstas en el artículo 184 de este código con alguna de las previstas en el párrafo anterior, se incrementará en tres cuartas partes el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según la lesión de que se trate conforme a dicho artículo 200.

Por las consideraciones antes expuestas, es que estimamos pertinente emitir y poner a consideración del pleno el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ÚNICO.-** Se reforma el artículo 201 del Código Penal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 201 (Lesiones calificadas)**

Las lesiones dolosas serán calificadas cuando se cometan con una o más de las circunstancias previstas en el artículo 184 de este código.

Cuando respecto a la conducta lesiva concurran hasta tres circunstancias calificativas de las previstas en el artículo 184 de este código, se aumentará en una mitad el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según las lesiones de que se trate conforme a dicho artículo 200.

Más si respecto a la conducta lesiva concurren más de tres circunstancias calificativas de las previstas en el artículo 184 de este código, se incrementará en tres cuartas partes el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según la lesión de que se trate conforme a dicho artículo 200.

También se considerarán lesiones calificadas las lesiones que se causen dolosamente lesiones a una mujer en razón de su género.

Se considera que existe razón de género cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias:

1) Que previo a la lesión infringida, haya datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso o violencia del agresor en contra de la víctima siendo esta última de sexo femenino.

2) Si entre el agresor y la victima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o un grado de superioridad y, sea acreditado que en base a esa relación fueron infringidas las lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones.

3) Las lesiones se hayan infligido en zonas genitales.

Cuando respecto a la conducta lesiva concurran cualquiera de las circunstancias de las previstas el párrafo anterior, se aumentará en una mitad el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según las lesiones de que se trate conforme a dicho artículo 200.

Más si respecto a la conducta lesiva concurren una o más circunstancias de las previstas en el artículo 184 de este código con alguna de las previstas en el párrafo anterior, se incrementará en tres cuartas partes el mínimo y el máximo de las penas señaladas para las lesiones simples en el artículo 200 de este código, según la lesión de que se trate conforme a dicho artículo 200.

**TRANSITORIO**

**ÚNICO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez, Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda y Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza.En la Ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 28 de noviembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen** de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, relativo a la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 313 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**R E S U L T A N D O**

**PRIMERO.-** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 06 del mes de noviembre del año en curso, se acordó turnar a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa a que se ha hecho referencia.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento de dicho acuerdo, en fecha 08 de noviembre del presente año, se turnó a esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 313 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, y;

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión, con fundamento en los artículos 90, 116, 117, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 313 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, suscrita por el Diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario “Del Partido Acción Nacional”, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben, se basa entre otras en las consideraciones siguientes:

***EXPOSICION DE MOTIVOS***

*La protección de la salud y la vida de los ciudadanos es una de las tareas fundamentales del Estado, así está consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el Artículo 1° de la Ley de Salud del Estado de Coahuila. Es, por tanto, obligación del Estado, el vigilar que la atención médica sea llevada a cabo por profesionales debidamente acreditados en el área respectiva.*

*Sin embargo, hemos visto cómo muchas veces los medios de comunicación y las redes sociales, dan cuenta sobre la detención de personas que practican la medicina sin titulación médica, en clínicas clandestinas que se encuentran en condiciones sanitarias deplorables, contando tan sólo con un diploma de naturista.*

*Estas conductas intrusas en la actividad médica, las definía el jurista Alberto Crespi como “El ejercicio de actividades profesionales por persona no autorizada para ello”. Se trata pues, de un fenómeno que tiene una repercusión social importante y que, en virtud de la falta de reglamentación, es tierra fértil para que se presenten los casos de prácticas intrusas en la actividad médica en general, que el mismo Crespi la definía como “aquella actividad que se orienta de forma directa a eliminar o paliar una patología del cuerpo o de la mente de una persona, o bien a mejorar el aspecto externo de la misma (intervenciones estéticas, cosméticas y de cirugía plástica reconstructiva) mediante procedimientos que, realizados conforme al conocimiento y estado de la ciencia y de la praxis médica, influyen de forma relevante en la integridad del cuerpo humano o en el decurso de su proceso biológico”.*

*Nuestra legislación, particularmente la Ley General de Salud vigente, así como la Ley de Salud del Estado de Coahuila son claros al señalar los requisitos para ser considerado médico. Estos criterios y requisitos se pueden resumir de la siguiente manera:*

*1. Que la emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas.*

*2. Que, para llevar a cabo procedimientos médico-quirúrgicos de especialidad, se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas.*

*3. Que el Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM) fue creado como organismo auxiliar de la Administración Pública Federal para supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y -en su caso- recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la medicina.*

*4. Que solo los Consejos de Especialidades Médicas reconocidos por el CONACEM pueden expedir certificados de su respectiva especialidad.*

*Lo que se pretende con esta iniciativa es evitar lo que hoy en día, gracias a los vacíos legales, ha dado pie a la proliferación de médicos que, con un mínimo de preparación, efectúan procedimientos para los que no están capacitados, poniendo a nuestra población en grave riesgo.*

*Con esta adición al Código Penal, buscamos castigar a aquellos que ejercen profesiones relacionadas con la salud individual, por el peligro que la impericia podría originar para la salud de los particulares. Se trata de proteger un bien jurídico fundamental como lo es, el de la salud personal. Todo en aras de salvaguardar la vida y la salud de la ciudadanía, garantizando una atención médica con la mayor calidad posible.*

**TERCERO.-** Quienes aquí dictaminamos, los integrantes de esta Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, nos abocamos al estudio del presente proyecto de Decreto, el cual tiene como finalidad adicionar un párrafo al artículo 313 del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, ante lo cual podemos hacer referencia que dicha propuesta tiene como finalidad agravar el delito de usurpación de la profesión médica.

Se considera como usurpación de profesión, el ejercer una profesión sí que se cuente con el título académico respectivo con reconocimiento de validez oficial de estudios, dicho delito se encuentra tipificado tanto en el Código Penal Federal como en el Código Penal de nuestro estado.

El artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga el derecho a todos los ciudadanos de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siempre y cuando estos sean lícitos, acentuando que “*la ley determinará en cada entidad federativa, cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo”.*

Por su parte, el Código Penal Federal en su Título Décimo Tercero, Capítulo VII, regula el tipo delictivo de la usurpación de profesión, estipulando en su artículo 250 lo siguiente:

***Artículo 250****.- Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de cien a trescientos días a quien:*

***I.-*** *Al que, sin ser funcionario público, se atribuya ese carácter y ejerza alguna de las funciones de tal;*

***II.- Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, conforme a las disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional.***

***a).- Se atribuya el carácter del profesionista***

***b).- Realice actos propios de una actividad profesional, con excepción de lo previsto en el 3er. párrafo del artículo 26 de la Ley Reglamentaria de los artículos 4o. y 5o. Constitucionales.***

***c).- Ofrezca públicamente sus servicios como profesionista.***

***d).- Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello.***

***e).- Con objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional.***

***III.-*** *Al extranjero que ejerza una profesión reglamentada sin tener autorización de autoridad competente o después de vencido el plazo que aquella le hubiere concedido.*

***IV.-*** *Al que usare credenciales de servidor público, condecoraciones, uniformes, grados jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Podrá aumentarse la pena hasta la mitad de su duración y cuantía, cuando sean de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas o de alguna corporación policial.*

En atención al artículo 5 de la Constitución General, el Estado de Coahuila creó la Ley de Profesiones, dentro de la cual se catalogan las profesiones que requieren título y cédula para ejercer en todas sus ramas y especialidades, ello en base a que, por su trascendencia hay algunas que en el ámbito social necesitan del cuidado de intereses fundamentales y no pueden realizarse sin que el estado exija para su desempeño legítimo, la preparación adecuada para que dichos intereses no se vean lesionados o puestos en peligro.

Sobre esta base, nos abocamos al análisis que nos ocupa en la presente propuesta de reforma, distinguiendo que la usurpación de funciones médicas, trasgrede la protección de bienes jurídicos básicos como lo son la vida, la salud y la integridad de una sociedad.

La Constitución de la Organización Mundial de la Salud, obliga a los Estados Parte a cumplir con los principios básicos de una sociedad, aludiendo que “*la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. El goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.* ***La salud de todos los pueblos es una condición fundamental para lograr la paz y la seguridad, y depende de la más amplia cooperación de las personas y de los Estados****”.*

Actualmente, nuestra legislación local tipifica en el artículo 313 el delito de usurpación de profesión, cualquiera que esta sea, imponiendo de uno a dos años de prisión y de doscientos a trescientos días multa, o de uno a dos años de libertad supervisada y de doscientos a trescientos días multa.

Sin embargo, en base a lo expuesto, quienes aquí dictaminamos coincidimos con el ponente en agravar el delito en el supuesto de usurpación de funciones médicas, ya que lo que se pretende proteger es un interés público general de los ciudadanos, como lo es la salud y la vida, ante los eventuales riesgos que podrían derivarse de la actuación de este delito. Asimismo y de manera indirecta, se protegen también los intereses de un determinado grupo de profesionales defendiendo sus competencias y su prestigio.

Es por lo anterior, que los integrantes de esta dictaminadora respaldamos la propuesta de incorporar expresamente como calificativa especial el delito de usurpación de profesión médica, contribuyendo así a regular esta conducta atípica señalando que la misma encuentra motivación derivada del peligro que corre nuestra sociedad al acudir con una persona que no tiene la preparación necesaria para tratar la salud y la vida de las personas y que esto puede llegar a poner el riesgo los intereses fundamentales de los coahuilenses, sin embargo estimaos necesario establecer una excepción cuando se trate de atención del embarazo o parto así como urgencias médicas.

En virtud de las consideraciones expuestas, es que tenemos a bien poner a consideración de ustedes para su estudio, análisis y en su caso, aprobación el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ÚNICO.-** Se **adiciona un segundo párrafo** al **artículo 313** del Código Penal de Coahuila de Zaragoza para quedar como sigue:

**Artículo 313 (Usurpación de profesión)**

…

Se aumentará en un tanto el mínimo y el máximo de las penas previstas en el párrafo anterior, para quien realice actos propios de la profesión médica, sin tener el título que la ley exige para ejercerla, así como para el médico que practique un procedimiento médico quirúrgico de especialidad, y no cuente con los requisitos establecidos en la Ley General de Salud, salvo que se trate de atención del embarazo o parto así como urgencias médicas.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO ÚNICO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jaime Bueno Zertuche, (Coordinador), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño (Secretario), Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos, Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez Dip. Emilio Alejandro de Hoyos Montemayor, Dip. José Benito Ramírez Rosas, Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda, Dip. Edgar Gerardo Sánchez Garza, a 28 de noviembre de 2019.

**COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JAIME BUENO ZERTUCHE**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO**  **(SECRETARIO)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. LUCÍA AZUCENA RAMOS RAMOS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EMILIO ALEJANDRO DE HOYOS MONTEMAYOR** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SI** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a la Iniciativa de Decreto planteada por el Ejecutivo del Estado por el que se autorice a incorporar como Bien del Dominio Privado del Gobierno del Estado de Coahuila y se autorice al Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, para enajenar a título gratuito los lotes de terreno con una superficie total de 5,680 M2., que constituyen la manzanas 181 y 182 ubicadas en la colonia Teotihuacán parte Alta, en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, con objeto de dar certidumbre jurídica a los particulares que actualmente poseen los lotes y con esto llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**RESULTANDO**

**ÚNICO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso del Estado, el día 09 del mes de abril del año 2019, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**C O N S I D E R A N D O**

**PRIMERO.**  Que estaComisión de Finanzas, con fundamento en los artículos 91, 116, 117 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.** Que la iniciativa se sustentó en la siguiente exposición de motivos.

**TERCERO.**  Reconocer el derecho de ocupación, beneficia ampliamente a los coahuilenses que se encuentran en una situación de inseguridad respecto de su patrimonio, pues significa el reconocimiento de su propiedad y de las inversiones realizadas en los terrenos, así como su permanencia; abriendo así la posibilidad de una solución progresiva al incorporar la tierra al sector formal del Estado.

En este sentido, el Gobierno del Estado de Coahuila, preocupado por asegurar el patrimonio familiar encomienda la tarea de regularizar la tenencia de la tierra a sus poseedores, y dar seguridad jurídica en todo el Estado, a la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila.

En tal virtud, se considera prioritario y de vital importancia la seguridad jurídica por lo que respecta a la titularidad de la propiedad urbana y rural, por lo cual, el Gobierno del Estado realiza cotidianamente la regularización de la tenencia de la tierra en beneficio principalmente de las personas económicamente menos favorecidas, instrumentando acciones concretas e inmediatas para proceder a la escrituración de los predios a favor de sus actuales poseedores, situación que repercute directamente en un mejoramiento evidente del nivel social de sus habitantes.

Es por ello que el Gobierno del Estado de Coahuila, ratificando el compromiso con sus habitantes, ha resuelto enajenar una superficie que se describirá más adelante a favor de las personas que actualmente la poseen, con la finalidad de regularizar su tenencia.

En este sentido, mediante certificación de fecha 03 de junio de 2019, suscrita por la Profesora Laura Patricia Gallegos González, Directora del Catastro Municipal de la ciudad de Acuña, Coahuila de Zaragoza, se manifiesta que las manzanas 181 y 182 ubicadas en la colonia Teotihuacán parte Alta de dicha municipalidad no se encuentran inscritos a favor de persona alguna. De este mismo modo se desprende de Certificado de 10 de agosto de 2018, signado por el Lic. José Rubén Villarreal González, Administrador Local del Registro Público de Acuña.

Se acude ante esta Soberanía, para efecto de solicitar que se declaren los lotes que integran las manzanas 181 y 182 del asentamiento humano irregular conocido como Teotihuacán parte Alta, en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza y en su oportunidad se autorice asimismo al Gobierno del Estado, para que por conducto de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, los enajene a título gratuito a favor de las personas que actualmente los poseen, para así regularizar su tenencia brindarles seguridad jurídica en su patrimonio.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que se han cubierto los requisitos necesarios para la incorporación como bien del dominio privado de la superficie en mención, logrando así la posibilidad de formalizar su posesión, permitiendo certeza jurídica a los actuales poseedores y llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, el cual otorgará un beneficio social.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**DECRETO POR EL QUE SE INCORPORA COMO BIEN DEL DOMINIO PRIVADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA Y SE AUTORIZA AL GOBIERNO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA URBANA Y RUSTICA EN COAHUILA, PARA ENAJENAR A TÍTULO GRATUITO LOS LOTES DE TERRENO QUE CONSTITUYEN LAS MANZANAS 181 Y 182 DEL ASENTAMIENTO HUMANO IRREGULAR DENOMINADO “TEOTIHUACÁN PARTE ALTA” EN LA CIUDAD DE ACUÑA, COAHUILA.**

**ARTÍCULO PRIMERO. -** Se incorpora como bien del dominio privado del Gobierno de Coahuila de Zaragoza, los lotes de terreno que conforman las Manzanas 181 y 182 con una superficie total de 5,680.00 metros cuadrados, que constituyen el asentamiento humano irregular denominado **“TEOTIHUACÁN PARTE ALTA”,** ubicado en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, el cual se identifica con las siguientes medidas y colindancias:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MANZANA 181**  **SUPERFICIE 2,240.00 M2.** | | |
| NORTE | 56.00 METROS | CALLE BENJAMIN CANALES |
| SUR | 56.00 METROS | PRIVADA BENJAMÍN CANALES |
| ORIENTE | 40.00 METROS | CALLE GUILELRMO PRIETO |
| PONIENTE | 40.00 METROS | PROPIEDAD PRIVADA |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MANZANA 181**  **SUPERFICIE 3,440.00 M2.** | | |
| NORTE | 86.00 METROS | PRIVADA BENJAMÍN CANALES. |
| SUR | 86.00 METROS | CALLE SANTOS DEGOLLADO |
| ORIENTE | 40.00 METROS | CALLE GUILLERMO PRIETO |
| PONIENTE | 40.00 METROS | CALLE CORREGIDORA |

Dicho inmueble se trata de un bien vacante, en virtud de no haber encontrado antecedentes registrables del inmueble en mención, lo cual consta en el Certificado No Antecedentes Registrables, expedido por la Oficina del Registro Público, con residencia en la ciudad de Acuña del Estado de Coahuila de Zaragoza, con fecha 28 de mayo de 2019.

**ARTÍCULO SEGUNDO. –** El presente Decreto constituye el Título de Propiedad a favor del Gobierno del Estado de Coahuila, para los efectos del Artículo que antecede, el presente decreto deberá inscribirse en el Instituto Registral y Catastral del Estado de Coahuila de Zaragoza, en la ciudad de Acuña, para que surta efectos respecto a terceros.

**ARTÍCULO TERCERO**.- Una vez llevado a cabo el registro mencionado en el **ARTÍCULO SEGUNDO**, se autoriza la enajenación a título gratuito de los lotes de terreno con una superficie total de 5,680.00 metros cuadrados, correspondientes a las Manzanas 181 y 182 que constituyen el asentamiento humano irregular denominado **“TEOTIHUACÁN PARTE ALTA”,** ubicado en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza, misma que se realizará por conducto la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, conforme a los datos de identificación de los poseedores que obran en los archivos de la Comisión.

**ARTÍCULO CUARTO. -** El objeto de la operación que se autoriza es el de iniciar con el proceso de escrituración de los lotes de terreno que conforman el asentamiento humano irregular denominado **“TEOTIHUACÁN PARTE ALTA”,** en el municipio de Acuña, Coahuila de Zaragoza.

**ARTÍCULO QUINTO**. - Se faculta al Titular del Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana y Rústica en Coahuila, otorgue los Títulos de Propiedad relativos a la enajenación que se autoriza con el presente Decreto. El presente Decreto deberá insertarse íntegramente en los Títulos de Propiedad correspondientes.

**ARTÍCULO SEXTO.** - Los gastos que se generen a consecuencia del proceso de escrituración y registro de la operación autorizada en este Decreto, serán cubiertos totalmente por los beneficiarios de los lotes de terreno.

**ARTÍCULO SÉPTIMO**. - En el supuesto que no se formalicen las operaciones que se autorizan en un plazo de 24 (veinticuatro) meses, computados a partir de la fecha en que inicie la vigencia del presente Decreto, quedarán sin efecto las disposiciones del mismo, requiriéndose, en su caso, de nueva autorización Legislativa para proceder a la enajenación a que se hace referencia el Artículo Tercero de este Decreto.

**T R A N S I T O R I O S**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 12 de noviembre de 2019.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, mediante el cual solicita la validación de un acuerdo aprobado por el Ayuntamiento, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 163.00 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor de la C. Julia Ramírez Sosa, con objeto de llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra, lo anterior en virtud de que el Decreto número 639 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 05 de diciembre de 2014, en el que se autorizó esta operación anteriormente, quedo sin vigencia.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que, en sesión celebrada por el Pleno del Congreso, de fecha 16 de octubre de 2019, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, inciso 10, del Código Municipal, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que, en cumplimiento con lo que señalan los Artículos 302 y 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado de Coahuila, el Ayuntamiento según consta en certificación del acta de Cabildo de fecha 16 de julio de 2019, se aprobó por unanimidad de los presentes del Cabildo, enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 163.00 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor de la C. Julia Ramírez Sosa, lo anterior en virtud de que el Decreto número 639 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 05 de diciembre de 2014, en el que se autorizó esta operación anteriormente, quedo sin vigencia.

El inmueble antes mencionado se identifica como lote 16 de la manzana “C” ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas” de esa ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 20.00 metros y colinda con Lote número 17.

Al Sur: mide 20.00 metros y colinda con Lote número 15.

Al Oriente: mide 08.00 metros y colinda con Lote número 7.

Al Poniente: mide 08.30 metros y colinda con calle General Murguía.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 41367 Libro 141 Sección I, de fecha 27 de abril de 2005.

**TERCERO.** El objeto de esta operación es única y exclusivamente para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**CUARTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la enajenación de la superficie en mención, logrando así garantizar certeza jurídica al predio y con esto se lleve a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se valida el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para enajenar a título oneroso, un inmueble con una superficie de 163.00 m2., ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas”, a favor de la C. Julia Ramírez Sosa, lo anterior en virtud de que el Decreto número 639 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 05 de diciembre de 2014, en el que se autorizó esta operación anteriormente, quedo sin vigencia.

El inmueble antes mencionado se identifica como lote 16 de la manzana “C” ubicado en el Fraccionamiento “Lucio Cabañas” de esa ciudad y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 20.00 metros y colinda con Lote número 17.

Al Sur: mide 20.00 metros y colinda con Lote número 15.

Al Oriente: mide 08.00 metros y colinda con Lote número 7.

Al Poniente: mide 08.30 metros y colinda con calle General Murguía.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 41367 Libro 141 Sección I, de fecha 27 de abril de 2005.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El objeto de esta operación es única y exclusivamente para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra.

**ARTÍCULO TERCERO.** El Ayuntamiento del Municipio de Torreón, por conducto de su Presidente Municipal o de su Representante legal acreditado, deberá formalizar la operación que se autoriza y proceder a la escrituración correspondiente.

**ARTÍCULO CUARTO.** En el supuesto de que no se formalice la enajenación que se autoriza, al término de la Administración Municipal actual (2019-2021), se requerirá de una nueva autorización legislativa para ampliar el plazo, a fin de que se pueda continuar o concluir la formalización de las operaciones realizadas con la enajenación del inmueble a que se refiere el artículo primero de este Decreto.

**ARTÍCULO QUINTO.** Los gastos de escrituración y registro que se originen de la operación que mediante este decreto se valida, serán por cuenta del beneficiario.

**ARTÍCULO SEXTO.** El presente decreto deberá insertarse en la escritura correspondiente.

**TRANSITORIOS**

**ARTÍCULO PRIMERO.** El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 12 de noviembre de 2019.

**POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN** de la Comisión de Finanzas de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, con relación al expediente formado con motivo de la Iniciativa de Decreto enviada por el Presidente Municipal de Torreón, Coahuila de Zaragoza, para que se autorice a desincorporar del dominio público municipal, un bien inmueble identificado como área de cesión municipal de la manzana “R”, con una superficie total de 32,296.90 m2., ubicado en el “Fraccionamiento Industrial Pymes Torreón” de esa ciudad, con el fin de permutar por el Lote 1-3 con una superficie de 32,296.90 M2., ubicado en la primera etapa del Parque Industrial Global Park Laguna de esa ciudad, a la persona moral Global Park Laguna S.A. Promotora de Inversión de Capital Variable, con objeto de llevar a cabo el inicio de las operaciones e instalación de la empresa Techronic Industries Co. México S. de R.L. de C.V.

**RESULTANDO**

**PRIMERO.** Que en sesión celebrada por el Pleno del Congreso el día 23 del mes de octubre de año 2019, se dio cuenta la mencionada Iniciativa y turnada a esta Comisión de Finanzas, para su estudio y dictamen.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.** Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 102, fracción I, numeral 10 del Código Municipal para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los Ayuntamientos están facultados para acordar el destino o uso de los bienes muebles o inmuebles y de toda propiedad municipal.

**SEGUNDO.** Que de conformidad con el Artículo 304 y el segundo párrafo del Artículo 305 del Código Financiero para los Municipios del Estado, dispone que los bienes del dominio público sólo podrán ser enajenados mediante el acuerdo de autorización de las dos terceras partes de los miembros del ayuntamiento, previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado y conforme a las disposiciones aplicables, así como el Artículo 302que dispone *”Ninguna enajenación, ni concesión de uso o usufructo de bienes inmuebles del Municipio, podrán hacerse a los miembros y servidores públicos del ayuntamiento, ni a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, colaterales hasta el cuarto grado y afines hasta el segundo”.*

**TERCERO.** Que, entre los casos en que procede la autorización para enajenar bienes inmuebles del dominio público municipal, se señala el correspondiente a la disposición de los mismos, para destinarlos al fomento de la vivienda, regularización de la tenencia de la tierra o cualquiera otra necesidad de interés público.

**CUARTO.** Que de las constancias que obran en el expediente, se acompaña copia certificada de cabildo de fecha 10 de octubre de 2019, conforme el cual se decidió por unanimidad de los presentes integrantes del Cabildo, desincorporar del dominio público municipal, un bien inmueble identificado como área de cesión municipal de la manzana “R”, con una superficie total de 32,296.90 m2., ubicado en el “Fraccionamiento Industrial Pymes Torreón” de esa ciudad, con el fin de permutar por el Lote 1-3 con una superficie de 32,296.90 M2., ubicado en la primera etapa del Parque Industrial Global Park Laguna de esa ciudad, a la persona moral Global Park Laguna S.A. Promotora de Inversión de Capital Variable.

El primer inmueble propiedad municipal se identifica como área de cesión municipal de la manzana “R”, con una superficie total de 32,296.90 m2., ubicado en el “Fraccionamiento Industrial Pymes Torreón” de esa ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 229.01 metros y colinda con frente a la Avenida Industrial de la Transformación, que remata al Norponiente en semiretonda de acuerdo al cuadro de construcción.

Al Sur: mide 244.17 metros y colinda con propiedad particular que remata al suroriente en semiretonda de acuerdo al cuadro de construcción.

Al Oriente: mide 104.12 metros y colinda con frente a calle sin nombre.

Al Poniente: mide 114.21 metros y colinda con propiedad particular.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 245977 Libro 2460 Sección I, de fecha 22 de febrero de 2018.

Inmueble propiedad de la persona moral Global Park S.A. Promotora de Inversión de Capital Variable, identificado en el Lote 1-3 con una superficie de 32,296.90 M2., ubicado en la primera etapa del Parque Industrial Global Park Laguna de esa ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 214.19 metros y colinda con Lote 1-2 de la etapa 1.

Al Sur: mide 213.58 metros y colinda con Lote 1-4 de la etapa 1.

Al Este: mide 151.00 metros y colinda con Blvd. Carroceras.

Al Oeste: mide 151.00 metros y colinda con área de cesión municipal Lote 1.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor de Global Park Laguna, S.A. Promotora de Capital Variable, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 267610, Libro 2677, Sección I, de fecha 12 de agosto de 2019, por adquisición; bajo la Partida 268965, Libro 2690, Sección I, de fecha 11 de septiembre de 2019, por adquisición y bajo la Partida 269015, Libro 2691, Sección I, de fecha 11 de septiembre de 2019, por contrato de lotificación de predios.

**QUINTO.** El objeto de esta operación es única y exclusivamente llevar a cabo el inicio de las operaciones e instalación de la empresa Techronic Industries Co. México S. de R.L. de C.V. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida el contrato y se revertirá el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento de indemnizar al solicitante.

**SEXTO.** Esta Comisión de Finanzas encontró que el Municipio de Torreón, ha cubierto los requisitos necesarios para la procedencia de la desincorporación de la superficie en mención, logrando así garantizar la instalación y operación de la empresa, la cual será de beneficio social con la creación de empleos directos e indirectos, a beneficio de la ciudad.

Por los motivos que se exponen en los considerandos que anteceden, se estima que se reúnen los elementos de juicio necesario para elaborar el presente dictamen y una vez cumplido lo dispuesto por los Artículos 82, 83, 88 fracción III, 91, 116, 117 y 119 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, los integrantes de la Comisión de Finanzas sometemos a consideración de este H. Congreso del Estado, para su estudio, discusión y en su caso, aprobación, el siguiente:

* **PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.** Se autoriza al Ayuntamiento del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza, a desincorporar del dominio público municipal, un bien inmueble identificado como área de cesión municipal de la manzana “R”, con una superficie total de 32,296.90 m2., ubicado en el “Fraccionamiento Industrial Pymes Torreón” de esa ciudad, con el fin de permutar por el Lote 1-3 con una superficie de 32,296.90 M2., ubicado en la primera etapa del Parque Industrial Global Park Laguna de esa ciudad, a la persona moral Global Park Laguna S.A. Promotora de Inversión de Capital Variable, con objeto de llevar a cabo el inicio de las operaciones e instalación de la empresa Techronic Industries Co. México S. de R.L. de C.V.

El primer inmueble propiedad municipal se identifica como área de cesión municipal de la manzana “R”, con una superficie total de 32,296.90 m2., ubicado en el “Fraccionamiento Industrial Pymes Torreón” de esa ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 229.01 metros y colinda con frente a la Avenida Industrial de la Transformación, que remata al Norponiente en semiretonda de acuerdo al cuadro de construcción.

Al Sur: mide 244.17 metros y colinda con propiedad particular que remata al suroriente en semiretonda de acuerdo al cuadro de construcción.

Al Oriente: mide 104.12 metros y colinda con frente a calle sin nombre.

Al Poniente: mide 114.21 metros y colinda con propiedad particular.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor del R. Ayuntamiento de Torreón, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 245977 Libro 2460 Sección I, de fecha 22 de febrero de 2018.

Inmueble propiedad de la persona moral Global Park S.A. Promotora de Inversión de Capital Variable, identificado en el Lote 1-3 con una superficie de 32,296.90 M2., ubicado en la primera etapa del Parque Industrial Global Park Laguna de esa ciudad, y cuenta con las siguientes medidas y colindancias:

Al Norte: mide 214.19 metros y colinda con Lote 1-2 de la etapa 1.

Al Sur: mide 213.58 metros y colinda con Lote 1-4 de la etapa 1.

Al Este: mide 151.00 metros y colinda con Blvd. Carroceras.

Al Oeste: mide 151.00 metros y colinda con área de cesión municipal Lote 1.

Dicho inmueble se encuentra inscrito a favor de Global Park Laguna, S.A. Promotora de Capital Variable, en la Oficina del Registro Público de la ciudad de Torreón del Estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la Partida 267610, Libro 2677, Sección I, de fecha 12 de agosto de 2019, por adquisición; bajo la Partida 268965, Libro 2690, Sección I, de fecha 11 de septiembre de 2019, por adquisición y bajo la Partida 269015, Libro 2691, Sección I, de fecha 11 de septiembre de 2019, por contrato de lotificación de predios.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** El objeto de esta operación es única y exclusivamente llevar a cabo el inicio de las operaciones e instalación de la empresa Techronic Industries Co. México S. de R.L. de C.V. En caso de que a dicho inmueble se le dé un uso distinto a lo estipulado, por ese solo hecho automáticamente se dará por rescindida el contrato y se revertirá el predio junto con sus accesorios al patrimonio municipal, sin ninguna responsabilidad a cargo del R. Ayuntamiento de indemnizar al solicitante.

**ARTÍCULO TERCERO.** Para que el municipio pueda disponer de este bien inmueble y cumplir con lo que se dispone en el artículo que antecede, el ayuntamiento, conforme a lo que señalan los artículos 304 y 305 del Código Financiero para los municipios del Estado, acordará las formalidades que deberán satisfacerse y establecerán un plazo cierto y determinado para su formalización.

Así mismo, dentro de los cinco días hábiles siguientes de haber dictado la resolución correspondiente, deberá enviar ésta al Congreso del Estado, para que se resuelva sobre la validez o invalidez del acuerdo, por lo que el ayuntamiento no podrá formalizar la operación hasta en tanto este Congreso declare la validez de la misma y quede firme dicha resolución.

**TRANSITORIOS**

**PRIMERO.** El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.** Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Congreso del Estado de Coahuila, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 12 de noviembre de 2019.

* **POR LA COMISIÓN DE FINANZAS DE LA LXI LEGISLATURA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** |
| Dip. Lucía Azucena Ramos Ramos  Coordinadora | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Gabriela Zapopan Garza Galván  Secretaria | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Rosa Nilda González Noriega. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Zulmma Verenice Guerrero Cázares | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Elisa Catalina Villalobos Hernández | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |
| Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | A FAVOR | ABSTENCIÓN | EN CONTRA | |

**DICTAMEN QUE EXPIDE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANDO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RELATIVO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS, DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA “VENUSTIANO CARRANZA GARZA”, POR EL QUE SE ADICIONAN Y MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY PARA COMBATIR EL RUIDO EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Y DE LA LEY ESTATAL DE SALUD, EN RAZÓN DE LOS DAÑOS A LA SALUD QUE CAUSA LA EXPOSICIÓN A EMISIONES DE RUIDO MAYORES A LOS NIVELES LEGALMENTE ESTABLECIDOS.**

**RESULTANDO**

**PRIMERO.-** Que, en la sesión celebrada por el Honorable Pleno del Congreso del Estado, el día 15 de mayo de 2019, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de la presente iniciativa con proyecto de decreto.

**SEGUNDO.-** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, la iniciativa a la que se hace referencia, para efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO.-** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**SEGUNDO.-** Que la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una nueva disposición para reconstituir la “fracción b)” del Artículo 2 de la Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila de Zaragoza, recorriendo el texto reemplazado para conformar la “fracción c)”, a su vez, la “c)” anterior pasa a formar la “fracción d)”, y se modifican las fracciones IX y X del Artículo 7 del Capítulo Segundo, referente a las “Atribuciones de las Autoridades”, al tenor de la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

**PRIMERO.-** La contaminación acústica suele ser más dañina de lo que parece. Además de causar sordera, puede dar origen a un sinnúmero de problemas fisiológicos, psicológicos y sociológicos en el individuo.

En efecto, la sensación auditiva desarticulada y molesta, conocida como ruido es, en términos ambientales, contaminación acústica. Se trata de sonidos indeseables y ajenos a nuestro interés, que causan malestar.

Este factor, generalmente ignorado por la Medicina, representa un riesgo latente para salud pública. Es tan común, que el 12 de junio fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como el Día Mundial de la Descontaminación Acústica.

Por lo general, a este contaminante ambiental sólo se le considera cuando genera daños auditivos y molestias, pese a que también afecta la calidad del sueño e, inconscientemente, la vigilia, mientras se realiza alguna actividad; impacta al cuerpo y sus órganos y, consecuentemente, la calidad de vida de las personas, sin percatarse casi nunca de las causas.

En el contexto mundial, 360 millones de personas sufren pérdida, de moderada a grave, de la audición por diversas causas, como el ruido, enfermedades genéticas, complicaciones al nacer, determinadas enfermedades infecciosas, infecciones crónicas del oído, el uso de determinados medicamentos y el envejecimiento. Se estima que la mitad de todos los casos de pérdida de audición pueden evitarse.

Debido a su constante desarrollo, los núcleos poblacionales de Coahuila no escapan a esta realidad: la industria de la construcción, el tránsito vehicular, el comercio ambulante, la actividad fabril y los centros de diversión, son algunas de las fuentes de contaminación acústica.

Conforme crecen las urbes, aumenta la exposición a niveles de ruido y, por consiguiente, es más frecuente la pérdida de la audición, tanto como los efectos vegetativos, la alteración del ritmo cardiaco y del sistema periférico.

La Organización mundial de la salud (OMS), la Comunidad Económica Europea (CEE) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), revelan de manera unánime que el ruido tiene efectos muy perjudiciales para la salud.

Se han identificado, por ejemplo, las siguientes afecciones psicológicas del ruido: estrés, insomnio, irritabilidad, síntomas depresivos, falta de concentración, menor rendimiento en el trabajo, tendencia a actitudes agresivas, falta de deseo sexual y efectos sobre la memoria. Estas afecciones pueden agudizarse en niños.

Entre las reacciones inmediatas, figuran: dilatación de las pupilas, contracción de los músculos, sobre todo los del cuello y espalda, taquicardias, movimiento acelerado de los párpados que se cierran una y otra vez, agitación respiratoria y disminución de la secreción gástrica que dificulta la digestión, menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular.

Debido a que en México crecen los problemas derivados de la contaminación acústica, el 29 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la Norma Oficial Mexicana (NOM)-081-SEMARNAT-1994 que establece los límites máximos permisibles de emisión de ruido de las fuentes fijas y su método de medición.

Por otra parte, si los sonidos son mayores de 85 decibelios se pueden producir, por ejemplo: disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis; aumento del colesterol y de triglicéridos.

Así mismo, los ruidos fuertes y súbitos pueden llegar a causar hasta un infarto. También puede haber aumento de la glucosa en sangre, cosa especialmente preocupante en los enfermos de diabetes.

También es posible que ocurran problemas neuromusculares que pueden provocar dolor, falta de coordinación, reducción de la visión nocturna, aumento de la fatiga, dolor de cabeza, dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado, menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular debido a que los músculos se ponen rígidos.

Un ruido constante por encima de 45 decibelios aumenta las enfermedades infecciosas: impide el sueño apacible, por lo que el cansancio físico puede producir una disminución de las defensas.

Cabe destacar que el ruido con niveles por encima de 80 decibelios puede aumentar el comportamiento agresivo. Además, parece haber una conexión entre el ruido comunitario y ciertos problemas mentales, debido a la demanda de tranquilizantes y somníferos, la incidencia de síntomas psiquiátricos y el número de admisiones a hospitales psiquiátricos.

Numerosos estudios concluyen que un ruido constante por encima de los 55 decibelios produce cambios en el sistema hormonal e inmunitario que conllevan cambios vasculares y nerviosos, como el aumento del ritmo cardíaco y tensión arterial, el empeoramiento de la circulación periférica, el aumento de la glucosa, el colesterol y los niveles de lípidos.

**SEGUNDO.-** Que los diputados y las diputadas integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición de motivos, concuerdan en que, efectivamente, es muy importante no perder de vista que el ruido excesivo es un factor real de riesgo para la salud.

Fue por eso que, en 1999, la OMS recomendó que los niveles de ruido en el exterior, durante el día, no excedieran los 55 decibelios (dB). Diez años después sugirió un valor máximo nocturno de 40 dB para prevenir efectos adversos sobre nuestra salud.

Por otra parte, “es bien sabido que la exposición a ruido intenso puede causar efectos directos en la audición. Sin embargo, los niveles regulares de ruido ambiental también se han asociado con molestias, trastornos del sueño, problemas cognitivos y con enfermedades cardiovasculares, en particular la cardiopatía isquémica. Estudios recientes también sugieren que el ruido del tráfico podría estar asociado con la diabetes y la obesidad”, reza un artículo especializado de María Forester, publicado por El País.

**TERCERO.-** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, se emite y pone a consideración del Honorable Pleno del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Se modifica la fracción X, del artículo 7 de la Ley para Combatir el Ruido en el Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7.-…

I a la IX. …

X.- Colaborar y coordinarse con instituciones médicas, educativas y científicas para intercambiar conocimientos, tecnologías y descubrimientos en materia de contaminación por ruido, su impacto ambiental y sus consecuencias en la salud integral de la población.

XI.- …

XII.- …

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se modifica la fracción V del artículo 122 y se adicionan las fracciones VI y VII al artículo 122 de la Ley Estatal de Salud, para quedar como sigue:

Artículo 122. El ejercicio de la acción de prevención y control de las enfermedades no transmisibles, comprenderá una o más de las siguientes medidas, según el caso de que se trate:

I a la IV. …

V. La prevención de padecimientos fisiológicos, tanto como psicológicos y sociológicos, causados por la exposición al ruido excesivo;

VI. Hacer campañas tendientes a difundir entre ciudadanos e instituciones, información sobre los daños que causa la contaminación sonora, en el estado de salud de la población; y

VII. Las demás que sean necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos, que se presenten en la población.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO.-** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO.-** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 13 días del mes de noviembre de 2019

**POR LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUALES** |
|  |  |  |  |  |

**Dictamen que emite la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, del Honorable Congreso Independiente, Libre y Soberano del Estado de Coahuila de Zaragoza, relativo a la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado Emilio Alejando de Hoyos Montemayor, coordinador del Grupo Parlamentario “Brígido Ramiro Moreno Hernández” del Partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de la Ley Estatal de Educación, en cuanto al fomento de la educación ambiental en los planteles del sistema educativo estatal, y...**

**RESULTANDO**

**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada por el Honorable Pleno del Congreso del Estado, el día 12 de junio de 2019, se desahogó lo relativo al trámite de la primera lectura de la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, por acuerdo del Pleno, se turnó a estaComisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, la iniciativa a la que se hace referencia, para efectos de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, con fundamento en los artículos 100, 163, 164 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para emitir el presente dictamen.

**TERCERO. -** Que la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y de la Ley Estatal de Educación, en materia de educación ambiental, al tenor de la siguiente...

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**

*La agenda ambiental se ha convertido junto con la económica y la social en una de las más importantes para los gobiernos del mundo. Lo anterior tiene origen en el interés común de las naciones por dar solución a las problemáticas que actualmente afectan a las sociedades modernas y ponen en riesgo el bienestar de la humanidad.*

*Todos los mexicanos y ciudadanos del mundo tenemos derecho a un medio ambiente adecuado y sano. Pero también debemos ser conscientes de la relación natural y biológica intrínseca.*

*El tener un medio ambiente adecuado es la condición previa para la realización de otros derechos humanos, que por cierto se interrelacionan, como el derecho a la vida, la alimentación, a la salud y un nivel de vida adecuado.*

*México ha suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y entre las obligaciones está la de mejorar todos los aspectos de higiene ambiental*

*La Organización de las Naciones Unidas nos demanda a tomar medidas concretas y progresivas, individualmente y en cooperación con otros, para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para un ambiente saludable y sostenible, que abarque todas las partes del mundo natural. Esto incluye la regulación de las empresas y otros actores privados en sus operaciones nacionales y extraterritoriales.*

*Consideramos que una de las medidas que permiten ir avanzando en la agenda es la educación ambiental, esta surgió como una de las herramientas clave para dar solución a las problemáticas ambientales, desde hace más de 4 décadas, su labor ha sido reconocida, pues ha contribuido a la generación de una consciencia social sobre los abusos de los avances científicos y tecnológicos en el entorno natural y de crítica ante los modelos de desarrollo prevalecientes en los años 50 a 70, donde predominaba una ideología en la que subyacía la creencia de la existencia inagotable de los recursos naturales.*

*La educación ambiental es un proceso que les permite a las personas investigar sobre temáticas ambientales, involucrarse en la resolución de problemas y tomar medidas para mejorar el medio ambiente. Como resultado, los individuos alcanzan un entendimiento más profundo de las temáticas ambientales y tienen las herramientas para tomar decisiones informadas y responsables.*

*Los componentes de la educación ambiental son:*

* *Conciencia y sensibilidad ante el ambiente y los desafíos ambientales.*
* *Conocimiento y entendimiento del ambiente y los desafíos ambientales.*
* *Actitudes de preocupación por el ambiente y de motivación por mejorar o mantener la calidad ambiental.*
* *Habilidades para identificar y contribuir a resolver los desafíos ambientales.*
* *Participación en actividades que contribuyan a resolver los desafíos ambientales.*

*Es importante para mejorar la implementación de la educación ambiental, considerar las iniciativas internacionales encaminadas a la promoción del Desarrollo Sostenible. En 2015 se dio paso a la definición de los objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM), los cuales plantean retos considerables para las naciones en diversos temas fundamentales como lo son la pobreza, la igualdad de género, la salud, la sostenibilidad ambiental en donde el papel de la educación ha sido destacado como un elemento esencial para poder alcanzarlos.*

*Así mismo será valioso tomar en cuenta las iniciativas internacionales que promueven el desarrollo sostenible a través de la educación, como el “"Plan de Acción Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible" aprobado en el marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible, celebrada en Aichi-Nagoya, Japón en 2014, el cual propone dos objetivos: 1) la reorientación de la enseñanza y el aprendizaje para una acceso universal de los conocimientos, competencias, valores y actitudes que permitan contribuir al desarrollo sostenible y 2) el fortalecimiento de la enseñanza y el aprendizaje en todos los programas y actividades que promueven el desarrollo sostenible.*

*Sin embargo, en México y el occidente prevalece el valor económico sobre los otros. Eso nos convierte en una sociedad consumista y al no asignarle un valor importante a la biodiversidad, a la conservación del medio ambiente y la construcción de una cultura de cuidado ambiental también lo estamos degradando.*

*Y a veces pasamos la vida así. Sin valorar porque no comprendemos la importancia de la naturaleza en nuestras vidas y resulta que la comprendemos ante los deterioros que vamos sufriendo.*

*A nivel estatal, el Titular del Ejecutivo ha considerado dentro del programa estatal de desarrollo, en el apartado relativo al Programa Estatal del Medio Ambiente, que: “se debe asumir el compromiso y, al mismo tiempo, participar con acciones voluntarias, en el cuidado de los recursos desde las zonas urbanas y rurales. Para lograrlo se fortalecerán las políticas públicas en educación ambiental, para incentivar en las personas un mayor conocimiento y participación en actividades relacionadas con su bienestar, así como en la salud de los sistemas naturales y la conservación de la biodiversidad.*

*La participación de la sociedad en la conservación, el cumplimiento ambiental y la restauración, es el elemento clave para que los proyectos y actividades generadas desde el gobierno o que apoyen iniciativas ciudadanas, tengan éxito. Para ello, es necesario contar con programas de educación ambiental, comunicación y difusión que permitan a los coahuilenses tener acceso a la información necesaria que facilite su participación y coadyuve a proteger nuestro patrimonio natural.”*

*Considerando lo anterior y una vez analizada la legislación vigente en nuestro Estado, específicamente la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, en su artículo 3 fracción XXVI, se reconoce el término Educación Ambiental y lo define como: el proceso educativo tendiente a la formación de una conciencia crítica ante los problemas ambientales.*

*Es de destacar que la definición que actualmente se encuentra establecida en la ley de referencia, hace una connotación muy vaga de lo que deberá considerarse Educación Ambiental, ya que no hace referencia alguna a los conceptos y actitudes tendientes a la asimilación de la relación entre la sociedad y el medio natural en el que vive y sobre todo a la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen; por lo que se considera necesaria la adaptación y ampliación de tal definición a fin de que se cumplan con los estándares nacionales e internacionales en la materia que nos ocupa y se abarquen dentro de ella los temas relativos al desarrollo sostenible del Estado.*

*A pesar del reconocimiento en la legislación ambiental del Estado, de forma muy sencilla, también encontramos que dentro de la legislación educativa, la educación ambiental se encuentra ausente, únicamente se hace referencia a la formación en materia ambiental en el artículo 7 fracción VIII: Impulsar actitudes de respeto al medio ambiente y de responsabilidad solidaria con las generaciones presentes y futuras; 36: La educación básica tiene como propósito formar y desarrollar en los educandos las competencias necesarias para favorecer el desarrollo armónico e integral de su personalidad, su comprensión del medio ambiente e incorporación a la vida social; y el artículo 65: La autoridad educativa del estado pondrá a consideración y, en su caso, autorización de la autoridad federal, contenidos que permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, la cultura, el medio ambiente y los recursos naturales, igualdad de género, derechos humanos, así como otros aspectos propios del Estado de Coahuila.*

*De acuerdo a la SEMARNAT en las entidades federativas se ha observado un rezago en cuanto a la legislación en materia de educación ambiental, ocasionada por el manejo de enfoques y conceptos ya superados tales como " la incorporación de contenidos ecológicos en el sistema educativo estatal", así como la referencia convencional a la enseñanza de la ecología o medio ambiente como sinónimo de la educación ambiental, considerada por diversos autores como un obstáculo en la implementación de la misma, ya que de ella derivan prácticas erróneas que impiden o limitan la adquisición de los conocimientos, actitudes y aptitudes que se pretenden transmitir a los educandos.*

*Lo anterior propicia que, en la práctica, exista un vacío dentro del sistema educativo referente a la formación tanto de los docentes como de los educandos en educación ambiental. También tendríamos que plantear que la educación ambiental se puede dividir en formal y no formal.*

*De acuerdo con la Doctora en Filosofía y miembro de la Academia Nacional de Educación Ambiental, Gloria Peza la educación ambiental representa un proceso donde se articulan distintos saberes de carácter económico, social, político, ético y ecológico que incorporan a la vez prácticas sociales que benefician al medio ambiente. Su inclusión en todas las esferas del proceso educativo es un factor que promueve e impulsa el desarrollo sustentable.*

*Por otra parte la Doctora en Pedagogía Esperanza Terrón, nos dice que una de las principales problemáticas que enfrenta la educación ambiental dentro del sistema educativo es que en su generalidad, los profesores consideran que el objeto de ésta es la enseñanza de la ecología, en virtud de que los contenidos de tipo ambiental se centran en los libros de texto de ciencias naturales. Terrón expone en el plano cognoscitivo, el sesgo que se ocasiona al presentar de manera fragmentada nuestra realidad ambiental y social, la cual impide establecer relaciones con otras disciplinas y proporciona una visión parcializada y descontextualizada que poco ayuda a que los educandos adquieran las actitudes, valores y capacidades que promueve la educación ambiental.*

*El tema es complejo porque tendríamos que entender que la naturaleza es el sustento para el desarrollo y el bienestar de los seres humanos, pero lamentablemente no existe la conciencia colectiva e individual que lo reconozca y actúe en consecuencia.*

*Si bien los materiales de la Secretaría de Educación Pública de México en sus apartados de Ciencias Naturales integran la educación ambiental con ciertos aspectos, no hay definida una estrategia en educación básica, media superior y superior que lleve a la práctica con indicadores confiables que finalmente tengan como resultado el mejoramiento de nuestro entorno.*

*En primer lugar, tendríamos que empezar con dejar claro que en México no existe una materia denominada educación ambiental. Y tendríamos que fortalecer programas curriculares y de formación docente en las escuelas de educación básica, media y superior.*

*La propuesta es transversalizar la educación ambiental y ello implica un esfuerzo de autoridades de todos los órdenes de gobierno, alumnos, docentes, padres de familia y ciudadanía en general., de tal manera que comprendamos la importancia de la conservación de nuestro medio ambiente.*

*Por ello es importante que su impartición se derive en programas y planes de estudio de todos los niveles educativos con el componente del desarrollo de proyectos que permitan la interacción con la comunidad y la ciudadanía. El logro de la política ambiental a nivel nacional tiene que ver con el ejercicio de políticas públicas y que estas se lleven a cabo con las organizaciones de la sociedad y la ciudadanía.*

*Compañeras y compañeros legisladores, la educación ambiental es más que información sobre el ambiente, la educación ambiental aumenta la conciencia y el conocimiento sobre temáticas ambientales, enseña a las personas a pensar de manera crítica y mejora sus habilidades para resolver problemas y tomar decisiones; de ahí la importancia que nuestra Ley de Educación en Coahuila considere a la educación ambiental como el factor fundamental para lograr ,sobre todo en nuestra niñez y juventud, un cambio de actitud cuyo resultado se vea reflejado en la formación de ciudadanos consientes que respeten nuestro medio ambiente*

**TERCERO. –** Que, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Salud, Medio Ambiente Recursos Naturales y Agua, una vez analizada la referida exposición de motivos, coincidimos en general con los planteamientos expresados, en función de diversas indagaciones sobre la materia.

Cada vez existen mayores coincidencias acerca de que la educación ambiental es un reto importante para los sistemas de instrucción elemental de todo el mundo y, por ende, para México, a saber, un país muy diverso en términos geográficos, climático, biológicos, culturales, de condiciones de vida (rural/urbano) y también en cuanto a la disponibilidad de recursos naturales.

En este sentido, el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A. C. considera que *los programas y los docentes, deben ser sensibles, por ejemplo, a la problemática del agua en todas sus dimensiones, y brindar herramientas para comprenderla y afrontarla, sobre todo en el ámbito local, pero también en el nacional y global. Los contenidos deben comunicar de tal forma que puedan ser interpretados desde las diferentes realidades que se viven en el país.*

En tal contexto, los modelos educativos actuales deben proporcionar información y conocimientos respecto a temas ambientales, impulsar la formación de valores, brindar nuevos enfoques para analizar los problemas ambientales y sus consecuencias, así como aportar alternativas para su solución.

Concretamente, la educación ambiental, debe centrarse en generar competencias y compromisos con objetivos ambiental y socialmente responsables, desde diversas perspectivas, y teniendo como eje transversal la diversidad de nuestro país.

A esto debe añadirse la colaboración y difusión de conocimientos que generan acciones para un cambio de mentalidad, así mismo, para llevar los temas sobre medio ambiente al terreno de la enseñanza formal, como a las pláticas familiares, y discutir qué podemos hacer para mejorar. Todo ello forma parte de una cultura ambiental activa.

La presente iniciativa es consecuente con la nueva política educativa federal en materia ambiental, pues, según se advierte, a raíz de la reciente reforma, si bien se incluyen aspectos como la recuperación de estudios de civismo, valores, cultura, arte, música, deporte, también se contempla, en efecto, la instrucción en el área de medio ambiente, bajo conceptos formativos más integrales y profundos.

Específicamente, la nueva Ley General de Educación establece en la fracción VIII del artículo 15, el reto de *“inculcar el respeto por la naturaleza, a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático”.*

En sintonía, como también se expone en el planteamiento en cuestión, el Gobierno del Estado también considera en su Programa Estatal del Medio Ambiente que *se debe asumir el compromiso y, al mismo tiempo, participar con acciones voluntarias, en el cuidado de los recursos desde las zonas urbanas y rurales.*

A fin de lograrlo, *se fortalecerán las políticas públicas en educación ambiental*, para incentivar en las personas un mayor conocimiento y participación en actividades relacionadas con su bienestar, así como en la salud de los sistemas naturales y la conservación de la biodiversidad.

**CUARTO. –** Que, en virtud de todo lo anteriormente expuesto, se emite y se pone a consideración del Honorable Pleno del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, el siguiente...

**PROYECTO DE DECRETO**

**ARTÍCULO PRIMERO. -** Se modifica el contenido de la fracción XXVI, del artículo 7 de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:

**Artículo 3°.-** …

I.- a XXV.- …

XXVI.- Educación ambiental: Proceso educativo tendiente a la formación de una conciencia crítica ante los problemas ambientales, en el que el individuo asimila los conceptos e interioriza las actitudes que le permitan evaluar las relaciones de interdependencia establecidas entre la sociedad y su medio natural considerando el ámbito educativo formal e informal y de la cultura ambiental que permita a la ciudadanía participar responsablemente en la atención y solución de los problemas ambientales, para contribuir al tránsito hacia el desarrollo sostenible en el Estado;

XXVII.- a LXIII.- …

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Se modifican las fracciones XXV y XXVI del artículo 9, la fracción VII del artículo 35, el artículo 36, el artículo 65; se adicionan la fracción XIX al artículo 7, la fracción XXVII del artículo 9, la fracción XII al artículo 38, la fracción XI al artículo 40, la fracción X al artículo 42, la fracción VII al artículo 51, la fracción IV al artículo 52, la fracción XI al artículo 57, de la Ley Estatal de Educación, para quedar como sigue:

**Artículo 7°.-** …

I.- a XVIII.- …

XIX.- Promover la inclusión, como eje transversal, de la educación ambiental, entendida, como el proceso tendiente a la formación de una conciencia crítica ante los problemas ambientales, en el que el educando asimila los conceptos e interioriza las actitudes que le permitan evaluar las relaciones de interdependencia establecidas entre la sociedad y su medio natural, considerando el ámbito educativo formal e informal; y de la cultura ambiental que permita le participar responsablemente en la atención y solución de los problemas ambientales, para contribuir al tránsito del desarrollo sostenible en el Estado.

**Artículo 9.-** …

I.- a XXIV.- …

XXV.- Proveer la información que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa requiera para el ejercicio de sus funciones, así como cumplir con los lineamientos que éste emita y demás funciones que de manera análoga le correspondan de conformidad con la normatividad aplicable;

XXVI.- Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente, a fin de generar los programas de educación ambiental, de forma integral e interdisciplinario en todos los niveles educativos donde se considere al medio ambiente como un todo e involucren tanto a educandos como a docentes, en la identificación y resolución de problemas a través de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y habilidades, propios de la ciencia ambiental para la toma de decisiones y la participación activa y organizada para el logro de un desarrollo sustentable; y

XXVII. Las demás que le confiera la presente ley y otras disposiciones aplicables.

**Artículo 35.-** …

I.- a VI.- …

VII.- Vincular la labor educativa de los niños con el desarrollo comunitario y la educación ambiental y preservación del medio ambiente; y

VIII.- …

**Artículo 36.-** La educación básica tiene como propósito formar y desarrollar en los educandos las competencias necesarias para favorecer el desarrollo armónico e integral de su personalidad, su comprensión del medio ambiente e incorporación a la vida social.

La Secretaría de Educación del Estado diseñará las estrategias necesarias para articular pedagógicamente los niveles educativos que comprende la educación básica tomando en consideración la normatividad aplicable que en este rubro señale la autoridad federal.

La Secretaría de Educación fortalecerá en los educandos la dimensión ambiental e incorporará los criterios, enfoques y contenidos de sustentabilidad en los programas del sistema educativo estatal adecuándolos a las prerrogativas y realidades de la entidad, como lo son el cambio climático, la reducción de riesgos de desastres, la seguridad humana, los estilos de vida y consumo sostenibles.

En el servicio educativo destinado a menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesario para preservar su integridad física, psicológica y social, sobre la base del respeto a su persona y la aplicación de la disciplina escolar compatible con su edad.

Se brindarán cursos a los docentes y al personal que labora en los planteles de educación, sobre los derechos y la obligación que tienen al estar encargados de la custodia de los menores educandos, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación.

En caso de que los educadores así como las autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de algún delito en agravio de los estudiantes, lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.

Así mismo, cuando las autoridades educativas, los directores de los planteles educativos, así como el resto del personal docente noten la prolongada o reiterada ausencia de un estudiante deberán notificarlo o reportarlo ante la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia con la finalidad de descartar o detectar posibles situaciones de maltrato infantil.

**Artículo 38.- …**

I.- a XI.- …

XII.- Fortalecer la educación basada en valores, en principios de tolerancia, igualdad de género, del cuidado y protección del medio ambiente, así como del aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

**Artículo 40.-** …

I.- a X.- …

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambienta, el desarrollo sostenible, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del educando y la sociedad.

**Artículo 42.-** …

I.- al IX.- …

X.- Inculcar la contribución al desarrollo sostenible por medio de procesos de información, actualización, capacitación y profesionalización para llevar a cabo las acciones relativas a la protección del medio ambiente y la conservación y restauración de los recursos naturales, en forma individual y colectiva;

**Artículo 51.-** …

I.- a VI.- …

VII.- Generar una cultura ambiental a través del conocimiento, la ética y el desarrollo de competencias que posibiliten un aprendizaje sobre la realidad local y alcanzar una mejor comprensión de las causas, consecuencias y posibles soluciones a problemas ambientales.

**Artículo 52.-** …

I.- a III.- …

IV.- Dotar de una sólida preparación profesional en los estudiantes buscando que adquieran amplios conocimientos científicos, pedagógicos y de educación ambiental para la sostenibilidad.

**Artículo 57.-** …

I.- a X.- …

XI.- Desarrollar en el futuro docente, una conciencia ecológica para que pueda orientar a las comunidades educativas en el mejoramiento y conservación del medio ambiente.

**Artículo 65.-** La autoridad educativa del estado pondrá a consideración y, en su caso, autorización de la autoridad federal, contenidos que permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, la cultura, igualdad de género, derechos humanos, además los conceptos fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sostenible, la prevención del cambio climático, así como de la valoración de la protección y conservación del medio ambiente, como elementos esenciales para el desenvolvimiento armónico e integral del educando; también los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales.

**ARTÍCULOS TRANSITORIOS**

**PRIMERO. -** El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

**SEGUNDO. -** Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

**Así lo acuerdan las diputadas y los diputados de la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, del Congreso del Estado.**

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 13 días del mes de noviembre de 2019**

**POR LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y AGUA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | | **RESERVA DE ARTÍCULOS** | |
| **DIP. JOSÉ BENITO RAMÍREZ ROSAS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ZULMMA VERENICE GUERRERO CÁZARES**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. JOSEFINA GARZA BARRERA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |
| **DIP. FERNANDO IZAGUIRRE VALDÉS** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** | **SÍ** | **CUÁLES** |
|  |  |  |  |  |

**DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISÓN SOCIAL DEL CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN DE LA INICIATIVA DE REFORMA A LA LEY DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA DE ZARAGOZA, PRESENTADA POR LA PRESIDENTA MUNICIPAL YOLANDA CANTÚ MONCADA, LA CUAL FUE REMITIDA A ESTÁ COMISIÓN PARA SU ESTUDIO Y DICTAMINACIÓN.**

**RESULTANDO**

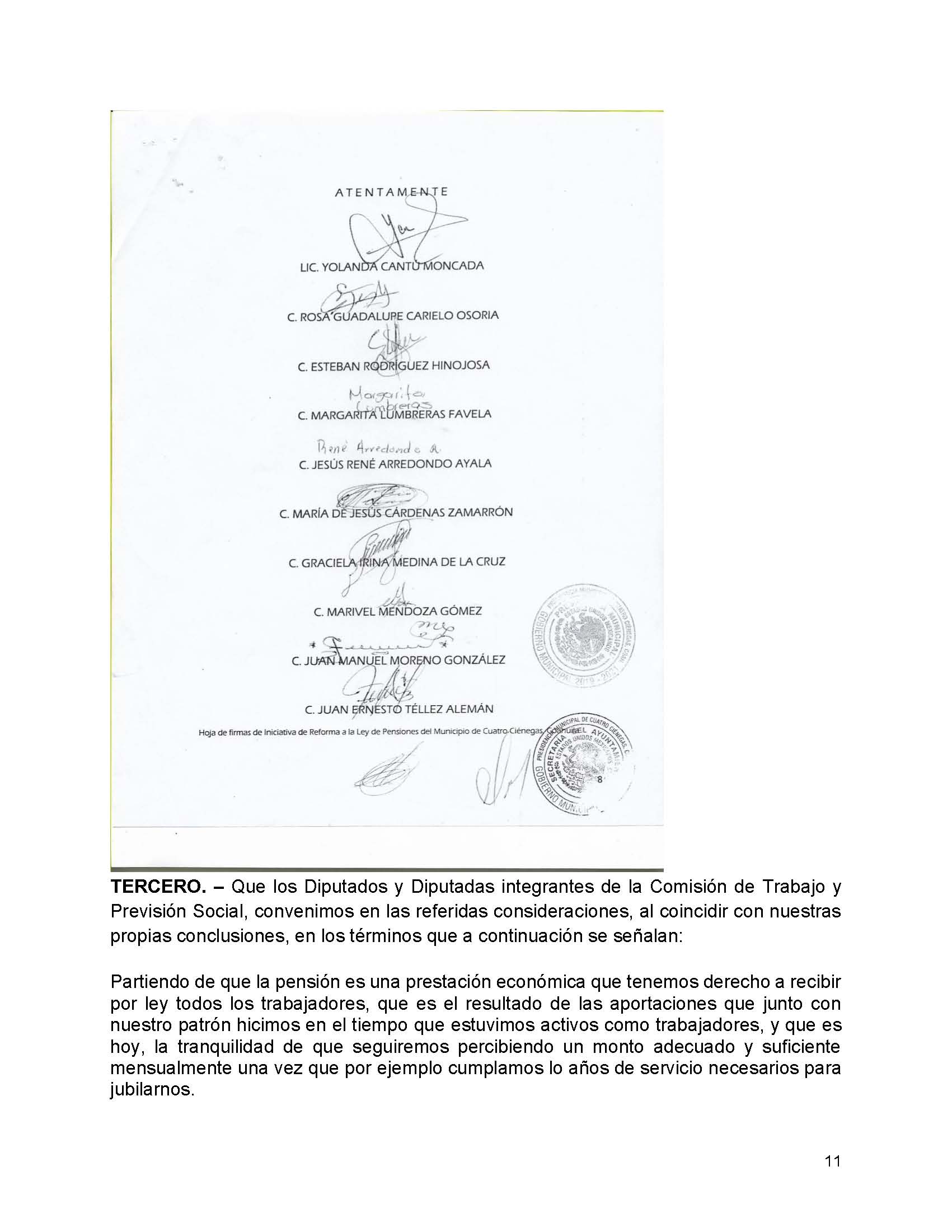
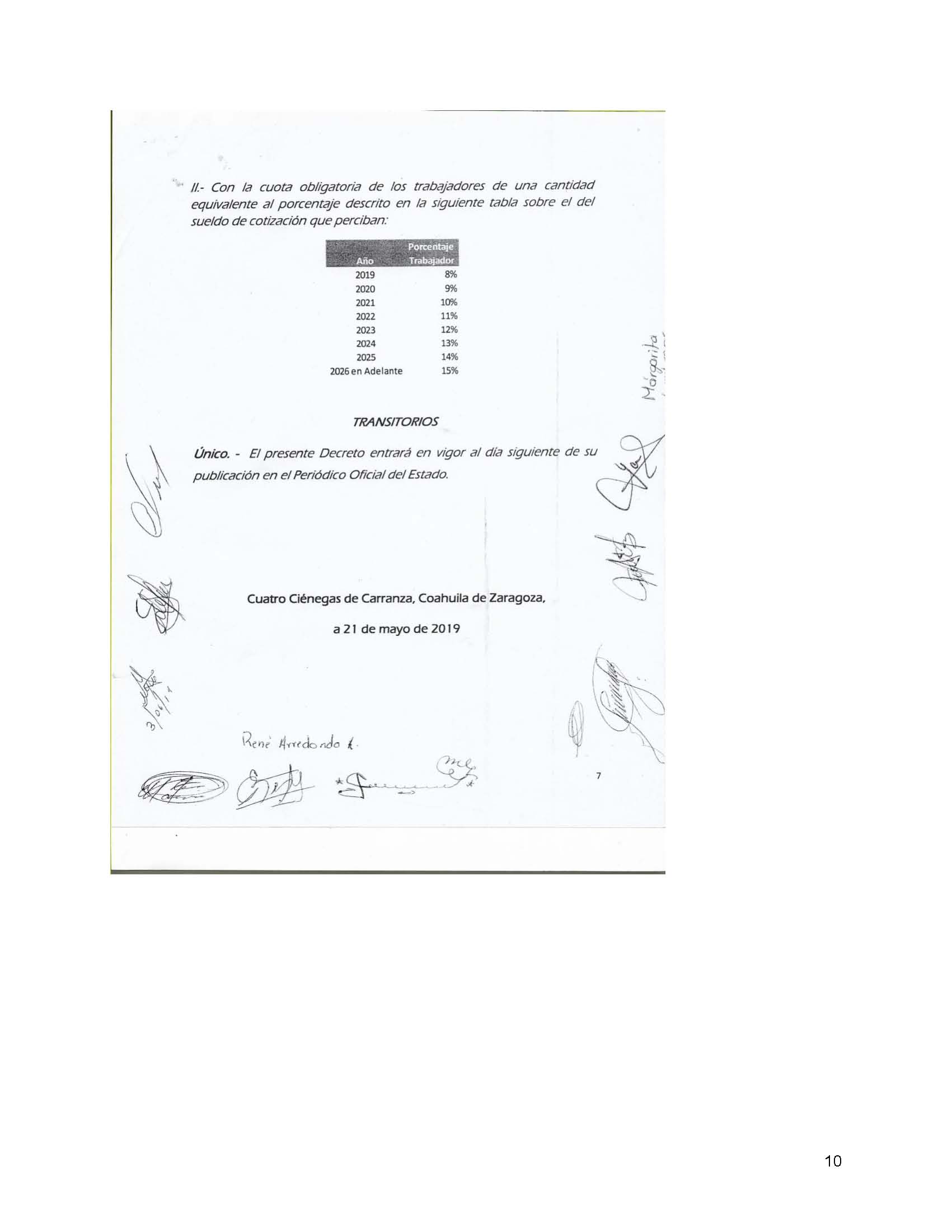
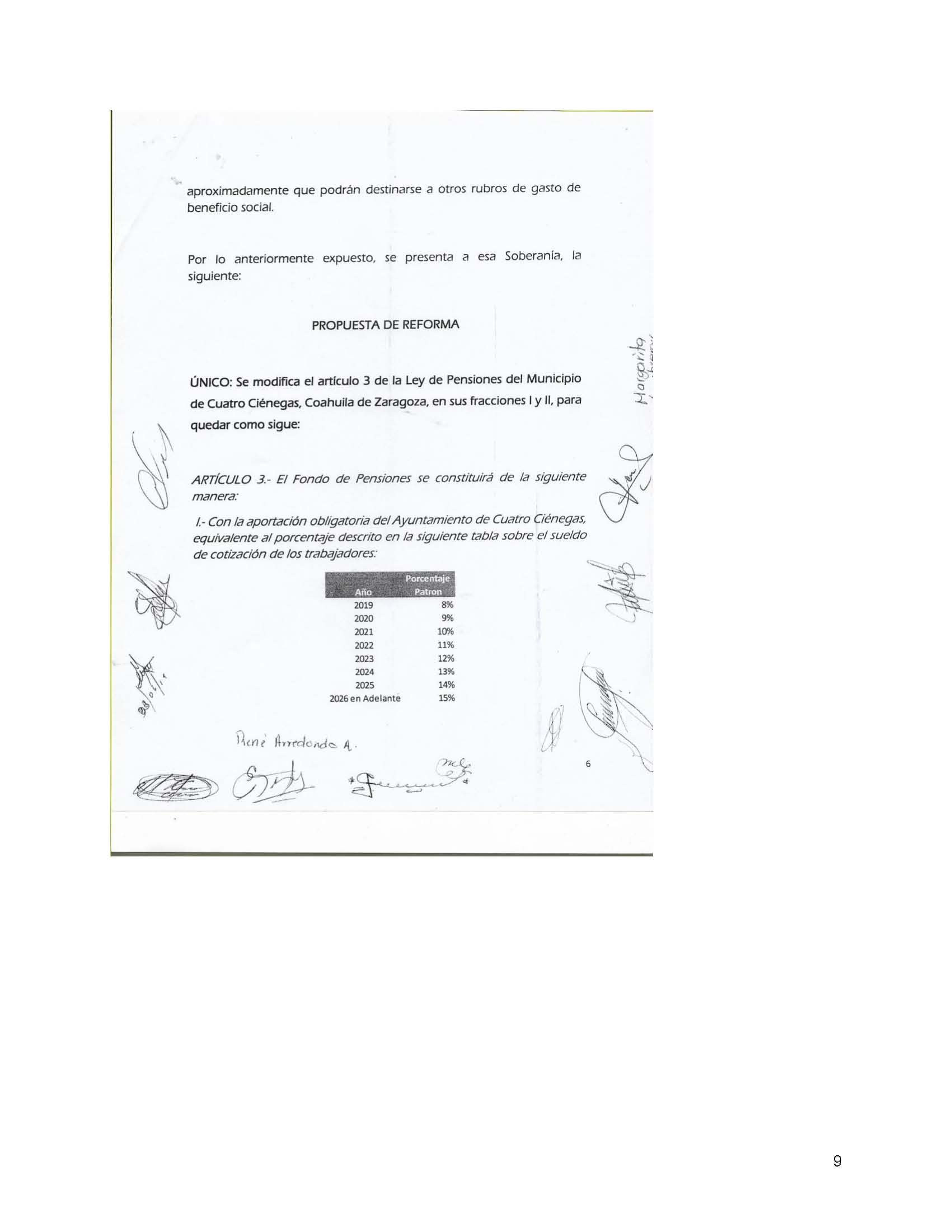
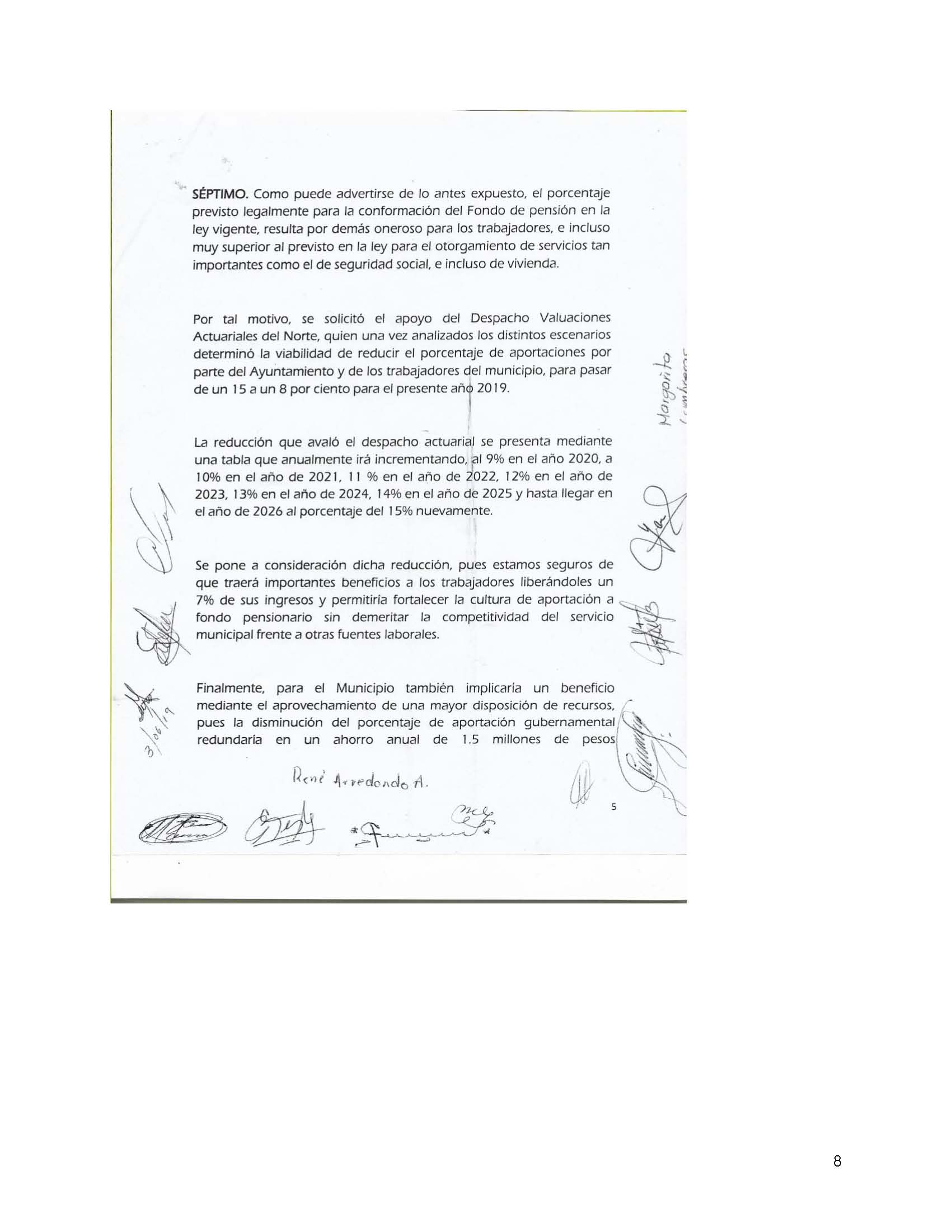
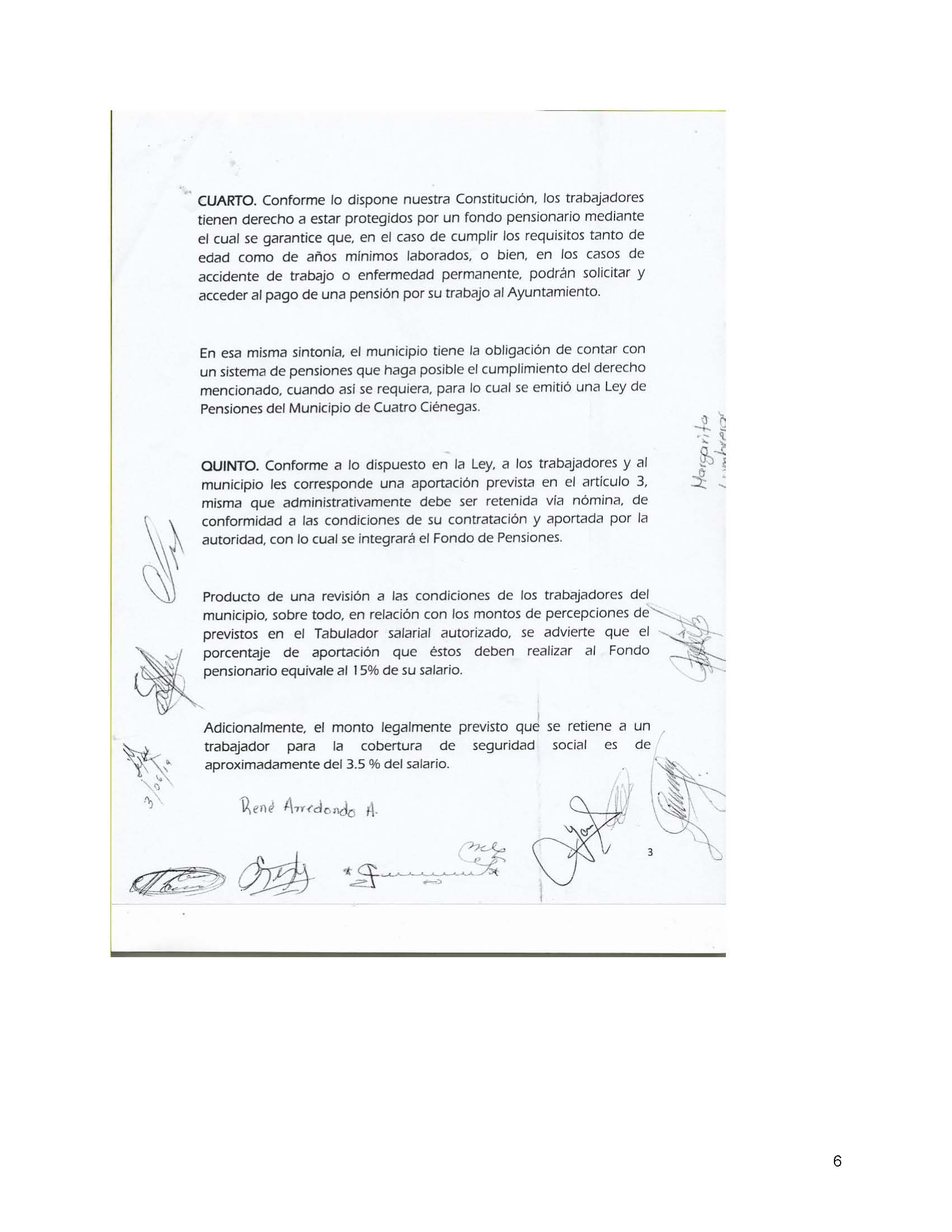
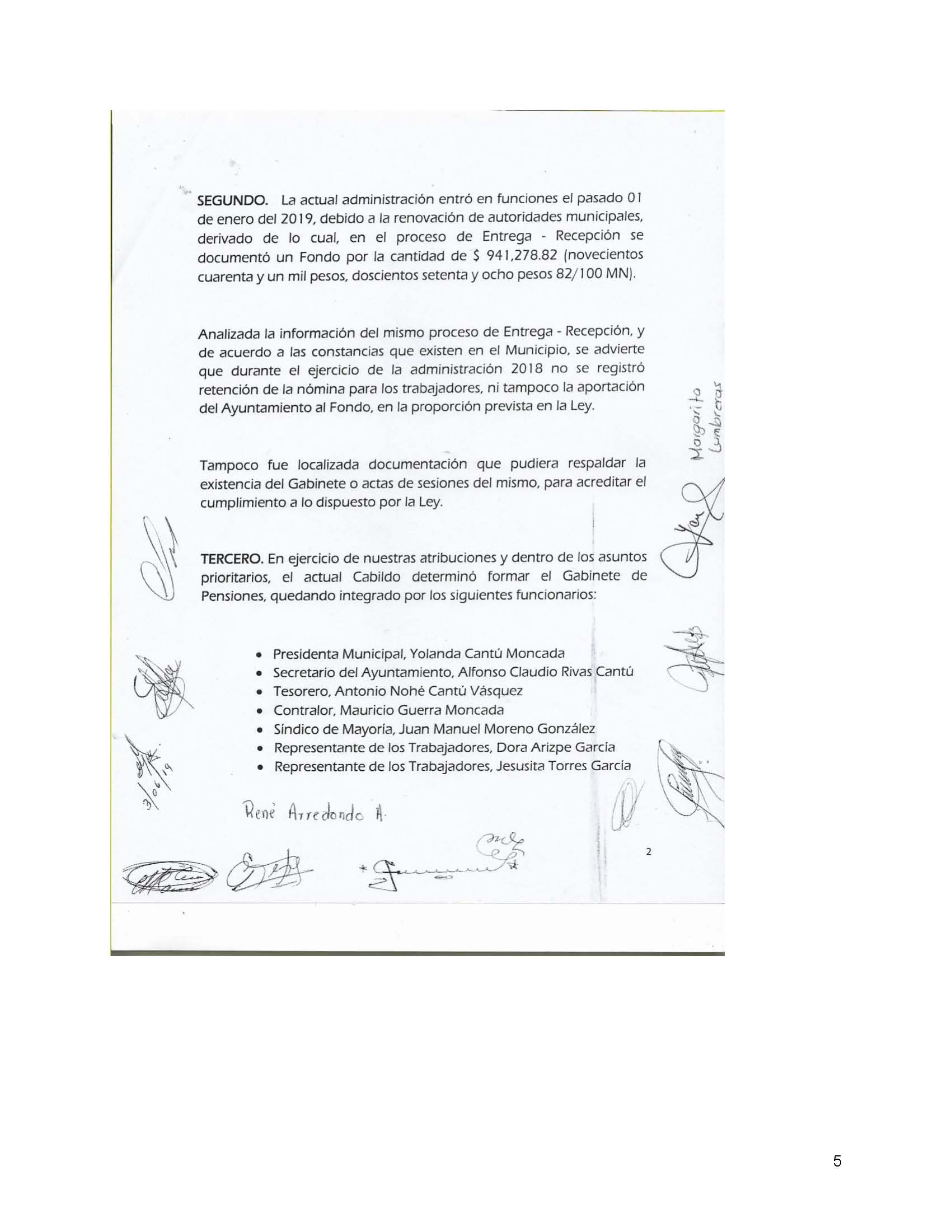
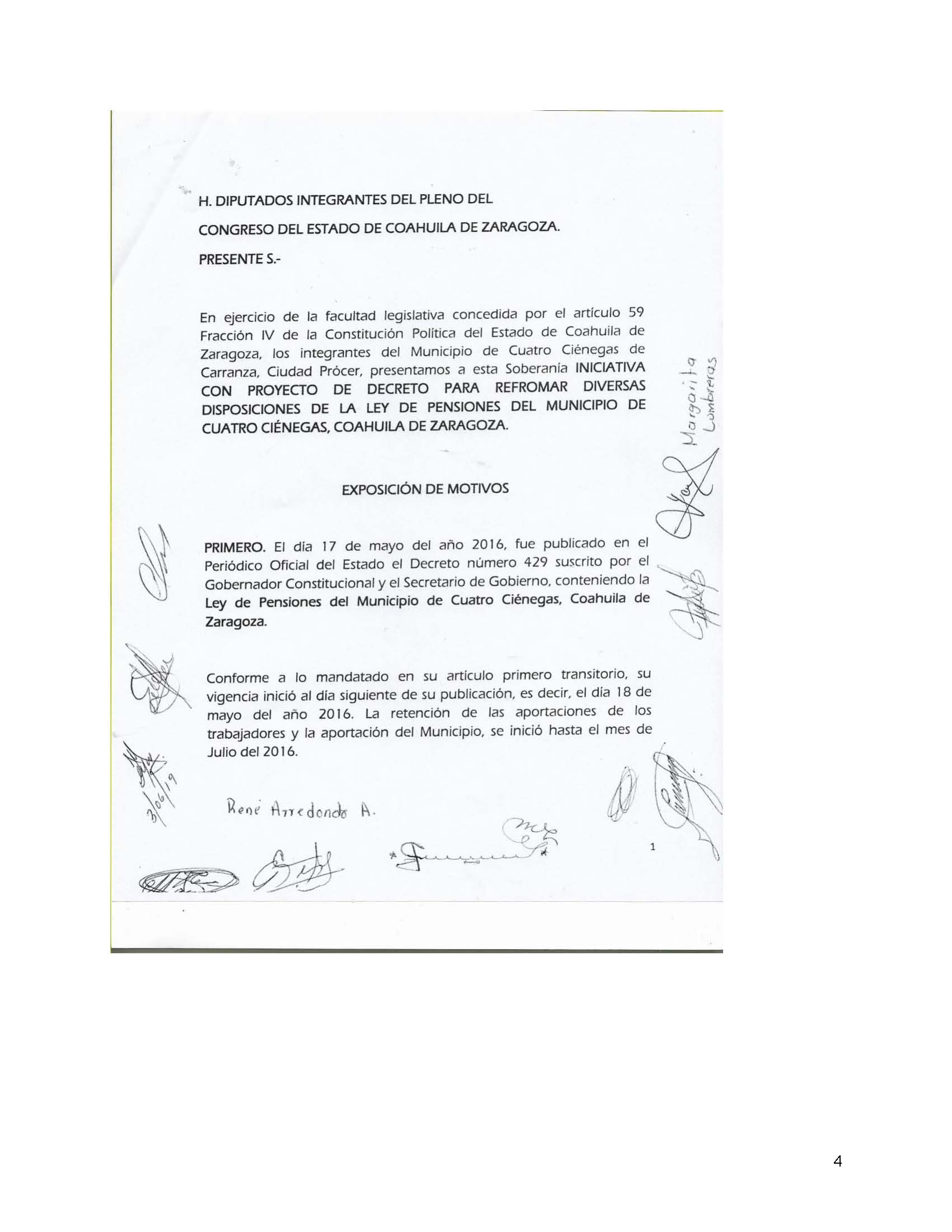
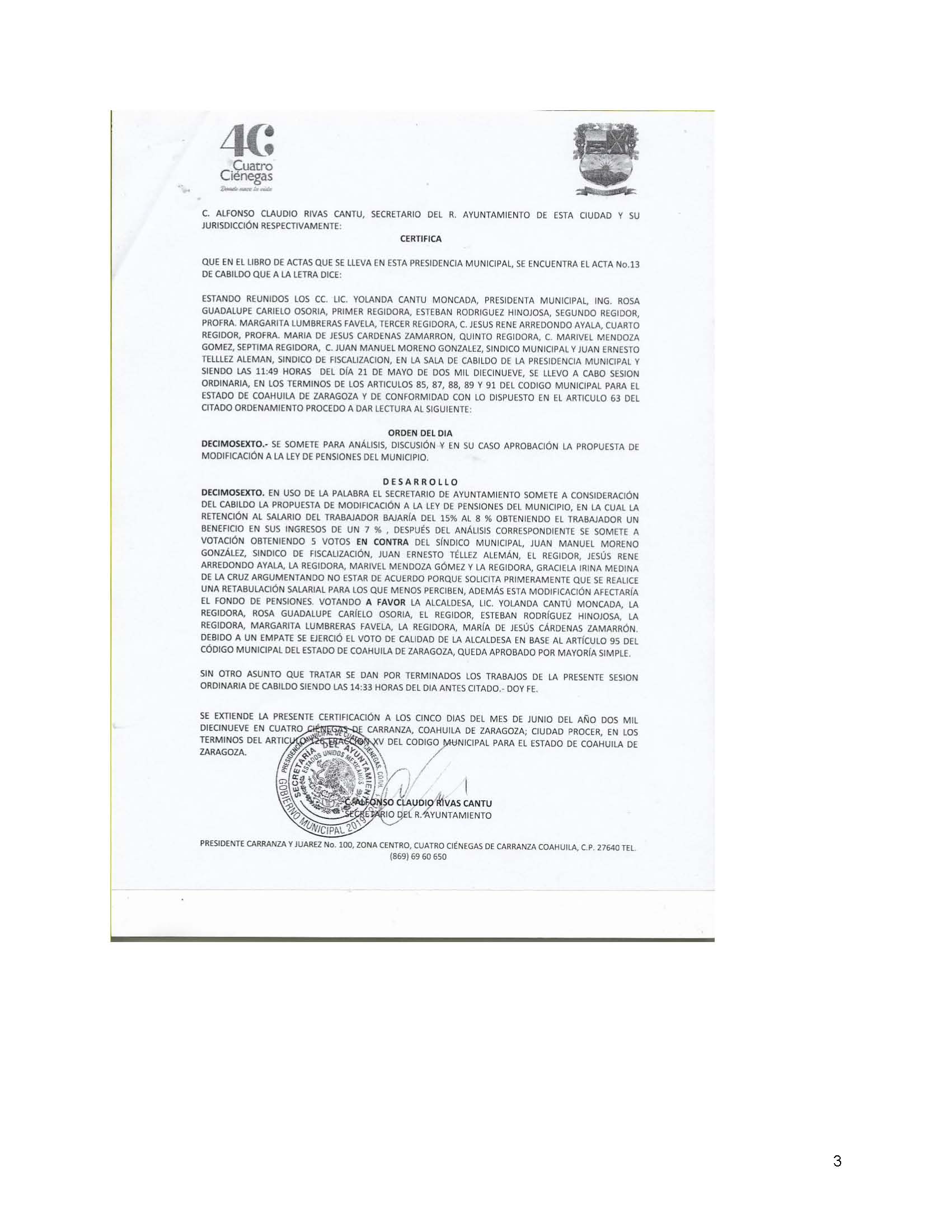
**PRIMERO. -** Que, en la sesión celebrada en el Pleno del Congreso, el día 10 de junio de 2019, se recibió en Oficialía Mayor la Iniciativa de Reforma a la Ley de Pensiones del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, signada por la Presidenta Municipal Yolanda Cantún Moncada, misma que fue presenta en la sesión celebrada el 12 de junio del 2019, ante el Pleno de este Congreso.

**SEGUNDO. -** Que, en la citada sesión, se turnó a estaComisión de Trabajo y Previsión Social, la referida Iniciativa de Reforma a la Ley de pensiones del municipio de Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza, para efecto de hacer el estudio correspondiente y proceder, en su caso, a su aprobación.

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. -** Que esta Comisión de Trabajo y Previsión Social, con fundamento en los artículos 88, fracción XVII, 105 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, es competente para conocer del asunto objeto del presente acuerdo.

**SEGUNDO. -** Que la referida Iniciativa presentada por la Presidenta Municipal del Cuatrociénegas, Coahuila, está basada en la siguiente exposición de motivos:

****

**TERCERO. –** Que los Diputados y Diputadas integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, convenimos en las referidas consideraciones, al coincidir con nuestras propias conclusiones, en los términos que a continuación se señalan:

Partiendo de que la pensión es una prestación económica que tenemos derecho a recibir por ley todos los trabajadores, que es el resultado de las aportaciones que junto con nuestro patrón hicimos en el tiempo que estuvimos activos como trabajadores, y que es hoy, la tranquilidad de que seguiremos percibiendo un monto adecuado y suficiente mensualmente una vez que por ejemplo cumplamos lo años de servicio necesarios para jubilarnos.

Asimismo y como punto transcendental para dicho tema, es la integración del fondo de pensiones, el cual si cuenta con las aportaciones adecuadas, dará la viabilidad necesaria para cumplir con los planes de jubilación, que para el caso que nos ocupa hoy, es que el municipio de Cuatrociénegas, cuente con las herramientas necesarias y justas para la integración de dicho fondo.

Ahora bien, la Ley de Pensiones del Municipio de Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza, que se encuentra vigente, contempla en su artículo 3, la manera de cómo está constituido el fondo de pensiones, el cual citamos a la letra:

***“ARTÍCULO 3.-*** *El Fondo de Pensiones se constituirá de la siguiente manera:*

***I.-*** *Con la aportación obligatoria del Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas, equivalente al 15.00% del sueldo de cotización de los trabajadores.*

***II.-*** *Con la cuota obligatoria de los trabajadores de una cantidad equivalente al 15.00% del sueldo de cotización que perciban…”.*

Comparemos dicho ordenamiento, con la ley marco Ley de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila de Zaragoza:

***“ARTICULO 4°.-*** *Para los efectos del Artículo anterior los trabajadores aportarán al Instituto, una cuota obligatoria del 7% del sueldo básico que disfrute, y las dependencias y entidades aportarán el 19.9% sobre el equivalente al sueldo básico de los trabajadores”.*

De lo anterior podemos deducir que si bien, el artículo 4 de la ley marco solo da una referencia en cuanto a las aportaciones para el fondo del instituto, pueden ser una pauta para pactar los límites máximos y mínimos para el caso de la integración de los fondos de pensiones de los municipios, por lo que la iniciativa de reforma de la Ley de Pensiones del Municipio de Cutarociénegas, Coahuila de Zaragoza, no está transgrediendo los límites de referencia.

Por otra parte, cabe hacer mención que lo indicado por los proponentes en su exposición de motivos, es de relevancia transcendental, al mencionar que adicional a la aportación que hace el trabajador para el fondo de pensiones, se suma el descuento para la cobertura de la seguridad social, los impuestos que por ley deben ser retenidos y quizás a varios más, se les descuenta la pensión alimenticia, por lo que resulta gravemente afectado su salario y la reducción de la aportación resultaría benéfica para los mismos.

Con la iniciativa de reforma al artículo 3 de la Ley de Pensiones del Municipio de Cuatrociénegas, Coahuila de Zaragoza, se estaría reduciendo de manera progresiva el porcentaje de la aportación que tiene que hacer tanto el trabajador, como el patrón al fondo de pensiones municipales, llegando para el 2026 al 15%, que hoy en día están aportando.

La iniciativa de reforma presentada, cuenta con el aval del Despacho Valuaciones Actuariales del Norte, quienes analizaron la viabilidad de reducir el porcentaje de aportaciones de parte del Ayuntamiento y de los trabajadores del municipio, y concluyeron en la integración de las tablas progresivas para las aportaciones de ambos actores.

Indiscutiblemente vemos con ello el beneficio que será para el trabajador que le liberen de momento el 7% de su sueldo, para que se encuentre en posibilidades de poder utilizarlo de la mejor manera posible, no con ello dejando de lado la tranquilidad de saber que sigue aportando para un próximo seguro retiro.

El Ayuntamiento reporta que para las arcas municipales implicará un beneficio, ya que dicha disminución redundaría en un ahorro anual de 1.5 millones de pesos aproximadamente los cuales pondrá disponer a otros rubros de gastos de beneficio social.

Finalmente coincidimos con la iniciativa planteada por el Ayuntamiento de Cautrócienegas, presentada por su Presidente Municipal, Lic. Yolanda Cantú Moncada, a fin de favorecer tanto a los trabajadores municipales, como las finanzas de dicho Municipio.

Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, estiman pertinente emitir y poner a consideración del H. Pleno del Congreso, el siguiente:

**PROYECTO DE DECRETO.**

**ÚNICO.-** Se modifica el artículo 3 de la Ley de Pensiones del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila de Zaragoza, en sus fracciones I y II, para quedar como sigue:

***ARTÍCULO 3.-*** *El Fondo de Pensiones se constituirá de la siguiente manera:*

***I.-*** *Con la aportación obligatoria del Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas, equivalente al porcentaje descrito en la siguiente tabla sobre el sueldo de cotización de los trabajadores:*

|  |  |
| --- | --- |
| **AÑO** | **PORCENTAJE**  **PATRÓN** |
| 2019 | 8% |
| 2020 | 9% |
| 2021 | 10% |
| 2022 | 11% |
| 2023 | 12% |
| 2024 | 13% |
| 2025 | 14% |
| 2026 en adelante | 15% |

***II.-*** *Con la cuota obligatoria de los trabajadores de una cantidad equivalente al porcentaje descrito en la siguiente tabla sobre el del sueldo de cotización que perciban:*

|  |  |
| --- | --- |
| **AÑO** | **PORCENTAJE**  **TRABAJADOR** |
| 2019 | 8% |
| 2020 | 9% |
| 2021 | 10% |
| 2022 | 11% |
| 2023 | 12% |
| 2024 | 13% |
| 2025 | 14% |
| 2026 en adelante | 15% |

**T R A N S I T O R I O S**

**ÚNICO.** El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Así lo acuerdan las Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado, Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, Dip. Jesús Berino Granados (Coordinador), Dip. Gerardo Abraham Aguado Gómez (Secretario), Dip. Marcelo de Jesús Torres Cofiño, Dip. Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga y Dip. Claudia Isela Ramírez Pineda.

**Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los 13 días del mes de octubre de 2019**

**COMISIÓN DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE Y FIRMA** | **VOTO** | | |
| **DIP. JESÚS BERINO GRANADOS**  **(COORDINADOR)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. GERARDO ABRAHAM AGUADO GÓMEZ**  **(SECRETARIA)** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. MARCELO DE JESÚS TORRES COFIÑO** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. LILIA ISABEL GUTIÉRREZ BURCIAGA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |
| **DIP. CLAUDIA ISELA RAMÍREZ PINEDA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCIÓN** |
|  |  |  |

**DICTAMEN** de la Comisión de Desarrollo Rural, de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con relación a una Iniciativa de Decreto por la que se adiciona la fracción XXXI al artículo 4 y se reforma la fracción XIII del artículo 12; así como la fracción XI del artículo 13 de le Ley Forestal del Estado de Coahuila de Zaragoza, en relación a promover la creación de corredores verdes, así como impulsar el desarrollo ecológico mediante una política ecológica transversal; planteada por la Diputada Verónica Boreque Martínez González, del Grupo Parlamentario “Gral. Andrés S. Viesca”, del Partido Revolucionario Institucional, conjuntamente con las demás Diputadas y Diputados que la suscriben”. Y;

**RESULTANDO**

**PRIMERO.-**  Que en Sesión celebrada por el pleno el día 09 de abril del año 2019, se dio lectura a la iniciativa de reforma citada en el proemio de este dictamen.

**SEGUNDO.-** Que en cumplimiento a dicho acuerdo, la iniciativa con proyecto de decreto fue remitida a esta Comisión para efectos de estudio y dictamen el día 11 del mismo mes y año.

**TERCERO.-** Que conforme a lo establecido en el Artículo 98, fracciones II y VI de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, esta Comisión es competente para dictaminar sobre dicha propuesta; y,

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. -** Que la propuesta de la promovente se basa en establecer en la Ley Forestal del Estado de Coahuila el deber de “impulsar el desarrollo ecológico mediante una política ecológica transversal, y así, promover la creación de corredores verdes y espacios dedicados a fines forestales y de preservación de nuestra flora; así como el desarrollo de corredores verdes en las zonas urbanas con mayor índice de contaminación.”

**SEGUNDO. -** Que la iniciativa mencionada se funda en las consideraciones siguientes:

E X P O S I C I O N D E M O T I V O S

Son muchos los esfuerzos que se realizan para lograr mejorar las condiciones de nuestro medio ambiente sin lograr avances significativos en el tema. En varios de nuestros municipios se enfrentan problemáticas ambientales que afectan a su población y que tratan de contrarrestarse mediante acciones y políticas públicas, sin embargo, podemos identificar una omisión común en la mayoría de todos estos: la falta de un plan de reforestación que contribuya a una mejora continua de la calidad del aire, y que ayude a su vez, en la disminución de enfermedades respiratorias de sus ciudadanos.

Es un hecho que las principales modificaciones y reformas legales que en materia de medio ambiente se han realizado, se han enfocado a tratar de hacer más severas las sanciones para quienes dañan el medio ambiente, pero no han sido precisamente para establecer la obligación de las autoridades y de la sociedad civil de llevar a cabo acciones contundentes que aporten al desarrollo autosustentable de nuestro medio ambiente, aun y estando en zonas urbanas.

Se requiere incorporar nuevas figuras, que vayan más allá de la sanción, y que contemplen acciones tangibles a cargo de las autoridades competentes. Por ejemplo, las autoridades ambientales del Estado de Coahuila en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), determinaron diseñar un Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire) con la finalidad de analizar el problema y proponer medidas de control de emisión de contaminantes que permita mejorar la calidad del aire en esta zona del país.

El ProAire es un instrumento en el que se establecen metas, estrategias, medidas y acciones a corto, mediano y largo plazo, que tienen como objetivo revertir y prevenir las tendencias del deterioro de la calidad del aire para el cuidado del medio ambiente y la protección a la salud de la población. Este tipo de acciones son las que debemos de alentar, promover, adoptar como propias para hacer frente a una problemática en crecimiento.

Los tres órdenes de gobierno deben impulsar acciones aterrizadas a la vida cotidiana al momento de hablar de reforestaciones, ya que si bien la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable se enfoca en acciones de zonas rurales o montañosas, también contempla las competencias de los Ayuntamientos en materia de reforestación. Dicho ordenamiento provee a los municipios acciones puntuales como “Desarrollar y apoyar viveros y programas de producción de plantas” “Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en las áreas forestales de los municipios” entre otras cuantas más que abundan en el cuidado de nuestro entorno natural.

De ahí que es factible generar puntos de desarrollo forestal al interior de las ciudades y no solo en las zonas naturales aledañas; puede ser, por ejemplo, mediante la incorporación de un esquema obligatorio de forestación, mediante el desarrollo de corredores verdes en las principales zonas de contaminación de aire, mediante la promoción de espacios interactivos dedicados para la reforestación dentro de la mancha urbana, etc. Este tipo de actividades deben ser más que una acción voluntaria, y a su vez traducirse en compromisos que conlleve a la participación de todos y cada uno para la sustentabilidad de nuestro medio ambiente.

Desarrollar puntos estratégicos de reforestación para la purificación del aire en cada uno de los municipios sería una forma efectiva de contribuir a la mejora del medio ambiente y por consiguiente una forma de mejorar la salud de las y los coahuilenses.

No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras los diagnósticos de contaminación ambiental indican el deterioro de nuestro planeta; debemos emprender una fuerte y comprometida línea de acción para combatir la generación de contaminantes de aire dentro de zonas urbanas en los ayuntamientos. Por ello la intención de establecer como parte de las facultades y obligaciones para el Estado y los municipios el “promover la creación de corredores verdes en las principales vías de tránsito o de mucha contaminación” de igual manera buscamos “la creación de espacios interactivos en donde la ciudadanía pueda palpar acciones contundentes de mejora ambiental, que se preste para la práctica de actividades de activación física, y de esparcimiento, actividades de botánica, forestales, de horticultura, entre otras.

En sesiones anteriores se han sumado trabajos legislativos al tema de la atención a nuestro medio ambiente, al cuidado del aire y al fomento de nuestra vegetación; así mismo con la presenta propuesta aportamos nuestro granito de arena y ahora más que nunca vemos por el entorno donde vivimos; desde esta trinchera fomentamos el cuidado de nuestro medio ambiente, buscando impartir esa cultura de respeto al medio ambiente y partir del ejemplo.

**TERCERO. -** Analizada la iniciativa de la promovente, procedimos a analizar la exposición de motivos, los argumentos y fundamentos expuestos; entre otras cosas, es importante señalar que la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable establece lo siguiente:

*Artículo 2. Son objetivos generales de esta Ley:*

*….*

*Promover la organización, capacidad operativa, integralidad, transversalidad y profesionalización de las instituciones públicas de la Federación, las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, para el desarrollo forestal sustentable;*

*Artículo 32. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter ambiental y silvícola, los siguientes:*

*I. Orientarse hacia el mejoramiento ambiental del territorio nacional a través del manejo forestal sustentable, para que contribuyan al mantenimiento del capital natural y la biodiversidad, la calidad del entorno de los centros de población y vías de comunicación y que, del mismo modo, conlleve la defensa de los suelos y cursos de agua, la disminución de la contaminación y la provisión de espacios suficientes para la recreación;*

*Artículo 32. Son criterios obligatorios de política forestal de carácter ambiental y silvícola, los siguientes:*

*I. Orientarse hacia el mejoramiento ambiental del territorio nacional a través del manejo forestal sustentable, para que contribuyan al mantenimiento del capital natural y la biodiversidad, la calidad del entorno de los centros de población y vías de comunicación y que, del mismo modo, conlleve la defensa de los suelos y cursos de agua, la disminución de la contaminación y la provisión de espacios suficientes para la recreación;*

*….*

Corredores Verdes Urbanos

Los corredores verdes urbanos son pasillos o franjas de vegetación que unen zonas naturales de las ciudades que, de otro modo, representarían solo parques y machas de vegetación asiladas en cada urbe.

Las extensiones de áreas verdes que se logran conformar permiten además la proliferación de la fauna y, lógicamente, de la flora.

El sitio WEB “guía verde.com”, refiere lo siguiente:

“…A diferencia del medio natural, donde este espacio ya existe y solo hay que conservarlo, en la ciudad se trata de desarrollar esta función natural en espacios que son susceptibles a cumplir esta función. Por ello es necesario tener en cuenta algunos factores como la disponibilidad del espacio, las características del propio medio urbano en el que se vaya a desarrollar o incluso la movilidad y la accesibilidad que va a tener el corredor.

Beneficios

Los beneficios que aporta un corredor verde urbano son múltiples. Entre ellas se encuentra la de aumentar la biodiversidad dentro de un entorno urbano y dar continuidad a espacios verdes, que de otra forma no tendrían relación alguna. Así mismo, se pretende incrementar la vegetación para ayudar a disminuir la polución que sufren las grandes ciudades y ayudar a que no se formen islas de calor urbano en las ciudades más pequeñas. Estos corredores verdes son capaces de transformar las ciudades y vías contaminadas en espacios libres de polución.

Otra de las características de estos corredores verdes urbanos es la contribución que hacen a la generación de microclimas, ya que la radiación que reciben la convierten en energía química y reducen la emisión calórica. Del mismo modo, la sombra que proyectan las plantas y árboles que componen los corredores incrementan el confort ciudadano y mejora las condiciones de entorno de los edificios, lo que provoca un menor consumo energético por la climatización. Así mismo, la creación de corredores verdes representa una forma eficaz de luchar contra la isla de calor. Al necesitar suelo permeable necesariamente se reduce la presencia de asfalto.

Los corredores verdes también están relacionados con un modelo de ciudad más sostenible, ya que facilitan el desplazamiento a pie y en bicicleta por lo que se reduce el uso de coches y transporte público…”

Si bien los corredores verdes empiezan a ser contemplados como parte de los proyectos ambientales y forestales de las grandes ciudades en el mundo y en México, debido a los beneficios que aportan; aún carecen de regulaciones específicas que permitan su debida promoción y desarrollo como parte central y prioritaria de las agendas ambientales locales y municipales.

Es así, que consideramos viable la iniciativa propuesta por la Diputada Verónica Boreque Martínez; a la cual le realizamos algunos ajustes en lo relacionado a los conceptos, para que sean concordantes con los establecidos en la Ley Forestal del Estado y en la Ley General de la materia.

**CUARTO. -** Atentos a lo señalado, los integrantes de esta Comisión, tenemos a bien presentar al pleno para su aprobación el siguiente:

**Proyecto de Decreto**

**ARTICULO ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXXI al artículo 4 y se reforma la fracción XIII del artículo 12; así como la fracción XI del artículo 13 de la Ley Forestal del Estado de Coahuila de Zaragoza, para quedar como sigue:**

**Artículo 4….**

**I a la XXX…**

**XXXI. Impulsar el desarrollo ambiental mediante una política ecológica transversal y promover la creación de corredores verdes y espacios dedicados a fines forestales y de preservación de nuestra flora.**

**…..**

**Artículo 12….**

**I a la XII…**

**XIII. Promover el mejoramiento de la infraestructura en las áreas forestales del Estado; contemplando como parte de dicha infraestructura un esquema ambiental y de forestación que desarrolle corredores verdes en las zonas urbanas con mayor índice de contaminación.**

**XIV a la XVI…**

**Artículo 13….**

**I a la X…**

**XI. Promover la construcción y mantenimiento de la infraestructura en las áreas forestales del municipio; coadyuvando para la incorporación de un esquema ambiental y de forestación que desarrolle corredores verdes en las zonas urbanas con mayor índice de contaminación.**

**XII a la XVII....**

TRANSITORIO

Único. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**Así lo acuerdan los Diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural de la Sexagésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, a los 13 días del mes de Noviembre de 2019.**

**POR LA COMISION DE DESARROLLO RURAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DIPUTADA** | **A FAVOR** | **EN CONTRA** | **ABSTENCION** |
| DIP. ROSA NILDA GONZÁLEZ NORIEGA |  |  |  |
| DIP. GRACIELA FERNÁNDEZ ALMARAZ |  |  |  |
| DIP. EDGAR GERARDO SÁNCHEZ GARZA |  |  |  |
| DIP. JUAN CARLOS GUERRA LÓPEZ NEGRETE |  |  |  |
| DIP. JESÚS BERINO GRANADOS |  |  |  |

1. Serebrisky, T. (2014). Infraestructura Sostenible para la Competitividad y el Crecimiento Inclusivo. *Banco Interamericano de Desarrollo.* Vínculo: <https://publications.iadb.org/en/publication/16832/sustainable-infrastructure-competitiveness-and-inclusive-growth>. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozas, P. y Sánchez, R. (2004). “Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual”, *Comisión Económica para América Latina y el Caribe*, Vínculo: <https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6441/1/S048642_es.pdf>. [↑](#footnote-ref-2)
3. Millán, Germán. “Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de Infraestructura y la Provisión de Servicio Públicos”, Vínculo: <http://piappem.org/file.php?id=234>. [↑](#footnote-ref-3)
4. Millán, Germán. “Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de Infraestructura y la Provisión de Servicio Públicos”, Vínculo: <http://piappem.org/file.php?id=234>. [↑](#footnote-ref-4)
5. Banco Mundial. “Government Objectives: Benefits and Risks of PPPs”, Vínculo: <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/overview/ppp-objectives>. [↑](#footnote-ref-5)
6. Banco Mundial. (2016). Objetivos del Gobierno: Beneficios y Riesgos de las Asociaciones Público Privadas, Vínculo: <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/es/asociaciones-publico-privadas/beneficios-riesgos>. [↑](#footnote-ref-6)
7. Proyectos México, Oportunidades de Inversión. (2019). Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C Vínculo: <https://www.proyectosmexico.gob.mx/proyecto_inversion/795-desalinizadora-playas-de-rosarito/>. [↑](#footnote-ref-7)
8. Pino, F. (2013). Asociación Público-Privada entre Bioeléctrica S.A. de C.V. y el Gobierno del Estado de Nuevo León “Bioenergía de Nuevo León S.A. de C.V.”, Vínculo: <http://www.cca.org.mx/ps/funcionarios/muniapp/descargas/Documentos_de_apoyo/informaciontematica/capp/APP_Bioelectrica.pdf>. [↑](#footnote-ref-8)
9. Fondo Multilateral de Inversiones. Banco Interamericano de Desarrollo, Vínculo: <https://www.fomin.org/es-es/PORTADA/noticiasNew/ArtMID/18979/ArticleID/1623/NoTitleLink.aspx>. [↑](#footnote-ref-9)
10. Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza. “Indicadores de Resultados, Seguimiento y Evaluación” Vínculo: <http://indicadores.coahuila.gob.mx/>. [↑](#footnote-ref-10)
11. Philippa Lysaght (2018). La menstruación es importante. Es reglamentaria. Disponible en: <https://blogs.unicef.org/es/blog/la-menstruacion-es-importante/> [↑](#footnote-ref-11)
12. Expansión MX (2016). Estos países dan días de descanso por cólicos menstruales. Disponible en: <https://expansion.mx/mi-carrera/2016/02/16/estos-paises-dan-dias-de-descanso-por-colicos-menstruales> [↑](#footnote-ref-12)
13. En este país está el proyecto de ley: S-1959/18. [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://www.milenio.com/policia/mujer-atacada-acido-quemo-piel-vida> [↑](#footnote-ref-14)